

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA**

**UNIDAD DE POSTGRADO**

**La casación laboral, análisis jurisprudencial y  
propuestas modificatorias**

**TESIS**

para optar el grado académico de Doctor en Derecho y Ciencia Política

**AUTOR**

Jelio Paredes Infanzón

**ASESOR**

Jorge Carrión Lugo

**Lima – Perú**

**2008**

“El juez no puede ser la boca que pronuncia las palabras de la ley, porque la ley no tiene la posibilidad material de pronunciar todas las palabras del derecho; la ley procede sobre la base de ciertas simplificaciones esquemáticas, y la vida presenta diariamente problemas que no han podido entrar en la imaginación del legislador”

(Eduardo Couture).

“La vida no tiene valor si no se vive en la justicia en el amor”.

(Gandhi).

DEDICATORIA:

A mis padres Mauro y Modesta por su infinito amor,  
ejemplo, sacrificio y abnegación por la familia .

AGRADECIMIENTO ESPECIAL.

Al Doctor Jorge Carrión Lugo, asesor de la  
presente tesis, quien con su calidad profesional,  
supo guiarme para la elaboración de la presente  
tesis.

## INDICE

	PÁGS.
<b>DEDICATORIA.....</b>	<b>04</b>
<b>AGRADECIMIENTO.....</b>	<b>05</b>
<b>ÍNDICE.....</b>	<b>06</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>11</b>

## CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO.....	13
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	13
1.1. Descripción de la realidad. ....	13
1.2. Delimitación del problema.....	15
1.2.1 Delimitación espacial.....	15
1.2.2 Delimitación temporal.....	15
1.3 Definición del problema.....	16
1.3.1 Definición nominal.....	16
1.3.2 Definición operativa.....	17
1.4 Justificación de la Investigación.....	18
1.5 Limitaciones de la Investigación.....	18
2.- OBJETIVOS E IMPORTANCIA.....	19
2.1 Objetivo.....	19
2.1.1 Objetivo general.....	19
2.1.2 Objetivo específico.....	19
2.2. Importancia.....	19
3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.....	20
3.1.- Hipótesis General.....	20
3.2.- Hipótesis Específica.....	20
4. VARIABLES.....	21
4.1 Variable independiente.....	21
4.2 Variable dependiente.....	21
5. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO.....	22

6. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN.....	22
6.1. Técnicas de recolección de datos.....	22
6.1.1 Encuesta.....	22
6.1.2 Entrevista.....	22
6.1.3 Análisis documental.....	23
6.1.4 Observación.....	23
7. TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	23
8. DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA.....	23
8.1. Universo.....	23
8.2. Muestra.....	24

## **CAPÍTULO II**

<b>FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA CASACIÓN.....</b>	<b>25</b>
1. INTRODUCCIÓN.....	25
2. ETIMOLOGÍA.....	26
3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.....	26
3.1. Derecho romano.....	27
3.2. Derecho Intermedio .....	28
3.3. Derecho Moderno.....	29
3.2.1. Alemania.....	32
3.2.2. Francia.....	34
3.2.3. España.....	35
3.3. Legislación Peruana.....	37
4. CASACIÓN.....	44
4.1 Concepto.....	44
4.1.1 Autores extranjeros.....	44
4.1.2 Autores peruanos.....	48
4.1.3 Concepto personal.....	52
4.2. Naturaleza jurídica.....	53
4.3 Características.....	56
4.4. Fines de la casación.....	57
4.5. Sistemas casatorios.....	64

4.6.	Modalidades casatorias.....	65
4.7.	Causales de la casación.....	67
4.8.	Requisitos y procedencia de la casación.....	72
	4.8.1 Requisitos formales.....	73
	4.8.2 Requisitos de fondo.....	75
4.9.	Efectos de los pronunciamientos de los recurso de casación...	79
4.10.	Tópicos a considerar en el razonamiento lógico-jurídico de las Resoluciones casatorias.....	80
4.11.	Casación en el Derecho comparado.....	82
	4.11.1 Legislación colombiana.....	82
	4.11.2 Legislación argentina.....	83
	4.11.3. Legislación chilena.....	87
	4.11.4 Legislación venezolana.....	88

### **CAPÍTULO III**

#### **ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA CASACIÓN LABORAL EN EL PERÚ**

<b>TRABAJO DE CAMPO.....</b>	<b>91</b>
1. INTRODUCCIÓN.....	91
2. RESOLUCIONES DE CASACIÓN DURANTE LOS AÑOS 1999-2000	94
2.1. Procesamiento de datos.....	94
2.1.1. Resoluciones improcedentes.....	97
2.1.1.1. Por distritos judiciales.....	97
2.1.1.2. Por pretensiones.....	99
2.1.1.3. Por causales.....	101
2.1.1.4. Cuadros comparativos de los años 1999 y 2000.....	103
2.1.2. Resoluciones procedentes.....	111
2.1.2.1. Resoluciones infundadas.....	111
2.1.2.1.1. Por distritos judiciales.....	114
2.1.2.1.2. Por pretensiones.....	116
2.1.2.1.3. Por causales.....	118
2.1.2.2. Resoluciones fundadas.....	120
2.1.2.2.1. Por distritos judiciales.....	121
2.1.2.2.2. Por pretensiones.....	123

2.1.2.2.3. Por causales.....	125
3. RESOLUCIONES DE CASACIÓN DURANTE LOS AÑOS DE 2003 y 2004.....	127
3.1. Procesamiento de datos.....	127
3.1.1. Resoluciones procedentes.....	130
3.1.1.1. Resoluciones infundadas.....	130
3.1.1.1.1. Por distritos judiciales.....	131
3.1.1.1.2. Por pretensiones.....	133
3.1.1.1.3. Por causales.....	135
3.1.1.2. Resoluciones fundadas .....	137
3.1.1.2.1. Por distritos judiciales.....	137
3.1.1.2.2. Por pretensiones.....	139
3.1.1.2.3. Por causales.....	141
4. CUADROS COMPARATIVOS DE LAS CASACIONES PROCEDENTES EMITIDAS EN LOS AÑOS 1999, 2000, 2003 Y 2004.....	143
4.1. Resoluciones infundadas.....	143
4.2. Resoluciones fundadas.....	153
5. ANALISIS DE LAS CAUSAS POR LAS CUALES LA SALA SUPREMA OPTA POR LA IMPROCEDENCIA O PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION.....	162
5.1. Análisis de las casaciones declaradas improcedentes.....	162
5.2. Análisis de las casaciones declaradas procedentes: infundadas y fundadas.....	178
5.2.1. Indemnización por despido arbitrario.....	178
5.2.2. Nulidad de despido.....	183
5.2.3. Reintegro de beneficios sociales.....	188
5.3. Análisis de casaciones en donde se plantearon la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.....	195
6. ANÁLISIS LÓGICO JURÍDICO DE RESOLUCIONES CASATORIAS...	200

#### **CAPITULO IV.**

#### **PROPUESTAS PARA UNA REFORMA DE LA CASACION LABORAL PERUANA.....235**

##### **1.- Introduccion al tema ..... 235**

##### **2.- Diagnostico actual de la casacion laboral.....235**

###### **2.1 - PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA CASACION LABORAL.**

###### **2.1.1 Desfase de la Casación Ortodoxa**

###### **2.1.2 En vez de definir y ubicarse en las funciones de la Corte Suprema, se queda solo en fines retóricos.**

###### **2.1.3 La Corte Suprema en vez de cumplir un rol en la cual se ventilen asuntos de fondo, solamente ha cumplido un rol en asuntos muy secundarios.**

###### **2.1.4 La falta de acceso a la Tutela Jurisdiccional efectiva al limitarse la interposición del recurso de Casación Laboral en pretensión de naturaleza económica sólo si esta supera la 100 URP.**

###### **2.1.5 Falta de Uniformización Jurisprudencial.**

###### **2.1.6 Alto porcentaje de recursos de casación declarados improcedentes.**

###### **2.1.7. La improcedencia contra autos.**

###### **2.1.8 La concesión de este recurso es solo con efecto suspensivo.**

###### **2.1.9 La regulación de errores *in iudicando*, *in procedendo* es inadecuada.**

#### **3.PROPUUESTAS TEORICAS PARA UNA ADECUADA REFORMA DE LA CASACION LABORAL EN EL PERU.**

##### **3.1 LA BASE CONSTITUCIONAL DE LA CASACIÓN LABORAL**

##### **3.2 LAS FUNCIONES DE LA CORTE SUPREMA**

###### **1. El rol de control jurídico de la Ley y la Constitución.**

###### **2. La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso**

###### **3.- La Predictibilidad en la Corte Suprema.**

###### **3.1. OBJETIVOS DE LA PREDICTIBILIDAD.**

###### **A).- SEGURIDAD JURIDICA**

###### **B).- UNA FORMA DE ELIMINAR LA CORRUPCION.**

###### **C).- DESCARGA PROCESAL.**

###### **D).- CELERIDAD EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.**

###### **E).- DERECHO DE IGUALDAD.**



F).- CONFIANZA Y CREDIBILIDAD EN EL PODER JUDICIAL.

4.- Establecer precedentes vinculantes en materia laboral.

4.1 La Uniformización de la Jurisprudencia a través de los precedentes vinculantes.

### **.3 . UNA NUEVA FORMA DE REGULACIÓN DE LAS CAUSALES DE LA CASACIÓN LABORAL PERUANA.**

- A).- Debe ser concedido sin efecto suspensivo generalmente y excepcionalmente con efecto suspensivo.
- b).- No debe existir la limitación de la cuantía para la interposición del recurso de casación laboral.
- c).- Debe proceder además contra autos que dan fin a la instancia.
- d).- Ampliar la base de protección de los justiciables: trabajadoras del hogar.
- f).- ampliar sobre la causal de la valoración probatoria.

### **CAPITULO V.**

#### **COMPROBACION DE LA HIPOTESIS DEL TRABAJO OPERACIONAL.**

CONCLUSIONES.....	236
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES.....	237
BIBLIOGRAFÍA.....	238
ANEXOS.....	243

## INTRODUCCIÓN

LA CASACIÓN LABORAL, ANALISIS JURISPRUDENCIAL Y PROPUESTAS MODIFICATORIAS es el tema escogido para esta tesis, la cual pongo a vuestra disposición con la finalidad de optar el grado académico de doctor en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La casación laboral siempre me inquietó a partir de haber seguido la Maestría Mención en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en esta casa de estudios; pero fueron sus constantes cambios legislativos y las numerosas críticas que se efectuaban sobre la efectividad de este recurso los que me impulsaron a iniciar esta investigación que ahora presento como mi tesis de grado.

La casación, cuyo origen se remonta al derecho francés, presenta dos finalidades: una pública y otra privada; la primera representada por el Consejo de Estado, que fue instaurada con fines netamente políticos donde prevalecía aquél que se encontraba en el poder es decir, el monarca o el Estado, surgiendo el llamado recurso de casación, atendiendo más al interés de la ley; y la otra, representada por el Consejo de las Partes con fines de interés privado, que perduraron autónomos hasta la Revolución francesa. Fue este acontecimiento histórico el que dio lugar a lo que hoy conocemos como la Corte de Casación. Ésta corte presenta cuatro elementos conceptuales: la extraordinariedad, un órgano judicial supremo, el procedimiento sui generis que se tramita con arreglo a la ley material y una función también sui generis, que consiste en la unificación de la jurisprudencia suprema. Este modelo, que presenta particularidades, regulaciones y procedimientos especiales, fue recogido por numerosos países, entre ellos el nuestro.

La casación, como recurso extraordinario, ha tenido su evolución en el derecho peruano a través del tiempo, para ello contamos con una significativa muestra de resoluciones casatorias publicadas en el lapso seis años en el diario

oficial “El Peruano”, que confirmaron la existencia mayoritaria de resoluciones declaradas improcedentes durante todo este tiempo y, más aún, de aquellas procedentes, donde priman las resoluciones infundadas sobre las fundadas, problemática que me ha llevado a efectuar un análisis lógico-jurídico aplicada a una determinada cantidad de resoluciones casatorias.

La casación laboral peruana esta en crisis, por cuanto a once años de vigencia, sólo ha resultado retóricos sus finalidades, es por ello que en la presente tesis se aborda las causas de ella, así como se plantea sus propuestas para una adecuada reforma procesal de la casación laboral peruana.

La Tesis se ha dividido en cinco capítulos: el **primero**, referido al “Planteamiento Metodológico”, donde se detallan los objetivos, importancia, hipótesis, métodos de aplicación, la determinación del universo y muestra para el trabajo de campo y demás características metodológicas que fueron tomadas en cuenta.

El **segundo capítulo** trata sobre los “Fundamentos Teóricos de la Casación” ; en ésta se aborda todo el estudio doctrinario de la figura de la casación, fijando la atención en el tratamiento de esta figura en la legislación nacional.

El **tercer capítulo** se concentra en el “Análisis Jurisdiccional de la Casación Laboral” (Trabajo de Campo). En esta parte de la tesis se trabaja exclusivamente con la muestra de casaciones laborales recopiladas en los años 1999, 2000, 2003 y 2004, efectuando un análisis detallado de las casaciones y planteando una serie de categorizaciones para que este estudio obtenga los objetivos planteados al inicio de esta tesis. Dentro de este capítulo se tiene una especial consideración al análisis logico-jurídico de un grupo de resoluciones casatorias a fin de establecer la enmienda de las premisas de las que fluyen la corrección o incorrección de las conclusiones o fallos aplicados.

Por su parte el **cuarto capítulo**, es nuestro planteamiento teórico de la reforma de la casación laboral peruana, la misma que la desarrollo, teniendo como base analizando las causas de la crisis de este recurso, planteando

propuestas a este hecho, como es el liderazgo que debe tener la Corte Suprema, a fin de que se cumplan las finalidades de la institución en el país, así no solo quedarse en el control nominal, si no más que todo en la predictibilidad y uniformización de la jurisprudencia laboral, via los precedentes vinculantes, se hace un estudio doctrinario de ésta última.

**El capítulo quinto** en la cual se hace una comprobación de la hipótesis del trabajo ocupacional. Finalmente se concluye con las conclusiones, propuestas, recomendaciones, y anexos, que espero contribuyan a mejorar la regulación y aplicación de la casación laboral dentro de la legislación nacional.

## CAPITULO I

### PLANTEAMIENTO METODOLOGICO

#### 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

##### 1.1 Descripción de la realidad.

La Administración de Justicia en nuestro país está en crisis debido a una serie de factores que no permiten el cumplimiento de sus fines, la misma que debe ser la predictibilidad de las sentencias. Así generar seguridad jurídica..

**A once años de su vigencia la Casación Laboral en el Perú como recurso “extraordinario” es considerada por los operadores de justicia, todavía como una “ tercera instancia”, apartándose de los fines que justifican su existencia dentro de nuestra legislación nacional, convirtiéndose en un medio dilatorio, sin cubrir las expectativas que se tenían de esta institución, decayendo en la crisis que actualmente se vive.**

**Pese a ello la Casación Laboral también nos ofrece grandes ventajas como es el establecimiento de las líneas jurisprudenciales en la administración de justicia permitiendo la protección del derecho objetivo, así mismo la casación laboral busca evitar arbitrariedades con el fin de dar seguridad jurídica a las personas que aspiran una tutela efectiva para hacer valer sus derechos en el órgano jurisdiccional.**

Los legisladores peruanos han determinado que el recurso de casación, pese a no haber cumplido totalmente con los fines esperados, no deja de ser una solución a la problemática judicial en materia laboral que existe en nuestro país, ello por que dentro de sus fines engloba dos aspectos esenciales para cualquier país en cuanto a la legislación se refiere: el de establecer la correcta aplicación del derecho donde prima la legalidad en los procesos judiciales y establecer la unificación de la jurisprudencia laboral donde se determinarán criterios de juicio que serán aplicados ya sea por los magistrados en las diversas Salas y Juzgados Laborales como también por los abogados, litigantes y demás operadores de justicia, por cuanto estas resoluciones constituyen cosa juzgada en el derecho laboral

Empero, a pesar de los esfuerzos de los legisladores de regular esta figura con mayor precisión, las expectativas de los recurrentes no han sido cubiertas, y el porcentaje de recursos declarados improcedentes no han disminuido razonablemente. Esto nos lleva a señalar que es necesario analizar las causas y motivos que los magistrados arguyen para tomar decisiones adversas a lo esperado por el recurrente, que se traducen en un pronunciamiento de improcedencia, advirtiéndose además que el número de casaciones declaradas inadmisibles o rechazadas por vicios formales, continúa siendo excesivo.

Sin embargo, la ley establece la realización de los Plenos Casatorios en el Artículo 400° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, los cuales no se han venido cumpliendo, por no ser una norma adecuada en su integridad, si bien es cierto que necesitamos urgente los plenos Casatorios, pero debe darse con la participación de los magistrados supremos por especialidades, pero no en sala plena con la participación de todos los vocales supremos, por cuanto en principio

no se va dar como esta sucediendo en la actualidad, y si lo hubiere es muy difícil en ponerse de acuerdo en temas que no son de su especialidad.

Actualmente vivimos en un Estado Constitucional, en donde debe prevalecer la Constitución Política Peruana, en el ámbito jurídico, y por ello la Casación Laboral no puede ser ajena a que en principio no solo es buscar el control jurídico de la interpretación de las leyes, sino más que todo la real y debida interpretación de las leyes a la luz de la Constitución. La casación laboral, debe ser comprendida en los operadores del derecho, de modo integral, teniendo como protagonista real a la Corte Suprema, quien debe fijar objetivos, a mediano y largo plazo de que se cumplan los fines de la casación laboral, es aquí donde nosotros consideramos de que no solo quedemos en conocer cual son las razones de la crisis de la casación laboral a once años de su aplicación sino más que todo, ver en que medida el órgano máximo de la jurisdicción en el país esta asumiendo el rol de corte de casación, y si no lo asume plantear propuestas para que ese rol sea protagonista y en el futuro el justiciable tenga confianza en la institución y más que todo mejore la credibilidad de la sociedad peruana en esta añeja institución procesal.

## **1.2 Delimitación del problema.**

### **1.2.1 Delimitación espacial.**

El ámbito de estudio de la presente tesis son las resoluciones de casación laboral, expedida por las Salas Constitucionales y Sociales de la **Corte Suprema de Justicia de la República**, órgano jurisdiccional que tiene competencia a nivel nacional.

### **1.2.2 Delimitación temporal.**

A once años de vigencia de la casación laboral en el Perú, las resoluciones de casación laboral materia de estudio y análisis en la presente tesis son las casaciones de la Sala Constitucional y Social, tanto la permanente y la transitoria correspondiente a los periodos de los años de 1999, 2000, 2003 y 2004

### **1.2.3 Delimitación social.**

En la Tesis se circunscribe como personajes esenciales para el análisis a: los abogados, las partes procesales que interponen los recursos de casación y a los Magistrados de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, que han emitido sus pronunciamientos a través de las Resoluciones emitidas, elementos humanos que se encargan de viabilizar este recurso dentro de los parámetros exigidos por la ley procesal laboral.

## **1.3 Definición del problema.**

### **1.3.1 Definición operativa.**

1. ¿Por qué la casación laboral a once años de su vigencia **no ha cumplido su fin** nomofiláctico y unificador en el Perú?

2. ¿Cómo se explica el **alto índice de casaciones declaradas improcedentes e infundadas** por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, durante los años 1999, 2000, 2003 y 2004?
3. ¿Qué **medidas** serían necesarias aplicar para una reforma de la casación laboral en el Perú?

#### **1.4 Justificación de la Investigación.**

La Tesis titulada: “La Casación Laboral: Análisis Jurisprudencial y Propuestas Modificatorias”, justifica su estudio en razón de que este recurso impugnativo viene atravesando una crisis en su estructura y en cuanto al cumplimiento de sus finalidades; obstáculos que pueden ser superados, por lo que es necesario plantear estrategias y mecanismos legales, a fin de que este recurso logre cumplir con la unificación jurisprudencial que tanto se anhela.

También existe una justificación que nace del estudio de las casaciones emitidas durante los años 1999, 2000, 2003 y 2004, lo que permitirá reconocer algunas causas de esta crisis que actualmente afronta la Casación laboral, dado que se trata de un área especializada poco conocida y de poca data, en tal consideración, contribuirá a la cultura jurídica nacional y la descarga procesal en la Corte Suprema dándole un dinamismo, y resulte ser la Corte Suprema, una corte casatoria que responda a un estado Constitucional, en la cual haya respeto a la constitución a las leyes, y genere la predictibilidad, seguridad jurídica, credibilidad y confianza en la sociedad peruana.

#### **1.5 Limitaciones de la Tesis.**

*En la tesis se analiza resoluciones emitidas sobre casación laboral de los años 1999, 2000, 2003 y 2004; habiéndose procedido a la selección de determinados grupos para este fin, el mismo que fue realizado de manera personal. Y mi labor de magistrado desde el año 2003 en Apurímac, genero que tuviese que venir continuamente a la Ciudad de Lima, para abastecerme de material bibliografico, sin embargo, el afán de concluir la tesis hizo que viajase en un momento al extranjero a fin de conocer la realidad de la casacion laboral en diversos paises de America Latina, ello fortalecio mi ánimo para seguir en la elaboración de la presente Tesis.*

## **2. OBJETIVOS E IMPORTANCIA.**

### **2.1 Objetivo.**

#### **2.1.1 Objetivo General.**

Conocer la realidad actual de la situación critica de la aplicación de la casacion laboral, las causas, consecuencias, un diagnostico de los pronunciamientos conforme la estadística de campo y estableciendo las ventajas de la aplicación de los plenos Casatorios, a fin de establecer y alcanzar en el Perú la predictibilidad, a traves de los precedentes vinculantes, mejorando ostensiblemente la administración de justicia en materia laboral.

### 2.1.2 Objetivos específicos.

**a. Determinar las causas** del incumplimiento de los fines nomofiláctico y unificador en la Casación Laboral.

**b. Explicar y analizar** los motivos del alto índice de casaciones declaradas improcedentes e infundadas por la Corte Suprema en esta materia, durante los años 1999, 2000, 2003 y 2004. Así mismo analizar las tendencias de los pronunciamientos de las casaciones fundadas, por materias.

**c. Plantear** las medidas necesarias para una reforma adecuada de la Casación Laboral, considerando el liderazgo que debe tener la Corte Suprema, como corte casatoria, priorizando la finalidades de la casación.

### 2.2 Importancia de la Tesis.

La presente tesis se realiza **por que** es necesario rescatar las finalidades de la casación laboral, impulsando el protagonismo de la corte casatoria, como es la Corte Suprema a través de la Sala de Derecho Constitucional y Social, que por plenos casatorios en la especialidad laboral, expida precedentes vinculantes, las mismas que generarán seguridad jurídica en el ámbito de la administración de justicia laboral, la uniformización de la jurisprudencia, más que todo la predictibilidad judicial, con ello se obtendrá celeridad procesal, disminuirá la corrupción, el derecho de igualdad entre las personas, y en un momento dado en el futuro, exista en el Perú la credibilidad por parte de la sociedad peruana hacia el poder judicial, más que todo de los órganos jurisdiccionales laborales.

## 3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.

### 3.1. Hipótesis General.

La aplicación inadecuada por parte de los operadores jurídicos de la casación laboral en el Perú, no han llegado a contribuir a que se cumplan sus fines, nomofiláctico y de uniformización de la jurisprudencia laboral.

### 3.2 Hipótesis específicas.

#### PRIMERO:

**Los litigantes y abogados han considerado en su mayoría, en los años de aplicación del recurso de casación laboral en el Perú, como una “tercera instancia”.**

#### SEGUNDO:

**La Corte Suprema del Perú, no ha llegado a uniformizar la jurisprudencia laboral a once años de aplicación de la casación laboral.**

#### TERCERO:

**Con la aplicación de los plenos casatorios laborales, vinculantes, expedidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, se generará la predictibilidad, en la jurisprudencia laboral peruana, la misma que contribuirá a**



la seguridad jurídica y confianza en la sociedad peruana hacia los órganos jurisdiccionales laborales..

#### **4. VARIABLES**

##### **4.1) IDENTIFICACION DE VARIABLES**

###### **4.1.1). VARIABLES INDEPENDIENTES**

**La aplicación inadecuada por parte de los operadores jurídicos de la casación laboral peruana.**

###### **4.1.2).- VARIABLE DEPENDIENTE**

**No ha contribuido a que se cumplan sus fines nomofilactico y de uniformización de la jurisprudencia**

#### **5. DESCRIPCIÓN DEL METODO.**

##### **5.1. Método.**

La tesis emplea básicamente los siguientes métodos:

1. El Comparativo, con la finalidad de establecer las identidades, similitudes y diferencias entre los diversos sistemas jurídicos.
2. Los métodos de análisis, síntesis, el descriptivo - explicativo, así como el inductivo-deductivo a fin de manejar adecuadamente la información en el desarrollo de la investigación referida a las variables en estudio y de explicar las relaciones existentes entre las variables identificadas en esta tesis.

#### **6. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN.**

##### **6.1 Técnicas de recolección de datos.**

Para esta tesis utilicé las técnicas más típicas y que son aplicables a la ciencia del Derecho:

###### **6.1.1 Encuesta.**

Este instrumento se ha elaborado en función del problema planteado, la hipótesis y las variables identificadas, para lo cual se han procesado las preguntas más adecuadas en el cuestionario. La encuesta se realizó con operadores jurídicos en materia laboral.

###### **6.1.2 Entrevista.**

Se realizó la entrevista a profesores y magistrados en materia laboral, sobre la aplicación de la casación laboral en el Perú.

###### **6.1.3 Análisis documental.**

Esta técnica esta en función del análisis doctrinario y teórico, respectivo de las diversas obras y otros materiales de actualidad jurídica, así como los autos y sentencias emitidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

###### **6.1.4 El Muestreo.**

Esta técnica fue usada para la elaboración del trabajo de campo de esta tesis, teniendo como nuestra materia de estudio las resoluciones emitidas por la Corte Suprema referidas a las casaciones laborales.

## **7. TIPO DE INVESTIGACIÓN.**

Por la función principal cumplida en el desarrollo de la presente tesis, es de carácter **explicativa**, toda vez que describimos los fenómenos y las relaciones existentes entre el problema, hipótesis y variables.

## **8. DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA.**

### **8.1 Universo.**

La presente investigación se ejecutó analizando los autos y sentencias de casación laboral expedidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de justicia de la República. Siendo el universo una cantidad de 2,460 resoluciones de casaciones laborales, correspondientes a los años 1999, 2000, 2003 y 2004.

### **8.2 Muestra.**

La presente investigación considerará el Muestreo Probabilístico, utilizándose como muestra los autos y sentencias de casación laboral expedidas por la Corte Suprema de la República, correspondiente a los años 1999, 2000, 2003 y 2004.

**El número de la muestra es de ochocientos treinta y siete resoluciones entre autos y sentencias:**

- a) IMPROCEDENCIAS:** 500  
Correspondiente a los años 1999 y 2000.
- b) INFUNDADAS:** 154  
Sentencias de casación laboral de los años 1999, 2000, 2003 y 2004.
- c) FUNDADAS:** 183  
Sentencias de casación laboral de los años 1999, 2000, 2003 y 2004.
- d) Muestra de 04 Resoluciones de casaciones laborales** elegidas para el análisis lógico-jurídico de las mismas.

## **CAPITULO II**

### **FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA CASACION LABORAL**

#### **1.- GENERALIDADES**

La casación laboral peruana vigente desde hace once años, por la Ley 26636, actualmente esta en crisis por cuanto no ha llegado a cumplir los fines para la cual fue implantado en el país. No ha respondido esta institución a las expectativas de los operadores jurídicos como de abogados, magistrados, litigantes, sobre esta institución procesal. Si bien es cierto a dos años de su aplicación en diciembre del año 1998, por Ley 27021 se modifico el capítulo de la casación laboral del texto original de la ley 26636, sin embargo los problemas continuaron, resultando inoperante esta institución tal como se esta aplicando en la actualidad.

#### **2.- ETIMOLOGÍA.**

La noción etimológica de la palabra “casación” la encontramos en el verbo latino **cassare** que significa “quebrar”, “anular”, “destruir”, etc. y en sentido figurado equivale a derogar, abrogar, deshacer etc.

En sentido restringido, y de acuerdo a los usos forenses “casar” significa “anular”, invalidar dejar sin efecto. (Casarino, 1984, Tomo IV, Pág. 273).<sup>1</sup>

#### **3.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA.**

##### **3.1. EUROPA**

Sobre el origen exacto de la casación, los estudiosos aún no se han puesto de acuerdo, toda vez que algunos encuentran su origen en el Derecho Romano y otros en el Derecho Francés.

**De La Rúa, señala sobre su origen, tres etapas:**

- a) La idea de origen romano por la cual una sentencia injusta por error de derecho debe considerarse mas gravemente viciada que la injusta por un error de hecho.**

---

<sup>1</sup> Hinostrza Mingués, Alberto, “Medios Impugnatorios en el Proceso Civil” Doctrina y Jurisprudencia, segunda edición, Gaceta Jurídica S.A., Lima 2002, pág. 177.

- b) La concesión a las partes de un remedio diverso de los demás otorgados para el caso de simple injusticia, lo que reconoce más reciente origen.**
- c) La incorporación como motivo de recurso de los errores *in procedendo*, que deriva del derecho intermedio.<sup>2</sup>**

Calamandrei<sup>3</sup>, por su parte, establece que este instituto surgió bajo el influjo innovador de las ideologías revolucionarias de Francia, indicando que “el Tribunal de Casación nació precisamente, con el objeto de impedir que el poder público se salga del propio dominio; pues su control, en lugar de extenderse a las relaciones entre los tres poderes de todos los campos de la constitución, se limite a las relaciones que tienen lugar entre dos de estos poderes, el legislativo y el judicial (...). El Tribunal de Casación nace, pues, como un órgano de control destinado a vigilar que el Poder Judicial no viole -en daño del Poder Legislativo- el canon fundamental de la separación de los poderes”.

Al respecto, existen dos versiones acerca del origen de la casación en el derecho francés; sobre la primera Ariano Deho,<sup>4</sup> manifiesta que el recurso de casación se encuentra ligado indisolublemente al nacimiento del Tribunal de Cassation, creado por la Asamblea Constituyente Francesa, en 1790.

La otra versión en la cual la doctrina es casi unánime en considerar que su mas remoto antecedente se encuentra en el “Conseils des parties”, que era una subdivisión del “Conseil du Roi”<sup>5</sup>. Al formarse el Conseil des Parties se le otorgó la competencia para conocer los recursos deducidos por los particulares y de anular las sentencias viciadas, bajo este esquema es que fue desarrollándose un verdadero medio de impugnación, que se denominaría la “demande en cassation”, que permitía a las partes denunciar ante el soberano con la finalidad de conseguir la anulación las

---

<sup>2</sup> De La Rua Fernando, “El Recurso de Casación” . Víctor P. de Zavala Editor. Buenos Aires, 1968,pag.28 y 29.

<sup>3</sup> Calamandrei, Piero, citado por Carrión Lugo en “El Recurso de Casación en el Perú”, Editorial Grijley, Lima 2003, Vol. I, página 11.

<sup>4</sup> Ariano Deho, Eugenia, “Error Causal y Casación”, publicado en la Revista Diálogo con la Jurisprudencia, Nro. 38, Lima, noviembre, 2001, páginas 43 y 44.

<sup>5</sup> El “Conseils des parties” se constituye en una parte del “Conseil du Roi” con competencia en asuntos judiciales, mientras que la otra parte llamada “Consejo de Estado” tenía competencia sobre los asuntos políticos

sentencias emitidas por los parlamentos<sup>6/7</sup>, es así que se configuró en un instrumento de lucha del poder real contra los parlamentos rebeldes<sup>8</sup>.

Esta “demande en cassation” se consolida durante la Revolución Francesa, transformándola ahora en un elemento para la defensa de la ley contra las transgresiones de los jueces, surgiendo bajo este contexto social el “Tribunal de Cassation”<sup>9</sup>, mediante Decretos del 27 de noviembre y 1º de diciembre de 1790, época donde existía una desconfianza de los jueces<sup>10</sup>.

Este Tribunal de Cassation era un órgano político<sup>11</sup>, puesto al lado del Poder Legislativo con la única función de “anular toda sentencia que contenga una contravención expresa al texto de la ley (art. 3º), prohibiéndole conocer el fondo del asunto; en tal sentido, no motivaba sus resoluciones, y reenviaba la causa a nuevo juez, para que dictara la nueva sentencia, que podía volver a ser llevada al Tribunal de cassation para que fuera casada otra vez, en caso de haberse dictado de nuevo la sentencia con el mismo contenido. Sólo a la tercera vez, el caso ya no era llevado al Tribunal de cassation, sino directamente al Legislativo que emitía un décret declaratoire dando o quitando la razón al Tribunal de cassation.

---

<sup>6</sup> Con el tiempo, la centralización del servicio de justicia debió sufrir un proceso inverso, debido a la extensión del reino. A los órganos que se encargaron de la función jurisdiccional en nombre del rey se les llamó Parlamentos.

<sup>7</sup> CALAMANDREI PIERO, maestro italiano quien ha escrito una de las obras monumentales sobre la casación, nos dice sobre el Conseil de parties, “El Conseil des parties, en suma, no decidía, como un tribunal ordinario, si el recurrente tenía derecho a obtener la casación de la sentencia impugnada, sino que solamente indagaba si, dada la contravención a las ordenanzas denunciada por el recurrente, el rey tenía interés en valerse contra la sentencia denunciada de su poder casación. En. La Casación Civil ( Historia y Legislaciones) Volumen 1. Oxford University Pres. Traducción Santiago Santís Melendo. Mexico, Año 2001, pag.331.

<sup>8</sup> El rey, como era previsible, se reservó el derecho de resolver la decisión en algunos casos que, por cierto, fuesen de su interés. Esta actuación podía ocurrir por decisión propia o porque las partes lo solicitaran por no estar de acuerdo con lo resuelto por los Parlamentos. Esta es la razón por la que a la actividad que realizaban los Parlamentos les denominaron justicia delegada (*justice déléguée*) y a la ejercida por el rey, justicia retenida (*justice retenue*).

<sup>9</sup> Órgano que se estructura bajo las nuevas ideas revolucionarias de Rousseau y Montesquieu que exaltan la omnipotencia de la ley y la igualdad de todos los ciudadanos ante ella. (VESCOVI ENRIQUE. El Recurso de Casación. Montevideo Ediciones IDEA. 1996, pag.12.)

<sup>10</sup> Siendo el caso de Robespierre quien menospreciaba la labor del juez señalando: “El legislador es un mundo; el juez un grano de arena. El legislador tiene todos los atributos y todos los fueros de mando; el juez es un mecanismo de obediencia”, argumento que actualmente no puede ser aceptado en la judicatura mundial,

<sup>11</sup> Esta situación se prolonga hasta la Revolución Francesa, con la diferencia de que la casación pre revolucionaria era motivada por el interés del monarca quien la impulsaba, aunque posteriormente, hacia mediados del siglo XVII, evolucionó hacia el interés del Estado, es decir, cambió el interesado aunque siempre se trató de quien ejercía el poder, quedando así fijada en 1790, precisamente el llamado recurso de casación en interés de la ley que es el rezago histórico de la casación pre revolucionaria. Monroy Gálvez, Juan, Obra Citada, páginas 613 y 614

Este Tribunal de Cassation concluye en el año 1804 sus labores, cuando a través del senado consulto de 28 de Floreal del año XII (18 de mayo de 1804), dentro del marco de la transformación política y administrativa que trajo la creación del Imperio, el Tribunal pasa a denominarse Cour de cassation, reconociendo ya el carácter netamente jurisdiccional que había ido ganando en la practica en los años anteriores, mediante la ampliación progresiva de la misión casacional, pasando de una mera anulación de la sentencia contraria a la ley, al comienzo de la elaboración de una jurisprudencia, vigilando entonces que la jurisdicción no sobrepasara por vía de interpretación la función que tenía en ese entonces de mera aplicadora de la ley.

Por ello, sentamos la premisa de que en el Conseil de Parties encontramos el antecedente bajo el **ancien regime**, pero con la revolución francesa la Corte de Casación se convierte propiamente en la imagen patriarcal de los diversos modelos de casación que tenemos en el mundo. Teniendo en cuenta además que éste instituto FRANCES engloba cuatro elementos conceptuales que integran un solo conjunto.<sup>12</sup>

- 1° Un recurso extraordinario que se denomina recurso de casación.
- 2° Un órgano judicial supremo que se constituye en el vértice de la gran pirámide judicial: la Corte de Casación.
- 3° Un procedimiento sui generis causado por el recurso de casación y que se tramita con arreglo a la ley material: el procedimiento de casación.
- 4° Una función sui géneris inherente a toda estructura pluridimensional función de índole hermenéutico - política, clásicamente denominada por Calamandrei: función de *nomofilaquia* judicial, que consiste en la unificación de la jurisprudencia suprema con arreglo a los principios doctrinarios sustentados por la Corte de Casación en sus fallos y que se conocen en España con el nombre de doctrina legal.

Sin embargo el sistema francés ha sufrido una evolución<sup>13</sup> por las introducciones realizadas por las leyes de 1967 y luego en el Código de Procedimientos modificado en el año 1976, hay una cierta limitación al reenvío, así si la corte de casación casa y reenvía y el segundo tribunal insiste en la misma sentencia anulada, o la Corte falla sin reenvío dictando su propia

---

<sup>12</sup> Enfoque tetradimensional planteado por Calamandrei. Véase obra de Juan Carlos Lozano Bambaren "Recurso de Casación Civil", Editorial Grijley, Lima 2005, páginas 3 y siguientes.

<sup>13</sup> Vescovi Enrique, El recurso de casación. Montevideo, Ediciones IDEA. 1996, pag. 17.

sentencia, en ciertos casos o, si no, el tercer tribunal tiene que fallar conforme a la tesis de la Corte. Otra modificación es la posibilidad de la ejecución de la sentencia pese a la interposición del recurso de casación que en consecuencia, deja de tener efectos suspensivos.

Por su parte en Italia, como en Francia, esta regulado la casación en el Código de Procedimientos Civil, establecido como un recurso extraordinario contra las sentencias definitivas o interlocutorias, procede contra las sentencias de segunda instancia, pero las partes pueden convenir la apelación e ir directamente a la casación “per saltum”, tipo de casación que también lo regula el Perú.

En Alemania la casación constituye. También, un factor de la unidad nacional, se le conoce con el nombre de REVISION, en estos últimos años se ha establecido un alto monto mínimo para la admisibilidad del recurso y una selección de los casos para aquellos que tengan importancia fundamental en el tema debatido, también admite la casación por salto, sigue los mismos lineamientos de la casación francesa, aunque con limitaciones en materia de reenvío

Un estudio pormenorizado, sobre el recurso de casación en **España** lo ha efectuado el maestro Carrión Lugo,<sup>14</sup> quien nos señala que en España, en su concepción contemporánea, se establece dos tipos de causales del recurso de casación, que en lo sustancial ha sido heredado por la legislación latinoamericana.

Por un lado, se concibe como causal la violación o la infracción de la ley y la doctrina legal, donde se controla la labor de aplicación y de interpretación de las normas jurídicas ejercidas por los organismos de instancia o de mérito; y por otro lado, se concibe como causal el quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento, donde se controla la correcta observancia de las normas procesales por la instancias judiciales. He aquí una característica de la casación en España, que lo distingue de los modelos francés e italiano; *tratándose de vicios in iudicando el Tribunal Supremo no sólo casa la resolución impugnada, sino también compone el litigio, resuelve la controversia, como cualquier tribunal de instancia o mérito.* Por ello se señala como otra nota de la casación española, su evidente

---

<sup>14</sup> Carrion Lugo, Jorge, “**El Recurso de Casación en el Perú**”, Editorial Grijley E.I.R.L.Lima –Perú,2003,pag.13 y ss

jurisdiccionalidad, en el sentido del que el ente casador es considerado como un ente judicial y no político, como en Francia, en sus orígenes.

El 8 de enero del 2001, entró en vigor en España la Ley Nro. 1/2000 del 7 de enero del 2000, Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por las Cortes el 16 de diciembre de 1999. Este ordenamiento procesal civil, regula los recursos por infracción procesal, de casación, y en interés de la ley. Se han establecido los citados recursos extraordinarios, como es natural, con el objeto de propiciar el respeto de las normas y garantías procesales, así como el respeto de las normas sustantivas aplicables para resolver los litigios, generando la unificación de la jurisprudencia en la aplicación del derecho privado, encomendando éstas tareas a órganos judiciales ubicados en las más altas jerarquías jurisdiccional del Estado y de las Comunidades Autónomas. Se dice que estos recursos son extraordinarios, por cuanto sólo procede contra determinadas resoluciones judiciales, dictadas por un tribunal que haya conocido en apelación del asunto y porque sus motivaciones para proponerlos son limitadas por la ley, las cuales determinan el ámbito objetivo de lo que va a ser de conocimiento del tribunal competente para resolver el recurso..

El recurso de casación, concebido por este novísimo ordenamiento, controla el correcto conocimiento y aplicación de las normas sustantivas y de la jurisprudencia de esa naturaleza aplicable para resolver el fondo de las controversias, así como también regula la unificación de los criterios de decisión a seguir en la interpretación de aquellas cuando tiene que aplicarse a casos idénticos.

### **3.2 PERU.**

El origen constitucional del recurso de casación en el Perú lo encontramos en el artículo 241º de la *Constitución Política de 1979*, que preceptuaba lo siguiente: “Corresponde a la Corte Suprema fallar en última instancia o en casación los asuntos que la ley señala”. La vigente *Constitución de 1993* en su artículo 141º estatuye como principio que “corresponde a la Corte Suprema fallar en casación (...)”; por otro lado consagra en el numeral 3 del artículo 139º el derecho a la tutela judicial efectiva.

A comienzos del 1992 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 767, Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta norma de organización judicial estableció la



competencia de las Salas de la Corte Suprema para conocer los procesos en sede de casación, asignando a la Sala Constitucional y Social como el ente competente para conocer el recurso de casación en materia laboral.

**En materia civil, esta figura jurídica se conoce desde el Código de Enjuiciamiento de 1852 que lo denomina recurso extraordinario de nulidad y que lo reguló atendiendo los rasgos más esenciales que la tipifican, estableciendo que su procedencia responde a causales que deberán ser sustentadas de manera clara y precisa, además señala que la parte impugnante precisará la naturaleza del vicio o error cometido; lo singular es que concedió a la Corte Suprema la facultad de resolver el fondo en los casos de error material. Además, esta norma nacional eliminó el reenvío en los casos que la sentencia impugnada afectara la ley material, lo que constituyó una impecable aplicación del principio de economía procesal.**

En cuanto al recurso de casación civil en su concepción actual, se implantó en el Perú con la dación del Código Procesal Civil, que entró en vigencia el 28 de julio de 1993, aún cuando la Constitución actual adquirió vigencia desde diciembre de 1993, es decir, con posterioridad a la vigencia del Código de Procesal Civil, la situamos como antecedente de éste en tanto sólo constituye la ratificación de lo que sobre la materia había prescrito la Constitución derogada.

Para el doctor Carrión Lugo,<sup>15</sup> el sistema casatorio implantado por nuestro ordenamiento jurídico es netamente jurisdiccional. El medio impugnativo se estableció rigurosamente sujeto al control de la legalidad de las resoluciones cuestionables en casación, es decir, con el propósito de vigilar la correcta aplicación de la norma de derecho material de la doctrina jurisprudencial, y de la norma de derecho procesal. El recurso se consagró sólo para cumplir su finalidad nomofiláctica, orientado por la corriente doctrinaria ortodoxa o pura en materia de casación.

En los primeros años, su aplicación fue excesivamente rigurosa, no sólo en el control del cumplimiento ineludible de los requisitos de admisibilidad, sino también del cumplimiento de los requisitos de procedencia, que tienen que ver con la invocación de las causales del recurso, que en la Ley Procesal de Trabajo se encontraban

---

<sup>15</sup> Carrión Lugo, ob. cit. página 29 y siguientes.

precisados taxativamente con indicación incluso de la forma como deben fundamentarse.

El riguroso control se basaba en la aplicación del texto expreso en la ley, tanto de la procesal como de la matriz; tal es así que la interpretación literal de la norma se constituía en la mejor herramienta para resolver el recurso. Es que al haber desaparecido el recurso de nulidad, previsto por el derogado Código de Procedimientos Civiles, en la Salas de Casación en lo Civil, se produjeron verdaderas avalanchas de recursos de casación, muchos de ellos deficientemente propuestos, por lo que los jueces en casación se dispusieron a ser rigurosos en su calificación como una manera también de enfrentar la excesiva carga procesal.

En este marco histórico socio-jurídico que el 21 de junio de 1996 se promulgó la Ley 26636, Ley Procesal de Trabajo, en reemplazo del Decreto Supremo 03-80-TR; esta ley incluyó el recurso de casación expresamente en el capítulo III de su sección quinta - medios impugnativo - este capítulo luego es variado en su totalidad por el artículo 1º de la Ley Nº 27021, publicada el 23 de diciembre de 1998, la misma que se encuentra actualmente en vigencia.

#### **4.- CONCEPTO DE LA CASACION**

##### **4.1 Autores Extranjeros**

ALONSO OLEA,<sup>16</sup> autor español, haciendo referencia a la materia social señala que “el recurso de casación en su país ha quedado relegado a un puesto de gran sublimidad, porque lo que hace es unificar la doctrina de los Tribunales Superiores y fijar una doctrina, erga omnes, porque unifica la doctrina.

AZULA CAMACHO, JAIME,<sup>17</sup> en cuanto a la casación, indica que “Es un recurso extraordinario que procede contra las sentencias dictadas en los procesos perentoriamente indicados por la ley y por los causales taxativamente señaladas en

---

<sup>16</sup> Alonso Olea, Manuel citado por Oswaldo Sandoval Aguirre, “La Ley Procesal del Trabajo. Antecedentes y Comentarios”, página 316.

<sup>17</sup> Azula Camacho, Jaime, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogota – Colombia, 1997, Tomo II, 5ta. Edición, página 327.

ella, con el objeto primordial de unificar la jurisprudencia nacional y defender el derecho objetivo violado”.

CABANELLAS, GUILLERMO;<sup>18</sup> en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual indica “El recurso de casación constituye un recurso supremo y extraordinario contra las sentencias ejecutoriadas de los tribunales superiores, dictadas contra la ley o doctrina admitida por la jurisprudencia o faltando a los trámites sustanciales y necesarios de los juicios, para que, declarándolas nulas y de ningún valor, vuelvan a dictarse, aplicando o interpretando respectivamente la ley o la doctrina legal, quebrantadas en la ejecutoria y observando los trámites emitidos en el juicio, y para que se conserve la unidad e integridad de la jurisprudencia.

CALAMANDREI, PIERO, <sup>19</sup> nos indica que, “El recurso de casación es lo mismo que la revocación: una acción de impugnación que mira, en un primer tiempo, a obtener la anulación de la sentencia impugnada, y en segundo tiempo, a obtener una nueva decisión sobre el mérito de la controversia; pero que difiere de ella, en cuanto, mientras se trata de la revocación tanto el residente como el rescisorio, se desarrollan ante el mismo juez a quo, posiblemente en un mismo juicio, cuando se trata del recurso de casación, el residente se desarrolla siempre ante un juez superior a aquel que ha pronunciado la sentencia impugnada (Corte de Casación), y el rescisorio, cuando es posible, se desarrolla por lo general ante una autoridad judicial igual en grado pero diversa de aquella que pronunció la sentencia impugnada (...) se caracteriza por los motivos en los cuales se funda; y como éstos pueden dividirse en dos grupos: *errores in procedendo* y *errores in indicando*, el mismo viene en realidad a escindirse en dos institutos profundamente diversos”.

DE LA PLAZA,<sup>20</sup> sobre el particular indica que “la casación no es más que la expresión de un poder del Estado, que, en exclusiva defensa de la norma jurídica, vela sólo por su recto sentido. Es fácil, entonces, aunque sólo hasta cierto punto, desligarla de los hechos de que se parte, con abstracción completa y absoluta de la justicia o injusticia, en caso de lo resuelto. Cuando, por el contrario, se la concibe como un medio de impugnación que en ultimo termino va a tener un reflejo en la cuestión

---

<sup>18</sup> Cabanellas, Guillermo, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 1979, Tomo VII, página 55.

<sup>19</sup> Calamandrei, Piero, “La Casación Civil”, Volumen III, Editorial Oxford University Press, México 2001, página 210.

<sup>20</sup> De la Plaza, Manuel, “Derecho Procesal Civil Español”, Madrid – España, Revista de Derecho Privado, 1945, Tomo I, página 674.

concreta que se sometió a los tribunales de instancia, no podrá excusarse de un limitado examen de las cuestiones de hecho contenido, es claro, en un círculo muy menguado pero necesario en ese aspecto, tanto como para lograr el fin reparador, que la sentencia, dio en último lugar, como para asegurar la exactitud de la doctrina que se establezca”

DE LA RUA, FERNANDO;<sup>21</sup> señala que “el recurso de casación está restringido a cuestiones de derecho, a la interrelación y a la aplicación de la ley, y se ha perfilado en tres etapas: a) la idea, de origen romano, por la cual una sentencia injusta, por error de derecho, debe considerarse más gravemente viciada que la injusta por error de hecho, b) la concesión a las partes de un remedio diverso de los demás otorgados para el caso de simple injusticia, lo que hace es reconocer su más reciente origen, c) la incorporación como motivo de recurso de los errores in procedendo, que deriva del derecho intermedio”.

DEVIS ECHANDIA, HERNANDO;<sup>22</sup> señala que “La casación se trata de un recurso extraordinario, razón por la cual está limitado a los casos en que la importancia del litigio por su valor o su naturaleza, lo justifica. Esa limitación tiene tres aspectos: 1) en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además para los que dicten en única instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces ( pero en lo civil y laboral puede proponerse también per saltum, contra las sentencias del juez de primera instancia); 2) en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas; 3) en cuanto a las facultades de la corte en el examen y decisión del recurso pues no pueden examinar errores de la sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple. Es, además, un recurso exageradamente formalista”.

ESPINOLA, JULIO C.;<sup>23</sup> expresa que “La casación es un recurso extraordinario, sometido a la autoridad jurisdiccional de mayor jerarquía, cuyo objeto es el de examinar la juridicidad de la actividad del juez, en el procedimiento y en el fallo, con el

---

<sup>21</sup> De la Rúa, Fernando, “El Recurso de Casación”, Víctor P. de Zavala Editor, Buenos Aires – Argentina, 1968, páginas 28 y siguientes.

<sup>22</sup> Echandía, Devis, autor colombiano, “Teoría General del Proceso”, Tomo II, Editorial Universidad Buenos Aires, Buenos Aires-Argentina, 1985, página 643.

<sup>23</sup> Espinola, Julio C., autor uruguayo, “Casación Civil en el Derecho Uruguayo”, página 260.

fin de asegurar el exacto, uniforme e igualitario cumplimiento de la norma jurídica, con el propósito superior de realizar ideales de justicia en un régimen de igualdad”.

GUASH FERNANDEZ, SERGI;<sup>24</sup> señala que “La casación es un recurso extraordinario que se configura como un elemento esencial del ordenamiento jurídico, (...) se presenta bajo una visión que, queriendo ser coherente con sus postulados clásicos en relación a la función nomofiláctica, debe adaptarse a las nuevas necesidades de todo Estado moderno, representa un verdadero guardián del ordenamiento jurídico”.

GUASP, JAIME<sup>25</sup> escribe sobre la casación lo siguiente “La casación es el proceso de impugnación de una resolución judicial, ante el grado supremo de la jerarquía judicial, por razones inmanentes al proceso en que dicha resolución fue dictada (...) a) Se dice, en primer término, que la casación es un proceso y es ésta una característica que no ofrece dificultad para su justificación, ya que en el recurso de casación interviene, en todo caso, un órgano jurisdiccional que actúa en cuanto a tal, desarrollando una función procesal verdadera, b) Inmediatamente se añade que la casación es un proceso de impugnación: tampoco parece que deban plantearse aquí dudas de gravedad. La casación, es, por lo tanto, un recurso. No es un simple remedio jurídico ni una acción impugnativa autónoma, sino una verdadera reanudación de los términos de un litigio ya cerrado para que, dentro de las limitaciones a que obedece, pueda censurarse el pronunciamiento dictado en el mismo”.

MONTERO AROCA, JUAN;<sup>26</sup> para el autor español, “es un verdadero recurso y de naturaleza extraordinaria, en el sentido de que, primero, se dirige contra resoluciones que no son firmes y, segundo, tiene limitados los motivos, es decir, se trata de tutelar los derechos subjetivos de las partes, pero también de unificar la jurisprudencia”.

---

<sup>24</sup> Guasch Fernández, Sergi, autor español, “El Hecho y el Derecho en la Casación Civil”, José María Bosch Editor, Barcelona – España, 1998, página 395.

<sup>25</sup> Guasp, Jaime, autor español, “Derecho Procesal Civil, Instituto de Estudios Políticos”, Madrid – España; 1968, Tomo II, página 802.

<sup>26</sup> Montero Aroca, Juan, “Introducción al Proceso Laboral”, Editorial José María Bosch, 4ta. Edición, Barcelona – España, página 253.

MORELLO M., AUGUSTO;<sup>27</sup> señala que “El recurso de casación es un remedio jurisdiccional para corregir el resultado de una decisión judicial y corregirlo en el sentido de que su motivación sea acertada en el derecho y así también sea justa. No vale ya predicar que su misión es solo preservar el interés de la ley, ni aferrarse a un purismo nomofiláctico, cualquiera sea el soporte fáctico en él.

PLÁ RODRIGUEZ;<sup>28</sup> indica que “es un recurso extraordinario nuevo que surge cuando se han agotado todos los recursos y responde a un doble objetivo: la supremacía de la ley sobre los magistrados y la unificación de la jurisprudencia”.

VESCOVI, ENRIQUE;<sup>29</sup> “El recurso de casación, nace para el control de las infracciones que las sentencias puedan cometer en la aplicación del Derecho”.

#### **4.2 Autores Peruanos.**

CARRION LUGO, JORGE;<sup>30</sup> dice “El recurso de Casación es de carácter extraordinario, en el sentido que propicia el juzgamiento de las resoluciones que emiten las salas civiles superiores para verificar si en ellas se han aplicado correctamente o no las normas positivas en materia civil y, en su caso, hacer las correcciones pertinentes. El recurso es formal, en cuanto a que para su planteamiento el código establece con detalle no sólo los requisitos de admisibilidad o de procedencia, señalando las causales que puedan invocarse por el proponente, sino también señala la forma cómo en cada caso debe fundamentarse el recurso, de modo que el debate central en casación se circunscribe alrededor de la causal por la cual la sala de casación ha declarado su procedencia y la decisión correspondiente no puede apartarse de ese parámetro”.

DEHO, ARIANO;<sup>31</sup> señala que “El recurso de casación vino a sustituir a nuestro casi secular recurso de nulidad, que era hasta antes de 1993 el medio para llegar al

---

<sup>27</sup> Morillo, Augusto, autor argentino, Revista Peruana de Derecho Procesal en “La Casación Civil: ¿Realidad o Ilusión?”, Librería Jurídica ALHUAY, Lima – Perú, 2001, páginas 516 y 517.

<sup>28</sup> Pla Rodríguez, citado por Francisco Gómez Valdez en “La Ley Procesal del Trabajo”, Editorial San Marcos, 1ra. Edición, Lima-Perú, 1998, página 395

<sup>29</sup> Vescovi, Enrique, “Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnatorios en Iberoamérica”, Ediciones De Palma, Buenos Aires – Argentina, 1988, página 242.

<sup>30</sup> Carrión Lugo, Jorge, “Tratado de Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Editorial Jurídica Grijley, Lima –Perú, 2001, páginas 196 y 197.

<sup>31</sup> Ariano Deho, Eugenia, “Problemas del Proceso Civil”, Jurista Editores, Lima 2003, pág. 250 y siguientes.

órgano cúspide de nuestro sistema judicial: la Corte Suprema de Justicia (...) que lo fue para lograr la nomofilaquia y la unificación de la jurisprudencia nacional”.

GOMEZ VALDEZ;<sup>32</sup> establece que “el recurso de casación es uno extraordinario en sustancia; por consiguiente, no es un recurso más ni pretende prolongar el proceso ya concluido en instancias previas, pues su extraordinariedad (sic) la conduce a que sea reservada su solución a la suprema jurisdicción de justicia, que para el caso nuestro es la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República. Versa únicamente sobre el derecho lesionado, nunca respecto de los hechos alegados en la demanda, menos sobre las pruebas aportadas, pues ésta tarea la sumen los jueces de las instancias inferiores.

Con la casación se pretende uniformar, a través de un fallo de especie, la orientación futura de los magistrados cuando tengan que resolver asuntos controvertidos análogos, por haberse discernido acerca de la recta observancia de la norma legal, siempre en un primer asunto controvertido en que se habría lesionado, por primera vez, el derecho que ella invoca en forma expresa. Es pues, el análisis jurídico del proceso en la normatividad positiva aplicada o respecto a su procesalidad”.

HERNANDEZ LOZANO Y VASQUEZ CAMPOS;<sup>33</sup> para ellos, el recurso de casación “es uno de los medios más comunes para unificar la jurisprudencia dentro de un territorio en el cual se aplica la misma ley. Aún cuando en todo el territorio de un país se aplique el mismo derecho, existe el peligro de cada jurisdicción territorial en que el país está dividido, interprete el derecho en distinta forma. Para evitar esto, muchos países han establecido el recurso de casación”.

HINOSTROZA MINGUES, ALBERTO;<sup>34</sup> señala que “El recurso de casación es aquél medio impugnatorio vertical y extraordinario procedentes en supuestos estrictamente determinados por la ley y dirigido a lograr que el máximo tribunal (Corte Suprema de Justicia) revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en revisión por las cortes superiores (que pongan fin al proceso) o la sentencia de primera instancia en el caso de la casación por salto, que infringen las normas de derecho

---

<sup>32</sup> Gómez Valdez, Francisco, “La Ley Procesal del Trabajo”, Editorial San Marcos, 1998, página 395.

<sup>33</sup> Hernández Lozano, Carlos y Vásquez Campos, José, “Código Procesal Civil”, Tomo II, Ediciones Jurídicas, Lima – Perú, 1996, página 1159.

<sup>34</sup> Hinostroza Mínguez, Alberto, “Medios Impugnatorios en el Proceso Civil”, Editorial Gaceta Jurídica, Lima – Perú, 2001, página 183.

material, la doctrina jurisprudencial, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales”

LOZANO BAMBAREN;<sup>35</sup> coincidiendo con Bruno Marchese señala que “Es un recurso extraordinario concedido a las partes para que la Corte de Casación, anule, case, las sentencias de mérito que contengan un error de derecho. Ello fluye además, de la clasificación más usada de los recursos que los divide en ordinarios y extraordinarios”

MARCHESE QUINTANA;<sup>36</sup> entiende por casación “a una función jurisdiccional confiada al mas alto tribunal judicial, para anular (sistema francés) o anular y revisar (sistema alemán y sistema español) a invocación de parte, las sentencias definitivas de los tribunales de mérito que contengan un error de derecho. Es un control jurídico sobre los jueces nomofiláquicos, a fin de mantener la unidad del derecho y de la jurisprudencia nacional, que asegura el propio tiempo la igualdad de la ley para todos”.

MONROY GÁLVEZ, JUAN;<sup>37</sup> señala que “en el Perú es una institución novedosa y casi inédita. Es un recurso, por lo tanto participa de todos los elementos comunes a éste, sin embargo el recurso de casación perfila sus rasgos propios a partir de sus fines, que son totalmente distintos a cualquier otro recurso que se conozca”.

NEVES MUJICA, JAVIER;<sup>38</sup> señala que “la casación también pretende evitar arbitrariedades y homogeneizar criterios interpretativos, que se plasma en la seguridad jurídica”.

RAMÍREZ, NELSON;<sup>39</sup> apunta que la “casación consiste, exclusiva y excluyentemente, en el examen de las cuestiones de derecho de la sentencia impugnada, no siendo una tercera instancia”.

---

<sup>35</sup> Lozano Bambarén, Juan Carlos, “Criterios Rectores Para la Formulación de Recursos de Casación”, Editora Jurídica Grijley, Lima- Perú, 2005, página 79.

<sup>36</sup> Marchese Quintana, Bruno, “La Casación Civil” en Revista Peruana de Derecho Procesal, Tomo I, Mehr Licht Talleres Gráficos, septiembre 1997, página 51.

<sup>37</sup> Monroy Gálvez, Juan F., “La Formación del Proceso Civil Peruano”, Editorial Palestra, 2da. Edición, Lima –Perú, 2004, página 251.

<sup>38</sup> Neves Mújica, Javier, “La Uniformización Jurisprudencial en el Ámbito Laboral” en Asesoría Laboral, Nro. 36, Lima – Perú, 1993, página 20.

<sup>39</sup> Ramírez Jiménez, Nelson, “Casación o Recurso de Nulidad” en Revista Ius Et Veritas, Nro. 7, Lima – Perú, 1993, página 123.



RENDON VASQUEZ;<sup>40</sup> es un recurso extraordinario donde no se evalúa los hechos; los jueces deciden también sólo si la disposición es pertinente y se aplica o no a los hechos probados.

ROMERO MONTES, FRANCISCO;<sup>41</sup> nos dice que “la casación no sólo busca asegurar el exacto cumplimiento de la Ley, sino también que ese cumplimiento sea uniforme, lo que se plasmará en la aplicación de criterios judiciales igualitarios. Se trata entonces de la creación de los precedentes judiciales que en su conjunto constituyen la jurisprudencia nacional”.

SANCHEZ – PALACIOS PAIVA, MANUEL;<sup>42</sup> señala que “El recurso de casación es la causa pretendi que enmarca la intervención de la Corte Suprema”.

SILVA VALLEJO;<sup>43</sup> nos señala que “el recurso de casación es de carácter extraordinario y tiene por finalidad fundamental el control de la aplicación correcta por los jueces del derecho positivo, de la norma jurídica sustantiva y procesal”.

TOYAMA MIYAGUSUKU, JORGE;<sup>44</sup> para éste autor “El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario por el cual el Estado busca controlar la adecuada aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos y, de esta forma, brindar seguridad jurídica a las partes y todo el sistema en general”.

VELASCO GALLO, FRANCISCO;<sup>45</sup> al respecto de la casación define como “medio tutelar del derecho objetivo, con su primordial finalidad de propender a la recta aplicación de la ley y la uniformidad de la jurisprudencia, es institución relativamente moderna: su origen como tal se encuentra en el decreto francés, posterior a la revolución de 1789”.

---

<sup>40</sup> Rendón Vásquez, Jorge, “El derecho como norma y como relación social”, 4ta Edición, Editorial Edial, Lima; junio del 2000, página 58.

<sup>41</sup> Romero Montes, Francisco Javier, “Derecho Procesal del Trabajo, Doctrina, Análisis y Comentarios de la Ley Procesal del Trabajo”, Nro. 26636; Lima – Perú; 1997, página 170.

<sup>42</sup> Sánchez Palacios Paiva, Manuel, “Causales Sustantivas de la Casación” en la Conferencia dictada en el Congreso Nacional de Casación Civil organizado por la Asociación No Hay Derecho, con el auspicio de la PUCP, lunes 9 de noviembre de 1998.

<sup>43</sup> Silva Vallejo, José Antonio, “El Recurso de Casación: Análisis y Contenido” en [www.amag.edu.docs/Silva](http://www.amag.edu.docs/Silva).

<sup>44</sup> Toyama Miyagusuku, Jorge, “El Recurso de Casación Laboral: Normativa Jurisprudencia y Perspectivas” en Aportes Para la Reforma del Proceso Laboral Peruano, editado por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y De la Seguridad Social, 2004, páginas 275 y siguientes.

<sup>45</sup> Velasco Gallo, Francisco, en el artículo Casación Civil, Derecho N°48, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diciembre de 1994, página 51.

VINATEA RECOBA;<sup>46</sup> para este autor el recurso de casación “no es más que una manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva en tanto es un mecanismo que pretende otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por los jueces”.

De la revisión y del análisis de los conceptos doctrinarios precedentemente vertidos se tiene que, muchos autores precisan sobre la extraordinariedad de este recurso, así como de su finalidad nomofiláctica; siendo pocos los que resaltan la finalidad unificadora, la cual constituye la esencia de esta institución; pues no se trata solamente de la aplicación objetiva del derecho al resolver un caso concreto, pues se deja de lado la seguridad jurídica.

#### **4.3 CONCEPTO PERSONAL.**

El recurso de Casación Laboral, es un medio impugnatorio de carácter extraordinario que examina las cuestiones de derecho de las resoluciones impugnadas, labor que la efectúa la Corte Suprema de la República, con el fin de controlar adecuadamente la aplicación e interpretación de las normas jurídicas en materia sustancial y la no vulneración del debido proceso, en concordancia con la Constitución Política, teniendo como finalidad la uniformización de la jurisprudencia nacional. La casación busca evitar la arbitrariedad de los jueces, con el fin de dar seguridad jurídica a las personas que buscan una tutela efectiva para hacer valer sus derechos.

El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario que examina cuestiones de derecho de las resoluciones impugnadas, con el fin de controlar adecuadamente la aplicación e interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional. La casación busca evitar arbitrariedades con el fin de dar seguridad jurídica a las personas que buscan una tutela efectiva para hacer valer sus derechos.

#### **5.- NATURALEZA JURIDICA DE LA CASACION.**

---

<sup>46</sup> Vinatea Recoba, Luis, “Las Bases de la Reforma del Proceso Laboral” en VI Congreso Peruano de Derecho de Trabajo y Seguridad Social; Lima – Perú, 1996, página 606 y siguientes.

El recurso de casación laboral tiene naturaleza mixta, *es de, carácter extraordinario*, ya que propicia el juzgamiento de las resoluciones que emiten las Salas Superiores para verificar si en ellas se han aplicado correctamente o no las normas de derecho objetivo en materia laboral, y hacer las correcciones pertinentes. El recurso *es formal* ya que se necesita además de los requisitos de admisibilidad y de procedencia de las causales, las cuales pueden invocarse por el proponente. También es importante la forma como en cada caso debe fundamentarse el recurso de manera que el debate se centre en la causal por la cual la Sala de Casación ha declarado su procedencia y la decisión correspondiente no puede apartarse de ese parámetro.

Se deduce que la casación como institución está formada por dos elementos que se hallan, como dice el maestro italiano Piero Calamandrei, bajo una relación de complementariedad. Estos elementos son: Corte de Casación y Recurso de Casación. Ambos institutos se integran recíprocamente aún cuando provienen de campos distintos; el primero del ordenamiento judicial – político; y el segundo, que pertenece al derecho procesal.<sup>47</sup>

De esto resultaría, conforme lo señala Fernando de la Rúa,<sup>48</sup> siguiendo la línea de Calamandrei, que el concepto de casación se compone de los siguientes elementos:

**a) Una Corte de Casación.**

1. Que constituye un órgano judicial supremo, único en el Estado.
2. Funcionando con una finalidad diversa de la jurisdiccional, esto es :
  - i) Con la finalidad de controlar que los jueces decidan las controversias según la ley.
  - j) Con la finalidad de controlar que sea mantenida en todo el Estado la uniformidad de la interpretación jurisprudencial.

---

<sup>47</sup> Calamandrei, Piero en La Casación Civil (Historia y Legislaciones), Volumen I, Traducido por Santiago Sentís Melendo, Oxford University Press., Impreso en México, Marzo 2001, página 4.

<sup>48</sup> De la Rúa, Fernando, "El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino", Víctor P. de Zavala Editor, Buenos Aires-Argentina, 1968, página 21.

3.- Con poder negativo de anulación, sobre las sentencias que contengan un error de derecho sobre la decisión de mérito.

**b) Un recurso de casación, concebido:**

Como acción de impugnación.

3. Presentada ante un juez superior.
4. Para obtener la anulación de una sentencia que contenga un error de derecho en la decisión de mérito.

Bruno Marchese<sup>49</sup>, refiriéndose a la naturaleza jurídica del recurso de casación, sostiene “Es un recurso extraordinario concedido a las partes para que la Corte de Casación, anule, case las sentencias de mérito que contengan un error de derecho.

El profesor sanmarquino Carrión Lugo<sup>50</sup> concibe al recurso de casación como un medio de carácter extraordinario y excepcional por lo siguiente:

- a) Porque dicho recurso solo es factible contra determinadas decisiones judiciales emanadas en revisión de lo resuelto por los jueces de primera instancia en lo civil. Nuestro ordenamiento prevé que las causas sólo se resuelven en dos instancias.
- b) Porque dicho medio impugnatorio requiere el cumplimiento de determinados requisitos de forma y de fondo. En efecto, en cuanto a este último requisito, se exige una fundamentación rigurosa clara y precisa de la causal que

---

<sup>49</sup> Marchese, Bruno citado por Lozano Bambaren, Juan Carlos, “Criterios Rectores para la Formulación de Recursos de Casación Civil”, Editor Jurídica Grijley, Lima – Perú, 2005, página 79.

<sup>50</sup> Carrión Lugo, Jorge, “El Recurso de Casación en el Perú”, Volumen II, Editora Jurídica Grijley, Lima – Perú, 2003, página 4.

se invoca como motivación del medio impugnatorio. Por ello se dice que es un recurso formal por excelencia

Lozano Bambaren<sup>51</sup> señala que al formular el recurso de casación civil en sede nacional es imprescindible tener presente su naturaleza predominantemente extraordinaria, con efectos revocatorios o rescisorios – según la causal que se alegue-, limitada a examinar los errores de derecho en que se haya incurrido al dictar la resolución materia de impugnación y de carácter publico, por cuanto el interés del particular que lo plantea queda relegado por el interés superior del estado de tutelar el derecho objetivo.

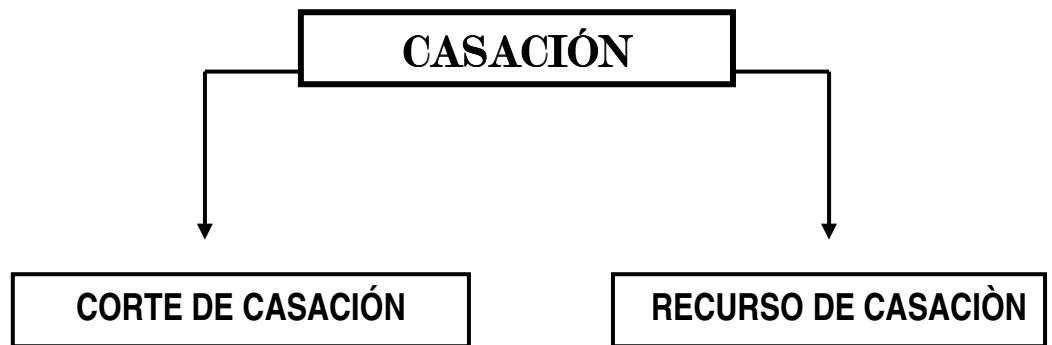
Para Monroy Gálvez,<sup>52</sup> la casación es un medio impugnatorio, específicamente un recurso de naturaleza extraordinaria, en tanto los motivos o causales para acceder a su procedencia son adicionales a las exigencias formales clásicas que se prescriben para la interposición de cualquier otro recurso.

Expuestos los conceptos de grandes procesalistas, expongo lo que considero sobre la naturaleza jurídica del recurso de casación que es, en sí, un recurso extraordinario que permite a las partes cuestionar las sentencias de mérito emitidas por las Salas Superiores, (Civil, Comercial, Laboral, o Mixta) que contengan errores de derecho, sean estos *error in iudicando* o *error in procedendo*, expresamente señalados en la ley y *formal* porque para su interposición se debe tener en consideración las causales previstas por la ley procesal especial.

---

<sup>51</sup> Lozano Bambaren, Juan Carlos, "Criterios Rectores para la Formulación de Recursos de Casación Civil", Editora Jurídica Grijley, Lima – Perú, 2005, página 84.

<sup>52</sup> Monroy Galvez, Juan, "Apuntes para un estudio sobre El Recurso de Casación en el Proceso Civil Peruano", La Formación del Proceso Civil Peruano (Escritos Reunidos), 2da. Edición Aumentada, Palestra Editores, Lima-2004, página 622.



## 6.- CARACTERÍSTICAS.

Para establecer las características del recurso de casación es importante tener en cuenta lo señalado en la norma procesal, así como los pronunciamientos diversos emitidos por las Salas Supremas y lo analizado en la doctrina.

- a) **Es un Recurso de Carácter Público**, toda vez que los pronunciamientos emitidos por las salas, no interesan sólo a las partes involucradas directamente, sino también a la sociedad, debido a que el pronunciamiento versa sobre las cuestiones de derecho. Así Hinostroza Minguéz,<sup>53</sup> citando a De La Plaza, señala “Conviene los tratadistas (...) en el carácter público del recurso de casación, y ello, según los más, porque, mediante él, no se permite restablecer el juicio sino sobre la cuestión de derecho que es la que, en último término, interesa a la sociedad”.
- b) **Es un Recurso de Carácter Extraordinario**, por ser excepcional, requiere de una reglamentación restrictiva y delimitada, es decir, se interpone en causales

---

<sup>53</sup> Hinostroza Minguéz, Alberto, “Medios Impugnatorios en el Proceso Civil, Doctrina y Jurisprudencia”, Segunda Edición, Gaceta Jurídica S.A., Lima 2002, página 194.

expresamente señaladas en la ley, (*numerus clausus*).  
Procede contra las sentencias de mérito y, excepcionalmente, contra los autos que en revisión ponen fin al proceso expedidas por las Cortes Superiores.<sup>54</sup>

- c) **Es un Recurso evaluado en el Órgano Resolutorio de Mayor Jerarquía**, por su función unificadora este medio impugnatorio obliga a que sea encargado a la más alta jerarquía jurisdiccional, en el caso peruano en la Corte Suprema de Justicia.
- d) **Es un Recurso de Carácter Formalista**, su admisión y procedencia se encuentran subordinado a la observancia de determinados requisitos, los cuales son mucho más estrictos que los correspondientes a los demás recursos.
- e) **Es un Recurso que se Concede con Efecto Suspensivo**; una vez admitido el recurso se suspende la eficacia de la resolución impugnada hasta que el órgano de casación se pronuncie sobre el mismo. Al respecto debo señalar que existe la tendencia de la legislación comparada de no darle este efecto al recurso.
- f) **Es un Recurso que versa sobre aspectos jurídicos y no sobre aspectos fácticos**, aunque a veces es difícil establecer cómo fueron vistos ambos aspectos, lo importante es que el tribunal de casación no modifique las conclusiones que en los hechos ha establecido el juez de las instancias inferiores.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Al respecto, De La Plaza señala que; “puede ser calificado de extraordinario este recurso; porque, en relación con los demás, sólo se autoriza por motivos preestablecidos que (...) constituyen un **numerus clausus**, y que no pueden ser ampliados ni extendidos por interpretación analógica; y porque, además, y también en contraste con los recursos ordinarios, limita los poderes del Tribunal *ad quem*, obligado a decidir dentro del círculo que el recurso le traza y que no le es posible rebasar”, De la Plaza, Manuel, “Derecho Procesal Civil Español”, Madrid – España, Revista de Derecho Privado, 1945, Tomo I, página 35.

<sup>55</sup> Paredes Infanzón, Jelio, “El Recurso de Casación”, Editorial San Marcos, 1999, página 60.

- g) **Es un Recurso que no actúa como Tercera Instancia,** porque el magistrado solamente puede efectuar el análisis de las causales que el recurrente expresamente menciona en su recurso, y siempre y cuando estas causales sean formulados con observancia de los requisitos exigidos por ley.

## **7.- FINALIDAD DE LA CASACION.**

Para poder entender la estructura y la importancia del recurso de casación es necesario estudiar sus fines, sin embargo los autores al abordar sobre la finalidad, lo consideran también como funciones.

Recurriendo a la norma procesal, se advierte que el artículo 54° de la Ley Procesal del Trabajo señala como fines esenciales “(...) **la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Provisional y de Seguridad Social y la unificación de la jurisprudencia laboral nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República**”. En el mismo sentido, el artículo 384° del Código Procesal Civil, señala “el recurso de casación tiene por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia”.

- a) **Función Nomofiláctica.** Monroy <sup>56</sup> señala que su significado proviene de dos palabras griegas, *nomos* y *philasso*. La primera significa ley y la segunda guardar o cuidar”. Dado que la función del Estado es cuidar la vigencia del ordenamiento legal, concede a una de sus expresiones más auténticas, el Poder Judicial, la función de cuidar la ley, entendiéndola en su sentido

---

<sup>56</sup> Monroy Gálvez, Juan, “La Formación del Proceso Civil Peruano”, 2da.edición, Palestra Editores, Lima –Perú, 2004, página 623.



**general. Sin embargo, dado que el juez es la persona u órgano que instrumenta el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos, es indispensable que el Estado cuente con un medio de asegurar que los jueces cumplan con su función, es decir, que apliquen correctamente la ley.**

Silva Vallejo indica que la casación “cuida la vigencia del ordenamiento legal enseñando a todos los órganos jurisdiccionales como debe ser la correcta aplicación y la interpretación de la norma jurídica”.<sup>57</sup>

Sobre este fin debemos tener en consideración, que en la legislación peruana ha existido una variante fundamental, **la Ley 26636** tenía como **objeto** la protección del **derecho objetivo**, luego con la dación de la **Ley 27021** esta protección se reduce a las **normas materiales**. Sobre derecho objetivo debemos entender que engloba tanto el derecho sustantivo como adjetivo; mientras que la normas materiales se encontrarían dentro de las primeras (derecho sustantivo).

Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior no cabría la interposición del recurso de casación basadas en la infracción de normas de derecho adjetivo o procesal; aunque la Corte Suprema en contadas excepciones se ha venido pronunciando sobre el fondo sustentando su resolución en la infracción al debido proceso.

- b) Función Uniformadora.** Esta finalidad se encuentra orientada a conformar una unidad jurídica y a garantizar el principio de igualdad ante la ley; es decir, que se tienda a

---

<sup>57</sup> Silva Vallejo, José Antonio, “El Recurso de Casación: Análisis y Contenido” en [www.amag.edu.pe/docs/Silva](http://www.amag.edu.pe/docs/Silva).

una aplicación e interpretación de la norma jurídica común en todo el territorio nacional, ya que siendo las leyes abstractas y generales, es factible obtener una interpretación unificada que tenga efectos vinculantes para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía.

El recurso de casación, buscando la finalidad principal de unificar la jurisprudencia nacional, se encamina en cada caso particular, a estudiar y a decidir si la ley sustantiva ha sido o no violada por sentencia de un tribunal.

- c) **Función dikelógica.** Al analizar el modelo casatorio español, distinto al modelo francés, advertimos que, las finalidades nomofiláctica y dikelógica del instituto no son incompatibles. En este sentido afirmamos que si la casación procura el cumplimiento del ordenamiento jurídico, significa también analizar la motivación de la sentencia, y con ello corregir los errores incurridos, procurando un juicio justo.

En este sentido, Gladis E. de Midón señala que es un error afirmar que la casación solo opera como un mero controlador de legalidad y por eso le está excluida la revisión del juicio de hecho. Si su misión es asegurar el reinado del Derecho objetivo del Estado en las sentencias, con el no inspeccionar la motivación del juicio de hecho y, de ese modo, con el no invalidar los pronunciamientos cuyas conclusiones fácticas sólo son producto de groseros errores o del voluntarismo o del capricho del sentenciante,

la casación cae precisamente en el vicio que dice estar llamada a fustigar.<sup>58</sup>

Para Hitters, la función dikelógica apunta a la “justicia del caso”,<sup>59</sup> se pregunta si a la altura de la evolución del recurso examinado, cuando tiene dos siglos de vida ordenada ¿es posible todavía sostener que las dos primeras funciones enunciadas son las únicas que cumple? O mejor dicho, ¿Son las tareas de control del derecho objetivo y de unificación, exclusivamente, las que justifican su existencia? En otras palabras ¿Vale la pena mantener semejante y costoso andamiaje para lograr nada más que lo dicho, es decir, revisión nomofiláctica y uniformidad? Afirma que es necesario hablar de la finalidad trifásica de la casación, donde no solo se busca el control nomofiláctico y la uniformadora de la jurisprudencia, sino también la justicia del caso “función dikelógica”, sobre todo considerando que el organismo que la resuelve pertenece al poder judicial y cumple funciones jurisdiccionales.

- d) Finalidad Pedagógica.** Está directamente relacionada con las publicaciones efectuadas de las resoluciones casatorias en el diario oficial nacional y está dirigida a los potenciales usuarios del servicio judicial, pues ellos a partir del conocimiento de las resoluciones podrán apreciar cuál es el sentido y/o la forma en que debe interpretarse o aplicarse determinada norma jurídica, y, consecuentemente, sabrán en qué casos corresponden o no recurrir al Poder Judicial. Con ello se estaría previniendo la desmesurada presentación de juicios debido a la falta de información de cómo resuelve la magistratura en determinado tipo de casos.

---

<sup>58</sup> De Midon, Gladis, “La Casación, Control del Juicio de Hecho”, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires – Argentina, 2001, página 52.

<sup>59</sup> Hitters, Juan Carlos, “La Casación Civil en El Perú” en: Revista Peruana de Derecho Procesal, Volumen II, Industrial Gráfica, página 438.

En segundo lugar, esta destinada a los profesionales del Derecho, pues a partir de estas resoluciones podrán de un lado optimizar las defensas en cuanto corresponde a la forma y requisitos en que deben ser presentados los recursos de casación y en qué casos no deben ser presentados.

- e) **Finalidad del Control de Logicidad de la motivación de las resoluciones judiciales.** Este principio establece que el Juez debe y tiene la obligación de motivar y verificar la coherencia interna de sus fallos; la falta o deficiente fundamentación jurídica (carencia, deficiencia, insuficiencia, contradicción interna o apariencia de motivación) puede ocasionar incongruencias entre la parte considerativa y resolutive de las resoluciones judiciales, produciéndose errores en el razonamiento judicial lo que en la doctrina se conocen como errores ius cogitando.

Por lo tanto, la motivación de las resoluciones judiciales, con mención expresa de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoyan, constituyen no solamente una de las garantías de la administración de justicia sino también un requisito esencial e ineludible de la presencia y observancia del debido proceso o proceso lícito.

## 8.- SISTEMAS CASATORIOS.

Se establece en la doctrina tres sistemas importantes, el francés, el alemán y el español.

- a) **Sistema francés.** Denominado también casación con reenvío, toda vez que tiene por característica principal, el reenviar el expediente al mismo Tribunal que dictó la sentencia o a otro de igual jerarquía o grado para que emita nuevo fallo. El juez receptor, puede estar de acuerdo con el criterio adoptado por el tribunal de casación, por lo que el asunto queda terminado; o puede insistir en el fallo anterior, originando que el caso suba por segunda vez; por lo que, a su vez, el Tribunal de Casación insista en su decisión casatoria, originándose un doble reenvío. Si el segundo juez de reenvío persiste en pronunciar una sentencia similar a las dos veces casada, se produce el “*referé obligatoire*” al cuerpo legislativo, que dicta un decreto de interpretación de la ley.

Se debe tener en cuenta que el segundo envío o reenvío, se debe efectuar siempre a otro Tribunal diferente al que dictó la resolución recurrida (tiene que ser de la misma categoría), o bien al mismo Tribunal pero debiendo tener la Sala de reenvío una composición diferente de magistrados.

En este sistema, el recurso de casación está referido exclusivamente a cuestiones de derecho.<sup>60</sup> Este sistema no funciona como tercera instancia, el Cour de Cassation se limita a pronunciarse sobre los motivos invocados por el recurrente, quien no puede invocar nuevas pretensiones, pero sí puede alegar todo tipo de errores jurídicos que pueden estar presentes, incluso en la sentencia de primera instancia y que no fueron analizados por la segunda instancia, también la alegación, por primera vez, de errores que afectan el orden público.

---

<sup>60</sup> Hernández Lozano, Carlos y Vásquez Campos, José, “Código Procesal Civil”, Tomo II, Ediciones Jurídicas, Lima – Perú, 1996, página 1160.

- b) **Sistema alemán.** Permite que el mismo Tribunal de Casación decida, sin reenvío, el conflicto; salvo que considere que no puede hacerlo sin un nuevo procedimiento, hipótesis en la cual remite lo actuado al juez de origen. Apréciase que es el criterio del propio Tribunal el que decide cuándo resuelve la causa ella misma o la reenvía.

Actúa como tercera instancia que despliega sus efectos sólo en el aspecto jurídico del proceso. En este tipo de sistema, incluso, se puede analizar toda la parte jurídica del objeto del juicio.

- c) **Sistema español.** Denominado también casación sin reenvío. Tiene como base el hecho de que si el Supremo Tribunal casa la sentencia, debe resolver lo que corresponda. Se evita, en lo posible, el reenvío, salvo que se trate de un vicio in procedendo que hace inevitable la devolución al juzgado de origen.<sup>61</sup>

La diferencia advertida con el sistema francés, es que el español es más ágil, busca la solución inmediata, cuando la ley se lo permite, y la diferencia con el sistema alemán es que en éste, la decisión de reenvío no está en manos del Tribunal, sino que la ley procesal, casuísticamente, le indica lo que debe hacer en cada caso.

## 9.- MODALIDADES CASATORIAS

Doctrinariamente existen dos modalidades plausibles de destacar; la casación por salto y la casación por interés de la ley.

**a) Casación Por Salto.** Procede cuando las partes, de común acuerdo, recurren en casación las sentencias de primera instancia, elevándose directamente el proceso a la Corte de Casación, sin pasar por los órganos judiciales intermedios (Corte Superior), se omite interponer el recurso de apelación.

---

<sup>61</sup> Ramírez Jiménez, Nelson, "Casación o Recurso de Nulidad" en Análisis y Comentarios al Código Procesal Civil, Tomo I, Editorial Grijley, 3ra. Edición, página 513.

Es interesante destacar que en materia laboral no existe experiencia de casación por salto, y no es simplemente porque no esta regulada en la Ley Procesal del Trabajo, porque podría pensarse que conforme a su tercera disposición final, en la que posibilita la aplicación supletoria del Código Civil, se puede dar. Existe el fundamento constitucional en donde se establece el carácter de irrenunciable de los derechos laborales, siendo ello así, se da la imposibilidad de interponer la casación por salto.<sup>62</sup>

**b) Casación Por Interés de la Ley.** No se ha regulado por haber caído en desprestigio. Hay una especie de desuso en las pocas legislaciones que la regulan. Esta institución se explica así: El Ministerio Público está facultado para interponerlo en cualquier proceso, aún cuando no haya sido parte en él ni cuando la parte legitimada no lo haya interpuesto.

Es decir, actúa incluso en contra del interés privado (de allí el nombre de interés de la ley). Cuando el Ministerio Público detecta la existencia de una sentencia que viola flagrantemente la ley, la puede impugnar en casación, no ya para quitarle el valor de cosa juzgada (por no haberse interpuesto recurso por la parte) sino para evitar que tenga el valor de precedente. Es decir, el fallo casatorio que se produzca no tendría valor para las partes litigantes, quienes se someten a la decisión que tiene calidad de cosa juzgada, sino que servirá para sacar del catálogo de precedentes jurisprudenciales, al fallo que el Ministerio Público ha impugnado.

## **10.- CAUSALES DE LA CASACION.**

Establecido ya que el Recurso de Casación es de naturaleza extraordinaria y nace para el control de las infracciones que las sentencias puedan cometer en la aplicación del Derecho, es necesario conocer ahora cuales son las causales que justifican su interposición.

Hitters, nos señala que una de las características de la casación (que la diferencia de la apelación) es que aquélla sólo tiene viabilidad en caso de que exista un motivo legal (o causal); por ende, no es suficiente el interés (el agravio en el campo recursivo) sino que se precisa que el defecto o error que se le imputa al decisorio recurrido este expresamente tipificado – objetivado - en ley.<sup>63</sup>

Tabuada Roca, citado por Hitters, refiere que en el lenguaje forense los vocablos motivo o causal, no son utilizados de manera unívoca, sino que admiten por lo menos tres significados, y

---

<sup>62</sup> Constitución Política del Perú, Artículo 26° inciso 2, “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: (...) Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

<sup>63</sup> Hitters, Juan Carlos, Obra Citada, página 439.

para que proceda el recurso es preciso que se dé, una justificación objetiva, que funcione como causal de casación, predeterminada en los códigos, que puede comprender según los países errores in indicando o in procedendo.

En la primigenia Ley Procesal Laboral (LPT), Ley 26636 del año 1996 se establecieron las siguientes causales: *1. Por evidente violación, interpretación errónea o incorrecta aplicación de la ley; 2.. Por estar en contradicción con otros pronunciamientos emitidos por la misma Sala, por otra Sala Laboral o Mixta de la República o por la Corte Suprema de Justicia, en casos objetivamente similares.*

Desde entonces, no se contempló como motivo casatorio *la contravención al debido proceso*, ya que se privilegió su función nomofiláctica, como presupuesto indispensable para la seguridad jurídica y para la igualdad entre ciudadanos.

A partir de entonces, en todo proyecto de modificación no se previó la adición de la contravención a las normas que garantizan un debido proceso como causal, en parte por evitar que la Corte Suprema se convirtiera en una tercera instancia y en parte porque se pretendía limitar la recurribilidad en casación sólo a los errores de derecho sustantivo.

La ley 27021, que modificara la Ley Procesal del Trabajo, estableció en su artículo 56°, las siguientes causales:

**a) La aplicación indebida de una norma de derecho material;** conocida también como error normativo de apreciación por elección, falso o errónea aplicación de la norma o defecto de subsunción; se produce cuando el Juez aplica una norma impertinente en vez de la que legalmente corresponde.

A esta causal, en la Ley 26636, la determinaron como incorrecta aplicación de la ley.

**b) La interpretación errónea de una norma de derecho material;** es conocida como error normativo de apreciación por aplicación. Este error se produce cuando el Juez habiendo elegido correctamente la norma aplicable al caso concreto, le da un sentido que no corresponde al sistema legal vigente, produciendo consecuencias que no resultan de su contenido.



- c) La inaplicación de una norma de derecho material;** es conocido también como error de percepción. Un juez incurre en este tipo de error cuando no logra identificar la norma material pertinente para el caso que está resolviendo, ya sea porque el juzgador ignora o se niega a reconocer la existencia de una norma y, por ende, no la aplica al caso concreto

Referente a esta causal, se debe señalar que la legislación peruana al efectuar el estudio de modificatoria de la Ley 26636, entendió que la inaplicación de la norma de derecho material abarcaba el aspecto positivo de la causal de violación de la ley, y siendo que este aspecto era aquella que se buscaba establecer como causal concreta del recurso fue adherida dentro de las causales de casación laboral.

- d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores.** Esta causal está en plena concordancia con la finalidad política de uniformar la jurisprudencia, es decir, que no exista contradicción entre los diversos criterios de aplicación e interpretación de la ley.

Esta causal se da cuando sobre una pretensión objetivamente similar, esto es, en la cual existe una correspondencia entre las pretensiones, los fundamentos de hecho y los de derecho, la Corte Superior que actúa en segunda instancia sobre el proceso, expide un fallo contradictorio con otro pronunciamiento expedido por alguna otra Corte Superior, o de la propia Corte suprema, ya que siendo las leyes abstractas y generales, es factible obtener una interpretación unificada que tenga efectos vinculantes para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía.

Cabe destacar que se exige la aplicación indebida, la interpretación errónea así como la inaplicación de una norma tenga como contenido único a las normas heterónomas de nivel primario hacia abajo, de tal manera que la Constitución o principios del Derecho del Trabajo no puedan ser materia de una casación.<sup>64</sup>

Por lo tanto, para interponer un recurso de casación en materia laboral, es necesario que ésta contenga disposiciones de carácter laboral, provisional y de seguridad social.

---

<sup>64</sup> Toyama Miyagusuku, Jorge, "El Recurso de Casación Laboral: Normativa Jurisprudencia y Perspectiva" en Aportes Para la Reforma del Proceso Laboral Peruano, Editado por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 1994, páginas 278 y 279

Asimismo, al tener este recurso como fin la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales (artículo 54) y que comprende específicamente la aplicación indebida, interpretación errónea e inaplicación de normas de derecho material, la Corte Suprema ha interpretado que las normas autónomas del Derecho Laboral, tales como el Reglamento Interno de Trabajo o un Convenio Colectivo de Trabajo, no son materia de casación.<sup>65</sup>

Entonces, para reforzar lo antes mencionado, establece el **cuadro 1**, en el cual se hace mención de las causales establecidas por la primigenia Ley 26636 y sus equivalentes consideradas por la modificatoria Ley 27021.

**CUADRO 1**

CAUSALES ESTABLECIDAS POR LA LEY 26636	CAUSALES ESTABLECIDAS POR LA LEY 27021
a. Evidente violación de la ley.	1→ Inaplicación de la norma de derecho material.
b. Interpretación errónea de la ley.	2→ Interpretación errónea de una norma de derecho material.
c. Incorrecta aplicación de la ley.	3→ La aplicación indebida de una norma de derecho material.
d. Por estar en contradicción con otros pronunciamientos emitidos por la misma Sala, por otra Sala Laboral o Mixta de la República o por la Corte Suprema de Justicia	4→ Contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores.

Sobre las normas autónomas, se ha indicado que éstas no son norma de derecho material. Existe jurisprudencia de la Corte Suprema en este tema, hay resoluciones que han declarado la

<sup>65</sup> Ibidem.

improcedencia del recurso de casación cuando se determina la legalidad de un convenio colectivo de trabajo.

El Convenio Colectivo de Trabajo es uno de los principales instrumentos que caracterizan al Derecho Laboral y definitivamente es la norma típica de esta rama del Derecho. Para unos, el recurso de casación laboral, solamente procede cuando se trata de normas heterónomas, esto es, de normas emitidas por el Estado. Cuando la Ley de Casación Laboral indica que el recurso de casación procede ante una interpretación, aplicación o inaplicación indebida de “normas de derecho material”, únicamente debe comprenderse a las disposiciones normativas de origen estatal. Este es el criterio de la Corte Suprema para apreciar las normas que pueden ser materia de casación, descartando la aplicación a normas que provienen de la autonomía privada.

Para otros, la casación laboral, dada la amplia fórmula empleada por la Ley de Casación Laboral (normas de derecho material), supone que puede utilizarse este medio impugnativo ante cualquier tipo de norma material, sea estatal o autónoma (Convenio Colectivo de Trabajo, costumbre, reglamento interno, etc.) en esta línea, cabría interponer un recurso de casación cuando nos encontramos ante un Convenio Colectivo de Trabajo.

Las causales deben ser nombradas y sustentadas independientemente; por cuanto cada una de ellas tiene sus propias características, entre ellas son implicantes y excluyentes entre sí, que si se plantean dos o más causales sobre una misma norma material, su pretensión será desestimada por falta de claridad y precisión.

La ley laboral ha omitido señalar como causal para proponer el recurso de casación, la violación de las normas de orden procesal. En otros términos, la ley no prevé como causal del recurso **la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso**, como sí lo hace el Código Procesal Civil. En la casación civil, la mayoría de las sentencias casatorias que han dictado las Salas de Casación en lo Civil tienen relación con la violación de las reglas que garantizan el derecho a un proceso lícito.

De igual manera que en la Casación Civil, los litigantes han recurrido a esta causal para presentar sus recursos de casación ante la Sala Suprema Constitucional y Social; las mismas que en un inicio por la rigurosidad con que estaban siendo manejadas esta figura procesal fue declarada improcedente; paulatinamente la Sala ha venido reconsiderando tal posición, tal es así que en ciertos casos en que se encuentra frente a una sentencia manifiestamente arbitraria, absurda o exista una flagrante violación de la ley, se está pronunciando dentro del marco de la

causal de contravención al debido proceso y en otros incluso actúa de oficio, aún cuando la parte interesada no la hubiera denunciado, ello en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Estado en referencia a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

En este último caso, se anula el acto procesal afectado, produciéndose el “reenvío” al órgano jurisdiccional inferior para que subsane el vicio y se vuelva a tramitar el proceso, desde la parte no afectada con el vicio procesal, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 396 del Código Procesal Civil.

## **11.- REQUISITOS Y PROCEDENCIA.**

El artículo 55° de la Ley de Casación Laboral, dispone que “este recurso procede únicamente en los siguientes supuestos:

- a)** Sentencias expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores de Justicia que resuelve el conflicto jurídico planteado por las partes;
- b)** Si la pretensión es de naturaleza económica y está expresada en dinero, sólo procederá si dicha cuantía supera las 100 (Cien) Unidades de Referencia Procesal determinada conforme lo establece el artículo 6ª de esta Ley, si el recurso es interpuesto por el demandante y, como lo establece la sentencia recurrida si lo interpone el demandado.

Existen dos tipos de requisitos: los requisitos formales o admisibilidad y los requisitos de fondo o de procedencia.

### **11.1 Requisitos Formales o Admisibilidad.**

Estos requisitos están dados por los elementos formales que determinan la actitud de éste para producir efectos en el interior del proceso.

Ellos están contemplados en el artículo 57° de la Ley Procesal Laboral, y están referidos a la admisibilidad del recurso, la misma que debe ser apreciada por la Sala Laboral o Mixta, al momento de interponerse el recurso, estas son:

- a) Se presenta ante la Sala que expidió la resolución impugnada.
- b) El plazo de 10 días para la interposición, contados desde la notificación de la sentencia.
- c) Contra la sentencia contenidas en el artículo 55°.
- d) Si el empleador es el recurrente, entonces debe cumplir con adjuntar el comprobante del pago de la tasa respectiva. El requisito del pago de tasa no se exige cuando el recurrente es el trabajador.
- e) El recurrente no debe haber dejado consentir la resolución de primera instancia cuando ésta fue confirmada por la segunda.
- f) Debe presentar copias de las resoluciones contradictorias de ser el caso.

De estos requisitos formales y de lo establecido en el artículo 55 de esta misma norma se puede sustraer lo siguiente:

- 1) **Requisito formal de tiempo;** se estableció que el tiempo para interponer este recurso sea dentro de los 10 días de notificada la resolución.
- 2) **Requisito formal de lugar;** este recurso debe ser interpuesto ante la Sala que expidió la resolución impugnada.
- 3) **Requisito formal de modo;** conforme lo establece el artículo 288 inciso 10 de la LOPJ, se deberá presentar por medio de escrito con firma de letrado.
- 4) **Requisito formal de cuantía;** aquí se presenta dos supuestos: i) si el recurrente es el **demandante** (trabajador) se regulará conforme lo establece el artículo 6 de la LPT, es decir el resultado de la suma de todos los extremos que contenga la demanda de acuerdo a como ha sido liquidado por él, sin contar los intereses legales, ni costas ni costos del proceso; ii) si el recurrente es el **demandado** (empleador) la cuantía es aquella establecida en la sentencia, que deberá superar a las 100 URP. Este requisito responde al fin de evitar una masiva interposición del recurso, por ello impone una cuantía mínima o quantum mínimo.

- 5) **Requisito formal de Pago de Tasa Judicial;** esta tasa solamente será abonada cuando el recurrente es el empleador y se regula a lo establecido para los procesos civiles. Si el recurrente es el trabajador o el ex trabajador la interposición del recurso es gratuito.
- 6) **Sentencias Recurribles;** son aplicables solamente contra sentencias expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores de Justicia que resuelve el conflicto jurídico planteado por las partes. La Ley que se comenta, ya no contempla la posibilidad de interponer el recurso de casación contra autos en revisión que pongan fin al proceso u ordenen el pago de sumas mayores a 50 URP o se trate de obligaciones de hacer y no hacer (autos con efectos similares a una sentencia); las mismas que en su momento fueron estipuladas por la derogada Ley 26636.

### **11.2 Requisitos de Fondo o Procedencia.**

Son los elementos intrínsecos o de fondo de un acto procesal, cuya presencia es esencial para que el acto tenga tal calidad. Estos requisitos están regulados en el artículo 58 de la Ley Procesal de Trabajo y determina que se debe señalar en forma clara y precisa las causales descritas en el artículo 56 y sustentarlas según sea el caso de la siguiente manera:

- a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse.
- b)Cuál es la correcta interpretación de la norma.
- c)Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse.
- d)Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción.

Efectuando un análisis del articulado, podemos mencionar que existen requisitos generales aplicables para todas las causales y otras específicas que serán usadas teniendo en consideración la causal a plantearse al caso en concreto.

Los *requisitos generales* son determinados, teniendo en consideración el primer párrafo del articulado, son:

- 1) **Indicar la causal;** se deberá señalar uno o más causales establecidos en el artículo 56 de este mismo cuerpo legal; es decir la aplicación indebida, la interpretación errónea, la inaplicación de una norma material o la contradicción jurisprudencial con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores. El no mencionar alguna de estas causales o mencionar alguna otra causal no prevista en el artículo ya mencionado determinará su improcedencia.
- 2) **El recurso debe ser planteado y fundamentado con claridad y precisión;** es necesario que se emplee un lenguaje exacto y preciso cuando se fundamenta, para ello, se debe usar palabras cuyo significado corresponda exactamente a la idea que deseamos expresar y respecto de la cual exista un consenso sobre su significado.

Debido a que la Corte no tiene la facultad de interpretar el recurso, ni de suplir la argumentación deficiente o defectuosa, será el recurrente quien deberá atacar los argumentos principales de la sentencia recurrida refiriéndose concreta y directamente a los conceptos que la estructuran, y no desviar su atención a los argumentos secundarios o a los que se dan en abundamiento.

Tiene que señalarse clara y explícitamente en qué consiste el vicio, haciendo un análisis razonado y crítico de los motivos del pronunciamiento, y luego explicar la propuesta para corregirlo, fundamentando con argumentos jurídicos, citas legales, doctrina, reglas de hermenéutica y en fin, toda la batería disponible en apoyo de la tesis, y hacer ver cómo todo ello modificaría el sentido del fallo.

Cada causal es autónoma, por lo que cada una debe tener su propia fundamentación. No se puede usar el mismo argumento para dos causales, pues entonces el recurso carecerá de precisión. Y a la inversa, tampoco es posible que un mismo vicio pueda darse en dos o más causales, por que entonces el recurso carecerá de claridad. De esto resulta que las causales sean excluyentes y contradictorias cuando se refieren a una misma norma.

- 3) **Debe existir un nexo de causalidad;** el art. 58 de la LPT, exige que en la *fundamentación del recurso*, además de exponer el perjuicio sufrido por la parte que lo interpone, debe probar que éste es consecuencia de que en la resolución se halla incurrido en error de derecho, es decir, que debe existir una relación de

causalidad entre el error de derecho incurrido en la Resolución y el fallo, por lo tanto el recurrente deberá indicar en que consiste dicho error; pero para ello, previamente, el recurrente deberá analizar también la existencia de una relación coherente entre los hechos, la pretensión y las normas materiales invocadas.

Los *requisitos específicos* son determinados teniendo en consideración las características de cada una de las causales de manera independiente; por lo tanto se aplicará lo siguiente en la causal de:

**1) Aplicación Indevida de una norma material;** los requisitos son:

- i) Que la norma denunciada haya sido aplicada en la sentencia recurrida,
- ii) Que la norma aplicada es impertinente en el caso en concreto y
- iii) Señalar cuál o cuales son las normas que si son pertinentes y porqué.

**2) Interpretación errónea de una norma material;** los requisitos son:

- i) Que la norma denunciada haya sido aplicada en la sentencia recurrida y
- ii) Determinar y fundamentar cómo debe ser la correcta aplicación.

**3) Inaplicación de una norma material;** los requisitos son:

- i) Que la norma planteada no haya sido aplicada en la sentencia recurrida y
- ii) Determinar el porqué la norma propuesta debe ser aplicada en el caso en cuestión.

**4) Inaplicación de una norma material;** los requisitos son:

- i) Verificar que los pronunciamientos contradictorios guarden similitud objetivo con el tema en debate;
- ii) Fundamentar en qué consiste la contradicción y
- iii) Acompañar copias de dos o más resoluciones contradictorias.

Estos requisitos de fondo son apreciados por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema antes de revisar el caso y formarse una opinión sobre el mismo. Si se cumplen los requisitos, la Sala Casatoria se pronuncia sobre el fondo; si no se cumplen, se declara improcedente el recurso.



En conclusión, estamos ante los requisitos de forma cuando la ausencia de uno o más de ellos produce la inadmisibilidad del recurso de casación, y estamos ante los requisitos de fondo cuando la ausencia de uno o más de ellos produce la improcedencia.

Al cumplirse los requisitos de forma y fondo, la Sala procederá a continuación a estudiar las causales y emitir el pronunciamiento respectivo, decidiendo si casa o no casa la sentencia recurrida, es decir, resolviendo declarar fundado o infundado el recurso planteado.

## **12.- EFECTOS DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACION.**

Teniendo en cuenta que la sentencia casatoria constituye precedente obligatorio, las instancias inferiores deben seguir el criterio asumido por el Tribunal Supremo, siempre y cuando se encuentren en casos similares, esto es, en procesos idénticos; por ende, es importante saber en qué sentido puede pronunciarse, y los efectos que producen tales pronunciamientos. Sin embargo, el criterio asumido por la Corte Suprema, puede variar, es decir, la Corte puede apartarse de su precedente, siempre y cuando exponga los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa para apartarse del mismo.

Conforme lo señala el artículo 59 de la Ley Procesal del Trabajo, cuando el recurso ha cumplido con los requisitos de procedibilidad la Sala Suprema emitirá un pronunciamiento sobre el fondo, optando por dos alternativas, declarar:

- **Infundado el recurso:** En este caso la Corte efectúa un análisis de la sentencia recurrida mas no hay un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que en ella corrobora la corrección de la norma aplicada o inaplicada o la interpretación realizada. Por lo que al no encontrar el vicio denunciado, declara infundado el recurso y lo devuelve al inferior jerárquico, tampoco es aplicable ninguna multa como en el caso de las improcedencias.
- **Fundado el recurso:** En este caso la Sala Suprema avala lo planteado por el recurrente en su recurso y conforme lo establece el artículo 59 de la Ley Procesal de Trabajo casa la resolución recurrida y se pronuncia sobre las causales que son procedentes, resolviendo el conflicto, sin devolver el proceso a la instancia inferior, es decir no existe el reenvío, lo que resulta coherente, toda vez que las causales están referidas a normas de carácter material.

Ahora bien, el **pronunciamiento de la Corte** debe limitarse a lo siguiente:

- a) Indicar la debida aplicación o interpretación de las normas de derecho material que hayan sido objeto de impugnación.
- b) Restablecer el derecho conculcado por la resolución recurrida, sin pronunciarse sobre los aspectos económicos del fallo, si los hubiere, los que deberán liquidarse por el juzgado de origen.
- c) Actuar en sede de instancia con respecto a la sentencia apelada, si fuere el caso.

De lo expuesto podemos decir que; los principales **efectos de la sentencia casatoria** son los siguientes:

- 1. Constituye precedente obligatorio, para apartarse del mismo, la Sala Suprema debe justificarla, señalando los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta para variar su criterio.
- 2. Las instancias inferiores siempre deben seguir el criterio asumido por el Tribunal Supremo.

### **13.- LA CASACION LABORAL EN EL DERECHO COMPARADO.**

#### **13.1. LEGISLACION COLOMBIANA.**

El Código Procesal del Trabajo Colombiano en el artículo 86 contempla como fines del recurso de casación la de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, razón por la cual dicho recurso debe interponerse sobre las causales de violación de disposiciones sustanciales de ese orden, sin perjuicio de que junto a ellas se hubieran quebrantado preceptos de otros códigos. Además de ello, la ley contempla los dos conceptos legales de “interés para recurrir” y “cuantía del interés” por cuanto tienen jurídica y legalmente una coexistencia armónica.

Respecto a las causales o motivos del recurso, el artículo 87 de la citada ley; indica que procede por los siguientes motivos: por ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea tanto de las normas sustanciales como de las no sustanciales. Prevé también el Código que el recurso es viable cuando la sentencia no esta en consonancia con los hechos.

La sala de casación, antes de dictar sentencia en sede de instancia, está facultada para decretar pruebas de oficio si lo estima necesario. Además en la Ley colombiana, sí se ha previsto la interposición del recurso *per saltum*, contra las sentencias de los jueces del círculo judicial del trabajo y siempre que se obtenga el consentimiento de la contraparte o su apoderado, y únicamente cuando la causal invocada sea violación de la ley sustancial, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.

Finalmente, si la Corte halla fundado el recurso por las causales referentes al derecho material, decidirá sobre lo principal del pleito o sobre los capítulos comprendidos en la casación, entonces dictará un auto para mejor proveer, es decir, no hay reenvío. Pero si se casa sobre una causal sobre normas adjetivas, entonces la Corte declarará en que estado queda el juicio y dispondrá se envíe el proceso al tribunal de origen para que proceda con arreglo a o dispuesto por aquélla.

### **13.2. LEGISLACION ARGENTINA.**

El recurso de casación argentino, está determinado por los diferentes ordenamientos procesales de cada provincia, que son veintitrés en total, en cada uno de éstos aparecen variados recursos con distinta denominación pero con las mismas finalidades que el recurso de casación, esto es corregir errores *in iudicando* o *in procedendo*.

En la *provincia de Buenos Aires*, la casación se encuentra regulada por la Ley N° 11.653, Procedimiento Laboral; la misma que se encuentra inmersa en los llamados recursos extraordinarios, ellas proceden contra sentencias definitivas dictadas por los Tribunales; la causal de inaplicabilidad de ley sólo será concedido cuando el valor de la cuantía exceda la suma fijada por el Código Procesal Civil y Comercial, salvo en casos en que la doctrina de la Suprema Corte de Justicia ha sido contrariado por el fallo en cuestión, cuando en el fallo se ordena el desalojo de la vivienda del trabajador, el monto sea indeterminado o insusceptible de apreciación pecuniaria y en casos de litis consorcio cuando los puntos controversiales versen los temas ya mencionados.

Cuando la sentencia es condenatoria, los recursos se concederán previo pago de los depósitos de capital, intereses y costas con excepción de los casos en las que se versan sobre pago de honorarios profesionales, en casos de quiebra o concurso civil del demandado declarado judicialmente.

La parte favorecida con el fallo puede solicitar al Tribunal que el pago sea sustituido con títulos o valores de la Nación o Provincia que quedarán en el Banco de Buenos Aires, la que se ejecutará con orden del Tribunal.

El tratamiento efectuado por la provincia de Buenos Aires también es recogida por la *provincia de Río Negro*, que regula la casación laboral con el nombre de recurso extraordinario en la Ley 1.504, Procedimiento Laboral de la provincia de Río Negro, artículos 52º y 23º, promulgada el 26 de marzo de 1981 y publicada el 9 de abril del mismo año en el B.O.P Nº 1823.

La *provincia de Jujuy*, en la Ley Nº 1938, Ley de Procedimiento de Trabajo de la Provincia de Jujuy, establece en el artículo 99º bis que los recursos que proceden contra sentencias definitivas dictadas por las Salas del Tribunal de Trabajo son la casación e inconstitucionalidad establecidos en los artículos 235 y 249 del Código Procesal Civil.

El Código Procesal Civil de Jujuy dedica su sección IV al recurso de casación, este recurso procede para ante el Tribunal por quebrantamiento de forma y violación de la ley o doctrina legal contra la sentencias definitivas dictadas por tribunales colegiados de última instancia.

El quebrantamiento de forma puede ser: cuando se haya violado la forma y solemnidades substanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia, siempre que la nulidad ni haya sido consentida por las partes, o cuando en el juicio oral no se hayan observado las formas procesales prescriptas y siempre que quien lo interponga haya reclamado la subsanación del defecto o hecho la protesta de recurrir.

La violación de la ley o doctrina legal procede cuando la sentencia violare o desconociere la ley o la doctrina legal, recayere sobre cosas no demandadas o contra persona distinta a quien interpuso la demanda, otorgare más de lo pedido o no contuviere sobre alguna de las pretensiones solicitadas oportunamente deducidas en el juicio, contuviere disposiciones contradictorias, fuere contraria a la cosa juzgada, siempre que se haya alegado esta excepción en el proceso.

Será declarado improcedente cuando se plantea contra juicios terminados que no obste a la promoción de otro sobre el mismo objeto y cuando el recurso se encuentra fundado en la errónea interpretación de la prueba.

Se deberá efectuar un depósito previo equivalente al diez por ciento del valor del juicio que no deberá ser inferior a los quinientos pesos ni mayor a los cinco mil pesos, se encuentran exceptuadas el Ministerio Público, la Provincia y las personas que se encuentran eximidas del pago del sellado

El recurso deberá presentarse dentro de los quince días después de notificada la sentencia definitiva y ser acompañado por el testimonio de la sentencia recurrida y expresar los alcances de la impugnación y lo que desea que se anule señalando concretamente las formas quebrantadas, las disposiciones violadas e erróneamente aplicadas, manifestando cuál es la ley o a doctrina que es debido aplicarse; cada uno deberá expresarse en forma separada.

Admitido el recurso, se correrá traslado a la otra parte por el plazo de diez días y a la Fiscalía por el mismo plazo para que emita su dictamen. Dentro de los treinta días siguientes de recibido el dictamen se determinará fecha para la vista de la causa, donde las partes podrán hacer uso de la palabra por el tiempo de treinta minutos cada uno, el recurso se resolverá en la misma audiencia pública.

Si el recurso es declarado procedente porque la sentencia impugnada ha violado o aplicado falsa o erróneamente la ley o doctrina legal entonces casará la sentencia y resolverá el caso conforme a ley y a la doctrina; y si declara procedente el recurso por quebrantamiento de forma declarará la nulidad y dispondrá que los respectivos subrogantes legales del tribunal que lo consumó, substancien el proceso y dicten sentencia según corresponda.

En la *provincia de Chubut*, la casación laboral no se encuentra regulado en una ley especial sino que se rige por lo establecido en su Código procesal Civil, Ley Nº 2203, artículos 286º al 298º, el tratamiento que efectúa esta provincia a la casación es muy similar a la provincia de Jujuy.

La *provincia de Córdoba*, regula la casación laboral en la Ley Nº 7987, Código Procesal de Trabajo, artículos 98º al 106º, procede contra las sentencias definitivas dictadas en juicio oral por las Cámaras o salas de Trabajo por la inobservancia o errónea aplicación de la ley o el Convenio Colectivo o por inobservancia de las normas establecidas bajo pena de inasmisibilidad, caducidad o nulidad siempre que el recurrente haya reclamado oportunamente.

Será interpuesto ante el mismo tribunal que dictó la resolución dentro del plazo de diez días de notificada con disposición concreta de las disposiciones que se consideran violadas o erróneamente aplicadas y expresar cuál es la aplicación que se pretende, se deberán indicarse

separadamente. Las partes tienen diez días después de la admisión del recurso para presentar sus informes, luego de este plazo correrán veinte días para que el Tribunal dicte sentencia.

Si el Tribunal estableciera la procedencia por inobservancia o errónea aplicación de la ley, casará la sentencia y resolverá el caso conforme a la ley y a la doctrina aplicable y si es declarado procedente por inobservancia de las normas establecidas bajo la inadmisibilidad, caducidad o nulidad anulará la resolución impugnada, los actos cumplidos en forma irregular y remitirá los actuados a la Cámara del Trabajo en turno o a la que le sigue, si aquella fuere el causante de la nulidad.

Durante el proceso el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia tendrá que intervenir.

### **13.3      LEGISLACION CHILENA.**

Los procesos laborales chilenos cuentan con los mismos recursos previstos para el proceso civil, y aplica en forma supletoria lo previsto para el proceso civil para todo cuanto no se encuentre precisado en las normas laborales.

El recurso de casación laboral chileno tiene por objeto invalidar una sentencia en los casos expresamente previstos en la Ley, pudiendo darse de dos formas: casación sobre el fondo y casación en la forma.

La casación en el fondo procede contra sentencias definitivas e inapelables y sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, siempre que hayan sido dictadas por la Corte de Apelaciones y con infracción de la ley que ha influido en lo dispuesto en el fallo.

La casación en la forma procede contra las sentencias definitivas de cualquier instancia y contra las sentencias interlocutorias que ponen fin al proceso y hagan imposible su prosecución o las que se dicten en segunda instancia sin emplazar a la parte agraviada o sin señalar día para la vista, cuando ello correspondía; y ha de fundarse precisamente en alguna de las siguientes causas: a) en haber sido dada *ultra petita* o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que tienen para fallar de oficio en los casos determinados por la ley; b) en haber sido dada contra otra resolución pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que esta se haya alegado oportunamente en juicio; y c) por contener decisiones contradictorias.

#### 13.4. LEGISLACION VENEZOLANA

El recurso de casación laboral en la legislación venezolana se encuentra regulado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, su procedencia es contra sentencias de segunda instancia que pongan fin al proceso, haciendo la precisión que quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado por ella; más lo **novedoso** en esta legislación es que procede contra los laudos arbitrales; en ambos casos la pretensión principal de la controversia debe superar la cuantía establecida.

Los motivos o causales por los cuales se puede interponer el recurso de casación, son estrictos y taxativos por lo que solo procederá en tres situaciones: a) cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa; y b) cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición de la ley, cuando se aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia. En estos casos, la infracción debe provenir de la sentencia apelada; y c) Por falta, contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación.

Nótese la diferencia en relación a la casación laboral peruana, en la cual no se contempla como causal el quebrantamiento u omisión del debido proceso, en la legislación venezolana se confiere el primer lugar a este tipo de error. Por otro lado, es importante destacar, que en la casación laboral venezolana si se entra a revisar la logicidad de la motivación de las sentencias, esto es, se ejerce un control sobre el razonamiento judicial realizado por los inferiores.

En su sentencia, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre las infracciones denunciadas, extendiéndose al fondo de la controversia, y aun va más allá por que se pronuncia respecto al establecimiento y apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de Instancia.

Si al decidir el recurso, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social detectase alguna infracción a las que se referida al debido proceso, decreta la nulidad del fallo y la reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido, siempre que dicha reposición sea útil.

Otra diferencia importante se da en relación a la sentencia de casación, la cual decide el fondo de la controversia casando o anulando el fallo, sin posibilidad de reenvío, o de lo contrario, simplemente confirma. También el Tribunal Supremo de Justicia, de oficio, puede hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucional que ella encontrare, aunque no se les haya denunciado.

Finalmente, les corresponde a los jueces de instancia acoger la doctrina de casación establecida y aplicarla en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.

Aparte de lo ya revisado sobre la casación laboral, la legislación venezolana ha previsto el recurso denominado Control de la Legalidad, por el cual el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, a solicitud de parte, conoce aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún no fueran recurribles en casación violenten o amenacen con violentar las normas de orden público laboral o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

Este recurso es, en cierta forma, el análogo de la causal de contradicción jurisprudencial contemplada en nuestra legislación, por lo que si el recurso de control de la legalidad es tramitado y sustanciado, el Tribunal Supremo de Justicia decreta la nulidad del fallo y ordena la reposición de la causa al estado que considere necesario para reestablecer el orden jurídico infringido, o decide el fondo de la controversia, anulando el fallo del Tribunal Superior, sin posibilidad de reenvío; en caso contrario, el fallo impugnado queda definitivamente firme.



### CAPÍTULO III

#### ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA CASACION LABORAL EN EL PERÚ

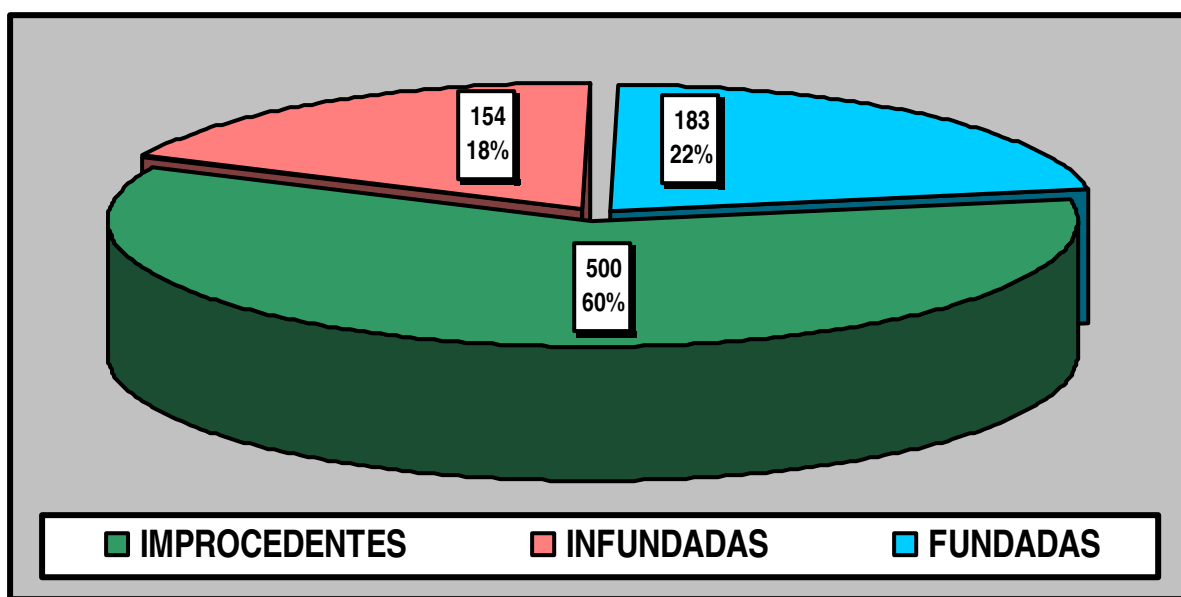
##### 1. INTRODUCCIÓN.

Para iniciar el procesamiento de los datos, es necesario realizar un recuento de cómo se llegó a esta etapa, el trabajo se inició con el acopio de información obtenidos a partir de las separatas especiales que sobre el Recurso de Casación publica diariamente el Diario Oficial “El Peruano”, publicados en los años 1999, 2000, 2003 y 2004; constituyendo un **universo** de dos mil cuatrocientos sesenta (2460) resoluciones.

Posteriormente se efectuó un filtro de este universo, obteniendo una **muestra** consistente en ochocientas treinta y siete (837) resoluciones; repartidas de la siguiente manera: quinientas (500) resoluciones improcedentes, ciento cincuenticuatro (154) resoluciones infundadas y ciento ochentitrés (183) resoluciones fundadas, estos datos lo graficaremos en el **gráfico 2**. La cifra obtenida en la muestra responde a los siguientes criterios de evaluación:

##### **MUESTRA DE LA TESIS (837)**

(Gráfico 2)



- 1) **PRIMER CRITERIO:** El primer filtro responde a la **calidad** de la muestra; para esto se sustrajo todas aquellas resoluciones que eran repetitivas; donde el demandado (empresa) era quien interponía el recurso, por los mismos hechos, la misma argumentación jurídica y donde el fallo emitido por la Sala era idéntica; lo único que variaba era los demandantes que constituían en general aquellos ex trabajadores que formaban parte de la empresa demandada y que estaban solicitando algún beneficio social, nulidad de despido o despido arbitrario. Al finalizar este filtro contábamos con mil seiscientos cuarenta (1640) resoluciones aproximadamente.
- 2) **SEGUNDO CRITERIO:** El segundo filtro responde a la **cantidad** de la muestra; después de la consulta efectuada a una persona entendida en la parte estadística y a la sugerencia de mi asesor de tesis, se realizó un recorte proporcional de la muestra por tipo y años; la primera en relación a las resoluciones declaradas improcedentes y las resoluciones declaradas procedentes, en éstas últimas también se aplicó entre aquellas declaradas infundadas y las declaradas fundadas y la segunda en consideración proporcional a la publicación de las resoluciones en los cuatro años de estudio.

Con la muestra ya determinada, se estableció un método de estudio, la misma que ha sido sistematizada en dos etapas.

La **primera etapa** de manera genérica, para ello se creó una ficha que aparece en el **cuadro N° 2**, la misma que contiene datos básicos para la clasificación y posterior codificación de las resoluciones.

Posteriormente, con los datos obtenidos en la ficha se elaboró un cuadro sistemático, **cuadro N° 3**, que contiene la CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN teniendo en cuenta la categorización de la muestra – resoluciones – que es la base del seguimiento de este estudio, la cual es la siguiente:

- a) **PRIMERA CATEGORÍA:** Por los años de publicación de las resoluciones.
- b) **SEGUNDA CATEGORÍA:** De conformidad a las clases de resoluciones emitidas por la Sala Constitucional y Social en casos de planteamiento de recurso de casación.

- c) TERCERA CATEGORÍA: En función a los distritos judiciales.
- d) CUARTA CATEGORÍA: En función a las pretensiones.
- e) QUINTA CATEGORÍA: En función a las causales para interponer el recurso de casación.

La tercera, cuarta y quinta categoría están relacionadas en forma horizontal, mientras que la primera y segunda tienen una relación vertical una de la otra y ante la tercera, cuarta y quinta categoría.

Los resultados obtenidos se graficaron en cuadros estadísticos, los cuales serán descritos teniendo en cuenta la categorización antes señalado.

Es menester mencionar que en los años 1999 y 2000 se han trabajado con las resoluciones improcedentes como procedentes; mas en los años 2003 y 2004 solamente se han tenido en consideración para la muestra de estudio las resoluciones procedentes.

## CUADRO 2

### **FICHA DE ANÁLISIS DE CASACIONES**

#### **I. DATOS GENERALES :**

- 1.1 CLASE :
- 1.2 NUMERACIÓN :
- 1.3 N° DE CASACIÓN :
- 1.4 FECHA DE EMISIÓN :
- 1.5 INTERPUESTO POR (Dte / Ddo) :
- 1.6 PRETENSión :
- 1.7 SENTENCIA DE VISTA :
- 1.8 SENTENCIA DE 1ra INSTANCIA :
- 1.9 CAUSALES :

#### **II. FUNDAMENTOS DE LAS PARTES :**

- 2.1 Dte :
- 2.2 Ddo :

#### **III. ANÁLISIS DE FONDO DE LA RESOLUCIÓN :**

- 3.1 Análisis y pronunciamiento por cada causal :
- 3.2 NORMATIVIDAD UTILIZADA (Tiene que ser anexada y señalar si es una copia de ley o de la resolución).

#### **IV. PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA :**

#### **V. ANÁLISIS PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN :**

- 5.1 Respecto a la causal invocada y la causal casada :
- 5.2 Respecto al fondo según la Base legal :
- 5.3 Opinión personal respecto a la resolución :



**CUADRO 3**

Nº	Cas. Nº	Fecha	Departamento	Pretensión	CAUSALES ESTABLECIDAS POR LA LEY PROCESAL DE TRABAJO						CASUSAL ESTABLECIDA EN EL ART. 3 DE LA C.P.C. Contravención de las normas que garantizan el debido proceso
					Violación de la Ley	Interpretación errónea de la Ley	Incorrecta aplicación de la Ley	Contradicción jurisprudencial	Aplicación indebida de la norma	Inaplicación de la norma	

Para culminar este capítulo he desarrollado el análisis lógico jurídico de la muestra de resoluciones casatorias designadas en esta tesis para tal propósito, aquellas que tienen como objeto verificar si los Magistrados de la Corte Suprema han cumplido diligentemente con el fin que le fuere encomendado en la Ley Procesal de Trabajo que es la de unificación de la jurisprudencia nacional laboral.

## 2. RESOLUCIONES DE CASACIÓN DURANTE LOS AÑOS DE 1999-2000.

### 2.1. Procesamiento de datos.

De la muestra considerada en esta tesis, para el año 1999 se tiene un total de 350 resoluciones y en el año 2000 en un total de 380 que equivalen el 100% de las mismas.

Los **gráficos 3 y 4** señalan de forma numérica y porcentual cómo la Sala Suprema de la Corte Constitucional y Social falló en estos años ante la presentación de los recursos de casación, declarándolos procedentes o improcedentes, ello en consideración al cumplimiento a lo señalado en la Ley Procesal de Trabajo referente al cumplimiento de los requisitos de forma.

Las tortas nos señalan de manera clara que el porcentaje de resoluciones improcedentes supera a las procedentes, la misma que creció en un 22% entre un año y otro, ello se puede visualizar con mayor claridad en el cuadro comparativo que se encuentra en el **gráfico 5**.

CASACIONES DE LOS AÑOS 1999-2000

Gráfico 3

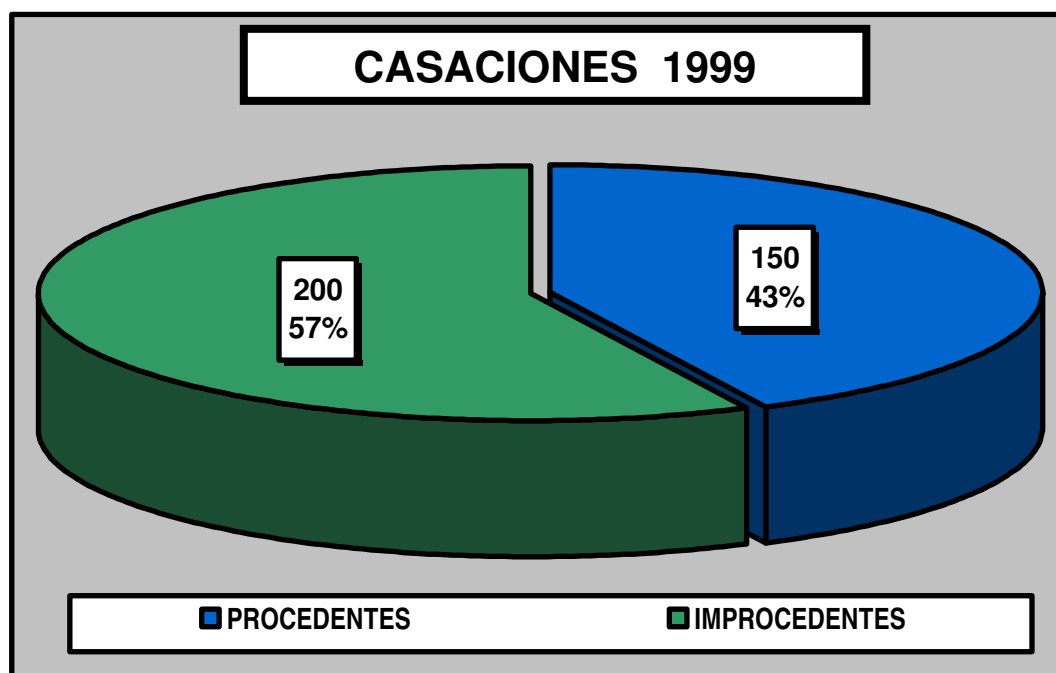
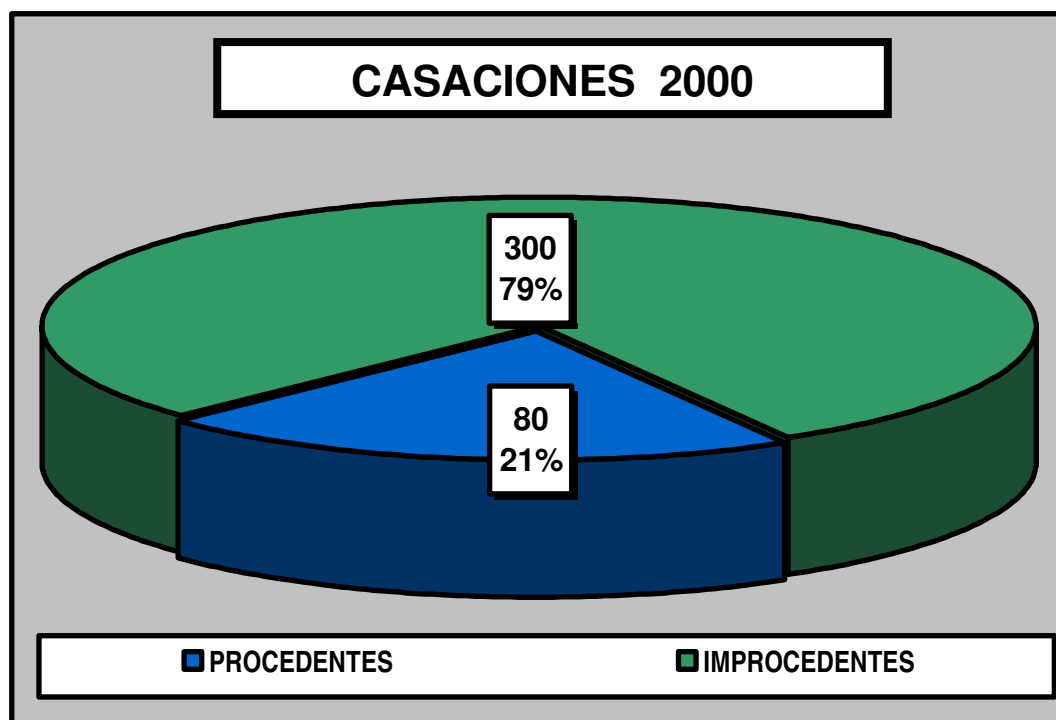


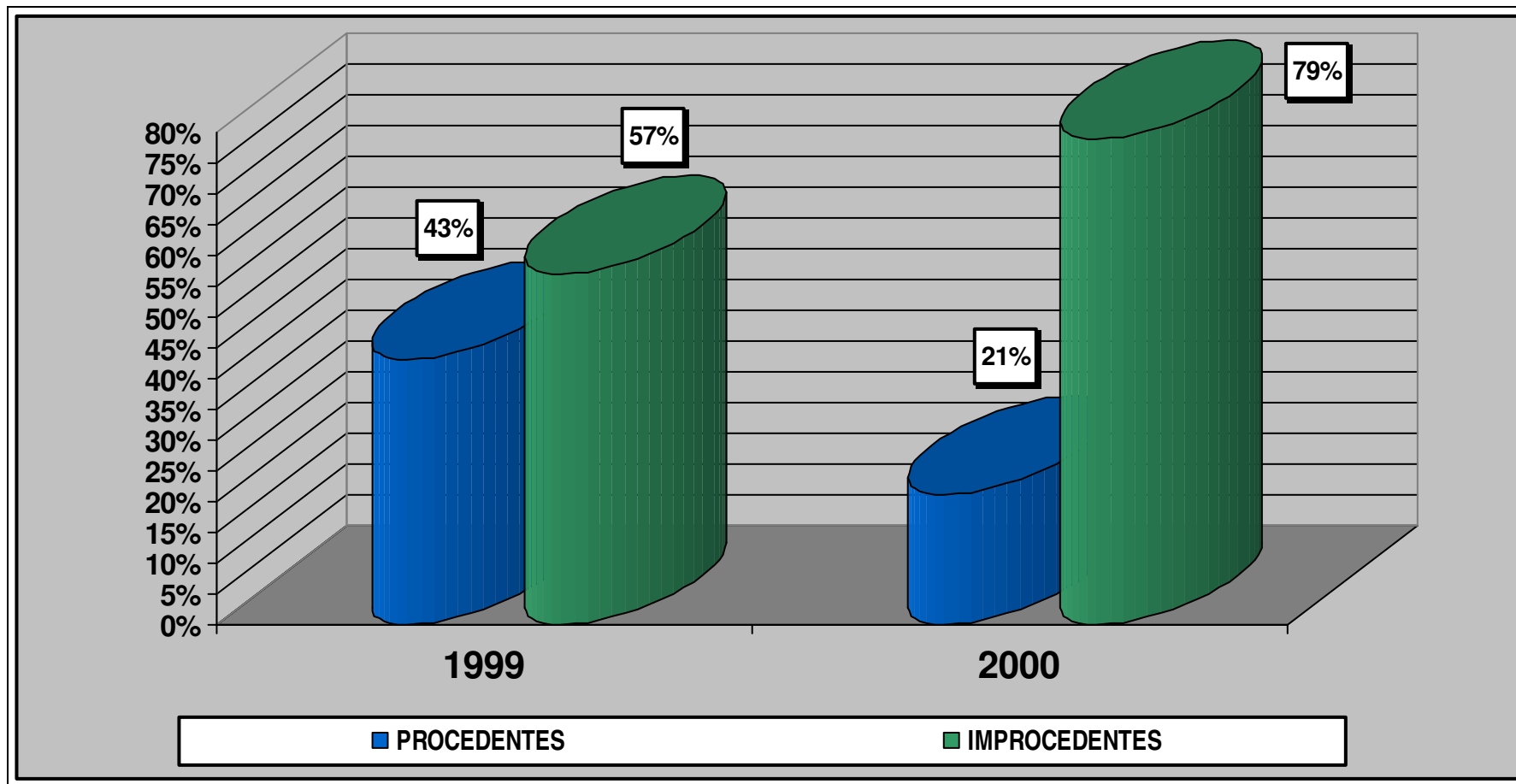
Gráfico 4





**CUADRO COMPARATIVO DE LAS CASACIONES PROCEDENTES E IMPROCEDENTES DE LOS AÑOS 1999-2000**

**Gráfico 5**



### **2.1.1. Resoluciones Improcedentes.**

Estas resoluciones fueron analizadas en tres aspectos que dieron lugar a la tercera, cuarta y quinta categorización.

#### **2.1.1.1. Por Distritos judiciales.**

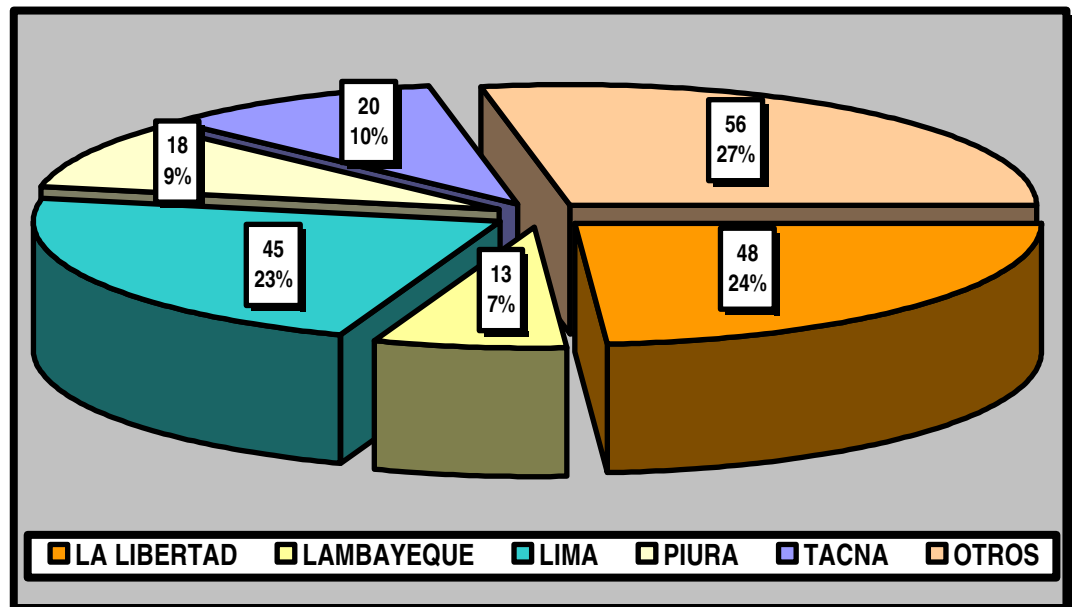
Se consideraron para este estudio los 10 distritos judiciales en las cuales se presentaron los recursos de Casación y que constan en el cuadro sistemático; se describieron en las estadísticas como ítems de los cuatro más numerosos y los demás fueron agrupados en el ítem de otros.

En el año 1999, los distritos judiciales en las cuales se presentaron más recursos de casación fueron las de La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tacna que, porcentualmente, alcanzaron un 73% y los demás distritos formaron el 27% restante; pero los distritos más resaltantes fueron el distrito Judicial de La Libertad con un 24% y la de Lima con un 23%; estos datos se encuentran reflejados en el **gráfico 6.**

De la misma manera, los recursos de casación que más fueron presentados en el año 2000 figuran en los distritos judiciales de el Callao, La Libertad, Lima y Moquegua que porcentualmente alcanzaron un 65% y los demás distritos formaron el 37% restante; los distritos más resaltantes fueron el distrito Judicial de La Libertad con un 23% y el de Lima con un 27%; la misma que se incrementó con un 4% en relación al año 1999; estos datos se encuentran reflejados en los **gráficos 7.**

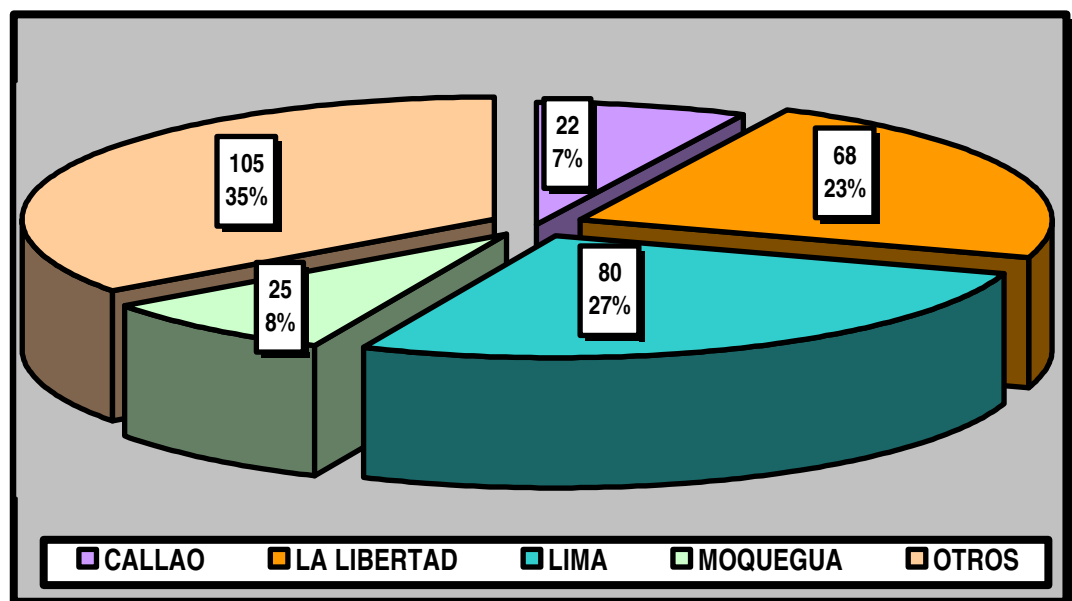
**CASACIONES IMPROCEDENTES DEL AÑO 1999  
(200)**

**POR DISTRITO JUDICIAL  
(Gráfico 6)**



**CASACIONES IMPROCEDENTES DEL AÑO 2000  
(300)**

**POR DISTRITO JUDICIAL  
(Gráfico 7)**



#### **2.1.1.2. Por Pretensiones.**

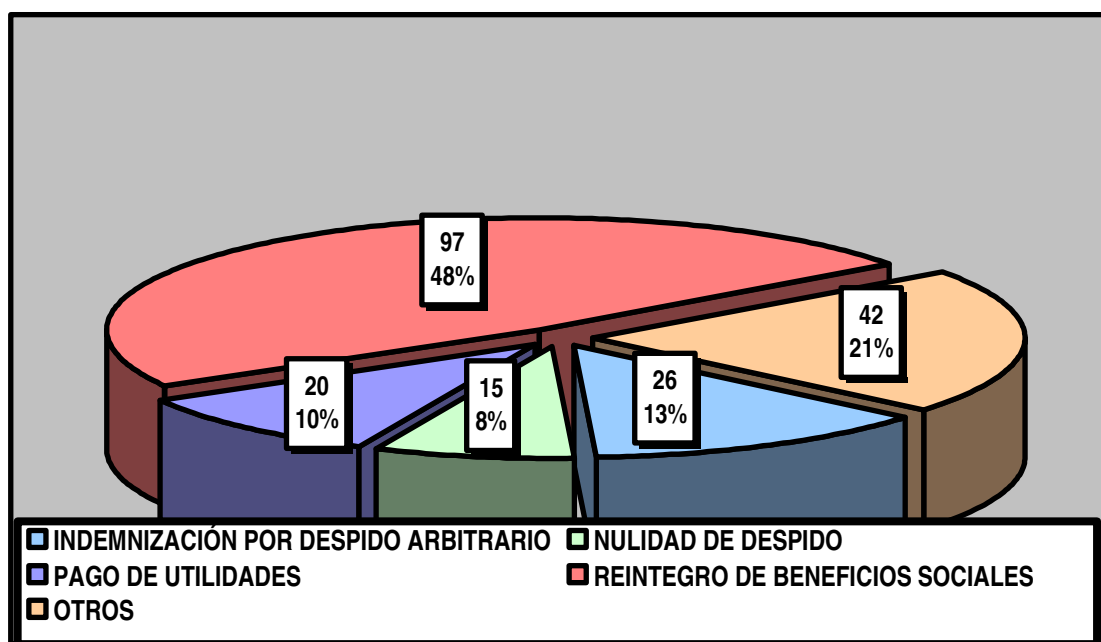
En cuanto a esta categoría se tomaron en consideración todas aquellas que dieran lugar al recurso de Casación y que la Salas Superiores de los distintos distritos judiciales consideraron que se encuentran dentro de la competencia de la Sala Suprema Constitucional y Social para emisión de su dictamen definitorio como última instancia.

De igual forma que en el caso anterior, se consideraron para efectuar los cuadros estadísticos a los cuatro más numerosos y los demás fueron agrupados en el ítem de otros. El **gráfico 8** señala que las pretensiones que dieron lugar a la presentación de este recurso en el año 1999 fueron, en los casos de indemnización, por despido arbitrario, nulidad de despido, pago de utilidades y reintegro de beneficios sociales; ellos agrupan un 79% y los otros alcanza el 21% sobrante; la más resaltante en esta categoría son los casos de indemnización de beneficios sociales que alcanza un alarmante 48%.

En el año 2000 se presentan, nuevamente, entre las pretensiones más requeridas, las de indemnización por despido arbitrario, nulidad de despido y el reintegro de beneficios sociales; todas ellas forman el 67% y las otras pretensiones alcanzan el 33%. Estos datos se encuentran respaldados en el **gráfico 9**. En el caso de reintegro de beneficios sociales, asciende un 5% a comparación del año anterior.

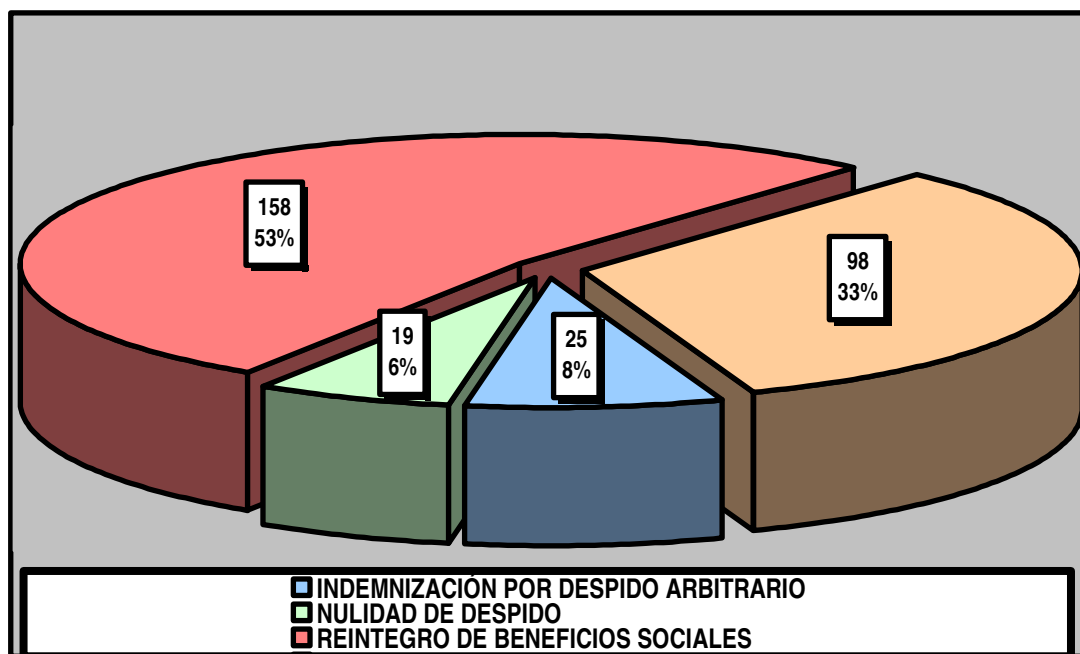
#### **CASACIONES IMPROCEDENTES DEL AÑO 1999 (200)**

**POR PRETENSIONES**  
(Gráfico 8)



**CASACIONES IMPROCEDENTES DEL AÑO 2000**  
(300)

**POR PRETENSIONES**  
(Gráfico 9)



### 2.1.1.3. Por Causales.

La Ley Procesal de Trabajo establece causales para presentar el recurso de casación, teniendo esto en consideración, se ha examinado la utilización de cada uno de éstas por los abogados al plantear sus recursos y si se rigen a lo señalado por la ley laboral o, en caso contrario, cuando éstos no se acogen a estos requisitos.

Es menester señalar que la Ley Procesal de Trabajo utilizada para el planteamiento de estos recursos, en su gran mayoría, fue la Ley 26636, la misma que fue derogada el 23 de diciembre de 1998 por la Ley 27021; por lo tanto, para el estudio de esta categoría se ha considerado tanto las causales planteadas por la Ley 26636 como por la Ley 27021; estas causales son: violación a la ley, interpretación errónea de la ley, incorrecta aplicación de la ley, contradicción jurisprudencial, aplicación indebida de la norma e interpretación de la norma.

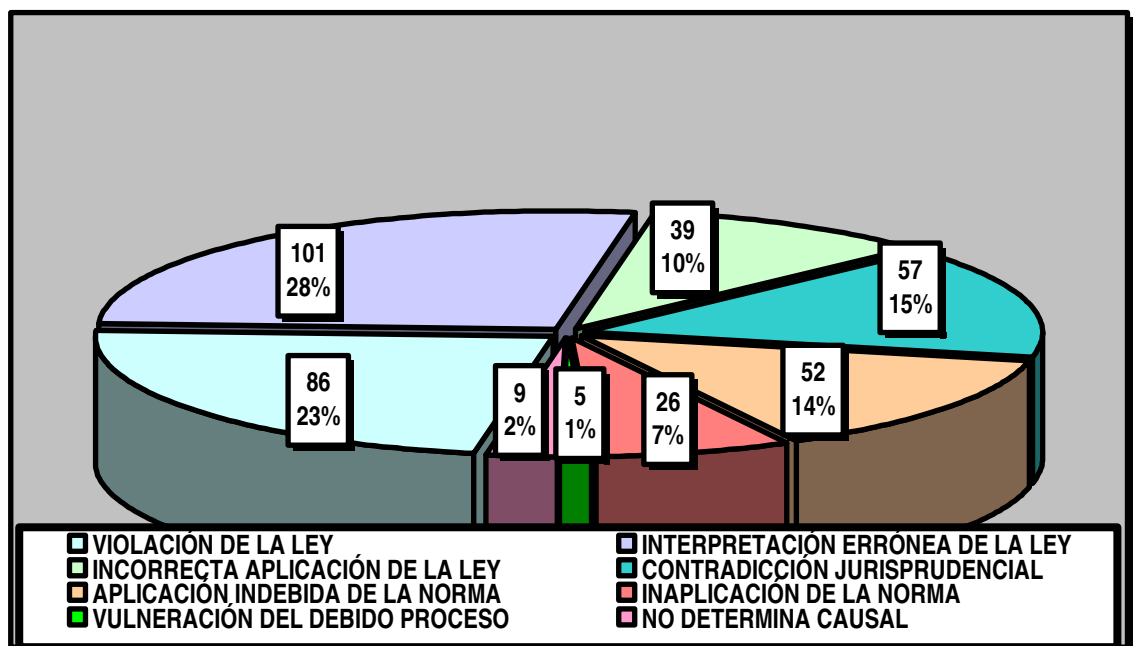
A estas seis (06) causales, además, se les ha agregado otros dos ítems: vulneración al debido proceso y el de no determinación de causal; ambas en respuesta de que fueron halladas en la muestra, que es materia de análisis de esta tesis.

Teniendo en consideración lo anteriormente explicado, se ha determinado a través del **gráfico 10** que las causales más usados en el año 1999 fueron la de interpretación errónea de la ley con un 28% y violación de la ley con un 23%; ambas forman así el 51% de esta categoría y en contradicción a estas dos causales los ítems de vulneración del debido proceso y no determinación de causal que presentan un 1% y 2%, respectivamente, del total.

En el año 2000, se presentan varios cambios notorios respecto a esta categoría; el **gráfico 11** nos señala que las causales de vulneración a la ley e incorrecta aplicación de la ley descienden alarmantemente; en el primer caso en un 16% y en el segundo, de manera radical, a 0%; ello porque entra en vigencia la ley 27021.

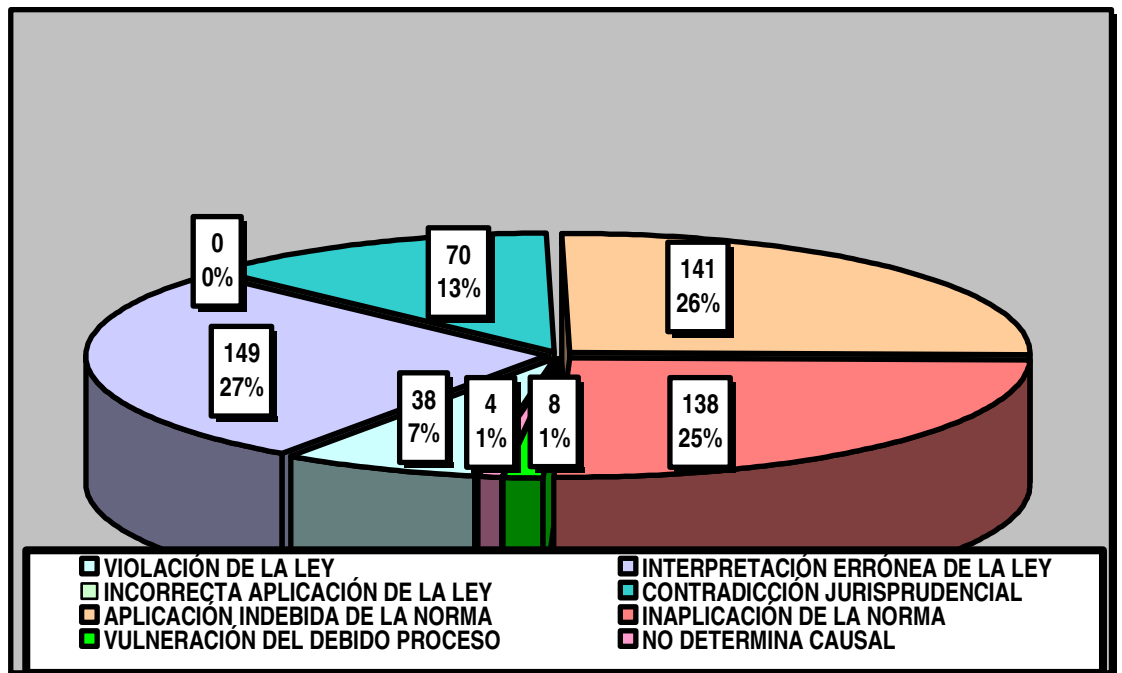
**CASACIONES IMPROCEDENTES DEL AÑO 1999  
(375)**

**POR CAUSALES  
(Gráfico 10)**



**CASACIONES IMPROCEDENTES DEL AÑO 2000  
(548)**

**POR CAUSALES  
(Gráfico 11)**



Por otro lado, las causales de aplicación indebida de la norma e inaplicación de la norma ascienden, estrepitosamente: la primera muestra un crecimiento de 11% y la segunda en un muy resaltante 18%. Las demás causales tienen una variación mínima de 1% en comparación al año anterior.

De lo expuesto, se puede concluir que en ambos años las causales para interponer recurso de casación fueron consideradas por los abogados, mas su utilización no fue ejecutada correctamente por cuanto el fallo de improcedencia responde a que no se ha cumplido con los requisitos de fondo establecidos en la Ley Procesal de Trabajo.

#### 2.1.1.4. Cuadros Comparativos de los años 1999 y 2000.

Los **gráficos 12 y 13** señalan que en los años 1999 y 2000 en cuanto a resoluciones improcedentes se refiere, se encuentra la presencia común en los distritos judiciales de Ica, Santa y Lima, que en los dos años no han tenido mayor diferencia, la misma que varía entre 1% y 4% entre uno y otro año; en cuanto a los demás distritos judiciales, que se señala

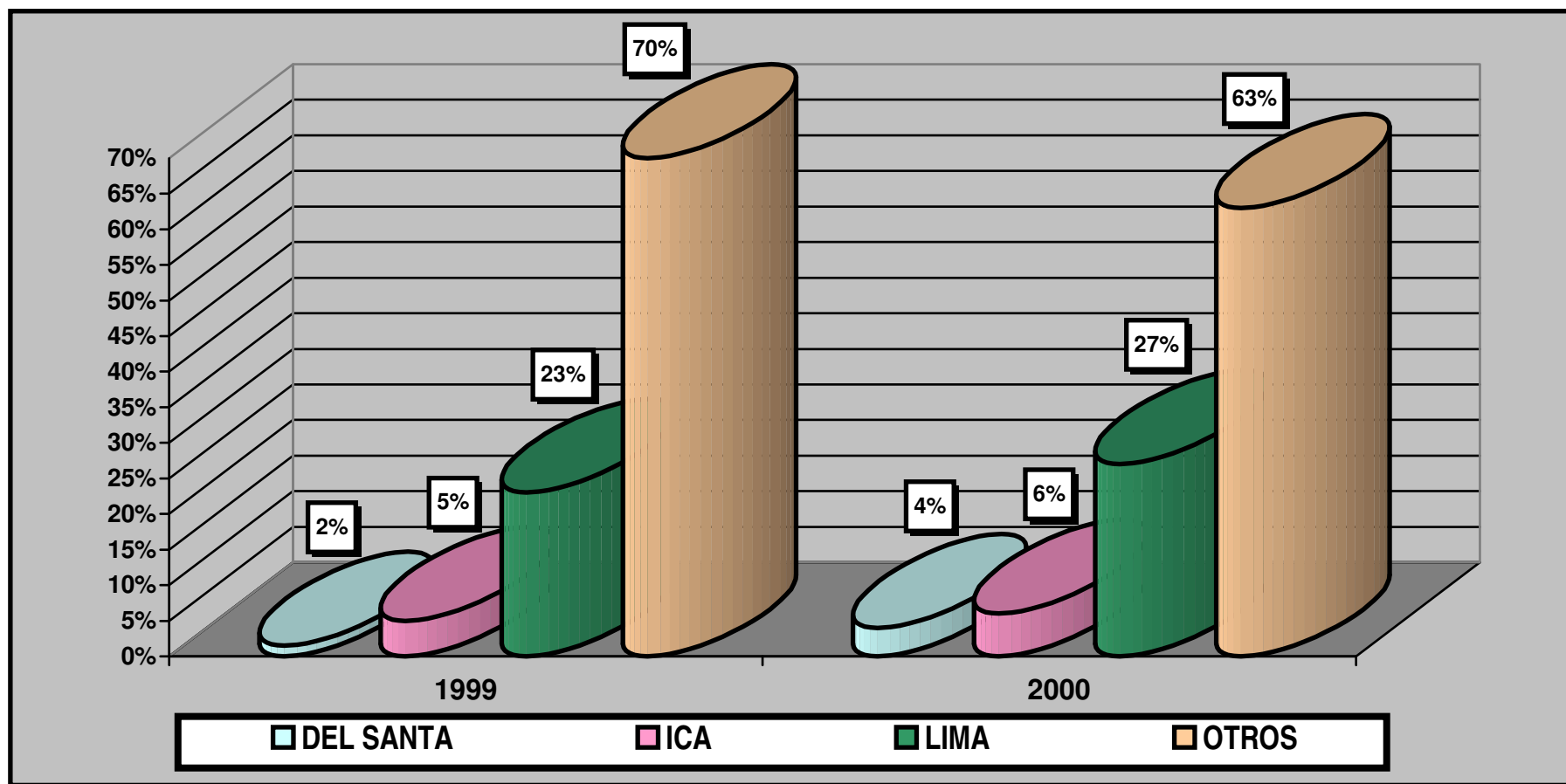


en el rubro de otros, se nota una variante decreciente, poco significativo de un 7%.

Referente a las pretensiones que se encuentran en los **gráficos 14 y 15**, se consideraron la indemnización por despido arbitrario, nulidad de despido y reintegro de beneficios sociales; entre las cuales resalta ésta última, porque se encuentra en grandes porcentajes en ambos años, en 1999 se presenta con un 48% y en 2000 con un 53%; sin embargo, en términos generales no existe mayor diferencia entre un año y otro porque los porcentajes fluctúan entre un 2% y un 5%, siendo la única creciente la de indemnización por despido arbitrario y las demás son decrecientes.

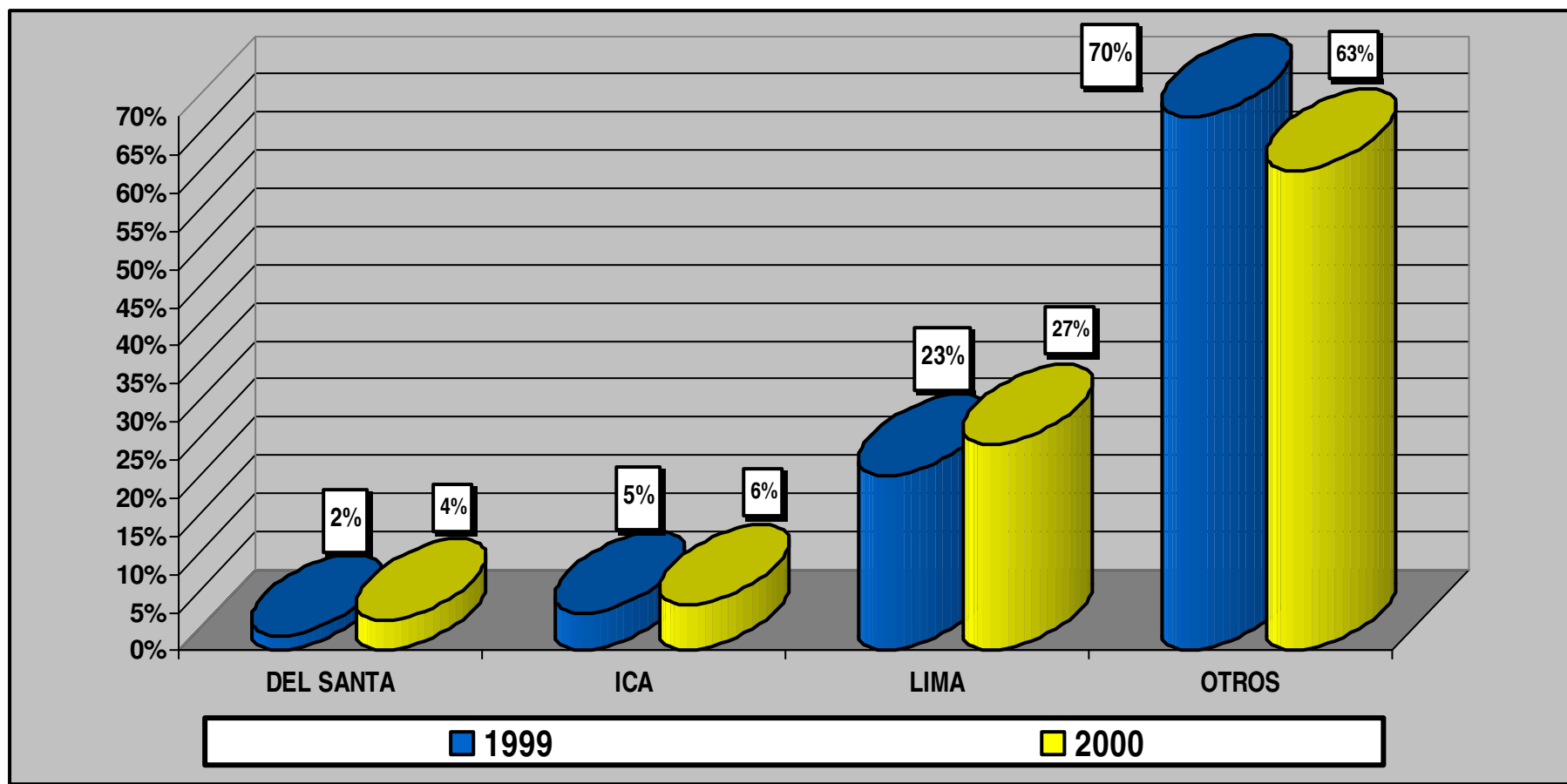
## DISTRITOS JUDICIALES POR AÑOS EN CASACIONES IMPROCEDENTES

Gráfico 12



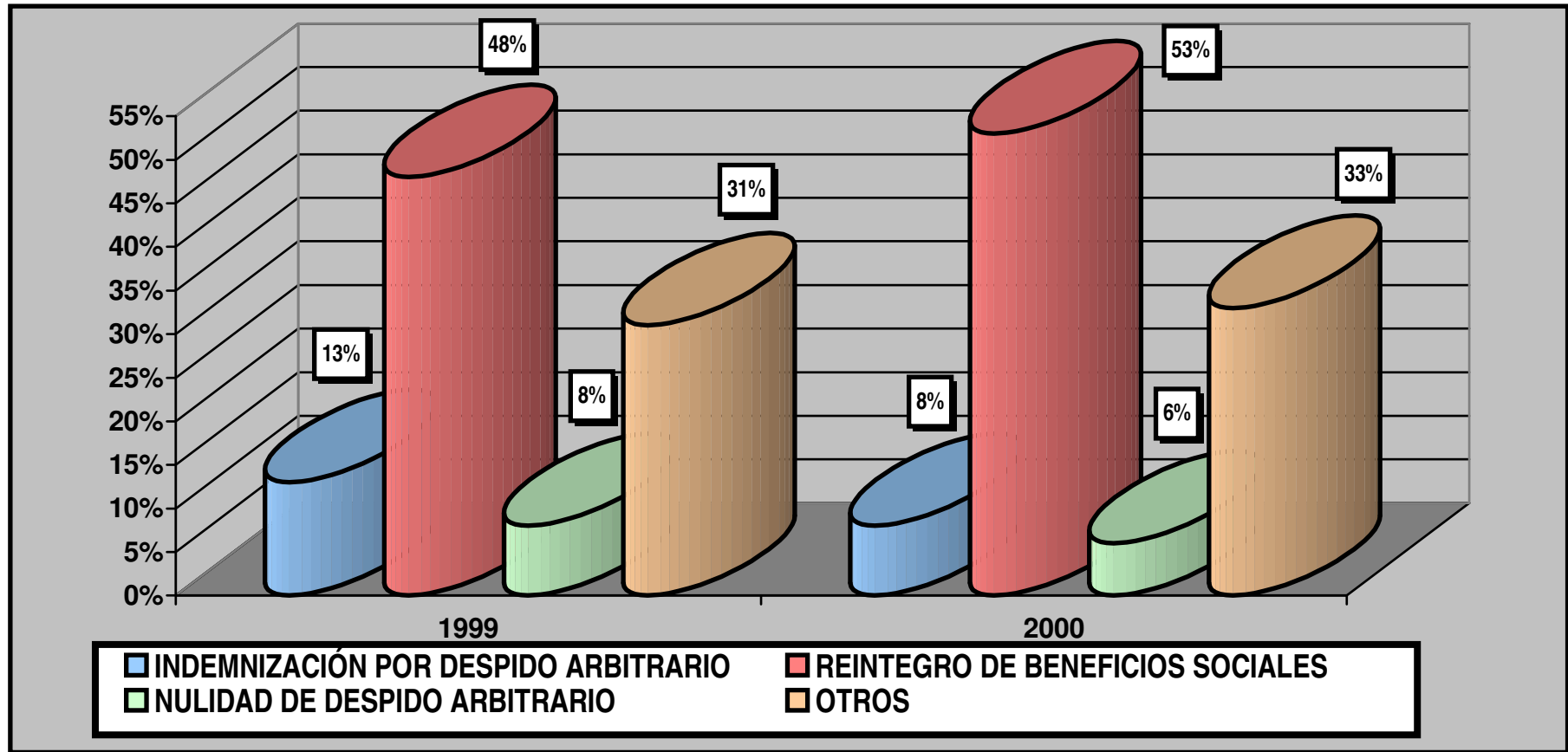
## DISTRITOS JUDICIALES POR AÑOS EN CASACIONES IMPROCEDENTES

Gráfico 13



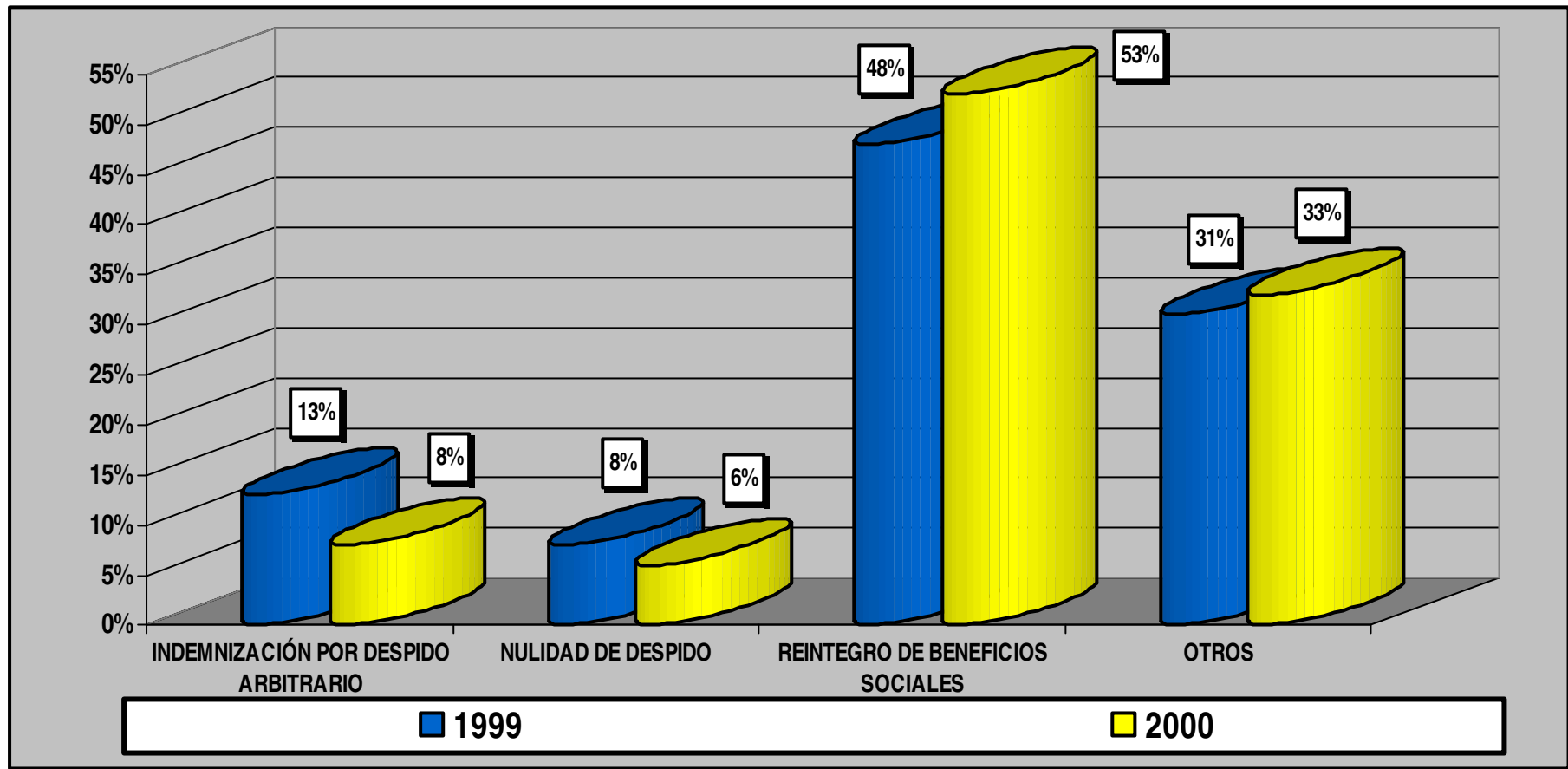
## PRETENSIONES POR AÑOS EN CASACIONES IMPROCEDENTES

Gráfico 14



## PRETENSIONES POR AÑOS EN CASACIONES IMPROCEDENTES

Gráfico 15



Finalmente, en los **gráficos 16 y 17** se encuentran plasmados los cuadros comparativos por causales; en ellas se visualiza, de manera clara, cómo las causales de violación de la ley e incorrecta aplicación de la ley, que fueron derogados por la ley 27021 y que tenían un porcentaje considerable en el año 1999, en el año 2000 decaen de manera notable: la primera desciende un 16% y la causal de incorrecta aplicación de la ley que en el año 1999 contaba con un 10%, en el año 2000 presenta un 0%; es decir, ya no es usada por los abogados al momento de plantear sus recursos.

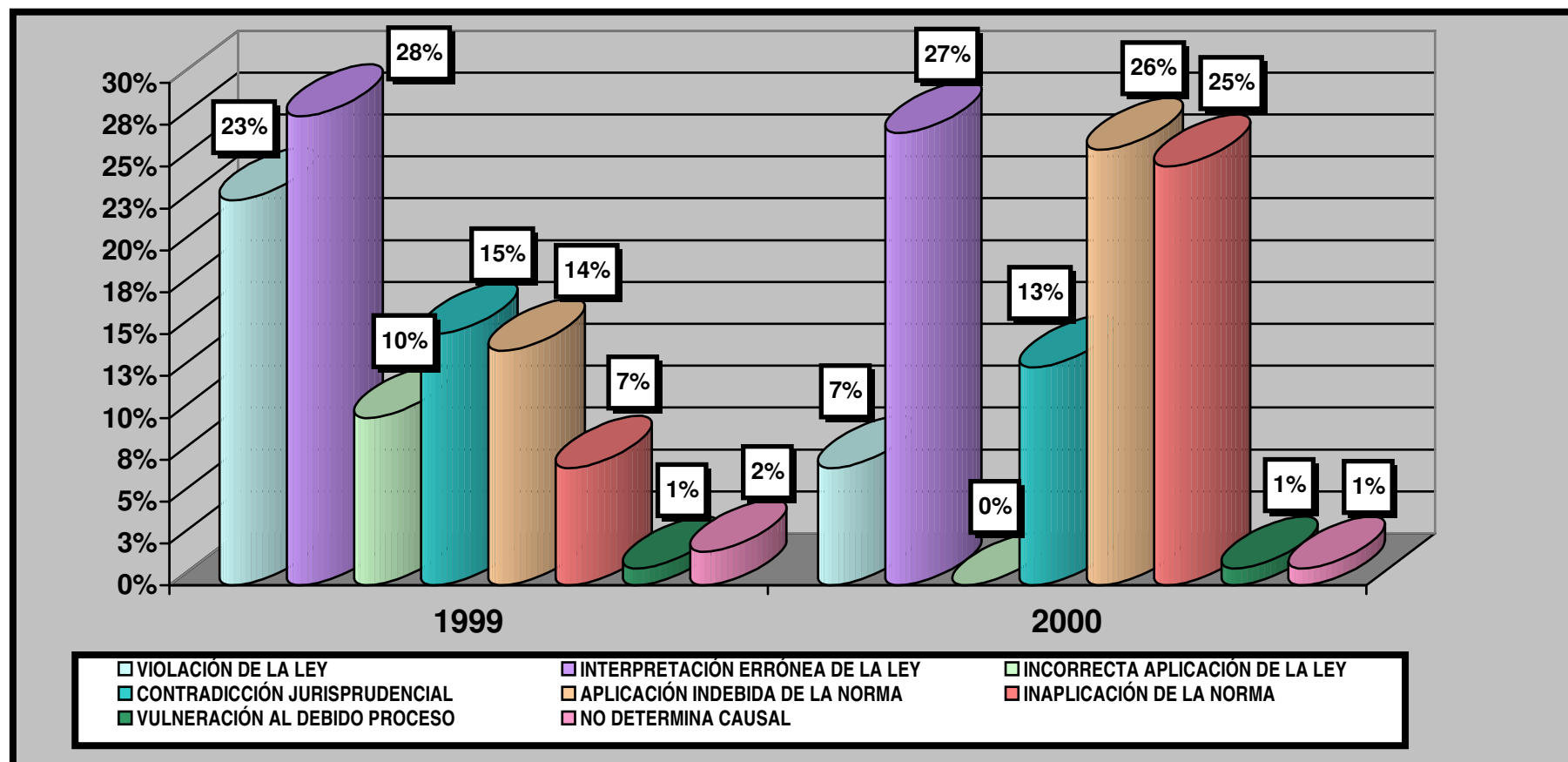
Caso contrario, se presenta en las causales de aplicación indebida de la norma e inaplicación de la norma, que tienen un crecimiento porcentual muy alto, en el primer caso crece un 12% y en el segundo, 18% entre un año y otro.

Los demás ítems no presentan mayores diferencias, es decir, fluctúan entre un 1% a 2%. Además, en ambos años, la causal más usada es la de la interpretación de la ley en 1999 es de 28% y de 27% en el año 2000.



## CAUSALES POR AÑOS EN CASACIONES IMPROCEDENTES

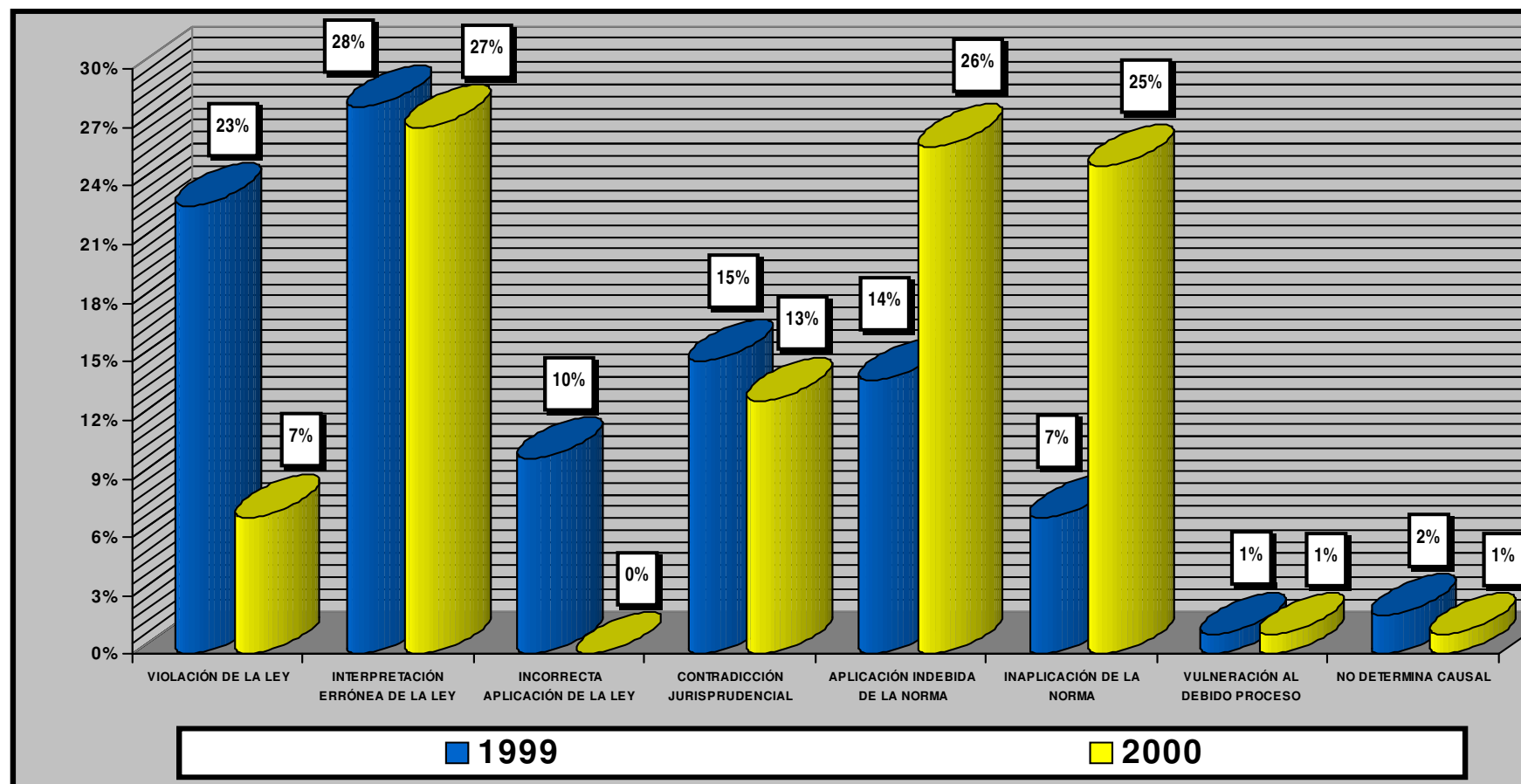
Gráfico 16





## CAUSALES POR AÑOS EN CASACIONES IMPROCEDENTES

Gráfico 17



### 2.1.2. Resoluciones Procedentes

Estas resoluciones son aquellas que fueron analizadas por la Sala Suprema Constitucional y Social, y consideradas aptas para emitir un dictamen en cuanto al fondo de la petición solicitada en el recurso de casación. De acuerdo a lo evaluado, la Sala puede declarar infundado o fundado el recurso; por ende, en base a esta declaración, se efectuará el análisis estadístico, siguiendo las mismas pautas utilizadas en el caso de las resoluciones improcedentes.

Previamente, del **gráfico 5** es menester recordar que en los años 1999 y 2000 las resoluciones procedentes son inferiores a las improcedentes, manifestándose, en el primer año, un 43% y en el segundo, decrece en un 22%, manifestando un 21% del total.

De manera como se organiza el análisis, se iniciará esta parte con el estudio de las resoluciones infundadas.

#### 2.1.2.1. Resoluciones Infundadas.

Estas resoluciones son aquellas que fueron desvirtuadas por la Sala Suprema luego de efectuar un análisis de fondo del recurso. Como en el caso anterior efectuaremos la interpretación estadística en relación a las categorías tercera, cuarta y quinta.

Los años que considero en esta parte son 1999 y 2000. En el primero, se presenta un 67% y en el segundo un 38%, existiendo, por ende, un descenso de 29%; de esta dato, se puede deducir que las sustentaciones efectuadas por los abogados en sus recursos fueron realizadas con mejor detenimiento y eficacia entre un año y otro.

Las afirmaciones que expongo en el párrafo anterior se encuentran sustentadas en los **gráficos 18, 19 y 20**.

### **CASACIONES PROCEDENTES (FUNDADAS E INFUNDADAS)**

EN LOS AÑOS 1999-2000

Gráfico 18

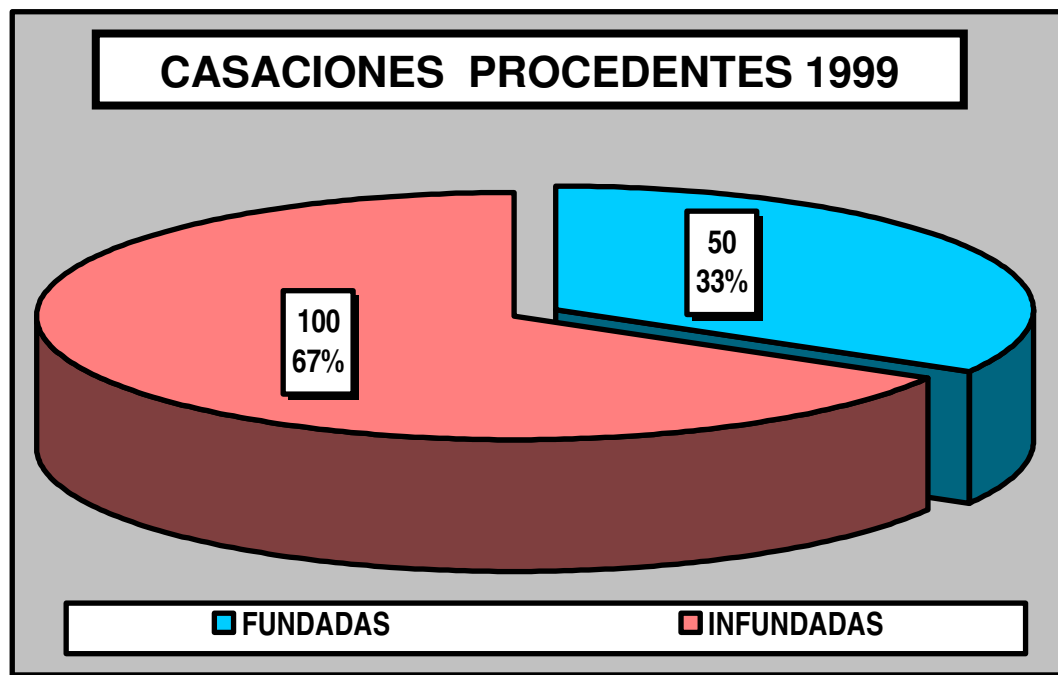
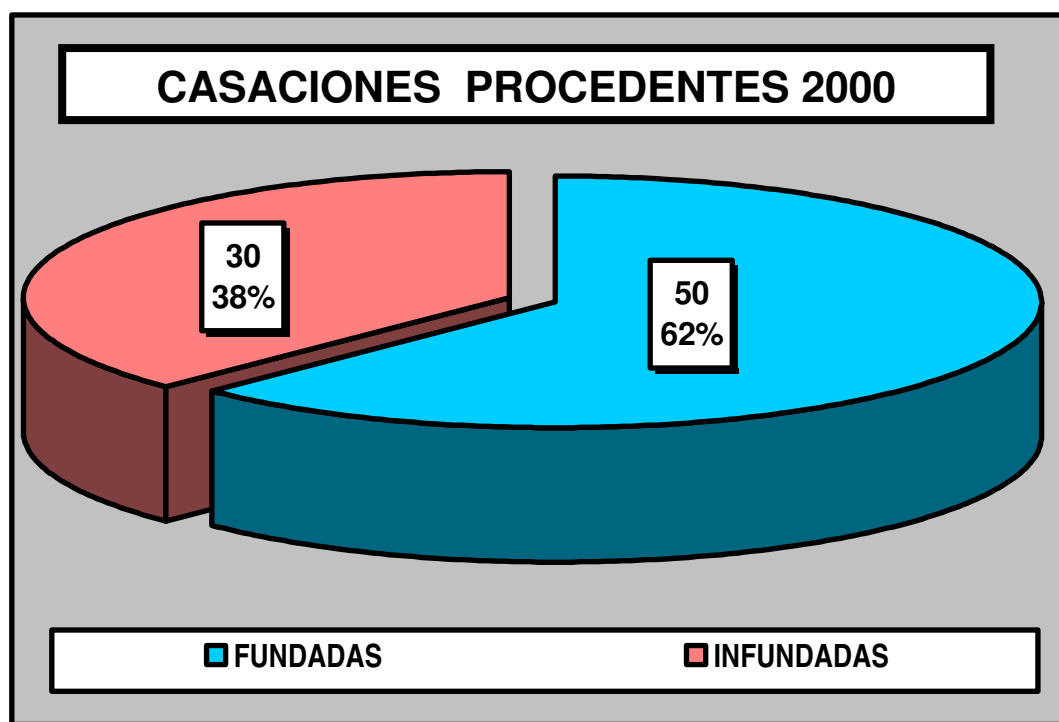
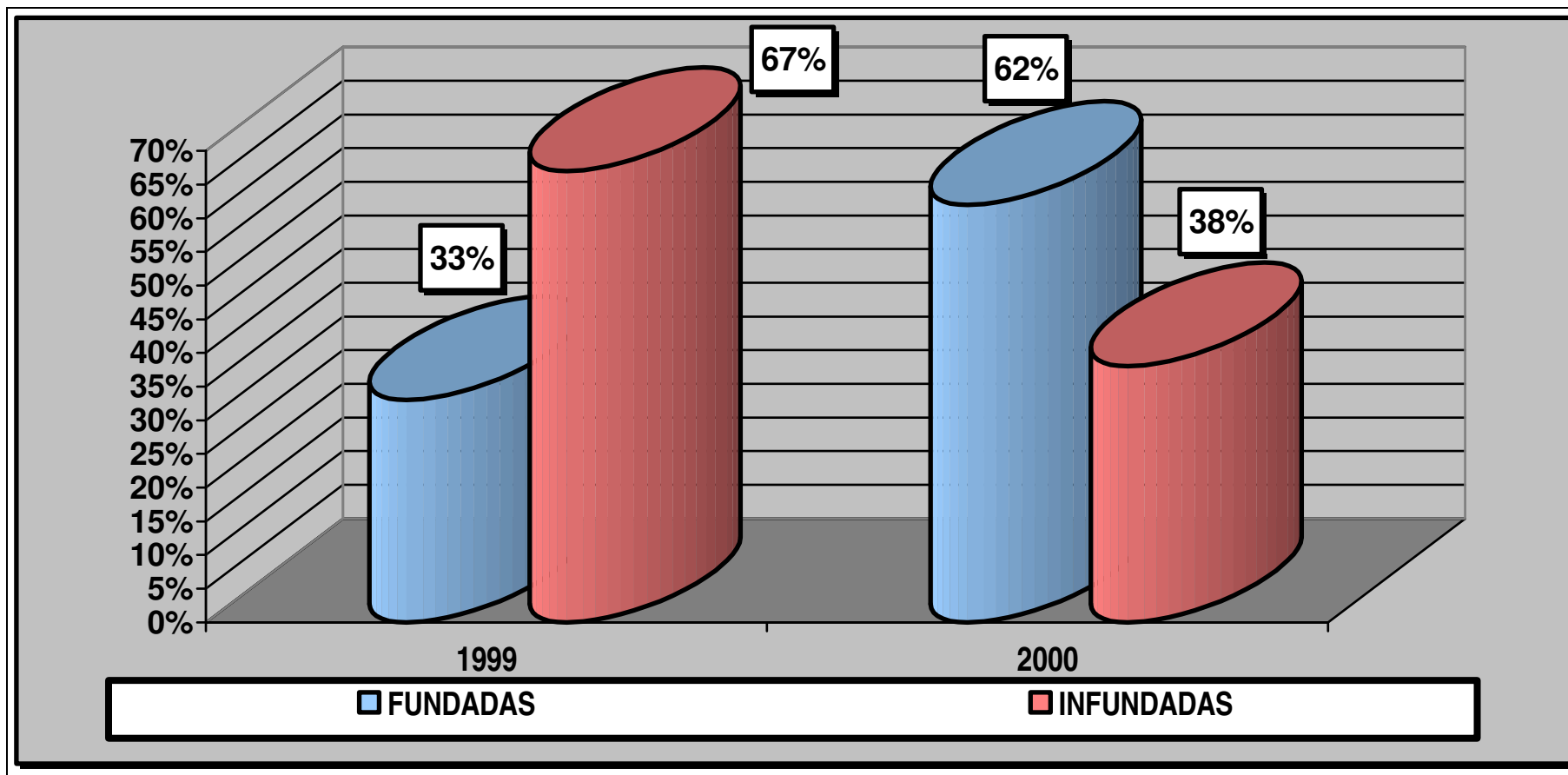


Gráfico 19



**CUADRO COMPARATIVO DE LAS CASACIONES PROCEDENTES (FUNDADAS E INFUNDADAS) EN LOS AÑOS 1999-2000**

Gráfico 20



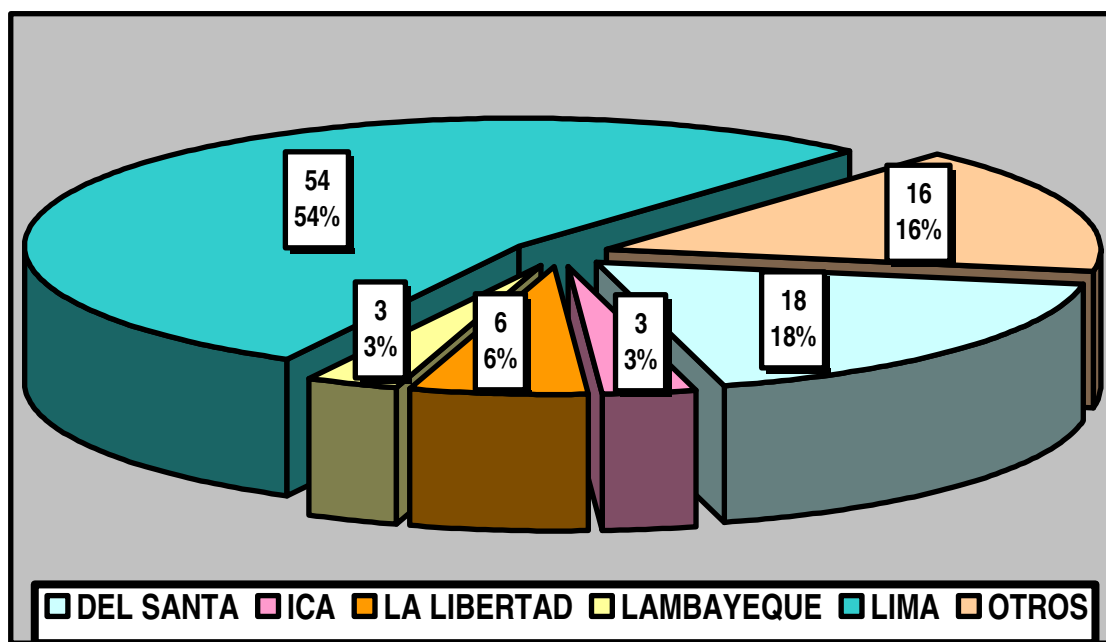
#### **2.1.2.1.1. Por Distritos judiciales.**

Los distritos judiciales considerados en el año 1999 en este tipo de resoluciones fueron Santa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y las demás fueron agrupadas en el ítem de las otras. Los ítems más destacados fueron, con el mayor porcentaje que se encontró en el distrito de Lima alcanzando un 54%; le sigue el distrito judicial Del Santa con un 18% y en el rubro de otros con un 16%. Estos datos se encuentran plasmados numérica y porcentualmente en el **gráfico 21**.

En el año 2000, las estadísticas sufren algunas variaciones: el distrito judicial Del Santa presenta un 10%, existiendo una figura decreciente de un 8% en relación al año anterior; de igual forma, el distrito judicial de Lima presenta un 44% del total, existiendo una baja de 10% en relación a 1999. De otra parte, de manera contraria, los distritos judiciales de Ica crece en un 10%, llegando en las estadísticas en un 13%. La Libertad también crece en un 4%; y el ítem de otros alcanza un 23% logrando un 5% más que el año anterior. Esto se encuentra sustentado en el **gráfico 22**.

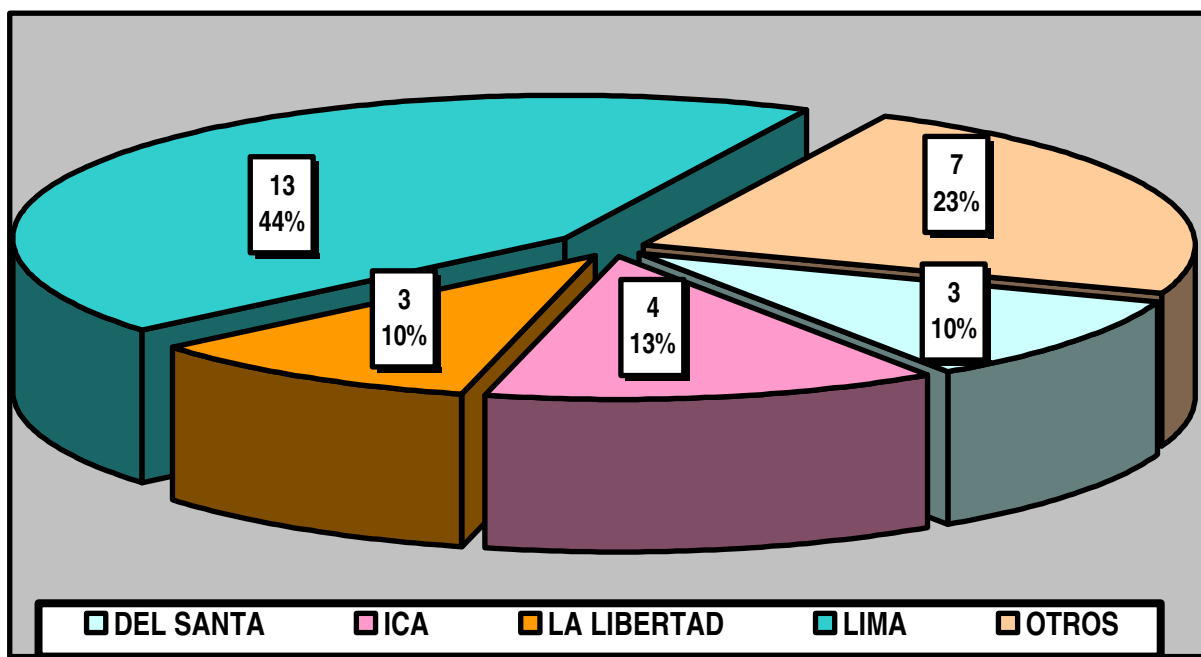
**CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 1999**  
**(100)**

**POR DISTRITO JUDICIAL**  
**(Gráfico 21)**



**CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 2000**  
**(30)**

**POR DISTRITO JUDICIAL**  
**(Gráfico 22)**



#### 2.1.2.1.2. Por Pretensiones.

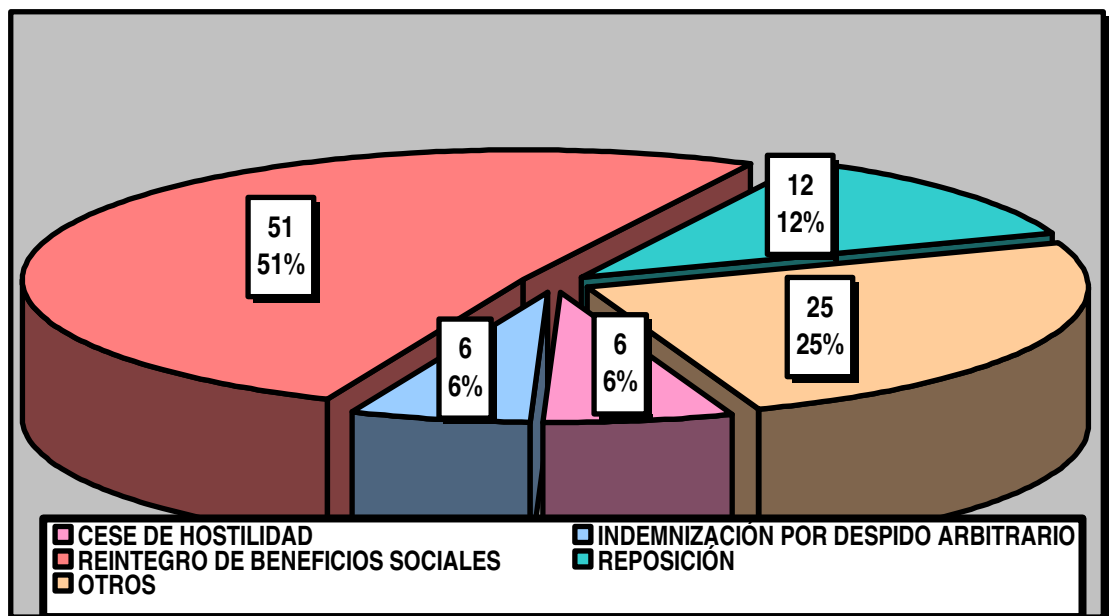
Siguiendo con nuestro análisis, las pretensiones consideradas en el año 1999, que se encuentran en el **gráfico 23** son: cese de hostilidad, indemnización por despido arbitrario, reintegro de beneficios sociales, reposición y el rubro de otros. La más alta numérica y, por ende, porcentualmente, fue el reintegro de beneficios sociales que alcanza un 51% del total, al que sigue el rubro de otros con un 25% y los demás, fluctúan entre un 6% y 12%.

El **gráfico 24** refleja los datos estadísticos del año 2000. En ellas se ha considerado las pretensiones de nulidad de despido, que alcanza un considerable 40% del total, pretensión, que en el año 1999 se encontraba en el rubro de otros por su menor

presencia; la otra pretensión considerada fue el reintegro de beneficios sociales que manifiesta una baja porcentual de 18% entre un año y otro; finalmente, el rubro de otros no manifiesta mayor variación por existir una diferencia entre ambos años de 2%.

**CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 1999**  
(100)

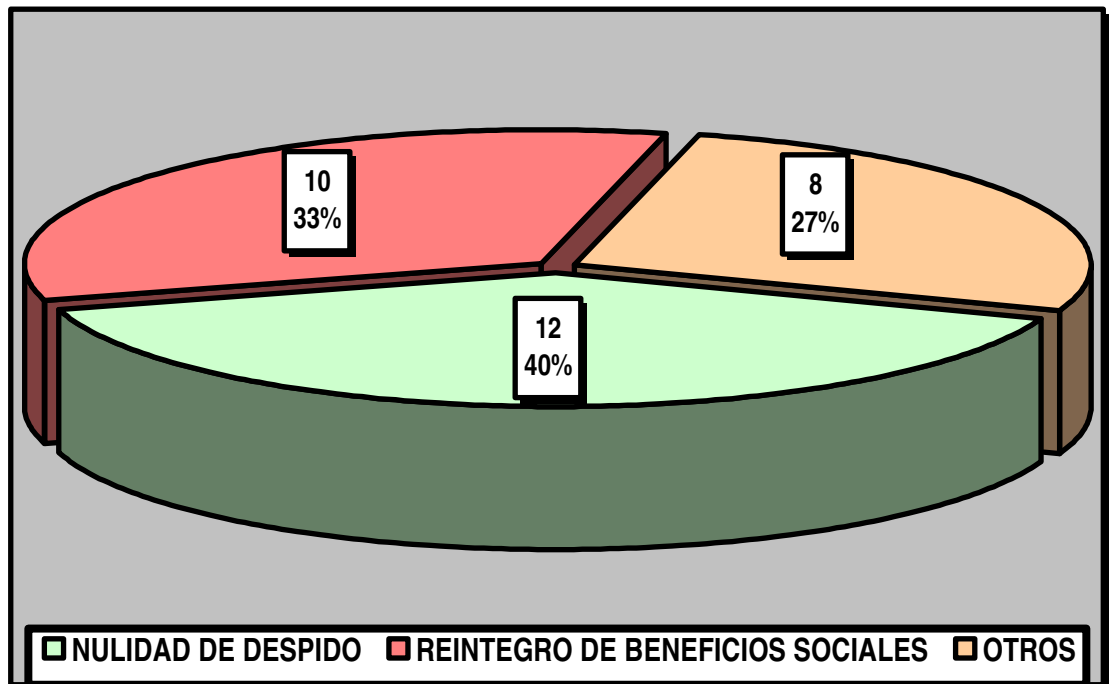
**POR PRETENSIONES**  
(Gráfico 23)



**CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 2000**  
(30)

**POR PRETENSIONES**  
(Gráfico 24)





#### 2.1.2.1.3. Por Causales.

Referente a esta categoría, existe una diferencia en el método de análisis, en relación a las resoluciones improcedentes; por cuanto además de las seis causales señaladas por ley, solamente se agregará el ítem de vulneración al debido proceso, porque lógicamente aquellos recursos que no determinaron causal ya fueron declarados improcedentes por no cumplir con este requisito de forma y no son materia de análisis de esta parte de la tesis.

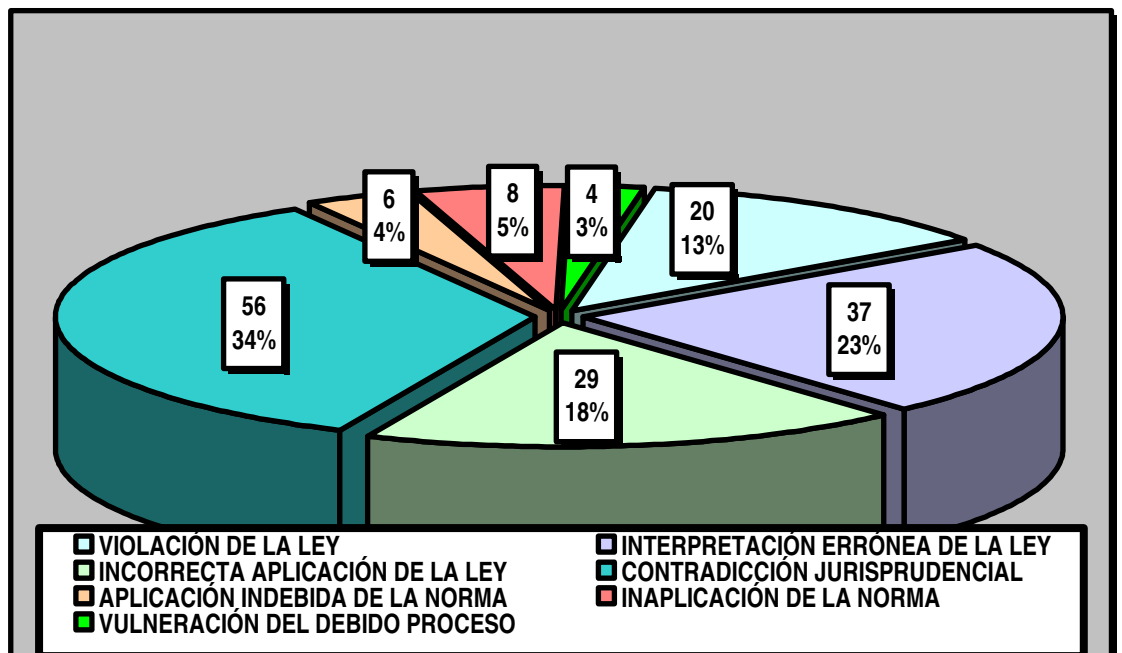
En relación a esta categoría, en el año 1999 los abogados utilizaron para presentar sus recursos de casación declaradas infundadas por la Sala Suprema; mayormente la causal de contradicción jurisprudencial que alcanza un 34%, el siguiente es el de interpretación errónea de la ley que tiene un 23%, incorrecta aplicación de la ley con un 18%; y, las demás causales y de vulneración al debido proceso

alcanzan entre un 13% y 3%; esto se encuentra sustentado en el **gráfico 25**.

En el año 2000, la causal de contradicción jurisprudencial sigue liderando con un 27%, existiendo una diferencia decreciente de un 7% en relación al año anterior. Las causales de violación de la ley también decrece en un 7% y la incorrecta aplicación de la ley en un 9%, las demás causales, incluyendo la vulneración al debido proceso van de crecida, es decir, la interpretación errónea de la ley crece en un 3%, aplicación indebida de la ley un sorprendente 11%, aplicación de la norma en un 7% y la vulneración al debido proceso un poco notorio 2%. Estos datos se encuentran detallados tanto en porcentajes como numéricamente en el **gráfico 26**.

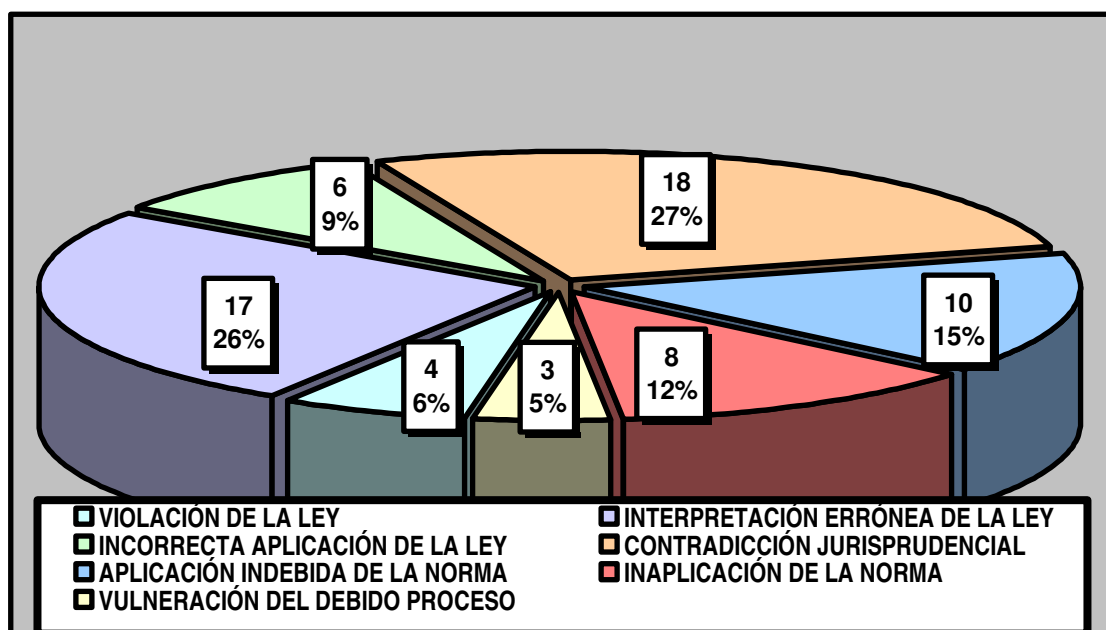
**CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 1999**  
(160)

**POR CAUSALES**  
(Gráfico 25)



**CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 2000**  
(66)

**POR CAUSALES**  
(Gráfico 26)



#### 2.1.2.2. Resoluciones Fundadas.

Estas resoluciones fueron aquellas que después de un análisis de fondo, efectuada por la Sala Suprema Constitucional y Social, que actúa en última instancia para observar los recursos de casación laboral; determinaron en respaldar lo solicitado por el recurrente en su pretensión.

Como datos generales, debo señalar que estas resoluciones representan el menor porcentaje dentro del total de las resoluciones emitidas por la Sala Suprema con respecto a los recursos de casación. Estas se irán incrementando año a año. Esta afirmación estará respaldada por los gráficos que se presentarán oportunamente y conforme se va desarrollando esta parte de la tesis.

De manera similar al estudio de las resoluciones improcedentes e infundadas, se efectuará el estudio de este tipo de resoluciones en base a la tercera, cuarta y quinta categoría detallada en la parte introductoria.

#### **2.1.2.2.1. Por Distritos judiciales.**

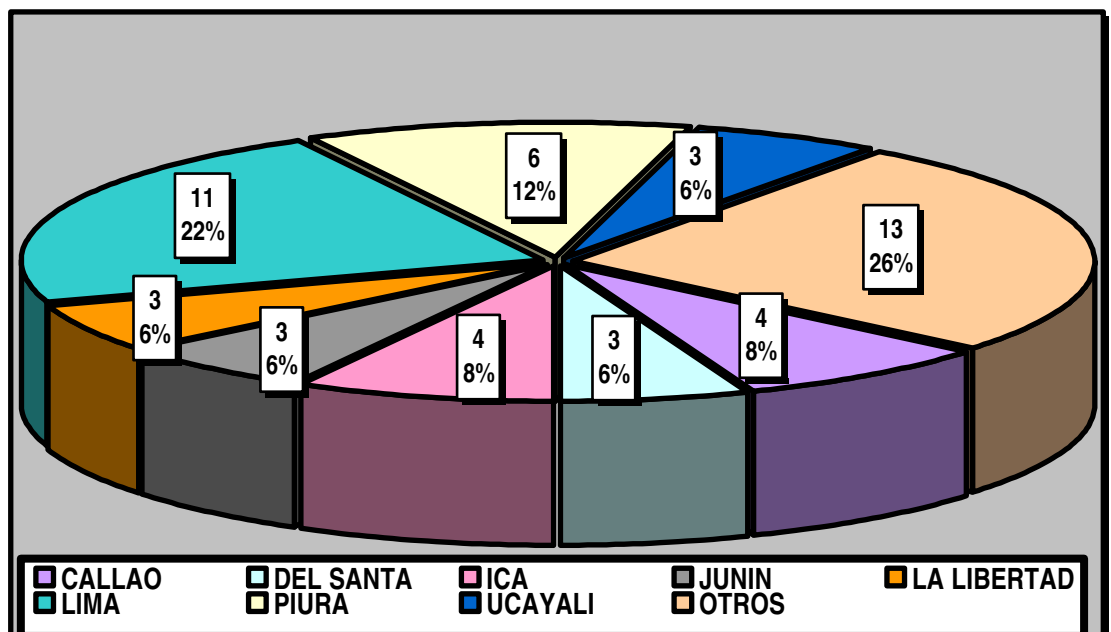
En el año 1999, como veremos en el **gráfico 27**, se presenta una extraña situación con respecto a la presentación de los recursos de casación en las Salas Superiores de los distintos distritos judiciales; los únicos que resaltan son los distritos de Lima que alcanza un 22% del total y el distrito judicial de Piura que muestra un 12%; los demás distritos judiciales tienen un 6% u 8%, entre ellos tenemos los distritos judiciales de Callao, Del Santa, Ica, Junín, La Libertad, Ucayali. El rubro de otros, que aglomera a los demás distritos judiciales no señalados expresamente alcanza un 26%, es decir un poco más de un cuarto del total. De estos datos, podemos señalar que a nivel nacional, los abogados interpretan, casi de la misma forma, las causales de interposición; las mismas que las relaciona con las pretensiones. La diferencia que existe en los distritos judiciales de Lima y Piura

responde probablemente por la mayor cantidad poblacional con que cuenta éstos.

En el año 2000, la mayoría de los distritos judiciales se hacen presente en igual porcentaje alcanzando un 6%; la única diferencia de esta unificación la establece el distrito judicial de Lima que tiene un 40% del total, incrementándose un 28% entre un año y otro. El ítem de otros, también, presenta un alza porcentual de 4% a diferencia del año anterior; estos alcances los podemos visualizar también en cifras en el **gráfico 28**.

**CASACIONES FUNDADAS DEL AÑO 1999  
(50)**

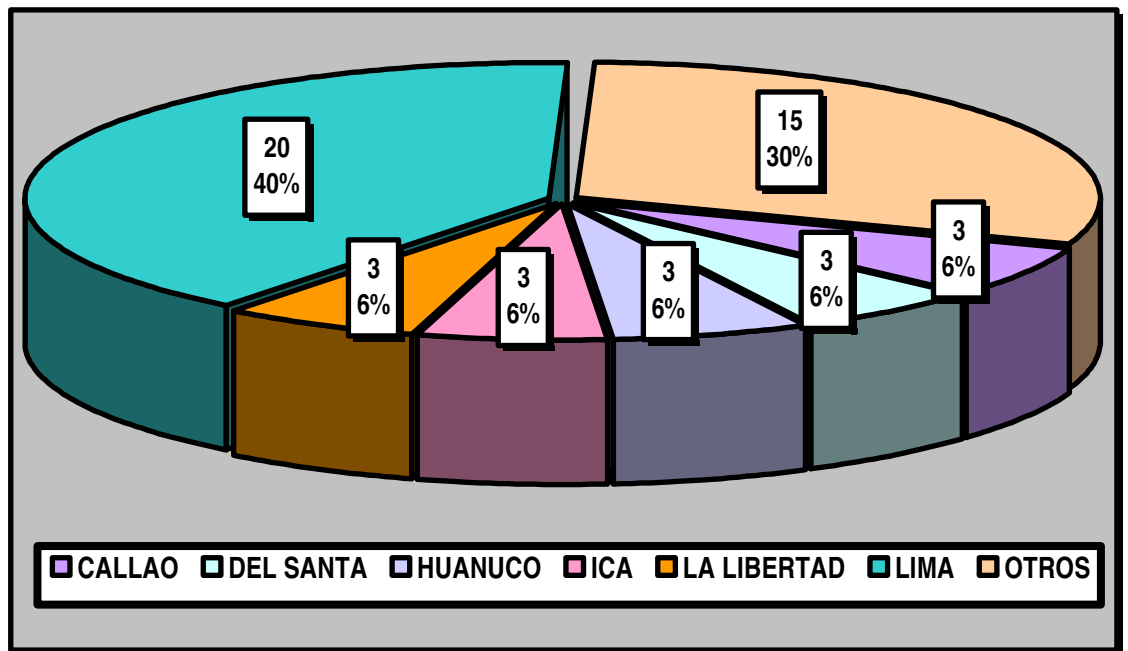
**POR DISTRITO JUDICIAL  
(Gráfico 27)**



**CASACIONES FUNDADAS DEL AÑO 2000  
(50)**

**POR DISTRITO JUDICIAL**

(Gráfico 28)



#### 2.1.2.2.2. Por Pretensiones.

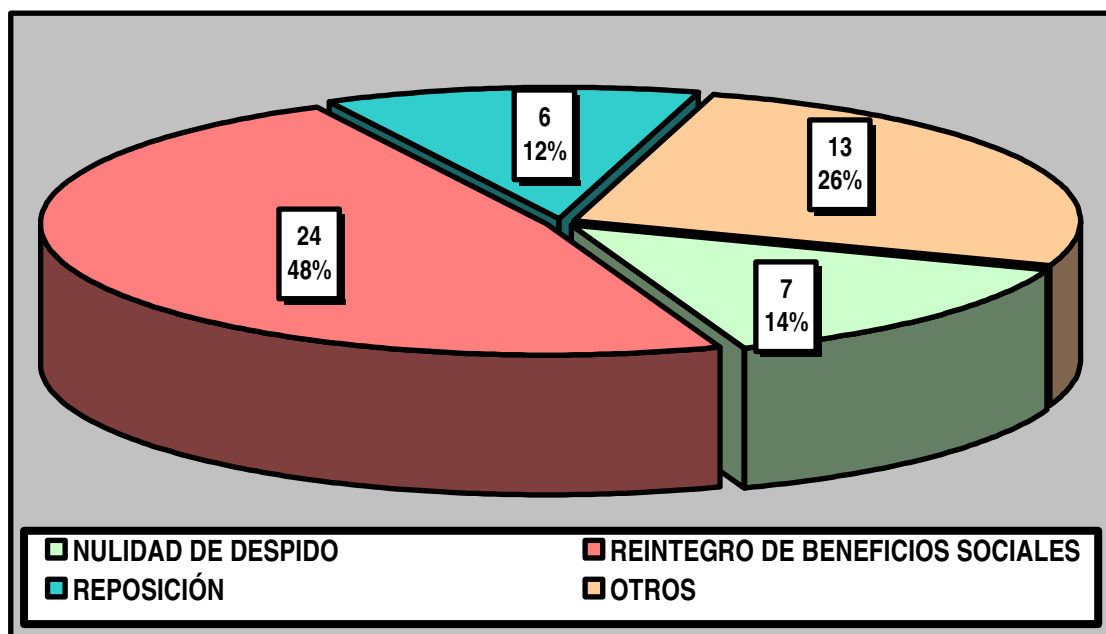
Las pretensiones halladas en nuestra muestra, y que fueron consideradas para efectuar las estadísticas en el año 1999, fueron nulidad de despido con un 14%, reintegro de beneficios sociales que alcanzó un 48%, reposición un 12% y los demás agrupados en el ítem de otros que establecieron un 26%. Estos porcentajes, con su equivalente en cifras, están plasmados en el **gráfico 29**.

En el año 2000, de conformidad al **gráfico 30**, se puede observar que se suma al estudio de esta categoría por su mayor presencia, la pretensión de indemnización por despido arbitrario mientras que la reposición es considerada en el rubro de otros. Los

porcentajes son como siguen: indemnización por despido arbitrario 20%, nulidad de despido con un 10%, manifestando un descenso de 4%; reintegro de beneficios sociales que, también, sufre un descenso de 12% en comparación del año anterior y el rubro de otros alcanza en este año un 34%, por ende, 8% más que año 1999.

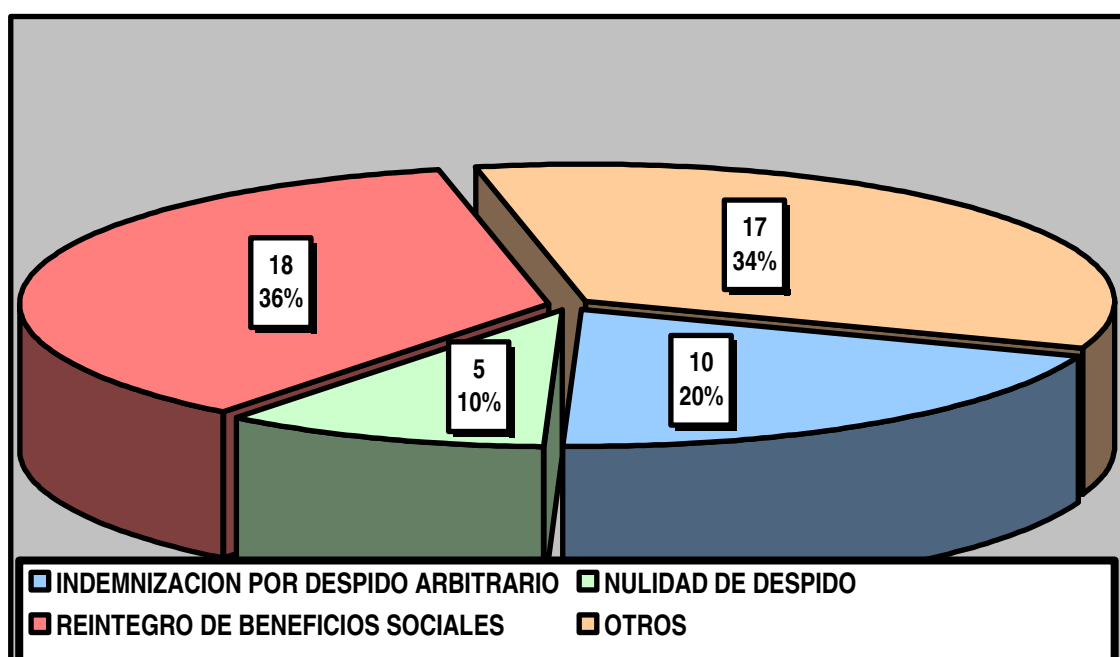
***CASACIONES FUNDADAS DEL AÑO 1999***  
**(50)**

**POR PRETENSIONES**  
**(Gráfico 29)**



**CASACIONES FUNDADAS DEL AÑO 2000**  
(50)

**POR PRETENSIONES**  
(Gráfico 30)



#### 2.1.2.2.3. Por Causales.

Referente a esta categoría en el año 1999, la causal más usada por los abogados fue la



contradicción jurisprudencial con un 33%, la que la sigue es interpretación errónea de la ley con un 25%. Las causales que fueron derogadas por la ley 27021 también se presentan con un considerable cifra porcentual, tal es así que la causal de violación de la ley alcanza un 20% e incorrecta aplicación de la ley un 17%; las demás causales incluyendo el ítem de vulneración al debido proceso tienen entre 1% y 3%. Esta información la podemos encontrar en el **gráfico 31.**

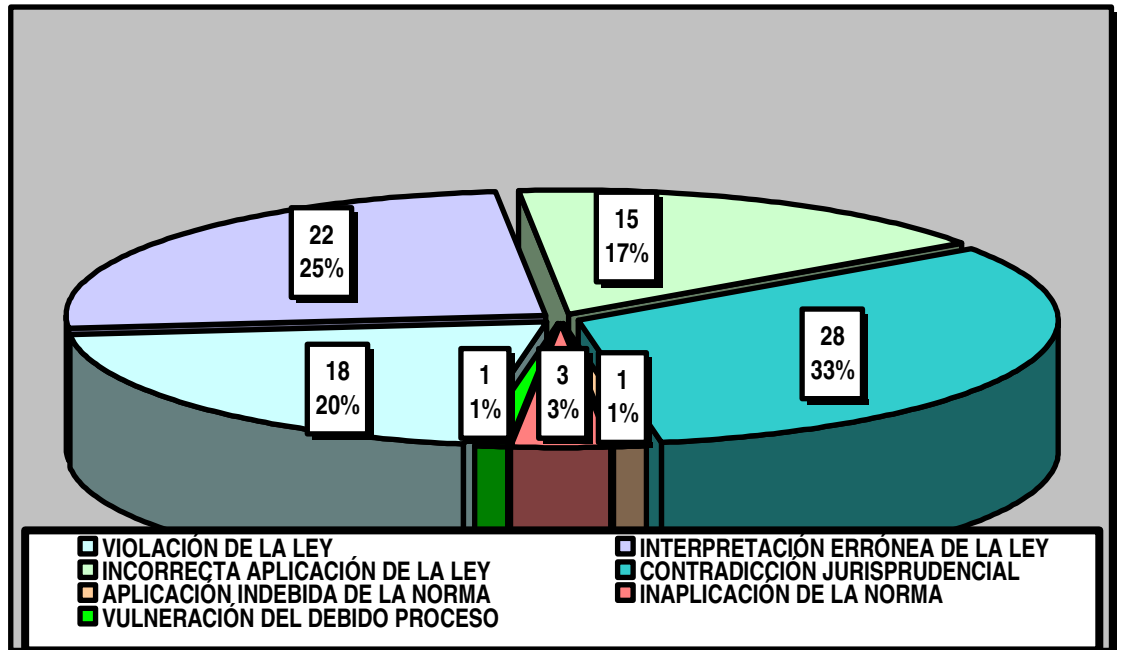
En el año 2000, de igual manera que en los demás casos de este tipo de análisis, las causales de violación de la ley e incorrecta aplicación de la ley sufren un descenso radical, tal es así que la primera se reduce a la mitad, es decir se presenta en un 10% mientras que la segunda causal disminuye en un 16% teniendo una presencia de solamente 1%; lo contrario sucede con las causales de aplicación indebida de la norma e inaplicación de la norma que crecen considerablemente; la primera en un 13% y la segunda en un 19%, haciéndose manifiesto con un 22% del total, mientras que en año 1999 solo tenía un 3%, siendo la causal más usada por los abogados al plantear este recurso. Finalmente las otras causales como interpretación errónea de la ley disminuye un 6% y contradicción jurisprudencial un 18%.

Es de resaltar que el ítem de vulneración al debido proceso, que no es causal para el recurso de casación laboral, es utilizado y más aún, aprobado por la Sala Suprema cada vez en mayor proporción incrementándose entre un año y otro en un sorprendente 18%. Estos datos se encuentran en el **gráfico 32.**

#### **CASACIONES FUNDADAS DEL AÑO 1999**

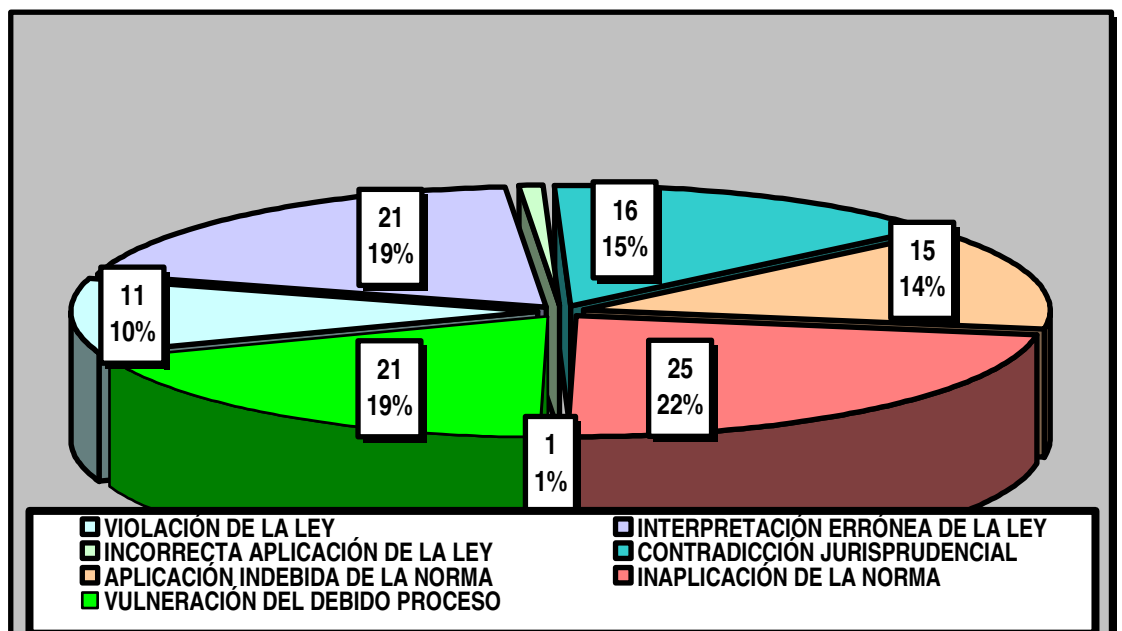
(88)

**POR CAUSALES**  
(Gráfico 31)



**CASACIONES FUNDADAS DEL AÑO 2000**  
(110)

**POR CAUSALES**  
(Gráfico 32)



### 3. RESOLUCIONES DE CASACIÓN DURANTE LOS AÑOS DE 2003 Y 2004.

#### 3.1. Procesamiento de datos.

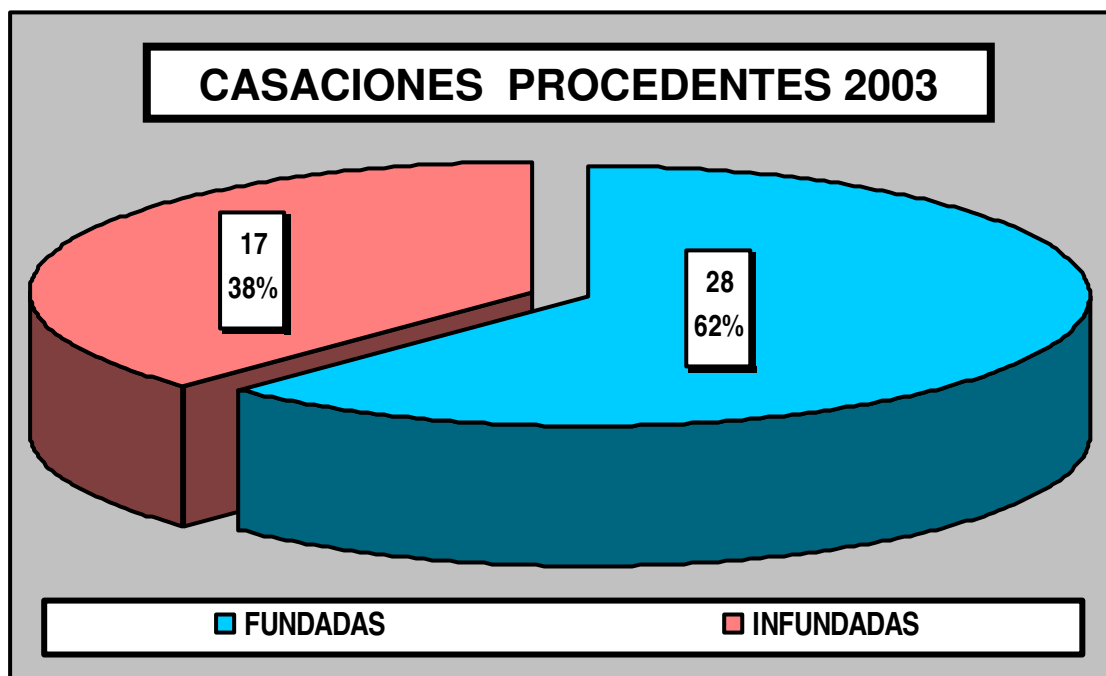
En estos años se ha visto conveniente analizar solamente las resoluciones procedentes, hallándose en el año 2003 un total de 45 resoluciones y en el año 2004 se contabilizó 62 resoluciones que equivalen el 100% de las mismas. Estas cifras corresponden a la muestra que dará lugar a las estadísticas que serán mostradas en cada categoría.

Los **gráficos 33 y 34** nos señalan de forma numérica y porcentual cómo en estos años la Sala Suprema de la Corte Constitucional y Social falló con respecto al análisis de fondo, declarándolos infundadas o fundadas según su criterio discrecional.

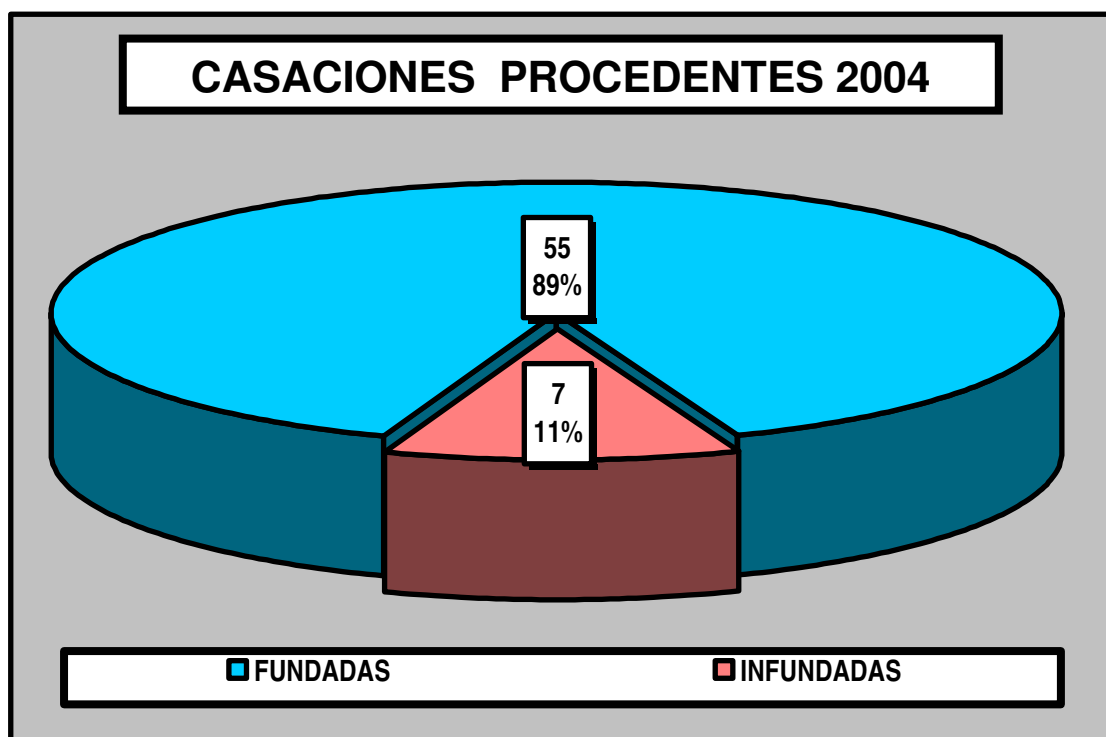
Las tortas nos señalan de manera clara que el porcentaje de resoluciones fundadas supera a las infundadas, la misma que creció en un 27% entre un año y otro, ello se puede visualizar con mayor claridad en el cuadro comparativo que se encuentra en el **gráfico 35**.

**CASACIONES PROCEDENTES (FUNDADAS E INFUNDADAS)**  
**EN LOS AÑOS 2003-2004**

**GRÁFICO 33**

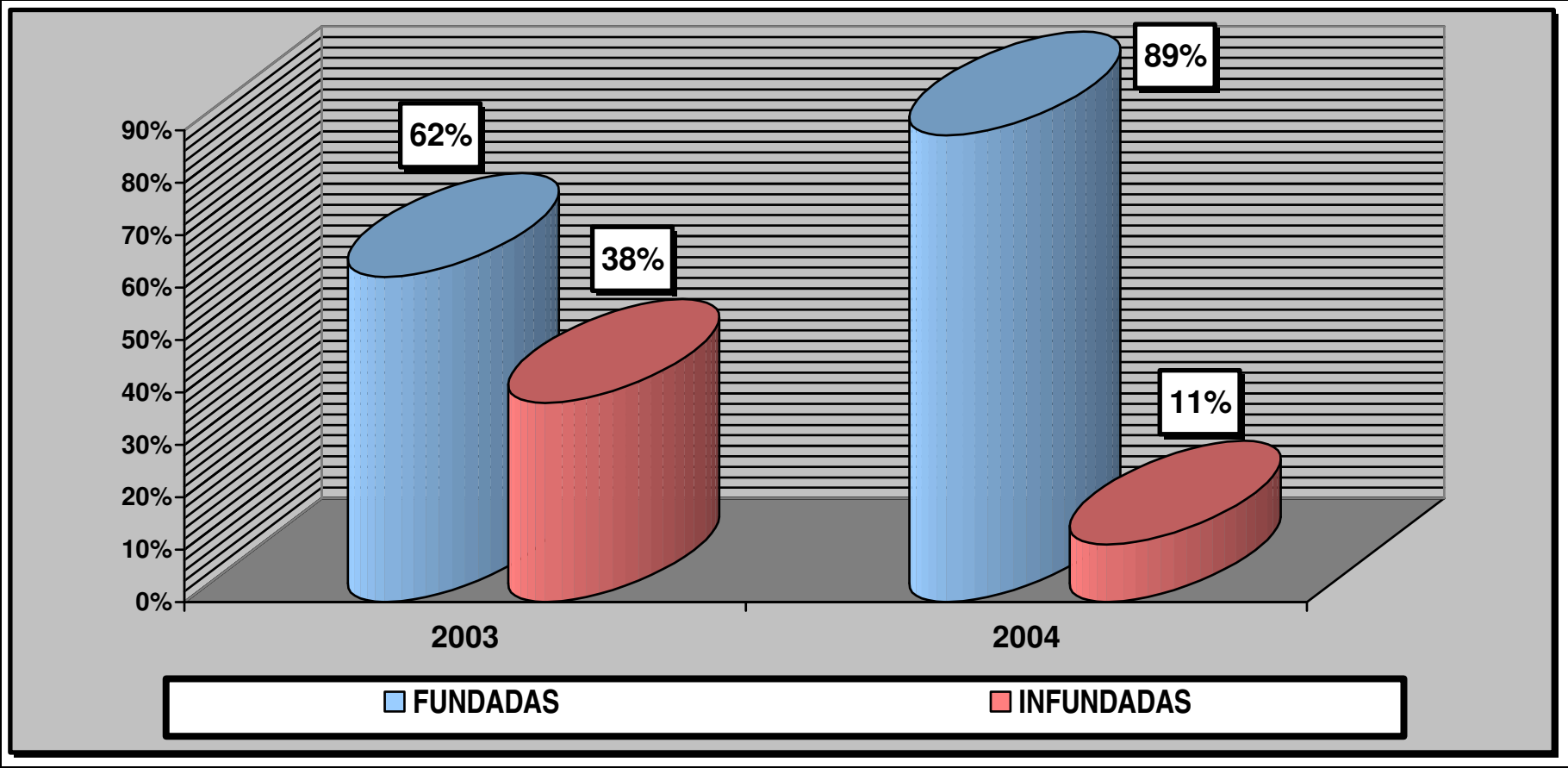


**GRÁFICO 34**



**CUADRO COMPARATIVO DE LAS CASACIONES PROCEDENTES (FUNDADAS E INFUNDADAS) EN LOS AÑOS 2003-2004**

**GRÁFICO 35**



### **3.1.1. Resoluciones Procedentes**

Como se ha visto anteriormente estas resoluciones son aquellas que luego de un análisis de forma son evaluadas por la Sala Suprema Constitucional y Social respecto al fondo del recurso, las mismas que pueden ser amparadas o no, clasificándolas luego en fundadas a las primeras e infundadas a las últimas.

De la misma manera como se ha organizado el estudio de este tipo de resoluciones en los años 1999 y 2000 se realizará en esta parte de la tesis; siendo las resoluciones infundadas como fundadas evaluadas en las categorías por distritos judiciales, pretensiones y causales.

#### **3.1.1.1. Resoluciones Infundadas.**

En el año 2003, las resoluciones infundadas son 17 que corresponde a un 38% de las resoluciones procedentes, mientras que en el 2004 establecen un 11% del total, siendo numéricamente 7 resoluciones; es decir existe un margen decreciente entre un año y otro.

Las afirmaciones que expongo en el párrafo anterior se encuentran sustentadas en los **gráficos 33 y 34**.

##### **3.1.1.1.1. Por Distritos judiciales.**

Los distritos judiciales considerados en el año 2003 en este tipo de resoluciones fueron Del Santa un 18%, de Lima el 41% del total, y el ítem de otros que agrupa el 41% restante. Se debe señalar que en el grupo de otros se considera a todos los distritos que no alcanzan el porcentaje de 5%. Estos datos se encuentran plasmados numérica y porcentualmente en el **gráfico 36**.

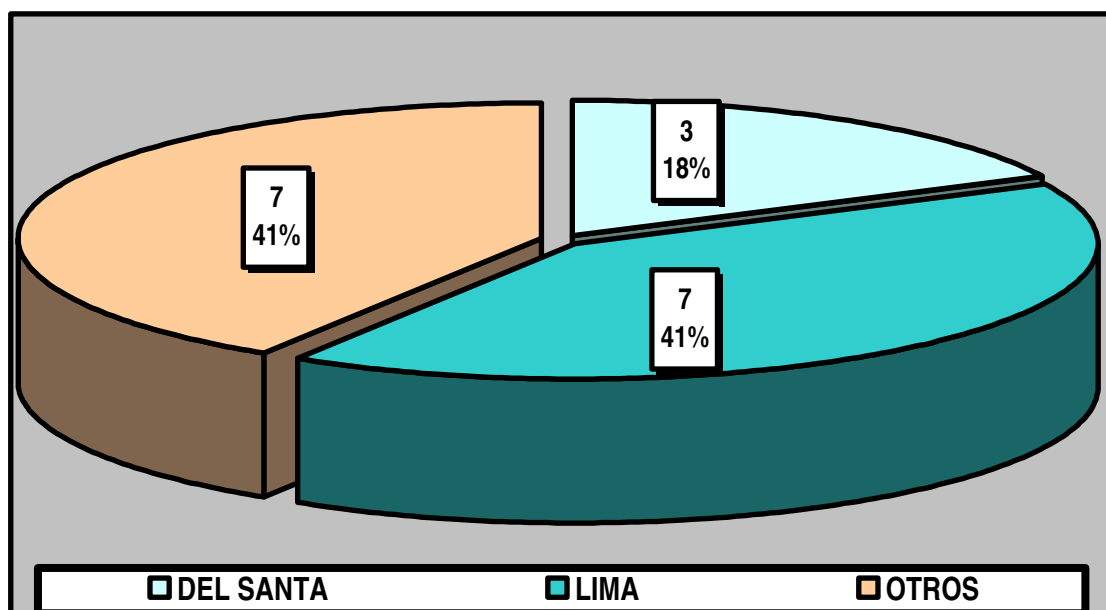
En el año 2000, las estadísticas sufren considerables variaciones: el distrito judicial Del Santa presenta un 14%, existiendo una figura decreciente de un 4% en relación al año anterior; de igual forma, el distrito judicial de Lima presenta un 30% del total, existiendo una baja de un 11% en relación a 1999. Ello da lugar a que aparezcan en el cuadro estadístico los distritos judiciales de Lambayeque, Puno, San Martín y Tacna, todas ellas, con un 14%.

Como consecuencia de la presencia de estos distritos judiciales, el rubro de otros desaparece de nuestro cuadro. También es de resaltar que el distrito judicial de Lima siempre se presenta en grandes porcentajes, liderando cada año en las estadísticas, ello responde entre otros motivos, que, por ser la capital del Estado, abarca el mayor índice poblacional y, por ende, en este distrito se encuentra el mayor porcentaje de beneficiarios; lo mencionado se encuentra sustentado en el **gráfico 37**.

**CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 2003**  
**(17)**

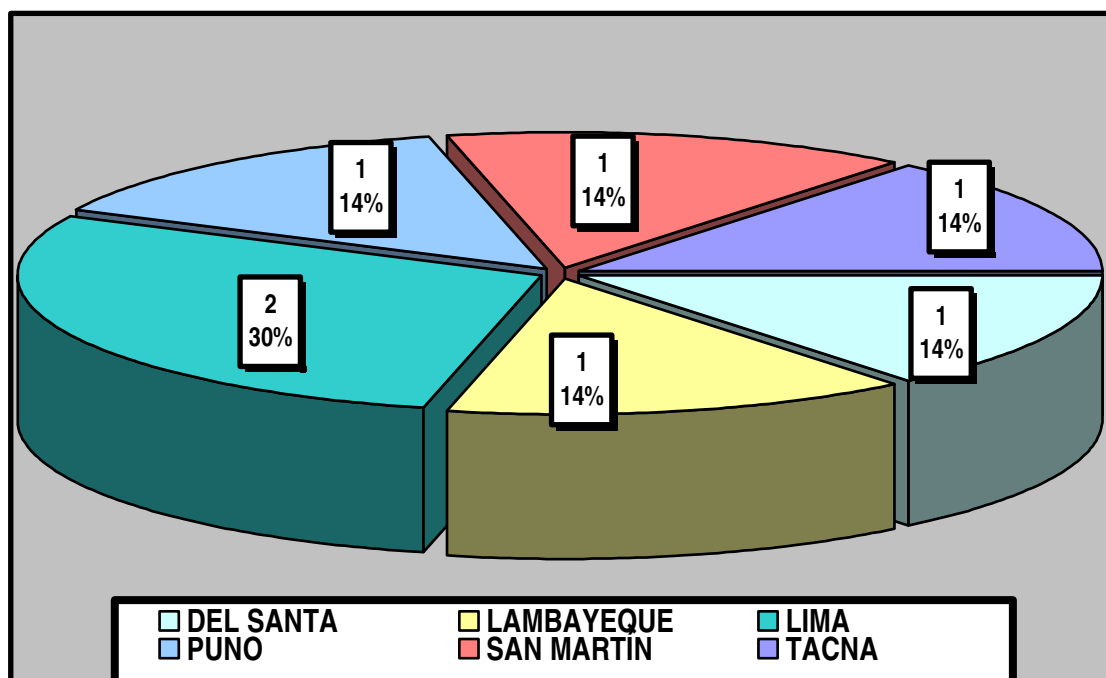
**POR DISTRITO JUDICIAL**

(Gráfico 36)



**CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 2004  
(07)**

**POR DISTRITO JUDICIAL  
(Gráfico 37)**





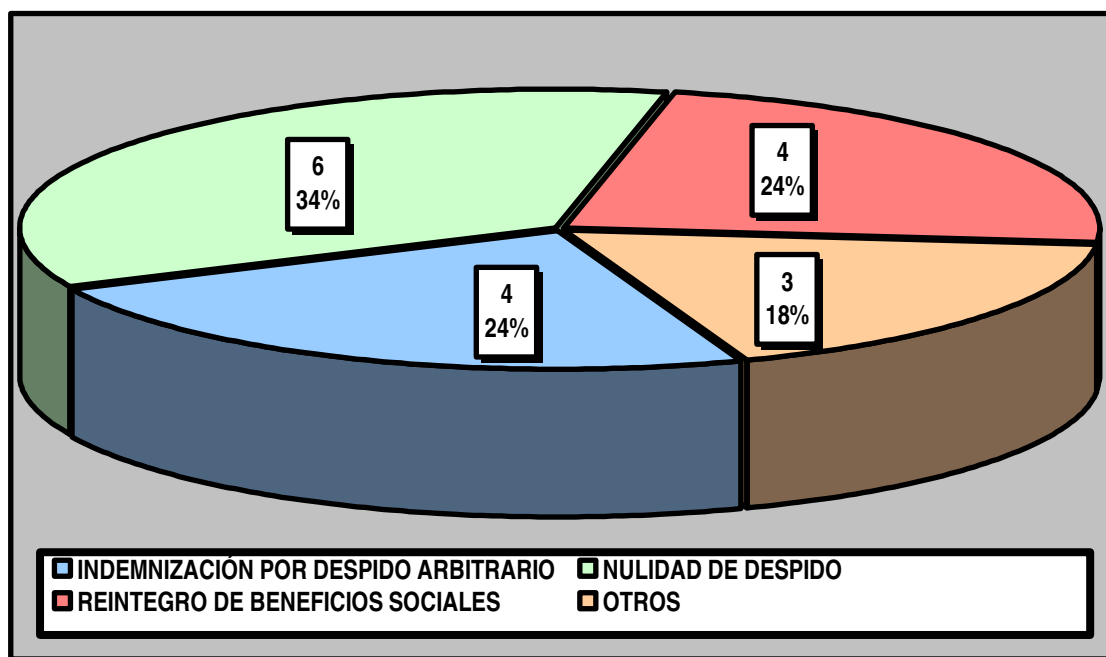
### **3.1.1.1.2. Por Pretensiones.**

Siguiendo con nuestro análisis las pretensiones consideradas en esta categoría en el año 2003, que se encuentran en el **gráfico 38** son: indemnización por despido arbitrario, nulidad de despido, reintegro de beneficios sociales y el rubro de otros. La más alta numérica y, por ende, porcentualmente fue nulidad de despido que alcanza un 34% del total. Siguen las pretensiones de indemnización por despido arbitrario y reintegro de beneficios sociales ambos con un 24% y, finalmente, el ítem de otros que presenta el 18% restante.

El **gráfico 39** nos presenta los datos estadísticos del año 2000, en ellas se ha considerado las pretensiones de indemnización por despido arbitrario con un 43% al igual que la pretensión de nulidad de despido y el restante 14% lo establece el rubro de reintegro de beneficios sociales. Por cuanto estas tres pretensiones alcanzan el 100%, el ítem de otros desaparece de nuestro cuadro estadístico.

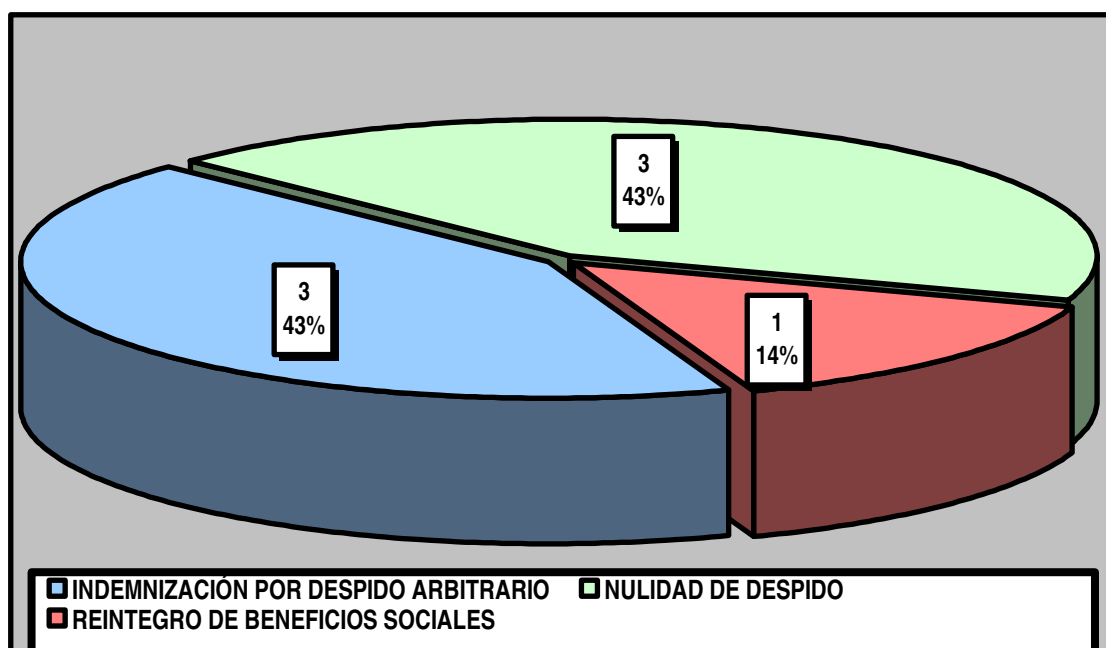
**CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 2003**  
**(17)**

**POR PRETENSIONES**  
**(Gráfico 38)**



**CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 2004  
(07)**

**POR PRETENSIONES  
(Gráfico 39)**



**3.1.1.1.3. Por Causales.**

En el **gráfico 40**, se efectúa el análisis de esta categoría con referencia al año 2003. La causal más usada fue la de interpretación errónea de la ley que muestra un 34%, seguida por la inaplicación de la norma con un 27%, contradicción jurisprudencial 21% y aplicación indebida de la norma tiene un 9%.

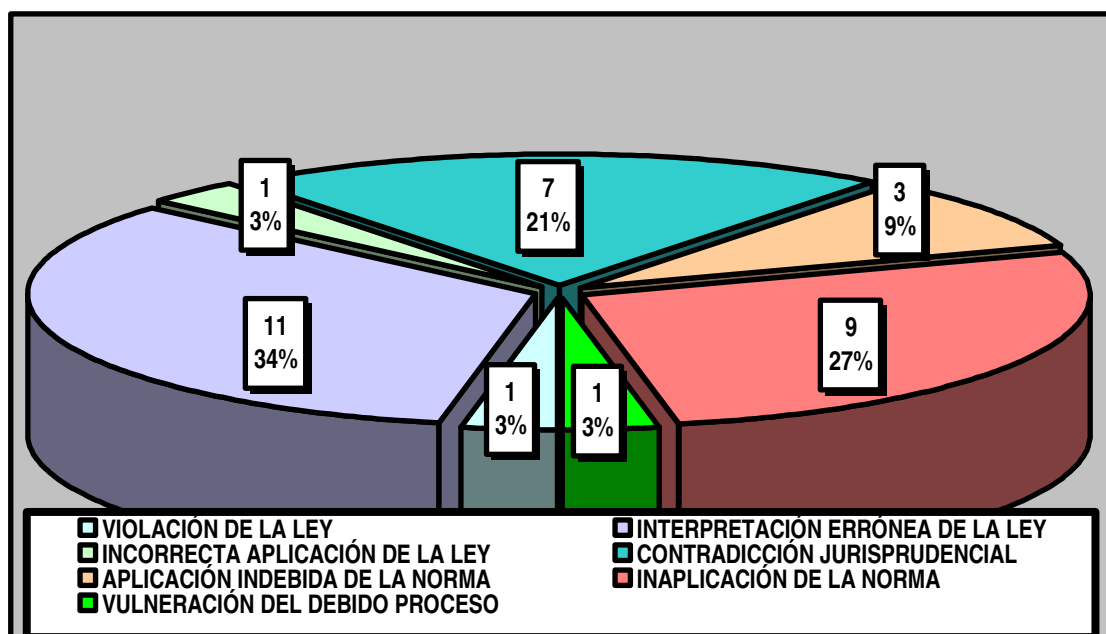
Lo sorprendente en esta parte de nuestro análisis es que las causales de violación de la ley e incorrecta aplicación de la ley que fueron derogadas el año 1998, es decir hace 5 años atrás, aún son utilizadas por los abogados para sustentar sus recursos de casación y más sorprendente aún es que la Sala Suprema lo considere como causales para su evaluación de fondo. Ambas causales muestran un 3% cada una conforme se visualiza en los cuadros antes citados.

En el año 2004 la causal de interpretación errónea de la ley sigue liderando con un 46%, existiendo una diferencia creciente de un 12% en relación al año anterior; caso contrario, las causales de contradicción jurisprudencial y aplicación indebida de la norma decrecen ligeramente, la primera en 1% y la segunda en 2%. Sin embargo, las causales de violación de la ley e incorrecta aplicación de la ley ya no se presentan, lo mismo sucede con el ítem de vulneración al debido proceso. Finalmente la causal de inaplicación de la norma no sufre variaciones manifestándose un 27% como el año anterior, estos datos se encuentran en el **gráfico 41**.

### **CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 2003 (33)**

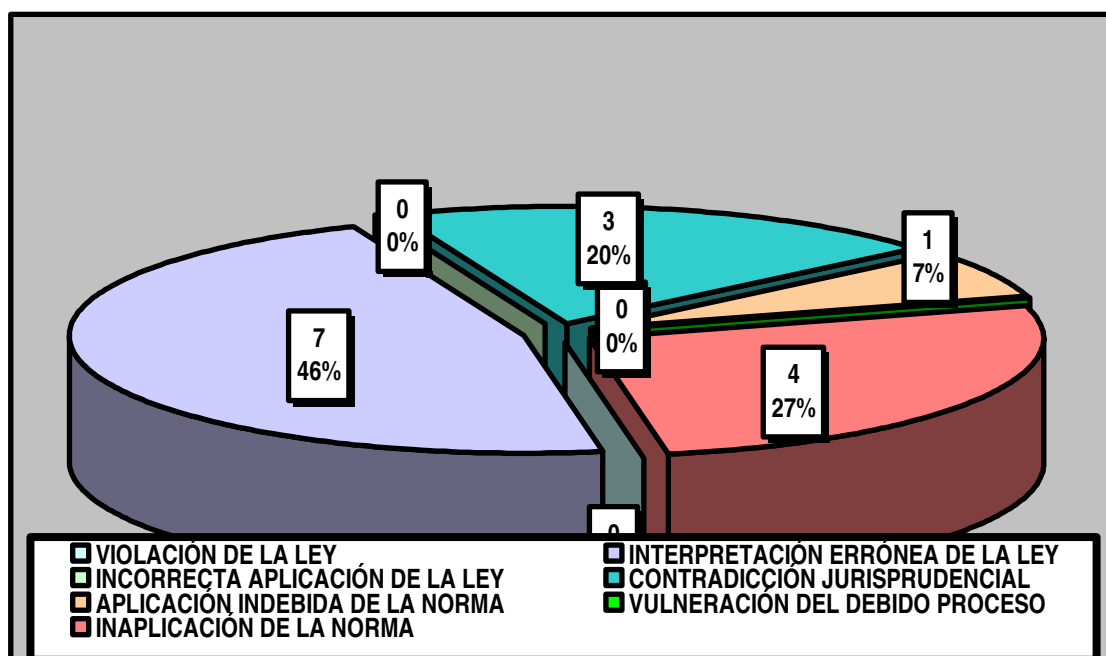
#### **POR CAUSALES**

(Gráfico 40)



**CASACIONES INFUNDADAS DEL AÑO 2004**  
(15)

**POR CAUSALES**  
(Gráfico 41)



**3.1.1.2. Resoluciones Fundadas.**

En los años 2003 y 2004, estas resoluciones superan a las infundadas. En el año 2003 se tiene como muestra 28 resoluciones que representa el 62% y en el 2004 contamos con 55 resoluciones que es el 89% del total de las resoluciones procedentes; es decir, entre un año y otro tiene un alza porcentual de 27%; ello podemos observarlo en el **gráfico 35**.

De manera similar al estudio de las resoluciones infundadas, se efectuará el estudio de este tipo de resoluciones en base a la tercera, cuarta y quinta categoría detallada en la parte introductoria.

#### **3.1.1.2.1. Por Distritos judiciales.**

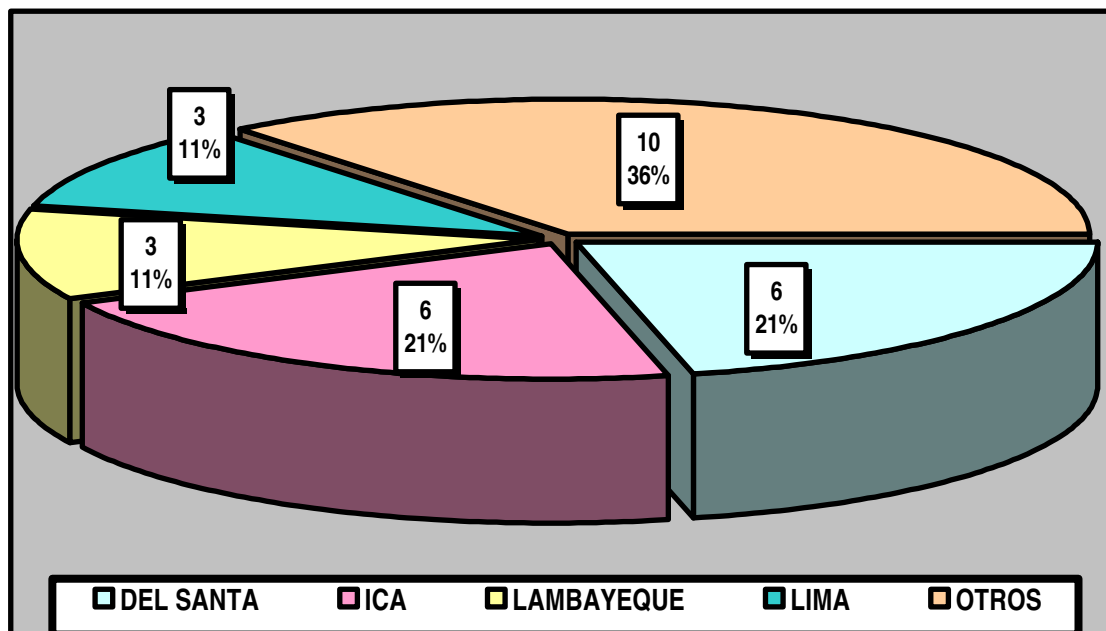
En el año 2003 como veremos en el **gráfico 42**, se considera expresamente a los distritos judiciales Del Santa e Ica que tienen un 21%, Lambayeque y Lima con un 11%, los demás distritos alcanzan un 36% restante.

En el año 2004 se presenta nuevamente casi todos los distritos judiciales considerados en el año 2003, teniendo como única diferencia al distrito judicial de Lambayeque que ingresa dentro del rubro de otros y el distrito judicial de Moquegua ocupa su lugar. Los datos que tenemos del **gráfico 43** son los siguientes: Del Santa representa el 9% decreciendo en un 12% y el rubro de otros disminuye un 20% a diferencia del año anterior; por el contrario Lima crece en un 2% y el distrito judicial de Ica crece notoriamente un 28% llegando a liderar en las estadísticas representado el 49% del total. Finalmente el distrito judicial de Moquegua tiene un 13%.

### **CASACIONES FUNDADAS DEL AÑO 2003**

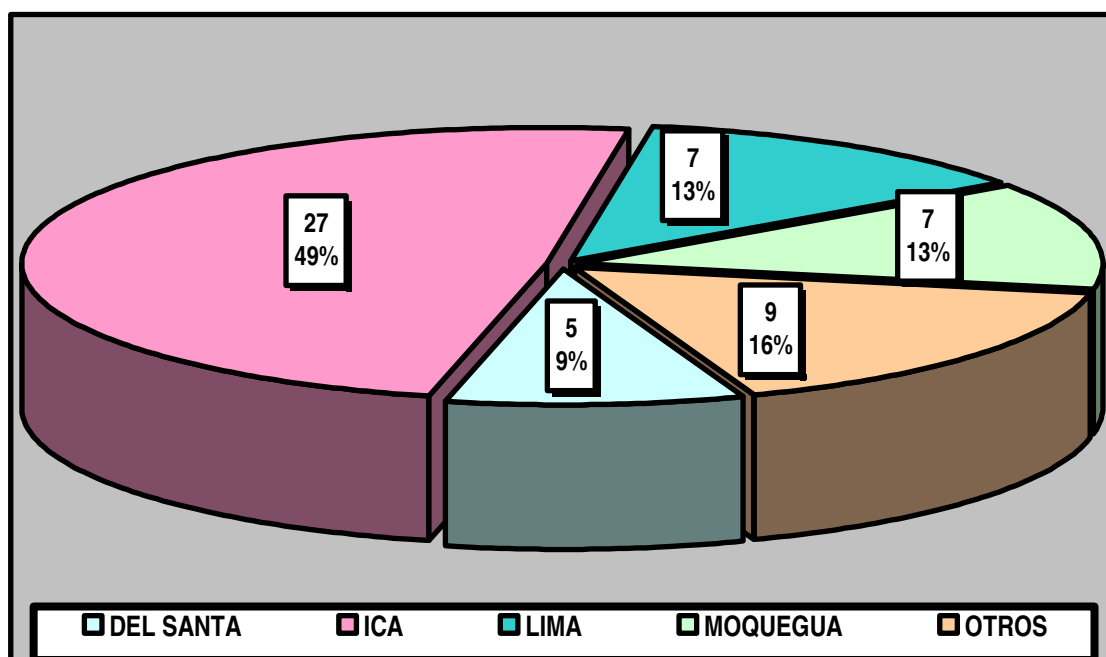
(28)

**POR DISTRITO JUDICIAL**  
(Gráfico 42)



**CASACIONES FUNDADAS DEL AÑO 2004**  
(55)

**POR DISTRITO JUDICIAL**  
(Gráfico 43)

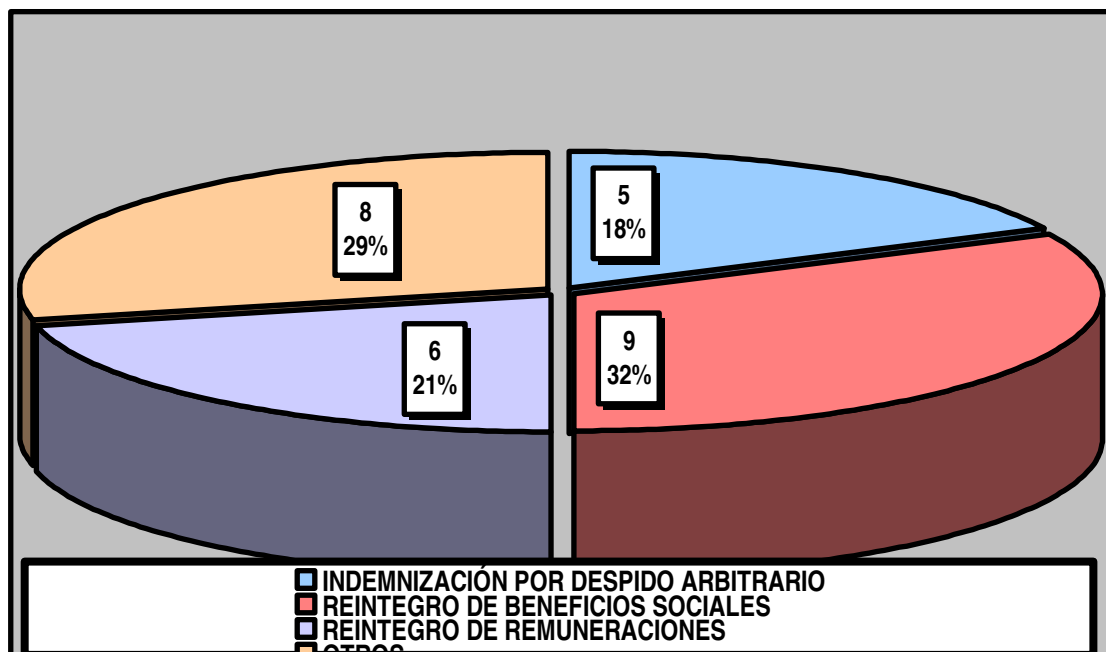


### 3.1.1.2.2. Por Pretensiones.

Las pretensiones que fueron consideradas para efectuar las estadísticas y señaladas, expresamente, por contar con un alto porcentaje en el año 2003 son: indemnización por despido arbitrario con un 18%, reintegro de beneficios sociales que alcanza un 32%, reintegro de remuneraciones con un 21%; los demás fueron agrupados en el ítem de otros que establecieron un 29%; estos porcentajes con su equivalente en cifras están plasmados en el **gráfico 44**.

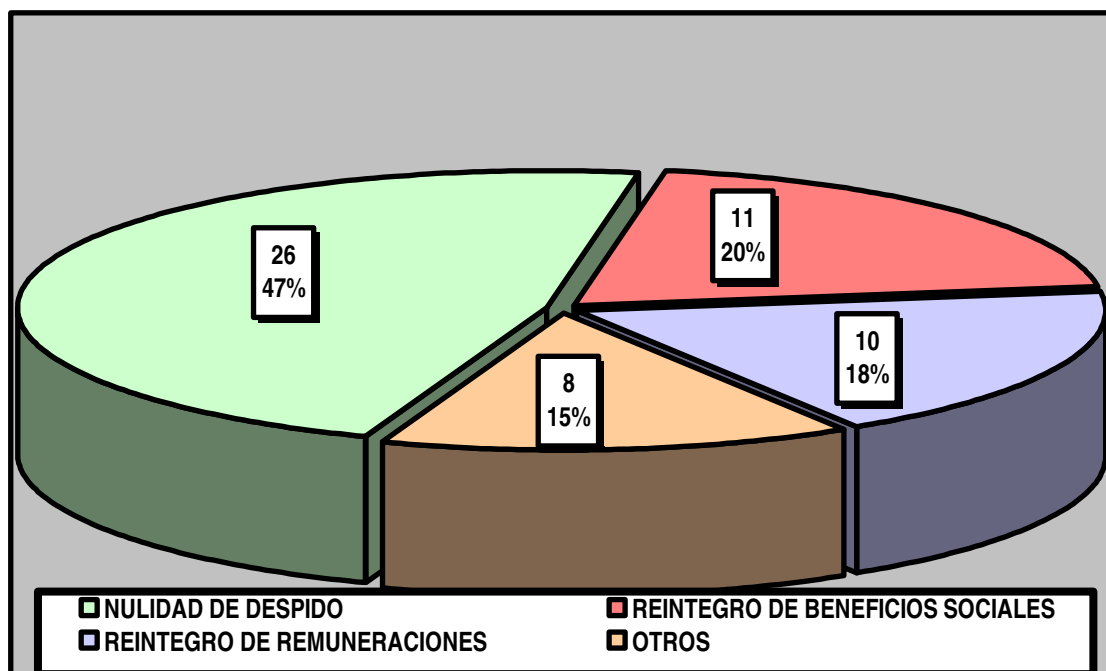
En el 2004, esta categoría es plasmada en el **gráfico 45**, incorporándose en nuestro estudio la pretensión de nulidad de despido que en año anterior se encontraba en el rubro de otros, mientras que la pretensión de indemnización ocupa su lugar en este rubro. Los datos obtenidos son los siguientes: nulidad de despido 47%, pretensión que lidera en este año, le sigue reintegro de beneficios sociales con un 20% que sufre un descenso de 12% a comparación del año anterior, reintegro de beneficios sociales que desciende un 3% manifestándose con un 18%. Finalmente el rubro de otros alcanza en este año el 15% del total, 14% menos que en el año 2003.

**POR PRETENSIONES**  
(Gráfico 44)



**CASACIONES FUNDADAS DEL AÑO 2004**  
(55)

**POR PRETENSIONES**  
(Gráfico 45)





### **3.1.1.2.3. Por Causales.**

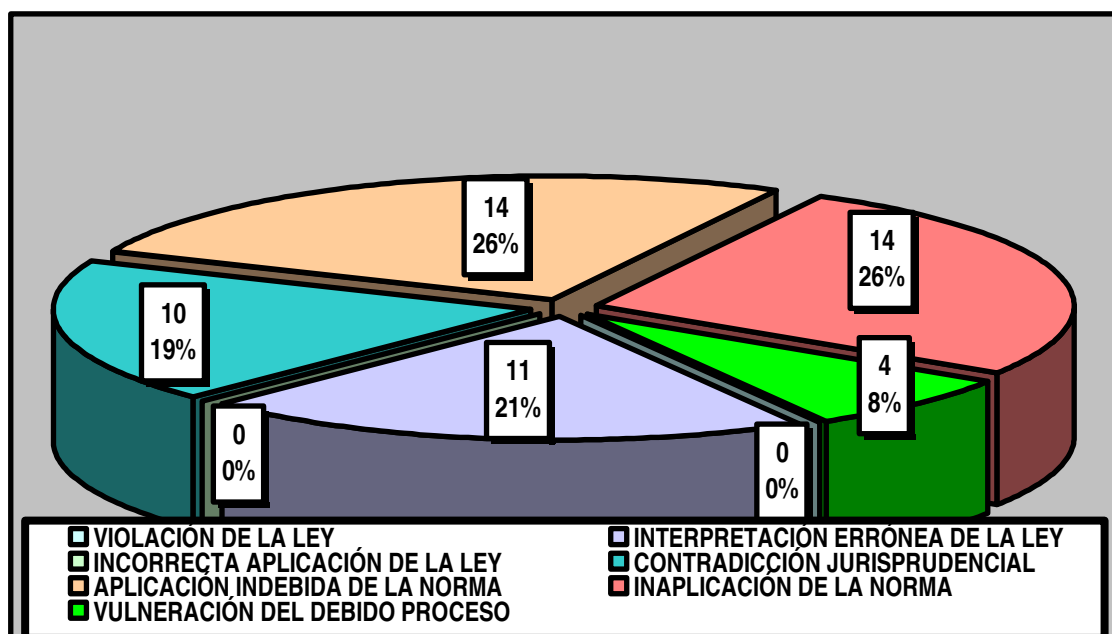
Referente a esta categoría, en el año 2003, las causales más usados por los abogados fueron aplicación indebida de la norma e inaplicación de la norma que alcanzan 26% cada una, es seguida por interpretación errónea de la ley con 21% y contradicción jurisprudencial 19%; en cuanto a la vulneración al debido proceso manifiesta un 8% del total. Las causales de violación a la ley e incorrecta aplicación de la ley que ya estaban derogadas no se hacen manifiesto por cuanto tienen un porcentaje de 0%; ello lo podemos contrastar con el **gráfico 46**.

En el año 2004 no sufre variación alguna en las causales de violación de la ley e incorrecta aplicación de la ley; la causal de inaplicación de la norma sigue liderando con un 34% creciendo un 8% en comparación al año anterior, otra causal que tiene un ascenso de 12% es contradicción jurisprudencial; mientras que las causales de interpretación errónea de la ley manifiesta un descenso de 9% logrando un 12% y aplicación indebida de la norma descendiendo 12% obteniendo 14% del total. Por otra parte, el ítem de vulneración al debido proceso tiene una variación creciente de 1% entre un año y otro. Estos datos estadísticos los podemos encontrar en el **gráfico 47**.

**CASACIONES FUNDADAS DEL AÑO 2003  
(53)**

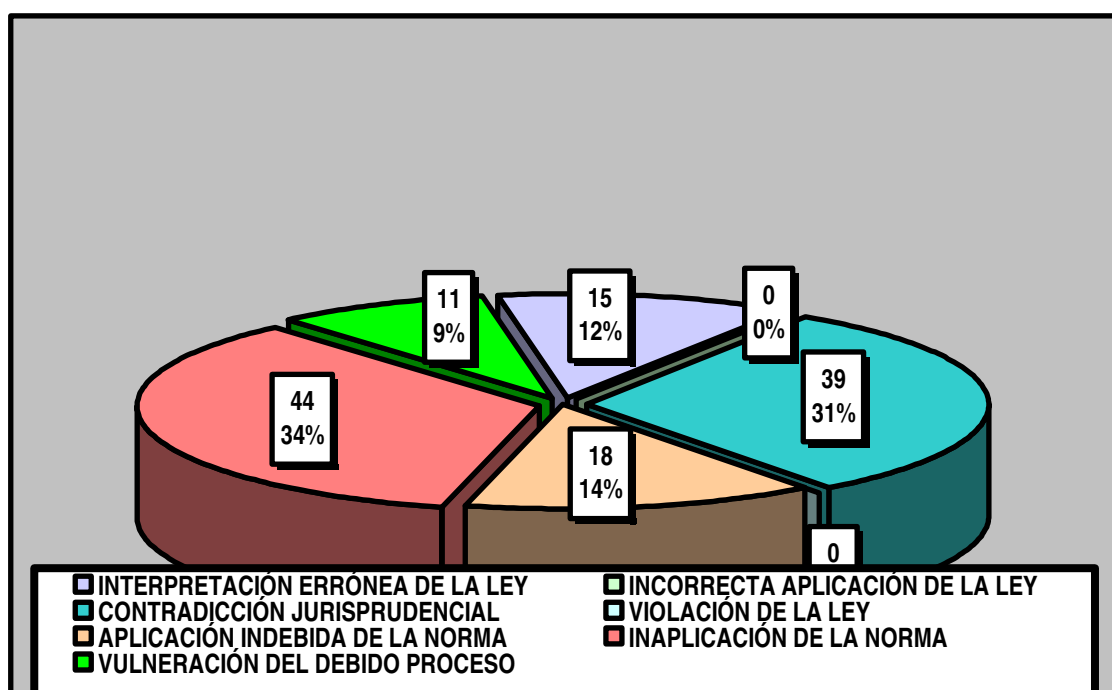
**POR CAUSALES**

(Gráfico 46)



**CASACIONES FUNDADAS DEL AÑO 2004**  
(127)

**POR CAUSALES**  
(Gráfico 47)



4. **CUADROS COMPARATIVOS DE LAS CASACIONES PROCEDENTES EMITIDAS EN LOS AÑOS 1999, 2000, 2003 Y 2004.**

El **gráfico 48** nos señala que en los años 1999, 2000, 2003 y 2004, las dos clases de resoluciones que conforman las resoluciones procedentes, es decir, fundadas e infundadas, han sufrido un cambio rotundo presentándose a nivel porcentual de forma contraria entre los años 1999 y 2004; mas entre los años 2000 y 2003 no existe variación alguna. Es así como en el año 1999 donde las infundadas eran superiores a las fundadas estableciéndose en porcentajes, las primeras con 67% y las segundas con el 33%; ello se invierte totalmente para el 2004 donde las resoluciones declaradas infundadas descienden sorprendentemente, con el 11% y las fundadas, el 89%.

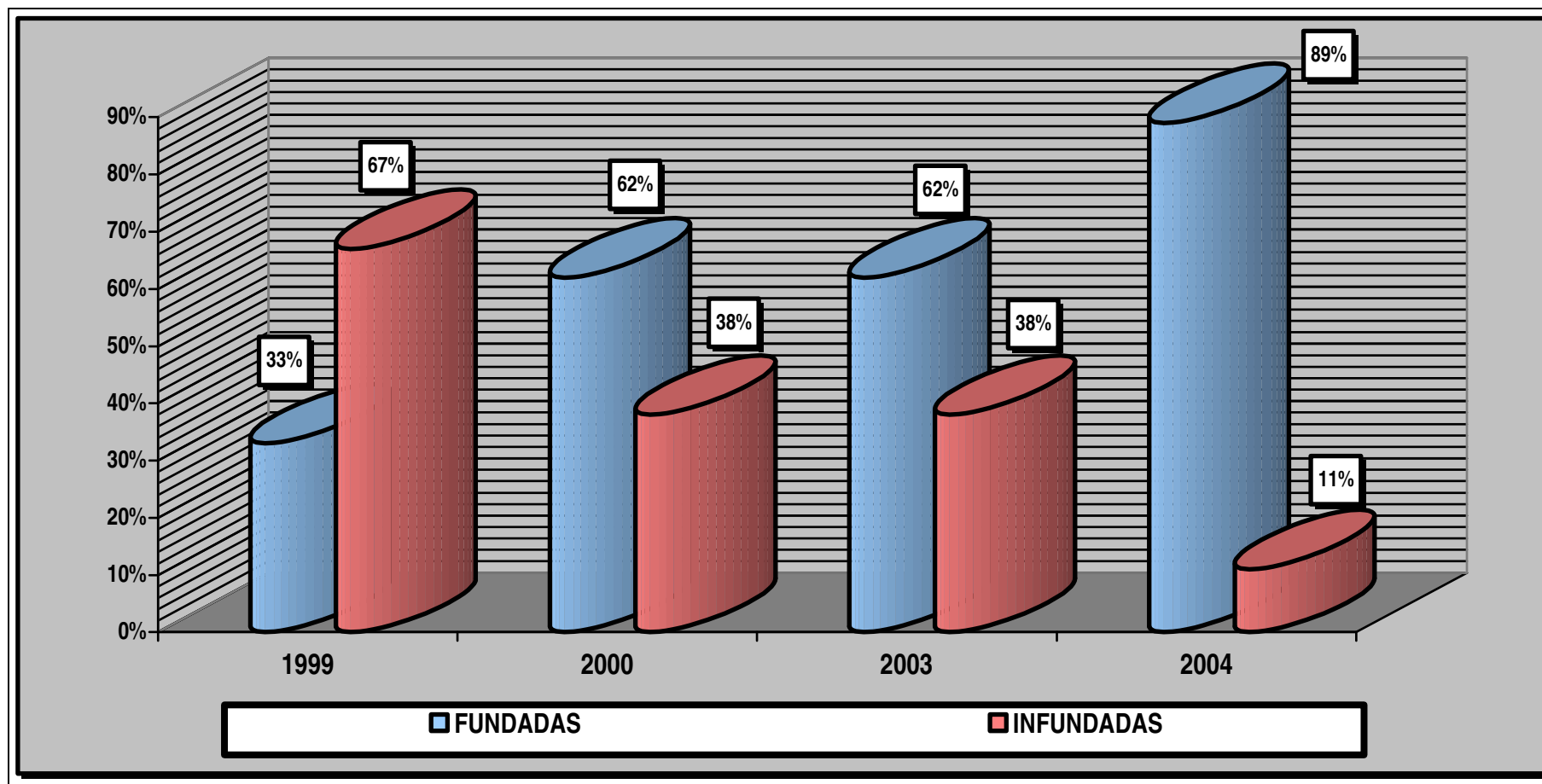
Este mismo gráfico nos muestra que en el año 2000, en comparación de 1999, se empieza a notar la figura de inversión antes señalada; pero, que en porcentajes se mantiene estable hasta el año 2003; porque es claro que no ha existido cambio alguno entre estos años.

#### **4.1. Resoluciones Infundadas.**

Teniendo una noción general de lo sucedido entre los años 1999, 2000, 2003 y 2004 en cuanto a resoluciones procedentes se refiere, en los **gráfico 49 y 50** nos centraremos en el estudio, en común, de los distritos judiciales de las resoluciones declaradas infundadas; para ello se ha considerado los distritos judiciales que estaban presentes en los cuadros estadísticos de cada año en cuanto a esta categoría, llegando a considerar a los distritos judiciales: Del Santa, Ica, Lima y los demás que fueron agrupados en el ítem de otros.

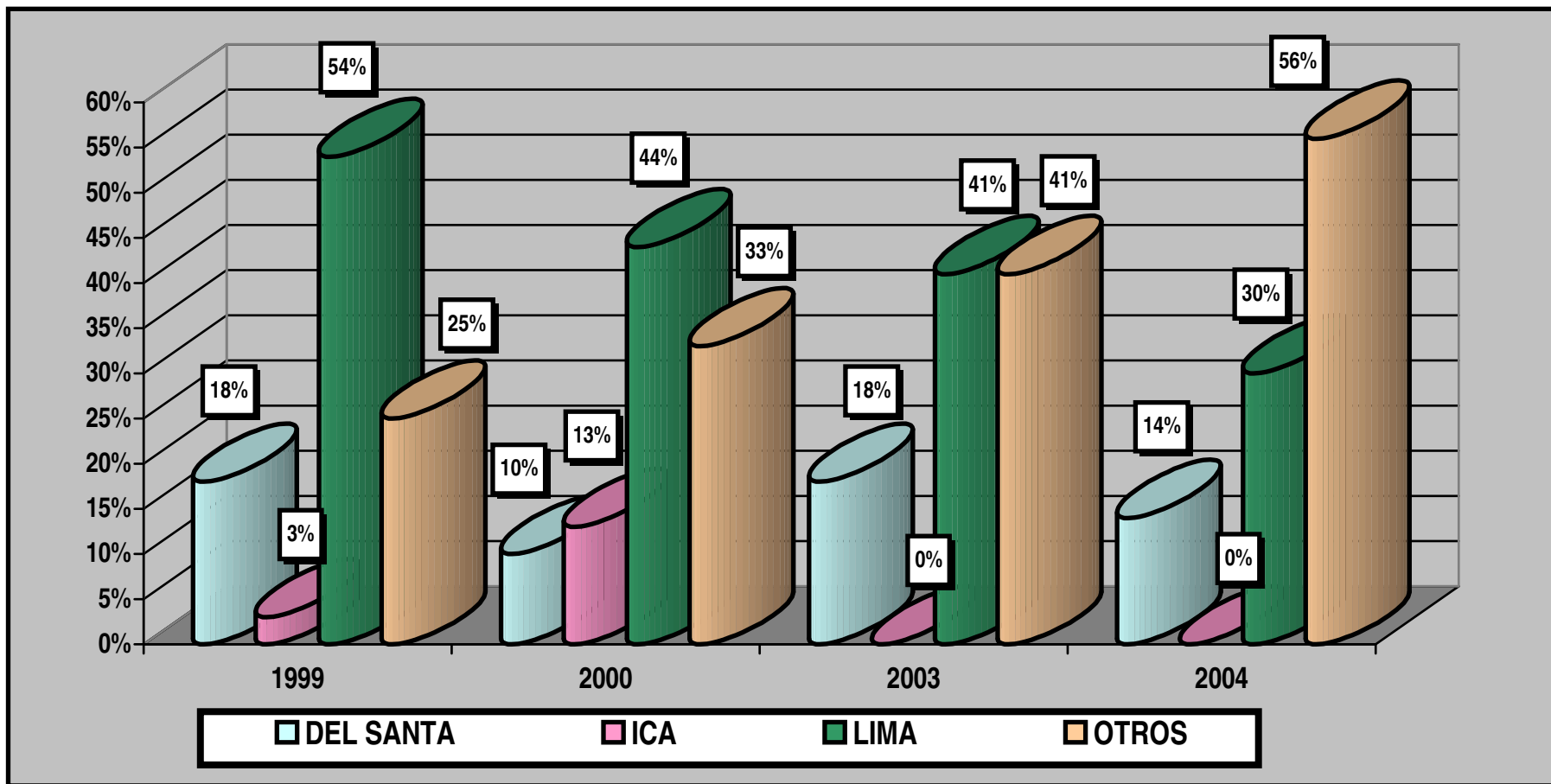
## CUADRO COMPARATIVO DE LAS CASACIONES PROCEDENTES

Gráfico 48



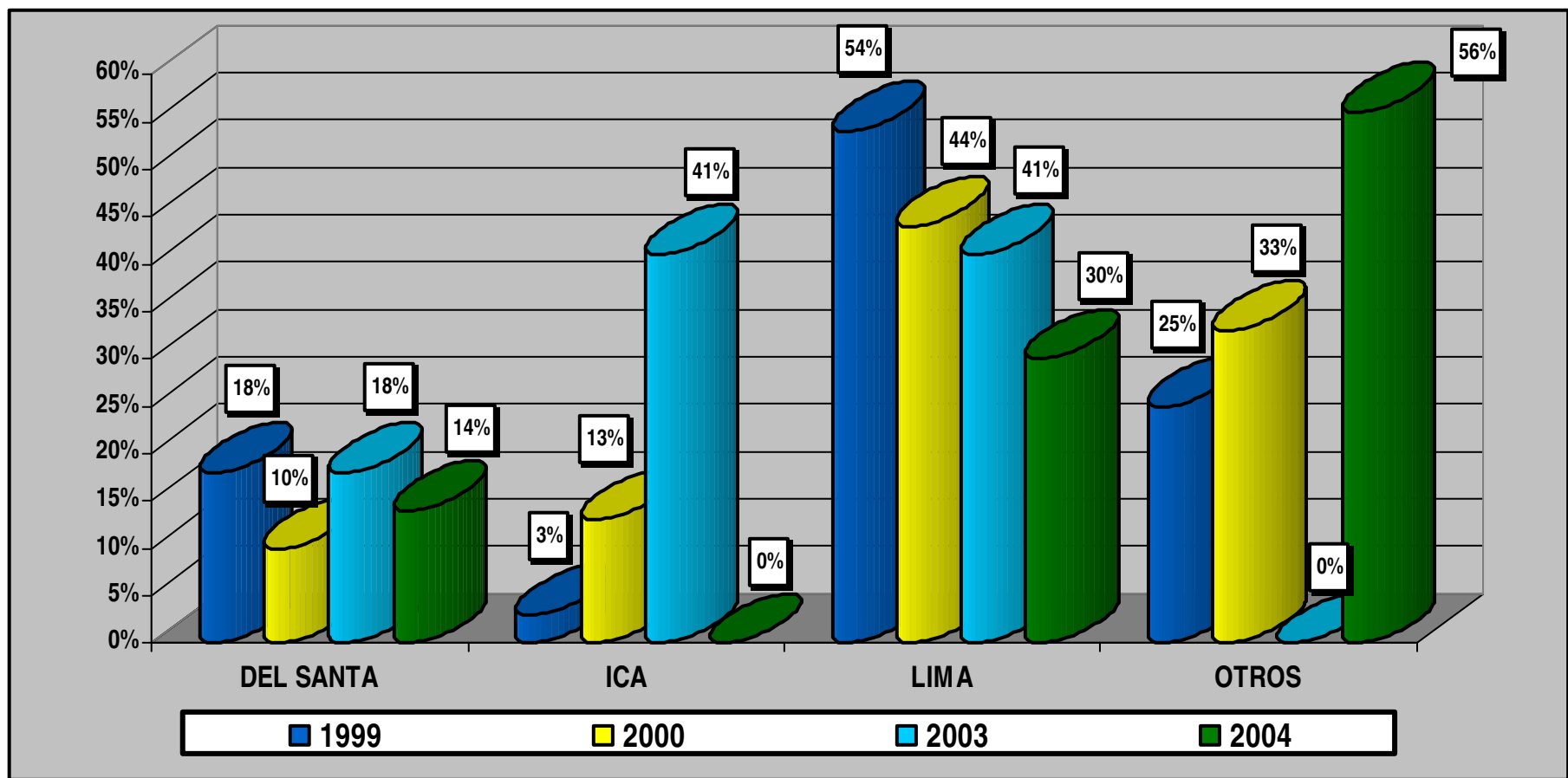
## DISTRITOS JUDICIALES POR AÑOS EN CASACIONES INFUNDADAS

Gráfico 49



## DISTRITOS JUDICIALES POR AÑOS EN CASACIONES INFUNDADAS

Gráfico 50



El distrito Del Santa en los cuatro años de nuestro análisis, no ha tenido mayor cambio existiendo una diferencia no mayor de 4%.

El distrito de Ica, en cambio, ha tenido un crecimiento porcentual hasta el año 2003 desapareciendo en el año 2004; de los datos tenemos que en el año 1999 muestra un 3%, ella va incrementándose en el 2000, llegando a 13%; en el 2003 alcanza 41% existiendo una diferencia de 38% de 1999 y en el 2004, un porcentaje de 0%.

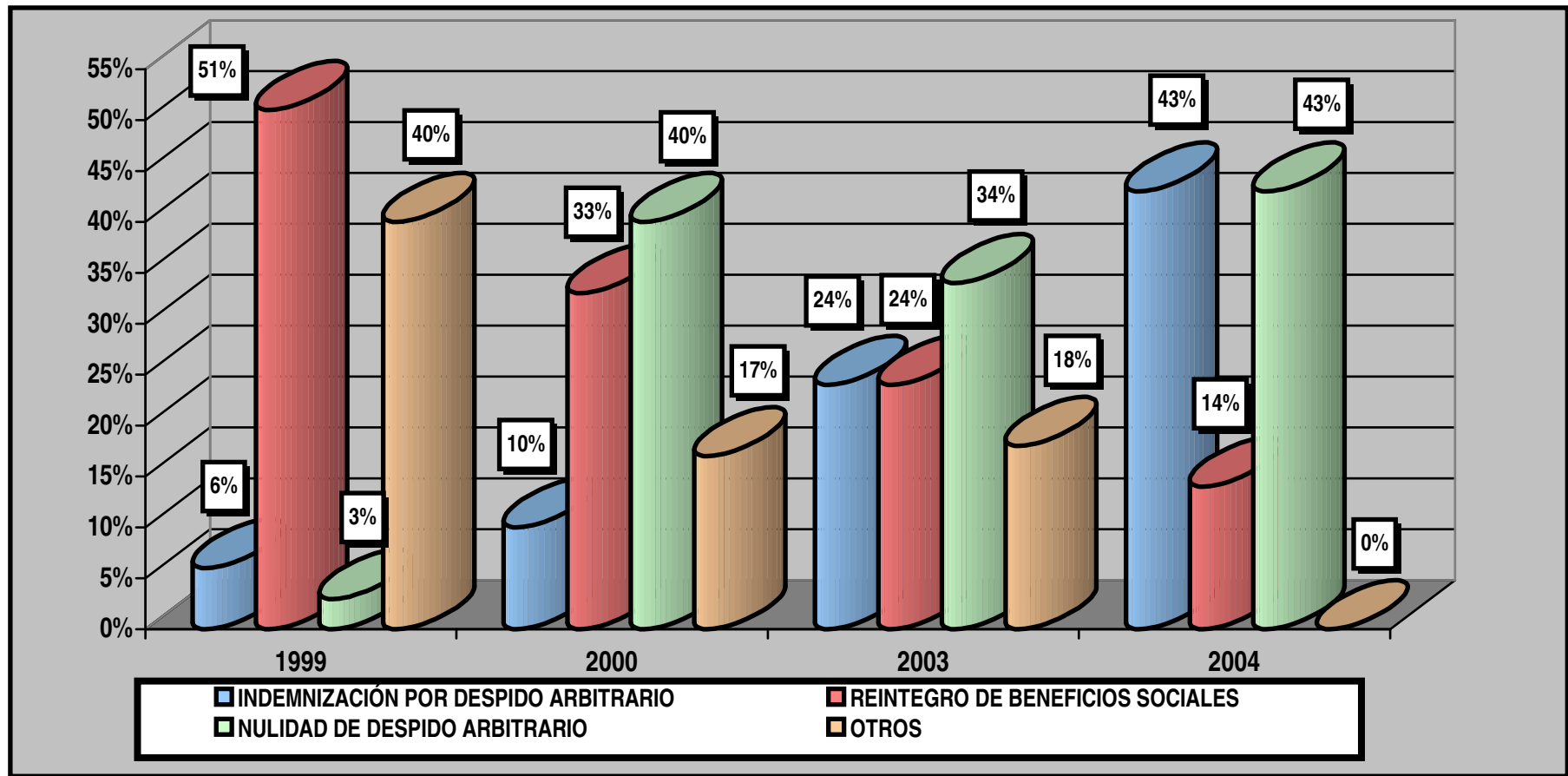
El distrito judicial de Lima muestra una figura decreciente absoluta. En el año 1999 superaba a todos los distritos con el 54%; en el 2000 decrece al 44%, luego en el 2003, un 41% y en el 2004 cierra con un 30%; existiendo una diferencia entre los años 1999 y 2004 de 24%, lo mismo que puede responder que la población nacional se ha ido descentralizando.

Finalmente el ítem de otros, contrariamente al distrito de Lima, ha tenido una figura creciente con excepción del año 2003. Los datos son los siguientes: en el año 1999 tiene un 25%, en el 2000, 33%, en el año 2003 muestra 0%, ello porque los distritos judiciales Del Santa, Ica y Lima sumados abordan la totalidad de esta categoría; sin embargo en el 2004 al existir un decrecimiento de estos tres distritos judiciales, el ítem de otros crece considerablemente hasta llegar a un indiscutible 56%, prueba de este alza porcentual es que los distritos judiciales que no han tenido mayor presencia entre los años 1999 hasta el 2003, en el 2004 se hacen presentes a la descentralización que ya hace notar sus efectos.

Referente a las pretensiones que se encuentran en los **gráficos 51 y 52**, se consideraron la indemnización por despido arbitrario, nulidad de despido y reintegro de beneficios sociales, acompañados por el ítem de otros. La pretensión de indemnización por despido arbitrario presenta un crecimiento absoluto entre 1999 al 2004 existiendo una diferencia de 37% entre estos años; la pretensión de nulidad de despido también tiene un crecimiento fluctuante entre los años 2000 y 2003; sin embargo, entre los años 1999 al 2004 existe una diferencia de 40%.

## PRETENSIONES POR AÑOS EN CASACIONES INFUNDADAS

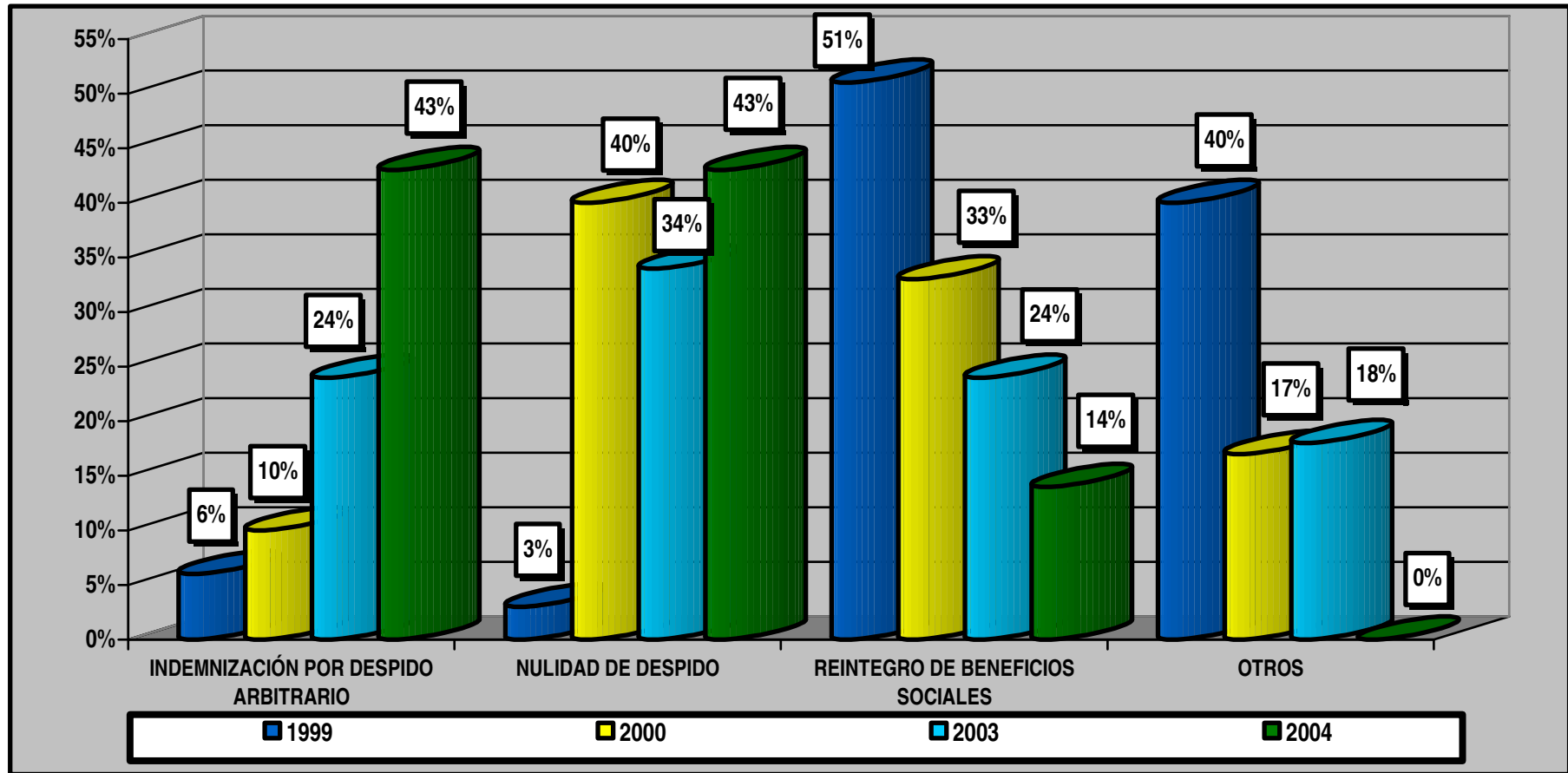
Gráfico 51





## PRETENSIONES POR AÑOS EN CASACIONES INFUNDADAS

Gráfico 52



Caso contrario a las dos pretensiones antes mencionadas, tenemos el reintegro de beneficios sociales que muestra entre los años 1999 al 2004 una disminución gradual; en el año 1999 representa un 51% del total y en el 2004 alcanza un 14%, decreciendo un 37% entre estos años.

Para culminar, el ítem de otros decrece un 40% entre los años 1999 y 2004, la misma que se ha ido efectuando gradualmente al transcurrir de los años.

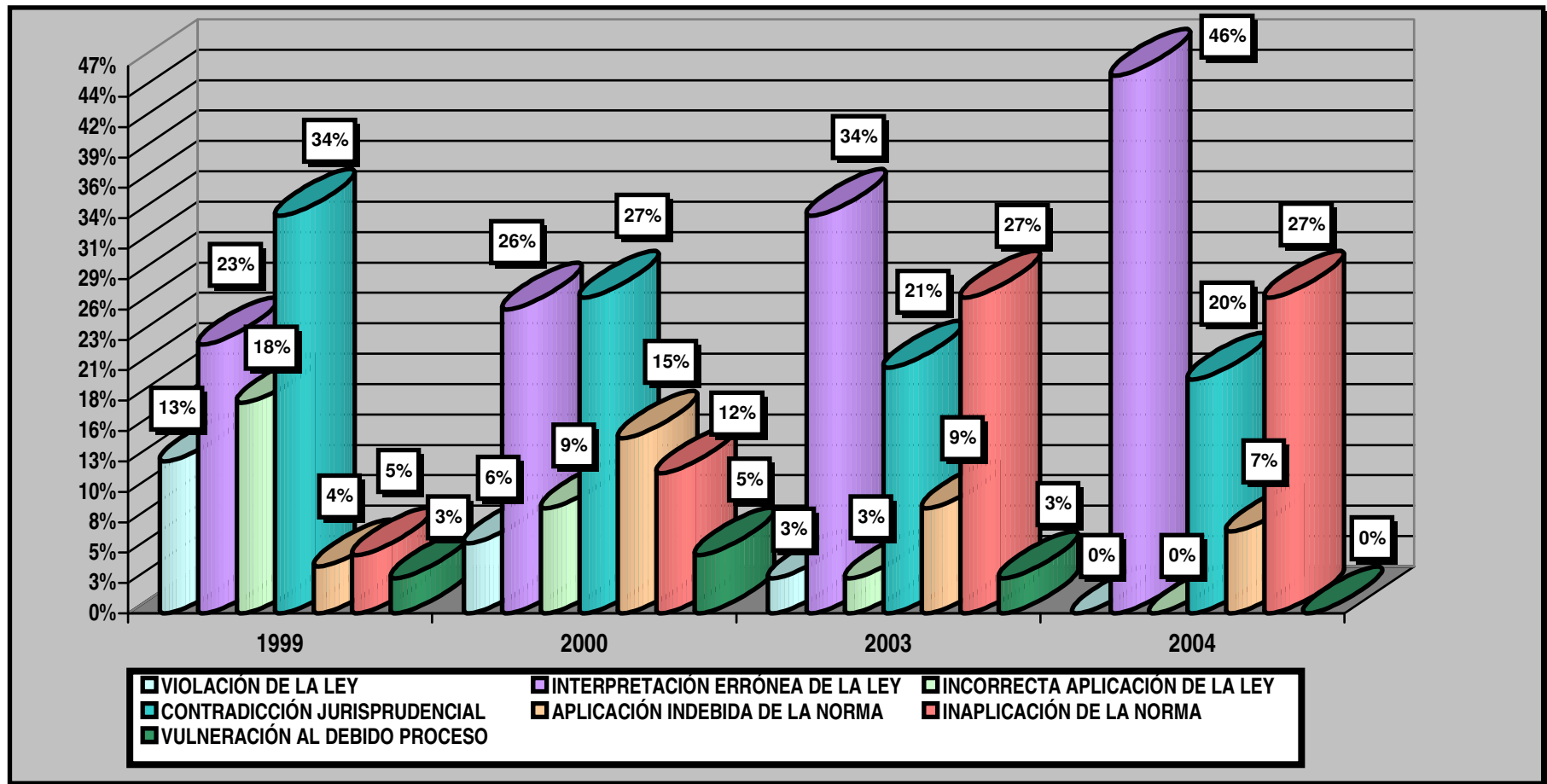
Los **gráficos 53 y 54** nos muestran el estudio estadístico de la última categoría referente a las casaciones declaradas infundadas. En ellas se visualiza, de manera clara, como las causales de violación de la ley e incorrecta aplicación de la ley que fueron derogados por la ley 27021, tenían un porcentaje considerable en el año 1999 que va decreciendo gradualmente cada año llegando al año 2004 con 0%, la causal de contradicción jurisprudencial por su parte su muestra en el año 1999 con un imponente 34% decreciendo un 14% hasta el año 2004.

Caso contrario, a las causales antes nombradas la de interpretación errónea de la ley, ha tenido un crecimiento sorprendente, existiendo un diferencia de 14% entre los años 1999 al 2004.

La causal restante de aplicación indebida de la norma presenta entre el año 1999 al 2000 un crecimiento de 11%; pero luego decrece llegando al 2004 a 7%. El ítem de vulneración al debido proceso al igual que esta última causal entre el año 1999 al 2000 sufre un crecimiento poco considerable de 2%, pero en el 2004 no se presenta porcentualmente.

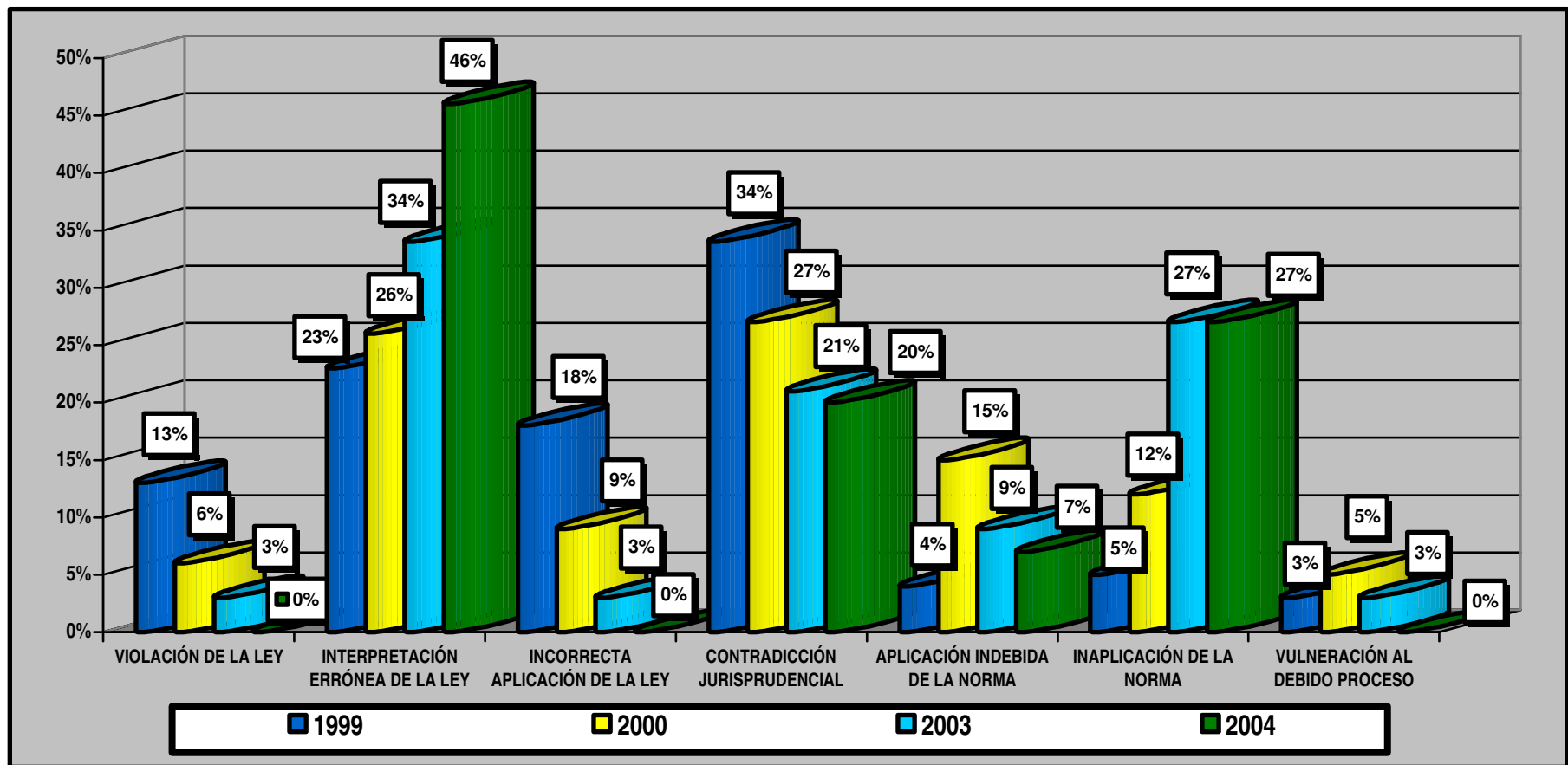
## CAUSALES POR AÑOS EN CASACIONES INFUNDADAS

Gráfico 53



## CAUSALES POR AÑOS EN CASACIONES INFUNDADAS

Gráfico 54



## 4.2. Resoluciones Fundadas

Los datos que daremos a conocer en esta parte final de nuestro estudio, estarán sustentados, como todos los anteriores, temas en cuadros comparativos. Los **gráficos 55 y 56** nos muestran el estudio en común de los distritos judiciales de las resoluciones declaradas fundadas de los años 1999, 2000, 2003 y 2004; en ella consideramos los distritos judiciales: Del Santa, Ica, Lima y los demás que fueron agrupados en el ítem de otros.

El distrito Del Santa en los cuatro años que son materia de nuestro análisis ha tenido un crecimiento gradual entre los años 1999 y 2003 de 15%, pero en el 2004 decrece un 16% de manera alarmante.

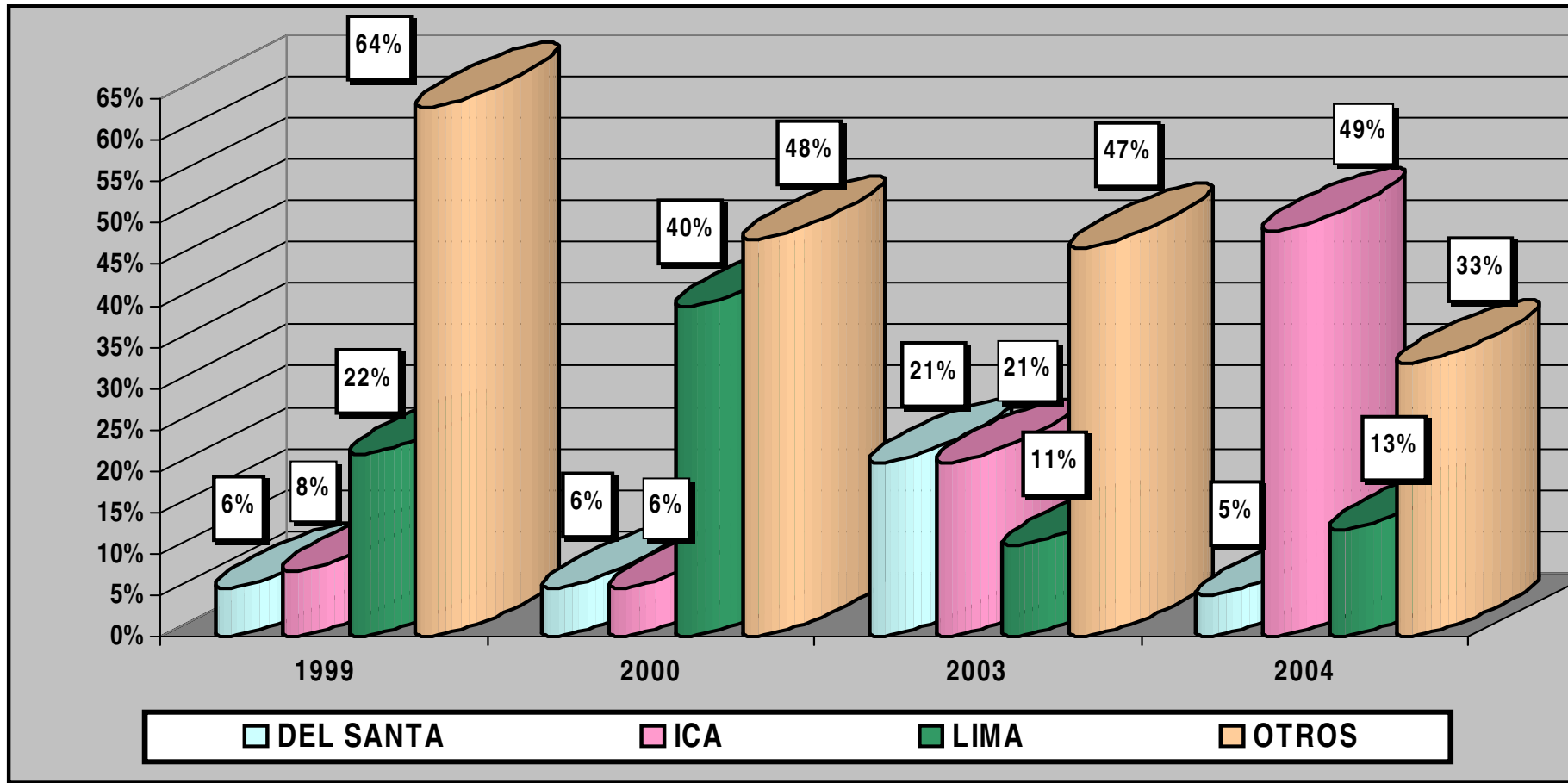
El distrito de Ica que en los años 1999 y 2000 no sufre mayor variación, en el 2003 es notorio su crecimiento manifestándose con un 21% y en el 2004 con un indiscutible 49%.

El distrito judicial de Lima, en cambio, tiene un crecimiento entre los años 1999 y 2000 llegando en este último a representar el 40%, en el 2004 solamente tiene una presencia de 13%, decreciendo entre los años 2000 y 2004 un no poco considerable 27%.

Finalmente el ítem de otros, manifiesta un baja gradual, mientras que en el año 1999 tenía un 84% en el 2004 representa el 33% del total, es decrecer data luego que el distrito judicial de Ica crece en los porcentajes.

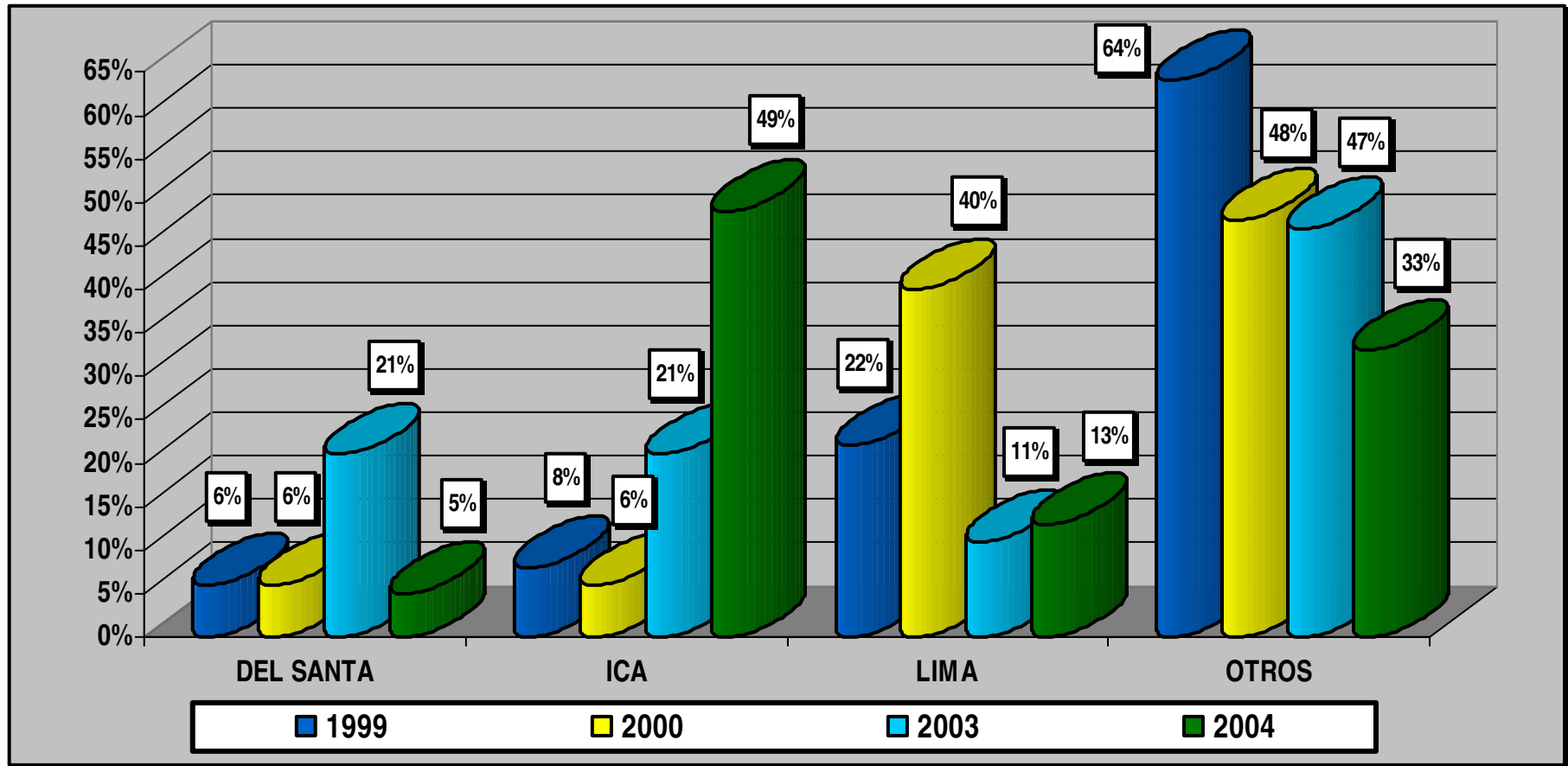
## DISTRITOS JUDICIALES POR AÑOS EN CASACIONES FUNDADAS

Gráfico 55



## DISTRITOS JUDICIALES POR AÑOS EN CASACIONES FUNDADAS

Gráfico 56



Referente a las pretensiones que se encuentran en los **gráficos 57 y 58**, se consideraron la indemnización por despido arbitrario, nulidad de despido y reintegro de beneficios sociales, acompañado por el ítem de otros. La pretensión de indemnización por despido arbitrario presenta fluctuaciones entre los años 1999 y 2000, presentando un crecimiento de 18%, en el 2003 no tiene mayor variación con este porcentaje representando el 18%, pero para el 2004 decae rotundamente no tiene presencia a nivel estadístico de forma independiente, sino que pasa a formar parte del ítem de otros.

Igualmente, la pretensión anterior, nulidad de despido tiene fluctuaciones entre los años 1999 y 2000 decrece en un 4% entre un año y otro, en el 2003 representa el 7% del total, pero en el 2004 sufre un cambio rotundo teniendo un alza descomunal de 40%.

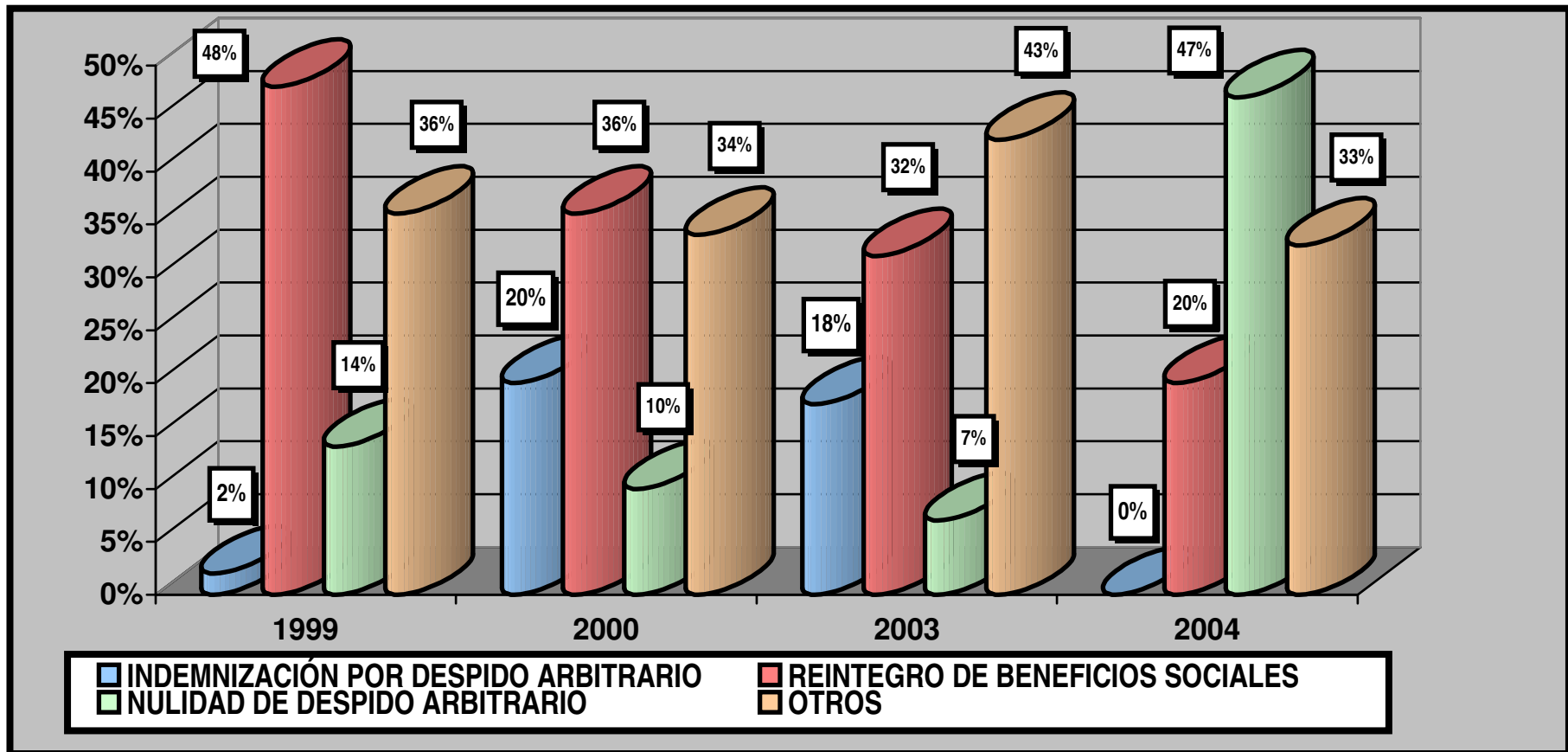
La pretensión reintegro de beneficios sociales muestra entre los años 1999 al 2004 una disminución gradual; en el año 1999 representa un 48% del total y en el 2004 alcanza un 20%, decreciendo un 28% entre estos años.

Para culminar, el ítem de otros de manera similar que en la mayoría de las pretensiones estudiadas ha tenido fluctuaciones porcentuales, pero en comparación a las otras esta no ha sido muy notoria, en el año 1999 éste ítem representaba el 36% del total y en el 2004 llega a representar el 33%; es decir, existe una variación poco apreciable de 3%.



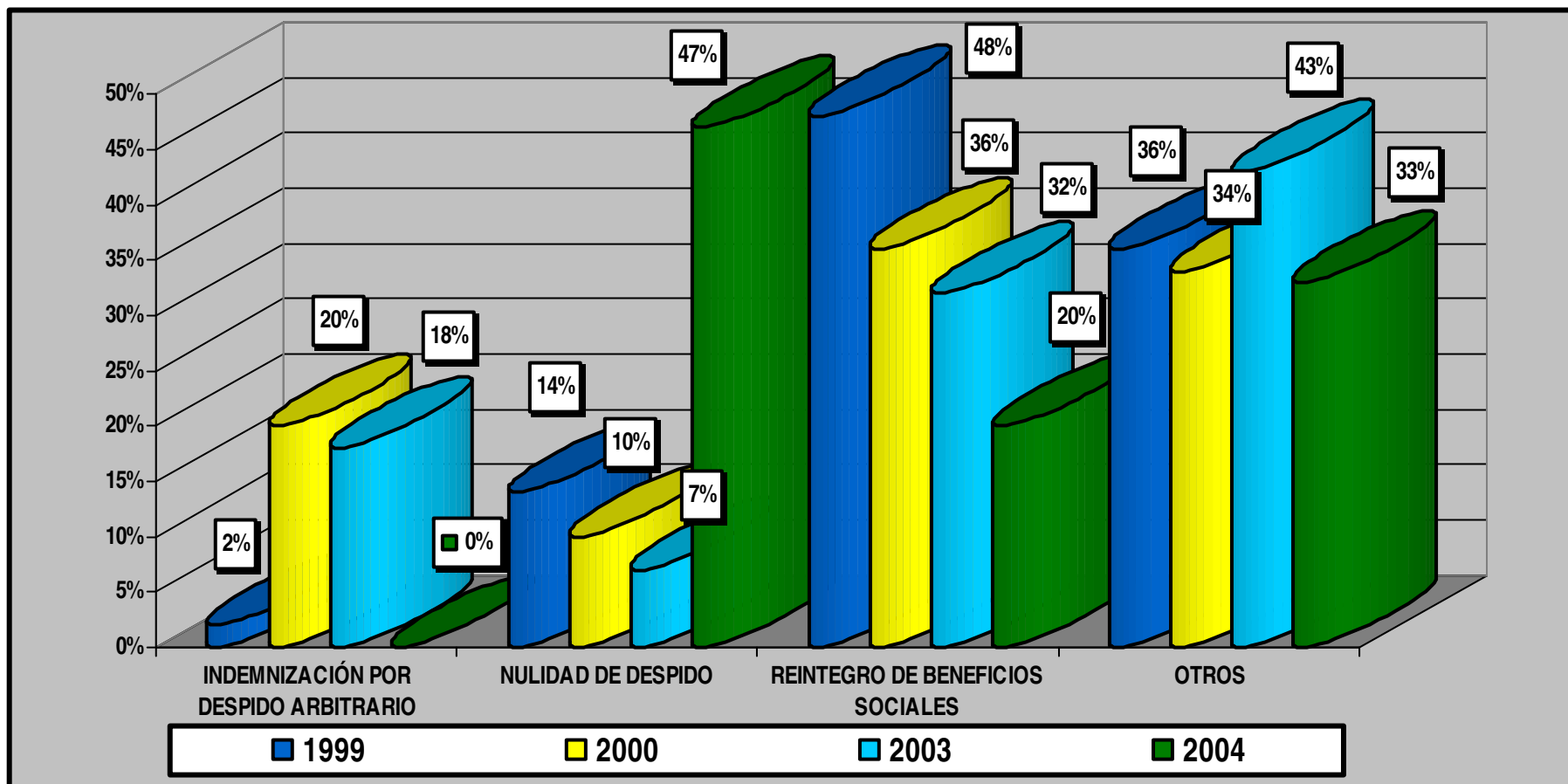
## PRETENSIONES POR AÑOS EN CASACIONES FUNDADAS

Gráfico 57



## PRETENSIONES POR AÑOS EN CASACIONES FUNDADAS

Gráfico 58



Finalmente, para acabar con nuestros cuadros comparativos, tenemos los **gráficos 59 y 60** que nos muestran el estudio estadístico de la última categoría referente a las casaciones declaradas fundadas; en ellas se visualiza de manera clara como las causales de violación de la ley e incorrecta aplicación de la ley que fueron derogados por la ley 27021 y que tenían un porcentaje considerable en el año 1999 va decreciendo gradualmente cada año llegando al año 2004 con 0%.

La única causal que ha tenido un crecimiento gradual ha sido la inaplicación de la norma que en el año 1999 representaba el 3% y en el 2004 alcanza el 34%; incrementándose un 31% entre estos años.

Las demás causales, incluida la vulneración al debido proceso, han tenido fluctuaciones; la causal de interpretación errónea de la ley sufre una baja porcentual de 13% entre 1999 al 2004; existiendo un decrecer entre 1999 y 2000 del 6% luego aumenta en el 2003 representando el 21% cerrando con un 12% en el 2004.

La causal de contradicción jurisprudencial entre los años 1999 y 2000 disminuye un 18%, pero los años próximos crece gradualmente en el 2003 alcanza el 19% y en el 2004 tiene el 31% del total.

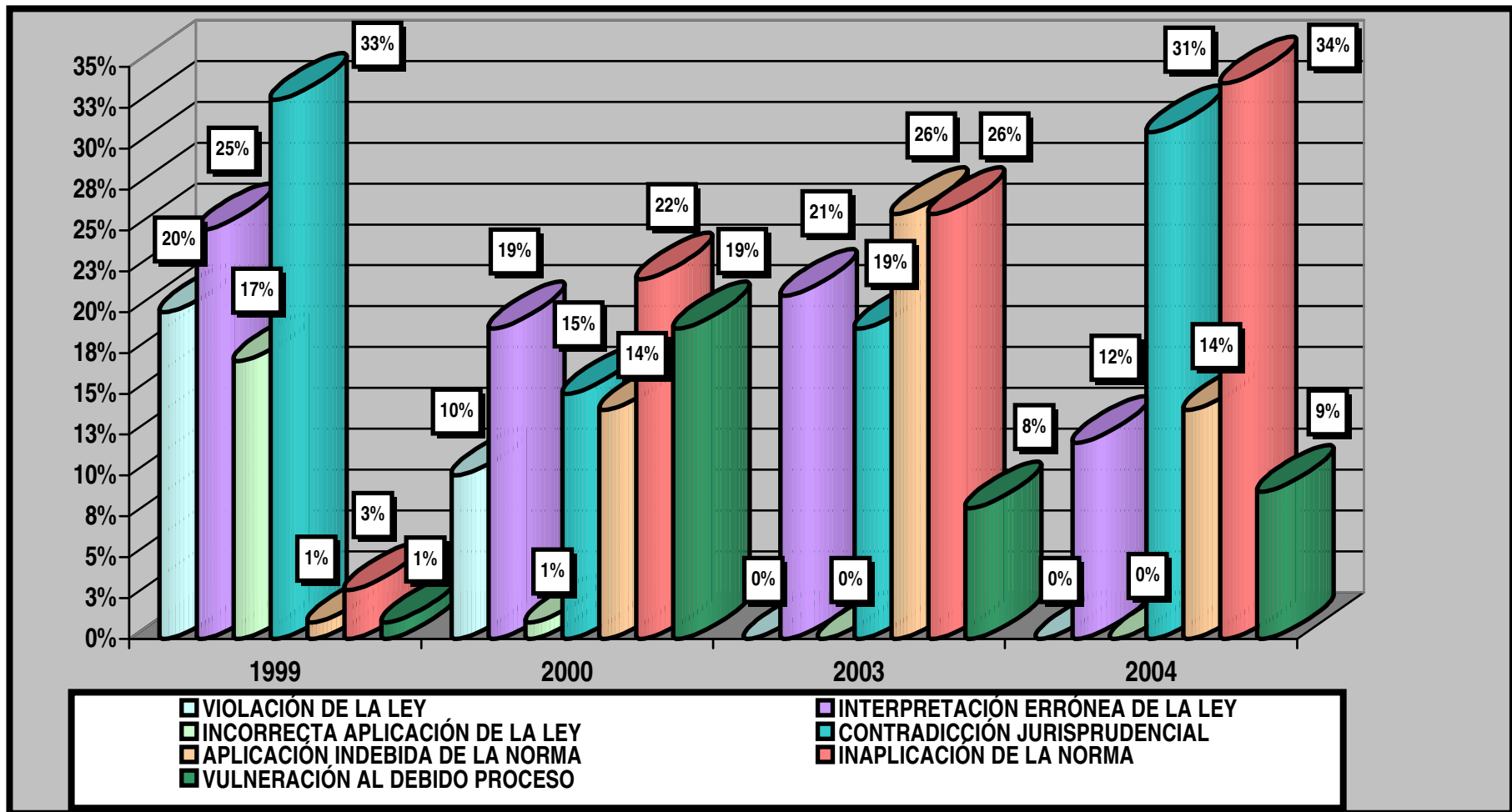
La causal de aplicación indebida de la norma por su parte que en el año 1999 tenía el 1% para el 2000 crece hasta alcanzar el 14%, siguiendo con su crecimiento hasta el 2003, año en que representa un 26% del total; pero, en el 2004 sufre un descenso de 12% alcanzando solamente el 14% del total.

Para cerrar con nuestro análisis en porcentajes tenemos el caso de la causal de vulneración al debido proceso no citada expresamente en la Ley Procesal de Trabajo, pero que fue materia de planteamiento de los abogados para interponer su recurso de casación; la misma que luego de ser evaluado por la Sala Suprema fue avalada por ésta, declarando fundado el recurso. Tenemos que en el año 1999 esta figura representa el 1% en el 2000 tiene un alza de 18%, en el 2003 sin embargo solamente cuanta con el

8% y cierra este cuadro con la presencia de esta causal con el 9% en el año 2004.

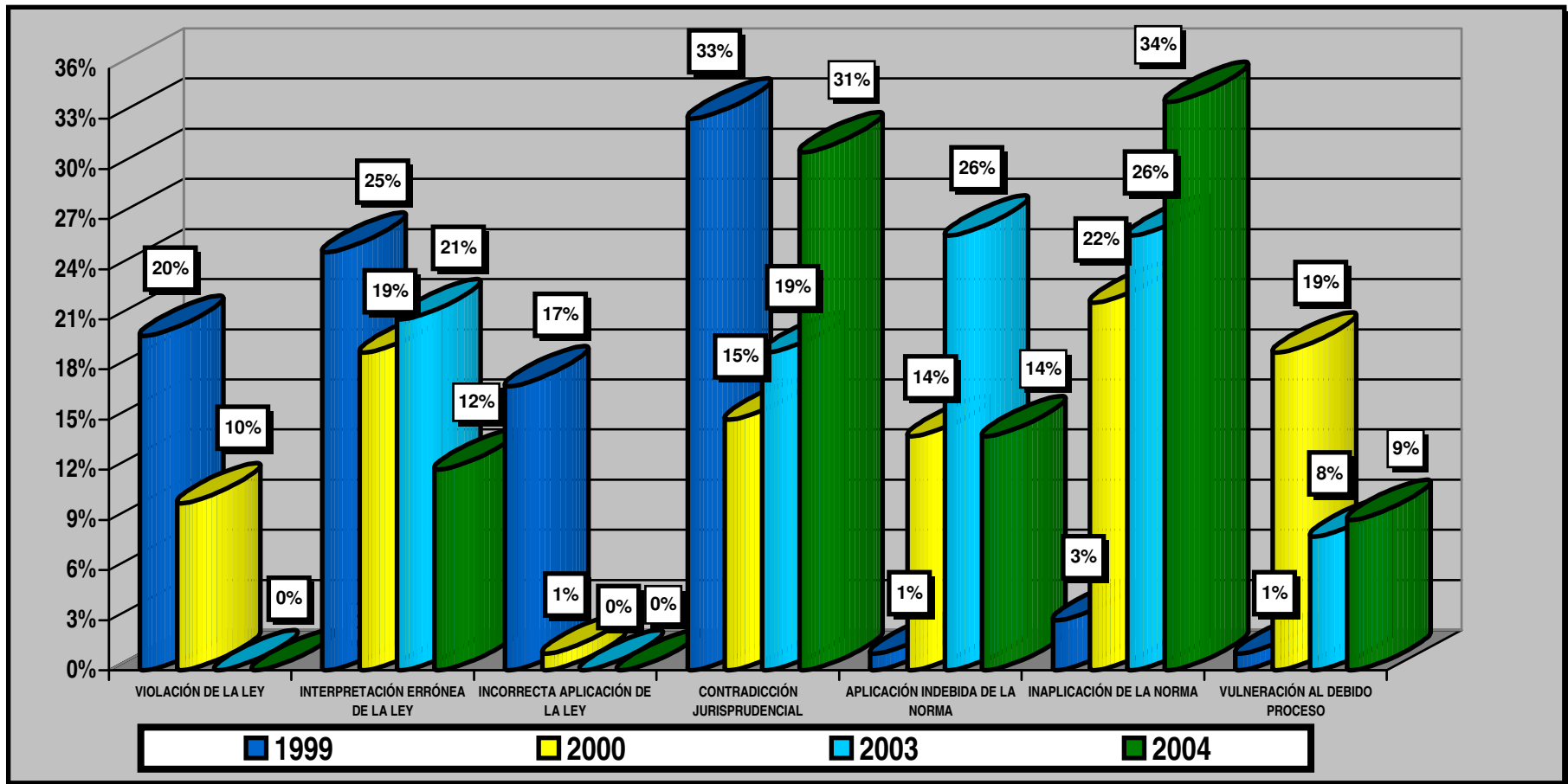
## CAUSALES POR AÑOS EN CASACIONES FUNDADAS

Gráfico 59



## CAUSALES POR AÑOS EN CASACIONES FUNDADAS

Gráfico 60





## **5. ANALISIS DE LAS CAUSAS POR LAS CUALES LA SALA SUPREMA OPTA POR LA IMPROCEDENCIA O PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION.**

### **5.1. Análisis de las Casaciones Declaradas Improcedentes**

Para el análisis de este tipo de resoluciones, hemos visto conveniente efectuar un estudio en base a las causales determinadas por la Ley Procesal de Trabajo, tomando en consideración las Leyes 26636 y la Ley 27021, ésta última que efectúa una variación referente a las causales que son materia de interposición del recurso de casación laboral.

De la parte doctrinaria de esta tesis se ha determinado que las causales por la similitud de sus conceptos y objetivos, se pueden agrupar en cuatro grupos:

- a)** Violación de la Ley o inaplicación de la norma de derecho material.
- b)** Incorrecta aplicación o aplicación indebida de una norma de derecho material.
- c)** Interpretación errónea de la ley o una norma de derecho material.
- d)** Contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción este referida a una de las causales anteriores o Contradicción Jurisprudencial.

Teniendo en consideración lo ya mencionado, debemos señalar que las causales taxativamente deberán cumplir dos tipos de requisitos: a) De forma (art. 57 de la LPT) y b) De fondo (art. 58 de la LPT), el incumplimiento de estos requisitos dará lugar a que



sean declarados Improcedentes. Por ello, de nuestra muestra de resoluciones improcedentes de los años 1999 y 2000 podemos determinar los motivos por las cuales la Sala Suprema se ha pronunciado por su improcedencia y si ellas están acorde con lo señalado por la ley.

#### **5.1.1. Requisitos de Forma (ART. 57 DE LA LPT).**

Respecto a estos requisitos no se ha podido encontrar en nuestra muestra ningún caso de improcedencia por no cumplir con lo señalado en este articulado. Estos requisitos están divididos en tres:

##### **a) Requisitos Formales de Tiempo, Modo y Lugar:**

- a.1) Tiempo:** Dentro del plazo de diez (10) días de notificado.
- a.2) Modo:** De conformidad a lo establecido en el art. 288 inciso 10 de la LOPJ, se deberá presentar por escrito y con firma de letrado.
- a.3) Lugar:** Ante la Sala Laboral o Mixta de la Corte Superior de Justicia.

##### **b) Requisitos Formales de Cuantía y Pago de Tasa Judicial:**

- b.1) Cuantía:** Se determina de conformidad a la recurrente: i) Si el recurrente es el *demandante*, el valor es aquella que resulta de la suma de todos los extremos de que contenga la demanda, sin adicionar a los intereses legales, costas ni costos y ii) Si es el *demandado*, debe superar las 100 URP.

**b.2) Pago de Tasa Judicial:** La diferencia radica  
i) Si lo plantea el *trabajador o ex trabajador*,  
es gratuito y ii) Si lo interpone el *empleador*,  
se aplica la tasa para los procesos civiles.

**c) Requisitos Formales de acuerdo a la Calidad de las Resoluciones:**

**c.1) Contra la sentencia expedidas en revisión:** Emitidas por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores.

**c.2) Contra sentencias no consentidas:** Siempre que la resolución adversa de primera instancia que haya sido confirmada por la recurrida no hubiere sido consentida.

**5.1.2. Requisitos de Fondo (ART. 58 DE LA LPT).**

Este tipo de requisitos deberán señalar lo siguiente:

**a) Indicar la causal:** Deberá señalar una o más causales establecidas por la Ley Procesal de Trabajo.

Aproximadamente en una cuarta parte de nuestra muestra se ha podido determinar que los abogados han recaído en este motivo, por lo cual sus recursos han sido declarados improcedentes. Dentro de las deficiencias ejercidas por los abogados con esta causal tenemos:

**a.1) No determinaron causal:** A comparación a la deficiencia que determinaremos posteriormente ésta es aquella donde más recaen los abogados al momento de

efectuar sus casaciones. Como ejemplo tenemos: cas. 911-98/Cono Norte del 19/04/99, cas. 1219-2000/Lima del 22/11/2000, cas. 1213-00/Lambayeque del 09/11/2000, cas. 1425-00/Callao del 27/11/2000, cas. 53-98/Chincha del 04/04/2000,

**a.2) Determinaron causales procesales:** En ella se encuentra la causal de ***Vulneración al Debido Proceso*** que en el Código Procesal Civil se encuentra reconocida para poder sustentarla en casaciones civiles; la Sala en la mayoría de los casos en donde se plantea esta causal la declaran improcedentes de plano (cas. 2367-98/Ucayali del 17/09/99, cas. 824-00/Ica del 26/10/2000, cas. 152-99/Lima del 22/02/2000, cas. 167-99/Lambayeque del 24/02/2000) .

En algunos casos los abogados lo han planteado sustentando la viabilidad de ser evaluado por cuanto el Código Procesal Civil es aplicable por supletoriedad conforme lo señala la Tercera Disposición Final de la Ley Procesal de Trabajo en concordancia con la Primera Disposición Complementaria del Código Procesal de Trabajo. Sin embargo la Academia Nacional de la Magistratura cuando efectuaron el estudio las causales de casación determinaron que no es aplicable la regla de supletoriedad en esta materia (cas. 1185-2000/Ucayali del 09/11/2000, cas. 1257-2000/La Libertad del 16/11/2000, cas. 948-

99/Cajamarca del 01/09/2000, cas. 988-99/Loreto del 06/09/2000).

A pesar de ello, existe casos en las cuales han sido considerados la aplicación de la vulneración del debido proceso como causal de las casaciones y que fueron posteriormente evaluados por la Sala sobre el fondo, ello ha sido posible cuando consideraron que existe afectación a la totalidad del proceso o no se podría realizar una evaluación de fondo del asunto, sin que se tomara en cuenta estos aspectos adjetivos. Pero estos casos excepcionales serán analizados cuando se trata del análisis de las casaciones que fueron declarados procedentes por esta causal.

**b) Se refiera a una norma de derecho material:** Ello de conformidad a los fines de la casación laboral de conformidad a lo establecido en el art. 54 de la LPT. Referente a este punto se puede mencionar que la Sala da a conocer algunos alcances sobre algunos tipos de normas:

**b.1) Normas constitucionales:** La Sala ha desestimado las casaciones que se encuentran planteadas en base a normas constitucionales por considerarlas ***genéricas***, agregando que solamente son procedentes cuando existe incompatibilidad entre ésta y la norma legal ordinaria (Cas. 1568-98/La Libertad del 21/06/99, cas.1426-00/Callao del 28/11/00, cas. 1191-00/Cuzco del 09/11/2000, cas. 1141-00/Moquegua-Ilo del 13/11/2000)

**b.2) Normas procesales:** Cuando la Sala ha podido detectar que se ha aplicado normas procesales, aquellos que implican el ejercicio de una acción, lo han considerado sin mayor análisis improcedente; entre ellos tenemos las casaciones que se fundamentan en las leyes procesales como el código procesal civil (cas. 551-2000/Huaura del 06/10/2000, cas. 999-99/Cono Norte del 07/09/2000, cas. 551-00/Huánuco del 06/10/2000, cas. 1263-00/Lima del 14/11/2000, cas. 1369-00/Tacna del 22/11/2000, cas. 1426-00/Callao del 28/11/2000).

De igual manera cuando se refiere a los ***Convenios Colectivos o Laudos Arbitrales***, a las cuales la Sala ha considerado que no son factibles de análisis por ser acuerdos bilaterales entre las partes, es decir es una norma convencional (cas. 793-98/Lima del 22/09/99, cas. 125-98/Lima del 11/04/2000) y porque de conformidad con lo señalado por el Supremo Tribunal no se constituyen como normas materiales (cas. 726-00/Moquegua del 19/10/2000, cas. 391-98/Lima del 04/09/2000, cas. 717-00/Puno del 18/10/2000, cas. 1424-00/Santa del 27/11/2000); en este caso existe una *excepción cuando se encuentra relacionada a las normas de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo*.

Pero lo sorprendente en el análisis de la muestra es que casi la tercera parte de las casaciones fueron declaradas improcedentes no por los dos motivos antes mencionados, sino

simplemente porque se **olvidaron de señalar la norma a ser analizada**; es así que señalan solamente la causal pero no la norma (cas. 1530-98/Santa del 3/12/99, cas. 969-99/Loreto del 05/09/2000, cas. 1021-99/La Libertad del 03/09/2000, cas. 701-00/Del Santa del 17/10/2000, cas. 727-00/Junin del 19/10/2000, cas. 1183-00/Ica del 08/11/2000, cas. 1403-00/Huaura del 24/11/2000) y en otras peores no determinan ni una ni otra (cas. 911-98/Cono Norte del 19/04/99, cas. 950-99/Callao del 01/09/2000, cas. 925-00/Sullana del 03/11/2000, cas. 166-98/Puno del 12/04/2000); encontramos incluso que **han determinado normas materiales que fueron derogadas** antes que fuera planteada la demanda (788-2000/Lima del 24/10/2000, cas. 849-00/Lima del 26/10/2000) y finalmente encontramos en la muestra que **han señalado normas inexistentes** como por ejemplo en la cas. 454-98/Lima del 13/04/99 se menciona el Decreto Legislativo 728, art. 62 inciso c).

Para los fines de la Casación **no se puede evaluar los hechos**, ante tal situación fueron declarados improcedentes sin mayor evaluación (cas. 882-2000/La Libertad del 30/10/2000, cas. 1157-99/Callao del 15/09/2000, cas. 52-00/Tacna del 18/09/2000, cas. 860-00/La Libertad del 27/10/2000, cas. 852-00/Callao del 26/10/2000, cas. 45-98/Chincha del 04/04/2000), por cuanto la casación es un recurso extraordinario que tiene fines específicos relacionados únicamente con la aplicación de una norma de derecho material; entonces, cuando se busca **revalorar los medios probatorios**, estamos ante una situación de discusión de las llamadas reglas de sana crítica

que fueron sometidos a un control lógico y de razonabilidad por los magistrados que lo evaluaron en las dos instancias anteriores, y ante esta situación, el pronunciamiento de la Sala Suprema fue firme al señalar que no procede casación ante estos casos por encontrarse fuera de los fines de la casación laboral, teniendo claro que debemos señalar que este motivo fue la causante de la mayor cantidad de declaraciones de improcedencia dentro de nuestra muestra (cas. 75-99/Lambayeque del 04/05/2000, cas. 981-99/Lima del 05/09/2000, cas. 861-00/La Libertad del 27/10/2000, cas. 1190-00/Del Santa del 09/11/2000, cas. 737-00/Moquegua del 19/10/2000, cas. 1382-00/Puno del 33/11/2000).

La Sala también se ha pronunciado sobre la no viabilidad de pronunciamientos vía casación, sobre **temas sustantivos (doctrinarios)**, entre ellos tenemos los principios generales de Derecho (cas. 805-2000/Tacna del 25/10/2000, cas. 1114-00/Lima del 08/11/2000, cas. 57-99/Junin del 03/05/2000) o conceptos jurídicos como la de refrigerio (cas. 916-2000/Lima del 02/11/2000, cas. 1282-00/La Libertad del 15/11/2000, cas. 787-00/Lima del 24/10/2000).

**c) Plantearse con claridad y precisión:** Para ello, se debe entender por:

**c.1) Claridad:** Es especificar explícitamente en qué consiste el vicio señalado, haciendo un análisis razonado y crítico de los motivos del pronunciamiento y luego explicar la propuesta para corregirlo. Asimismo, el

mismo vicio no puede recaer en dos o más causales, por cuanto las mismas causales son implicantes y excluyentes entre sí; de presentarse tal situación, sería declarado improcedente por falta de claridad.

Las casaciones que no son planteados, teniendo en consideración lo antes señalado, fueron declaradas improcedentes de conformidad a lo señalado en el art. 58 de la Ley Procesal de Trabajo (cas. 109-98/Lima del 06/04/2000, cas. 1165-99/La Libertad del 15/09/2000, cas. 716-00/Puno del 18/10/2000, cas. 864-00/Moquegua-Ilo del 31/10/2000).

Se ha encontrado, también, casos en las que se ha planteado, como sustentación de su casación, leyes generales sin determinar la norma específica; por lo tanto la Sala no puede efectuar un análisis sobre la pretensión (cas. 964-99/La Libertad del 04/09/2000, cas. 48-00/Callao del 18/09/2000, cas. 370-00/Del Santa del 29/09/2000, cas. 948-00/Lambayeque del 06/11/2000, cas. 1383-00/Huanuco del 24/11/2000).

Del estudio que se efectuado en las resoluciones se ha podido determinar que el problema más frecuente que han tenido los abogados fueron la de ***plantear dos o más causales sobre una misma norma***, olvidándose que ellas son implicantes y excluyentes entre sí; las más



abundantes fueron los que, equivocadamente, señalaban la interpretación errónea e incorrecta aplicación o aplicación indebida de una misma norma (cas. 1232-00/Moquegua del 13/11/99, cas. 1256-00/Lima del 14/11/2000, cas. 961-00/Moquegua-llo del 07/11/2000, cas. 866-00/Tacna del 27/10/2000, cas. 2000-00/Callao del 15/02/2000, cas. 1310-00/Junín del 17/11/2000, cas. 938-00/Del Santa del 03/11/2000).

Otra de las causas es aquella que al momento de ***fundamentar jurídicamente una demanda hacen uso de una norma que ellos posteriormente en su recurso de casación plantean que existe una aplicación indebida*** de la norma que ha servido de fundamento a su demanda, determinándose, así, una *incongruencia* (cas. 1242-2000/Moquegua-llo del 13/11/2000).

Encontramos, también, los casos en que ***equivocan las causales al momento de plantear su casación: determinan una causal, y al momento de fundamentarla, la realizan usando los argumentos utilizables para otra causal***; por ejemplo, plantea la interpretación errónea y luego fundamenta su aplicación indebida (cas. 1428-2000/La Libertad del 28/11/2000).

Adicionalmente, a estos casos encontramos aquellos en que se ***aplicaron normas que no son pertinentes al caso en cuestión***, por ejemplo, cuando se regulaba los beneficios de un trabajador que laboró en el sector minero y luego se aplica la norma para los trabajadores del sector público (cas. 1647-98/lca del 17/09/99).

**c.2) Precisión:** Se deberá efectuar esta explicación con cada una de las causales planteadas por cuanto ellas son autónomas entre sí; de usar los mismos argumentos para fundamentar dos o más causales, recaería en falta de precisión. Entre las casaciones que fueron declaradas improcedentes por no presentar la precisión pertinente tenemos cas. 970-98/Lima del 18/10/99, donde plantea los mismos argumentos para sustentar las causales de violación de la ley e interpretación errónea de una norma referente a la pretensión de reintegro de beneficios sociales; otra la encontramos en la cas. 732-98/Cuzco del 22/09/99, que determina los mismos argumentos a las causales de aplicación indebida, violación de la ley e interpretación errónea.

**d) Nexo de Causalidad:** De acuerdo a lo establecido en el art. 58 de la LPT, se deberá no sólo probar el perjuicio sufrido, sino también que *éste es consecuencia de que en la resolución se ha incurrido en un error de Derecho, es decir, una*

*relación de causalidad entre el error y el fallo emitido.*

En la mayoría de los casos se ha encontrado que ***no se ha señalado el nexo causal*** (cas. 2611-98/Piura del 01/10/99) y en otros casos se ha observado claramente que no existe un nexo de causalidad; así tenemos la ***conexión lógica entre pretensión y norma***, se ha planteado casos en que se señala una pretensión que no ha sido fundamentada con la norma especial dictada para tal materia, ejemplo los beneficios para los trabajadores mineros, ferroviarios (cas.881-99/La Libertad del 14/10/99, cas. 971-99/Chincha del 05/09/2000, cas. 1134-99/Lima del 14/09/2000).

Otras formas de faltas de nexo de causalidad es entre el ***vicio denunciado y el fallo***, que es el más común de encontrar; por ejemplo, aquél que se plantea como vicio la competencia de la Sala cuando se está evaluando los Beneficios Sociales (cas. 317-99/Lima del 06/04/99, cas. 1026-99/Lambayeque del 08/09/2000, cas. 1027-99/Junín del 08/09/2000, cas. 1297-00/Lima del 16/11/2000, cas. 1476-00/La Libertad del 30/11/2000, cas. 187-99/Piura del 09/05/2000), se tiene también aquéllos que carecen de fundamentación por cuanto el vicio denunciado ha sido sustentado en la sentencia como es el caso en que se denuncia la violación de la ley referente al pago de beneficios sociales y en la sentencia impugnada detalla claramente el modo, forma y sumas líquidas a pagar por periodo (cas. 1395-98/Chincha del 26/04/99).

La falta de **conexión lógica entre hechos/preensión/fallo**, es aquella que plantea en su argumentación hechos que según la defensa no han sido considerados para la dación de la sentencia, sin embargo, no concuerdan con la preensión planteada, pero si con el fallo, entonces se presenta una falta de congruencia (cas. 1342-2000/Lima del 21/11/2000, cas. 1285-00/Huaura del 16/11/2000).

- e) **Requisitos Específicos de la causal de Violación de la Ley o Inaplicación de la norma de derecho material:** Del estudio de nuestra muestra, se ha podido determinar que la Sala no equiparaba las causales de violación de la Ley con la de Inaplicación de la Norma, por lo menos no antes de la dación de la Ley 27021, es así como cuando estaba en vigencia la Ley 26636, la causal de violación de la ley era usada por los abogados para plantear, a través de ella, todo tipo de afectación que ellos consideraban haber sufrido con la sentencia materia de casación. Es así como dentro de las causas por las cuales son declaradas improcedentes son:

- e.1) **La norma denunciada haya sido aplicada en la sentencia:** Con ella da a conocer que debe existir en la sentencia materia de casación una norma material que fue violentada. La no existencia de esa norma material la hace factible de ser declarada improcedente (cas. 1935-98/Lima del 13/07/99, cas. 183-98/La Libertad del 13/04/2000).

**e.2) No se determina de qué manera se ha violado la ley:** En este caso, solamente se ha señalado que ha existido una violación de la ley material, pero no existía ninguna sustentación sobre este supuesto (cas.19-98/Arequipa del 13/09/99, cas. 1483-00/Piura del 30/11/2000, cas. 155-98/Lima del 12/04/2000, cas. 33-98/Del Santa del 04/04/2000).

Cuando la causal de violación de la Ley fue entendida como inaplicación de la norma, se debió evaluar adicionalmente:

**e.3) Determinar porqué la norma usada no es aplicable al caso:** Se debe sustentar de manera clara y precisa los motivos por los cuales la norma usada por los magistrados para sustentar la sentencia impugnada no es la adecuada (cas. 1389-2000/Huaura del 24/11/2000, cas. 850-00/Lima del 26/10/2000, cas. 1245-00/Moquegua-Ilo del 13/11/2000, cas. 1383-00/Huaura del 24/11/2000).

**e.4)Cuál es la norma aplicable al caso y el porqué de su aplicación:** En este caso, existen dos supuestos el primero es no determinar la norma aplicable (cas. 1067-98/Lima del 18/02/99,) y el segundo, que es que no fundamente jurídicamente el porqué de la aplicación de la norma sugerida (850-2000/Lima del 26/10/2000, cas. 1342-00/Lima del 21/11/2000, cas. 1385-

00/Chincha del 23/11/2000, cas. 140-98/lca del 11/04/2000).

**e.5) La norma citada no ha sido aplicada en la sentencia recurrida:** Referente a este requisito se puede decir que cuando una norma declarada inaplicada fue realmente usada por el legislador para sustentar su sentencia es declarada de plano, improcedente, ello es contrario con lo señalado en la causal de violación de la ley en su segundo punto; ahí se puede observar que la Sala, antes de la dación de la ley 27021, tuvo definiciones muy distintas entre estas dos causales (cas. 1426-2000/Callao del 28/11/2000, cas. 739-00/Chimbote del 19/10/2000, cas. 1322-00/Callao del 20/11/2000, cas. 1221-00/Moquegua del 10/11/2000, cas. 1384-00/Arequipa del 23/11/2000, cas. 1210-00/La Libertad del 09/11/2000).

**f) Requisitos Específicos de la causal de Incorrecta aplicación o aplicación indebida de una norma de derecho material:** Se debe efectuar previamente que :

**f.1) La norma denunciada haya sido aplicada en la sentencia:** Esto quiere decir que la norma que mencionamos que ha sido mal aplicada tiene que ser sustento de la sentencia recurrida, de no ser así no podemos mencionar que existe una aplicación indebida o incorrecta aplicación de la norma en cuestión. Existen casos en

que se ha planteado esta causal no habiendo usado la norma material en el sustento jurídico de la sentencia recurrida (cas. 140-98/Ica del 11/04/2000, cas. 886-00/La Libertad del 30/10/2000, cas. 962-00/Moquegua-Ilo del 07/11/2000, cas. 75-99/Lambayeque del 04/05/2000, cas. 197-99/Tacna del 11/04/2000).

**f.2) Que la norma es impertinente al caso en conflicto:** Ello quiere decir que se debe determinar expresamente los motivos de la disconformidad de la aplicación de la norma en el caso en cuestión, esta fundamentación jurídica debe ser clara y precisa. Se ha presentado casaciones en que los abogados no han sustentado los motivos por las cuales considera que la norma material no es aplicable en el caso sub-litis (cas. 451-99/Lambayeque del 15/05/2000, cas. 1051-00/Junín del 12/09/2000, cas. 884-00/La Libertad del 30/10/2000, cas. 796-00/Cuzco del 25/10/2000, cas. 700-00/Arequipa del 17/10/2000, cas. 1290-00/Lima del 16/11/2000).

**f.3) Señalar cuál o cuáles son las normas que sí son pertinentes y porqué:** En este caso, existen dos supuestos: el primero que no señala cuál o cuáles son las normas que son pertinentes, que en la muestra es unánime. Cuando se comete este error es declarado improcedente (cas. 726-2000/Moquegua –Ilo del 19/10/2000, cas. 770-00/La Libertad del 23/10/2000, cas.

1444-00/Piura del 28/11/2000, cas. 121-98/Huánuco del 03/04/2000, cas. 301-98/Chincha del 04/04/2000); el segundo es aquél que no sustenta el porqué estas normas son aplicables. Esto no ha sido encontrado en el estudio de la muestra que fue materia de nuestro análisis.

**g) Requisitos Específicos de la causal de Interpretación Errónea de la ley o una norma de derecho material:** Se debe efectuar previamente que :

**g.1) Que la norma haya sido aplicada en la sentencia:** Esto quiere decir que la norma señalada como mal interpretada debió servir de base jurídica para la sentencia recurrida, de no ser así, será declarada de plano improcedente.

Este motivo ha sido el más frecuente por el que fueron declarados improcedentes las casaciones cuando plantearon esta causal (cas. 265-98/Ica del 11/02/99, cas. 130-99/La Libertad del 09/09/2000, cas. 799-00/Cuzco del 27/10/2000, cas. 1185-00/Ucayali del 09/11/2000, cas. 720-00/Lima del 18/10/2000, cas. 754-00/Callao del 20/10/2000)

**g.2.) Establecer cómo debió ser la correcta interpretación:** Como se sabe, existen varias formas de interpretación y que se deberá evaluar cada norma para saber cuál es el sentido que busca alcanzar con su



dación y aplicar su determinada interpretación. En este caso, no se planteado el tipo de interpretación jurídica aplicable a la norma evaluada (cas. 1361-2000/Callao del 22/11/2000, cas. 1139-00/Lambayeque del 14/09/2000, cas. 895-00/Moquegua-llo del 31/10/2000, cas. 1258-00/Lima del 14/11/2000, cas. 1406-00/Tacna del 27/11/2000).

**g.3) Fundamentar los métodos y criterios de interpretación:** En este caso determinando, se debe determinar cuál es la interpretación aplicable a la norma en cuestión, que deberá ser sustentada de manera clara y precisa.

En gran parte de los casos, los abogados plantean cual sería la forma de interpretar la norma material, pero luego no sustentan la interpretación planteada, es decir, no mencionan el porqué se deberá interpretar de la manera como ellos lo plantean y no como la Sala lo ha efectuado (cas. 709-2000/La Libertad del 18/10/2000, cas. 179-00/Junín del 13/04/2000, cas. 149-99/Lima del 12/04/2000, cas. 192-99/lca del 12/05/2000).

**h) Requisitos Específicos de la causal de Contradicción Jurisprudencial:** Se deberá:

**h.1) Verificar que el pronunciamiento contradictorio guarde *similitud* objetiva con el tema en debate:** Se debe señalar

primeramente en que consiste la similitud, de no ser así será declarada por la Sala improcedente (cas. 1443-2000/Cuzco del 28/11/2000). La mayor parte de las casaciones que fueron declaradas improcedentes en nuestra muestra fue por no cumplir con este requisito. La similitud puede ser:

**i) Por tema:** Se refiere a que debe existir similitud en las pretensiones, entre las casaciones que fueron declaradas improcedentes por no cumplir este requisito, tenemos la cas. 393-98/Lambayeque del 13/11/2000, cas. 1355-2000/La Libertad del 03/11/2000, cas. 1443-00/Cuzco del 28/11/2000, cas. 143-98/Del Santa del 11/04/2000, cas. 123-98/Lima del 11/04/2000.

**ii) Por norma:** Debe existir una similitud en las normas que fueron mal aplicadas o interpretadas o inaplicadas en el caso concreto, ello de conformidad a lo establecido en el art. 57 inc. f) de la LPT.

En este caso debe existir la similitud referente a la norma material utilizada por la Sala al momento de sustentar su fallo, pero esta similitud tiene como antecedente que se haya cumplido la similitud de pretensiones, esta es la más frecuente entre las dos.

**h.2) Fundamentar en qué consiste la contradicción:** Señalada la similitud, se deberán sustentar, de manera clara y

precisa, los motivos por los cuales estas resoluciones o ejecutorias son contrarias con la sentencia impugnada (cas. 1427-2000/La Libertad del 28/11/2000, cas. 915-00/Lima del 02/11/2000, cas. 1410-00/Del Santa del 27/11/2000, cas. 393-98/Lambayeque del 13/11/2000, cas. 1320-00/Callao del 20/11/2000).

**h.3) Acompañar copias de dos o más resoluciones contradictorias:** Ello para cumplir lo establecido en el art. 57 inc. f) de la LPT, que determina el Principio de Pluralidad. Puede ocurrir que simplemente no anexe copias de las ejecutorias que sirven de sustento a su recurso (cas.1380-98/La Libertad del 17/09/99, cas. 1021-00/La Libertad del 08/09/2000) o anexe una sola ejecutoria con la cual no cumple con el requisito de pluralidad, que es una de las causas más numerosas por la cual se declaran improcedentes los recursos planteados por esta causal (cas. 151-99/Lambayeque del 10/05/2000, cas. 992-99/Lima del 06/09/2000, cas. 944400/La Libertad del 03/11/2000, cas. 181-99/Piura del 11/05/2000, cas. 205-99/Cajamarca del 17/05/2000).

## **5.2. Análisis de las Casaciones declaradas Procedentes: Infundadas y Fundadas.**

Para efectuar el análisis de fondo de las casaciones declaradas procedentes (fundadas e infundadas), se ha visto conveniente realizarlo en base a las pretensiones planteadas; y de

conformidad a lo señalado en los cuadros estadísticos de esta tesis se ha podido determinar que las pretensiones que fueron evaluados en mayor número por la Sala Suprema Constitucional y Social durante todos los años que fueron materia de estudio de nuestra muestra fueron: indemnización por despido arbitrario, nulidad de despido y reintegro de beneficios sociales; las otras pretensiones conjuntamente determinan una minoría, motivo por el cual fueron agrupados en los gráficos estadísticos en el rubro de otros.

También en esta parte trataremos de explicar el porqué del pronunciamiento de parte o de oficio por la Sala, referente a la causal de Vulneración al Debido Proceso, causal procesal que no se encuentra regulado en la Ley Procesal de Trabajo, pero que la Sala consideró que era factible de ser revisada de fondo, por lo que establecimos a través de nuestra muestra, los casos en los que Gpueden ser factible de pronunciamiento y a la vez declarados fundados.

Finalmente, cabe mencionar que todas las afirmaciones se encontrarán sustentadas en las casaciones que señalaremos al final de cada una de ellas; analizaremos en cada pretensión una o más resoluciones que nos parecieron que fueron vitales en nuestro estudio sobre un tema polémico, la misma que ha causado controversia entre los abogados y la Sala; por su falta de comprensión o porque el momento social y jurídico así lo ameritaban.

#### **5.2.1. Indemnización por Despido Arbitrario**

La Sala ha tenido, a través de los cuatro años de estudio, opinión unificada referente a los siguientes temas:

- a) Remuneraciones Variables o Comisiones:**  
Establecieron que el cálculo de la indemnización de

una persona que recibía remuneraciones variables o por comisiones se calcula *con las últimas sumas efectivamente recibidas y no aquellas recibidas en el periodo calendario* que precede al despido, ello porque puede existir que antes del despido lo hubiere precedido un lapso de tiempo en las cuales no hubiere recibido suma alguna por su labor y éstas no pueden ser consideradas para el cálculo de la indemnización que por ley le corresponde (cas. 1372-98/Tacna del 12/07/99).

- b) Principio de Inmediatez:** Sobre este tema se debe considerar que la inmediatez debe ser entendida como la prontitud de la reacción del empleador para sancionar la falta cometida por el trabajador; *esta prontitud deberá hacerse efectiva desde el término de la investigación hasta la notificación de los cargos y no desde la fecha de la comisión de la falta con la fecha en la que realizó el despido efectivo del servidor* (cas. 3193-97/Puno del 30/06/99).

Esta determinación se encuentra sustentada en que se deberá probar fehacientemente la responsabilidad del actor o actores de la falta grave para luego cursar la Carta de Despido conforme lo señala la ley (cas. 708-2000/San Martín del 02/06/2003).

- c) Cumplimiento de las Formalidades en el Despido:** Cuando no se cumple las formalidades señaladas en el art. 31 y 32 del D.S. 003-97-TR, que son aquellas referentes a los actos previos para viabilizar un cese; aún cuando este sea un despido justo se convierte en uno arbitrario por la

afectación a un debido proceso; se deberá también considerar que los actos referentes a estos articulados son secuenciales, es decir que primero se aplica lo señalado por el art. 31 y si no se supera su deficiencia entonces se aplicará lo establecido en el art. 32 (cas. 875-2001/Lima del 09/11/2003).

- d) **Monto:** Se estableció que el monto a pagar por indemnización es de una remuneración y media ordinaria mensual por año laborado con un máximo de 12 remuneraciones; es decir, que la Sala ha determinado que por ley existe un tope en el pago de la indemnización (cas.1173-99/Cuzco del 17/12/99); también ha determinado que no existe reintegro sobre este monto (cas. 707-2002/Del Santa del 02/06/2003).
- e) **Reiterancia:** Conforme lo mencionado en el art. 25 inc. e) del D.S. 003-97-TR **no se necesita la reiterancia** por cuanto la falta consiste en asistir a laborar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes cuando por la naturaleza de la función o del trabajo sea considerada riesgosa (cas. 787-202/Junín del 11/07/2003).
- f) **Caducidad:** De conformidad a lo señalado en el art. 69 del D.S. 005-97-TR se determina que existe un plazo de caducidad para accionar judicialmente un caso de despido arbitrario y es de 30 días naturales de producido el hecho; ello se contabiliza desde la fecha en que ha recibido la carta de despido (cas. 482-97/Ayacucho del 25/06/99).

La Sala a comparación de las anteriores ha tenido como tema de controversia la siguiente:

- a) **El Cese Colectivo como despido arbitrario de una empresa considerada insolvente:** Este ha sido el tema que ha sido más debatido en cuanto a despido arbitrario se refiere; el sustento jurídico lo tenemos en la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 845 - Ley de Reestructuración Patrimonial, que a la letra dice:

*Quinta.- CESE COLECTIVO.-  
“El Administrador o Liquidador de empresas en estado de insolvencia declarado por la Comisión podrá cesar a los trabajadores de la empresa correspondiente para cuyo efecto cursará un aviso notarial con una anticipación de diez (10) días naturales a la fecha prevista para el cese”.*

Sobre la interpretación de esta Quinta Disposición se ha efectuado dos supuestos:

- i) *Primer Supuesto:* Menciona que el administrador que hace referencia a la norma no solamente se circunscribe a aquel nombrado por la Junta de Acreedores, sino que esta norma hace referencia al administrador nombrado con preexistencia a la Junta de Acreedores y ello desde la declaratoria de insolvencia; es decir el cese

puede efectuarse desde el momento en que queda consentida la resolución en que se declara en insolvencia la empresa y quien puede decidir ese inicio de procedimiento es el administrador vigente al momento de dicha declaración (cas. 793-2000/Lima del 25/10/2000).

Esta argumentación fue considerada válida por el Colegiado, tal es así que declara procedente y fundada la casación antes mencionada, que plantea la interpretación errónea de esta quinta disposición, la misma que en segunda instancia fue analizada de conformidad al segundo supuesto que a continuación detallaremos.

- ii) Segundo Supuesto:* El Liquidador o administrador designado por la Junta de Acreedores es el único encargado de cesar a los trabajadores, por cuanto es la Junta quien determina el destino de la empresa liquidándola o manteniéndola en actividad, por cuanto la declaración de insolvencia es solamente un estado de incertidumbre y a la vez esta es un paso previo para la reestructuración patrimonial; por lo tanto esta declaración no es suficiente para proceder al cese colectivo de trabajadores (cas. 1217-2000/Lima del 10/11/2000)

Esta sustentación fue realizado por la Sala Suprema para refutar la interpretación realizada por la parte



demandada, la cual fundamenta su postura con el primer supuesto, declarando infundada su causal de interpretación errónea y confirma lo señalado por la Sala Superior de Justicia de Lima.

Como se puede apreciar la Sala Suprema en este tema no ha cumplido con la finalidad política de Unificar su Jurisprudencia, por cuanto ella misma se contradice aplicando dos supuestos que son contradictorios y peor aún en resoluciones que fueron dictadas por el mismo colegiado con no menos de 15 días de diferencia.

De nuestra parte debemos señalar que esta Quinta Disposición Complementaria deberá entenderse en concordancia con diversos artículos de la misma norma; en primer lugar se deberá tener en cuenta que en su art. 60° que trata sobre el Acuerdo de Liquidación de una empresa en estado de insolvencia menciona que es la Junta de Acreedores quien nombra al Liquidador y, posteriormente en su art. 77° que se refiere a las atribuciones, facultades y Obligaciones del Liquidador determina de manera expresa, que es éste quien está facultado para cesar a los trabajadores; esta continuidad en los articulados es básico porque se deberá entender que son secuenciales.

Finalmente, cuando en la exposición de motivos se hace referencia a la quinta disposición complementaria se pone en conocimiento, de manera textual, que esta facultad de cesar trabajadores al amparo de un proceso concursal se

especifica en la presente Ley, señalándose como requisito un aviso notarial con una anticipación no menor a diez días a la fecha prevista para el cese.

Es así como en esta norma, al no encontrarse que el liquidador o administrador tiene como facultad cesar a los trabajadores desde el momento que es declarado insolvente, sin que ello sea aprobado por la Junta de Acreedores; entonces no se puede determinar su validez. En conclusión podemos mencionar que estamos de acuerdo con lo señalado en el segundo supuesto por lo argumentos ya señalados en ella.

#### **5.2.2. Nulidad de Despido**

Sobre esta pretensión debemos mencionar que las causales establecidas por ley están tipificadas en el art. 29 del Decreto Supremo 0036-97-TR. Este articulado dice expresamente:

*“Art. 29.- Es nulo el despido que tenga por motivo:*

- a) La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales;*
- b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad;*
- c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en el inciso f) del Artículo 25;*

*d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma;*

*e) El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del período de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al parto. Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, si el empleador no acredita en este caso la existencia de causa justa para despedir.*

*Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa."*

La Sala ha tenido a través de los cuatro años de estudio, opinión unificada referente a los siguientes temas:

- a) Los supuestos para declarar la nulidad de despido constituye un “numerus clausus”:** El trabajador para plantear la nulidad de despido no solamente tiene que acreditar que se trata de un despido sin motivo justificado sino que es vital e indispensable que exista convicción que el cese fue motivado por alguna de las causas señaladas en el artículo 29 del Decreto Supremo 0036-97-TR; la diferencia es que en la primera se le otorgará al trabajador una indemnización y en la segunda es el reestablecimiento de la relación laboral con el empleador (cas. 1192-97/Callao del 13/05/99).

Por lo tanto no se puede acreditar por ejemplo que existe una discriminación por su edad y que por este motivo fue despedido (cas. 164-2004/Lima del 20/07/04).

- b) **Plazo para presentar descargos:** Cuando el trabajador no ha efectuado sus descargos en el plazo señalado por ley, establecido en el art. 31 del D.S. 003-97-TR entonces por el Principio de Inmediatez se considera que esta ha sido aceptada por el trabajador. (cas. 744-2000/Ica del 20/10/2000).
- c) **Movilizaciones reiteradas:** No pueden considerarse como falta grave por motivo de paralización intempestiva aquellas movilizaciones que se efectuaron fuera de la jornada de trabajo (cas. 324-2003/Lima del 07/09/2004).

Además cabe recalcar que esta causal de despido tiene como condición que debe ser verificada fehacientemente con el concurso de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o en su defecto de la Policía o de la Fiscalía si fuere el caso, ello se encuentra establecido en el art. 25 inc. a) del D.S. 003-97-TR.

- d) **Protección Sindical:** La protección sindical se justifica por la libertad sindical y negociación colectiva reconocida por la Constitución Política del Estado en su artículo 28° y, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo. Se ha sustraído de la muestra las siguientes aseveraciones, en las cuales no ha existido mayor dificultad, por existir una sustentación jurídica clara:

*i)* La libertad sindical no puede ser limitada ni restringida, ello amparado en el art. 28° num 1 de la Constitución, asimismo determinados trabajadores no pueden ser despedidos ni trasladados a otro establecimiento de la misma empresa, sin causa justa debidamente demostrada o sin su aceptación; ésta última de conformidad al art. 30 del Decreto ley 25593 (cas. 827-2002/Lima del 23/07/2003).

*ii)* Después de haber transcurrido más de un año de haber concluido el proceso donde el trabajador actuó como dirigente sindical, este no puede atribuir su despido por este motivo (cas. 199-2000/Lambayeque del 25/09/2000).

*iii)* Cuando las injurias se encuentran fundamentadas por razones de origen laboral y que son de conocimiento general como por ejemplo el retraso de sus remuneraciones y de la compensación por tiempo de servicios, entonces en este caso no incurre en falta grave (cas. 374-98/Lima del 04/05/2000).

*iv)* La organización sindical deberá enviar a la empresa y a la autoridad administrativa de trabajo una comunicación previa señalando el listado de sus dirigentes con la finalidad de que se haga efectiva la protección sindical para ellos. Sin embargo, de no ser así también se encontrarían protegidos por el derecho de libertad sindical señalado por la Constitución y su aplicación difuso (cas. 827-2002/Lima del 11/06/2004)

El punto controversial entre los abogados y la Sala sobre la pretensión de nulidad de despido, ha sido referente a la causal señalada en el inciso c) del art. 29 del D.S. 003-97-TR: **Presentar queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes**; sobre este inciso se deberá evaluar diversos temas, los mismos que fueron sustentados por la Sala en diversas resoluciones llegando a determinarse lo siguiente:

*i) Las autoridades competentes:* Sobre este tema se ha discutido sobre la calidad de cada uno de ellos y su competencia, además si es que en primer lugar se debería denunciar ante la vía administrativa y luego judicial; llegándose a concluir que para los fines de la aplicación de este artículo es indistinto que se aplique ante cualquiera de ellos a través de una queja o denuncia judicial.

Por tal motivo cuando se hace referencia a autoridades competentes se hace referencia a las autoridades administrativas y judiciales de trabajo (cas. 663-2002/Lambayeque del 15/04/2003).

*ii) La actitud o conducta del empleador que evidencien el propósito de impedir el reclamo de sus trabajadores:* La probanza de esta actitud estará a cargo del o de los trabajadores que interponen la denuncia o queja, además la misma tiene que versar sobre temas laborales derivados de la relación de trabajo o de sus derechos fundamentales y no de otra índole (cas. 800-2002/Lima del 11/06/2004).

*iii) Los alcances de interponer una queja o proceso judicial:* Esta debe tener en consideración tres requisitos (cas. 862-2001/Callao del 07/08/2002:

- a)** Que la queja presentada sea de naturaleza laboral en defensa de los derechos reconocidos por la ley y no por el ánimo de perjudicar al empleador o para tener como medio de prueba para poder defenderse con posterioridad del despido por causa justa.

Entre ellas podemos mencionar por ejemplo que se denuncie la inexistencia de planillas que diera lugar a una visita de inspección judicial por el Ministerio de Trabajo (cas. 749-2002/Lima del 02/06/2003). Asimismo no se podría respaldar la presentación de una queja basada en injurias de una representante sindical, las mismas que no tienen sustento; en este caso estaríamos ante una falta grave que diera lugar a un despido justificado donde los alcances de una protección sindical no es amparable (cas.728-99/Lima del 16/08/99).

- b)** Que el despido sea con posterioridad a la denuncia o queja y en un plazo cercano de tal manera que se compruebe que ello es un acto de represalia por parte del empleador.

El acto de represalia efectuado por el empleador contra el o los trabajador(es) que efectuaron la denuncia o queja debe ser sustentado y comprobado con la finalidad de probar la existencia del nexo de causalidad entre la denuncia y el despido. Caso contrario estaríamos ante un caso de despido injustificado teniendo como consecuencia únicamente la indemnización designada por ley (cas. 1705-97/callao del 07/05/99).

- c) Que, el empleador no haya motivado expresamente su decisión de despido al trabajador.

### 5.2.3. Reintegro de Beneficios Sociales

Para hacer el estudio de esta pretensión debemos considerar que ella incluye varias sub-pretensiones que son: compensación de tiempo de servicios, remuneraciones insolutas, reintegro de gratificaciones (fiestas patrias y navidad), reintegro por horas extras, reintegro de remuneraciones, asignación vacacional, FONAVI y pago de utilidades.

Este análisis no se efectuado separadamente de cada uno de los beneficios que lo integran, sino que se evaluó de manera conjunta. Los puntos que de alguna manera han sido materia de controversia y la Sala lo ha sustentado dando una opinión clara y precisa sobre ellos son las siguientes:

- a) **Remuneración Mínimo Vital:** Se ha establecido que ella está compuesta por el Ingreso Mínimo Vital, Bonificación de Movilidad y la Bonificación Suplementaria Adicional (cas. 811-98/Lima del 01/07/99).
- b) **Disfrute extemporánea del Descanso vacacional:** El pago de indemnización por descanso vacacional que se genera cuando el trabajador no ha gozado de este beneficio después de un año de labor continua, no fenece o exime cuando el trabajador lo disfruta a posterioridad; la indemnización es una sanción por el incumplimiento del empleador de no conceder el



descanso físico señalado por ley (cas. 1633-98/La Libertad del 25/12/99).

**c) Triple Remuneración por Omisión de Descanso**

**Vacacional:** La Sala Suprema ha determinado que las empresas públicas como la Telefónica del Perú S.A, que sometieron a sus trabajadores al régimen laboral de la actividad privada se rigen por el decreto ley 18445, que determina el pago de una triple remuneración por la omisión de no gozar del descanso vacacional (cas. 907-98/La Libertad del 01/09/99).

**d) Programa de Cese Colectivo y el Programa de**

**Reducción de Personal Excedente:** Estos dos programas son diferentes entre si y aunque tienen la misma finalidad que es la disminución de personal y en ambos casos es planteado por el empleador no tienen los mismos beneficios; porque, los que se encuentran en el primer programa pueden ser factible de recibir un incentivo por parte del empleador y en el segundo no cabe esa posibilidad.

Podría suceder también que el trabajador que se encuentra en el listado del primer programa también puede encontrarse en el del segundo programa, pero puede ocurrir también que sea considerado solamente en el segundo programa; esta diferenciación se encuentra bajo la potestad del empleador (cas. 1702-98/Lima del 01/07/99).

**e) Naturaleza del CTS:**

Esta es correlato de haber mantenido vínculo laboral con la empresa que lo otorga (cas. 2403-97/Santa del 05/07/99), la misma

que deberá ser pagado por el empleador al trabajador íntegramente y con dinero en efectivo (cas. 107-97/Chimbote del 30/06/99).

El monto que recibiera el trabajador de parte del empleador por su CTS de un primer vínculo laboral y que luego firmara un nuevo contrato, será considerado como un anticipo de la misma, ello siempre y cuando cumpla con la condición de que el nuevo contrato sea de plazo fijo (cas.1141-97/Lima del 04/06/99).

Cuando un obrero pasa a calidad de empleado se deberá evaluar para el cálculo de su CTS, los tiempos en que gozaron de una condición y de la otra; determinando en cada caso las leyes aplicables en cada lapso de tiempo (cas. 3801-97/Lima del 14/06/99).

No se puede revisar los depósitos que el empleador ha efectuado y no pueden ser reexaminados por el juzgador, caso contrario atentaría contra el espíritu de la norma señalado en el artículo 2 del Decreto Legislativo 689 (cas. 1266-2000/Lima del 15/11/2000).

- f) **Personal de Confianza:** Las personas que ocupan cargo de confianza no se encuentran legitimados para reclamar beneficios provenientes de convenios colectivos (cas. 777/98/Lima del 22/09/99).
- g) **Actos de gravamen y variación:** La facultad de gravar la CTS hasta un determinado porcentaje, así como la variación o reducción de la

remuneraciones por no gozo de vacaciones por acuerdo de las partes no constituyen una irrenunciabilidad a su derecho sino un acto de libre disposición que efectúa el trabajador en su plena libertad (cas. 1219-98/Lima del 17/11/99).

- h) No aplicabilidad del sistema de indexación salarial:** Al no poderse aplicar este sistema de conformidad a la proporción y metodología establecida por el Ministerio de Trabajo señaladas para las empresa textiles por Resolución Ministerial, su incumplimiento se deberá corregir de acuerdo al *principio de razonabilidad*, la misma que se encuentra respaldada por el art. 132 de la Constitución Política, disposición que está dentro del ámbito de la contratación privada (cas. 785-96/Chincha del 13/02/99).
- i) Naturaleza de los Pactos efectuados por Negociación Colectiva:** Lo que se pacta por negociación colectiva es permanente salvo pacto en contrario; es decir la permanencia es la regla general y la excepción es la caducidad (cas. 1259-98/Chincha del 19/11/99).
- j) Imposibilidad de recibir Doble Beneficio:** Ha quedado imposibilitado la posibilidad de recibir simultáneamente los aumentos legales y los que proceden por Convenios Colectivos (cas. 1927-98/Lima del 21/09/99).
- k) Indemnización por Retención Indevida:** Conforme a lo señalado en el art. 52 del Decreto legislativo 650, el pago doble de las sumas indebidamente retenidas por el empleador es de

naturaleza indemnizatoria por el daño causado al trabajador, ello adicionado a los intereses legales moratorios; estos pagos serán distintas a la restitución de la suma indebidamente retenida (cas. 395-98/Lima del 15/09/99).

Los temas de controversia que sobre esta pretensión hemos hallado son:

- a) **Establecer reajustes económicos determinados por Decretos Supremos y que fueron logradas por Convenios Colectivos o Laudos Arbitrales:**  
Existe dos posturas sobre este tema:

*i) Primero:* La Sala menciona que para efectos de comprender la naturaleza de los acontecimientos que motivaron la expedición del D.S. 057-90-TR, que señala que Empresas comprendidas en la Ley 24948, Ley de Actividad Empresarial del Estado, así como entidades del Estado cuyos trabajadores se encuentran sujetos al régimen laboral de actividad privada, no podrán otorgar hasta el 31.Dic.90, incrementos de remuneraciones, cualquiera sea la denominación, sistema, modalidad o periodicidad; se debe precisar que la Carta Magna de 1979 que tutelaba diversos derechos laborales, también en los arts. 110 y 132 de la Constitución Política de 1979 y el art. 1355 del Código Civil establecen la facultad que tiene el Estado de intervenir en la vida económica de la Nación en razón a intereses correspondientes a la sociedad, por encima de la voluntad de los particulares.

Con estas facultades se dictan medidas; entre ellas se encontraba la facultad de efectuar reajustes económicos de remuneraciones dispuestas por el D.S. 057-90-TR, dictándose paralelamente los D.S.121-90-PCM y 178-90-PCM que señala que la única forma de otorgar incrementos remunerativos a los trabajadores de las empresas del Estado, fuera de los concedidos por el D.S.107-90-PCM era mediante convenios celebrados con aprobación de CONADE, no dando lugar a la rehabilitación de los convenios anteriores. Esta prohibición continuó para el año 1991 establecido por el inc. d) del art. 70 de la Ley 25303.

Posteriormente se dictaron los Decretos leyes 25541 y 25876 con el fin de precisar y reiterar la vigencia de la Disposición Final del Decreto Legislativo 757, la misma que instituía definitivamente la prohibición de incrementar las remuneraciones que impusieran temporalmente la normas antes citadas, primero en el periodo del 20/08/90 al 31/12/90 y después durante el ejercicio presupuestal de 1991 (cas. 844-97/Lima del 14/07/99).

*ii) Segundo:* Es contraria a la primera y determina que la argumentación de la Sala ha violentado el control difuso de la Constitución, más aún cuando se debió tener en consideración que para que el Estado interviniera en la situación económica se necesitaba de conformidad con la Constitución de 1979 algunas formalidades, en el caso particular, teniendo los Convenios Colectivos fuerza de ley por imperio del art 54 de la Constitución Política de

1979, la suspensión o extinción de alguna de las cláusulas de ellas debe hacerse a través de alguna norma de la misma jerarquía; lo que no ocurrió con la dación de decretos supremos y aunque fueron dictados según se menciona en los decretos supremos observados con carácter extraordinario como lo señala el art. 211 inc. 20 de la Constitución de 1979, esta es inoperante ante la calidad laboral y alimentaría de los derechos que pretendía enervar.

Sin embargo esta inoperancia es subsanada a partir de enero de 1991, en que se dictan leyes para regir lo ya establecido por los decretos supremos entre ellas la ley 25303 en los arts. 110 y 127 ratifican lo ya mencionado en los decretos supremos y que fueron tomados en consideración para este comentario, las cuales si cumplen con los requisitos de ley para extinguir lo establecidos por los Convenios y Laudos Arbitrales; por ende son aplicables en los casos que se encuentren dentro de su ámbito temporal (cas. 844-97/Lima del 14/07/99, planteada por uno de los Vocales de la Sala Suprema en su voto discordante).

Del estudio del Derecho constitucional y Derecho laboral podemos concluir que la segunda postura es la adecuada; tal es así que el Tribunal Constitucional por resolución 18/12/91 que fue publicada el 05/01/92; declaró la inconstitucional de los decretos supremos y decretos leyes que establecieron estos reajustes económicos, aunque los efectos que ellos ocasionaron no pudieron ser corregidos, por cuanto de conformidad al art. 300

de la Constitución de 1991 esta resolución no tiene efecto retroactivo.

- b) **El monto entregado a los trabajadores de parte de los empleadores como un incentivo por haber renunciado voluntariamente:** Esta problemática tiene su sustento legal en el art. 60 del Decreto Legislativo 650 que a la letra dice:

*Artículo 60.- COMPENSACION DE CREDITOS DEL EMPLEADOR.-*

*“Si el trabajador al cesar o posteriormente, recibe del empleador a título de gracia, alguna cantidad o pensión, éstas se deducirán de aquellas que la Autoridad Judicial mande pagar al empleador como consecuencia de la demanda interpuesta por el trabajador.*

*Para que proceda la deducción o compensación debe constar expresamente que la cantidad o pensión otorgada se efectúa conforme a lo establecido en el presente artículo o en las normas correspondientes del Código Civil”.*

Los supuestos que se extrajeron de este articulado y que ha sido materia de análisis constante y cada vez más ahondado por la Sala Suprema son:

*i) Primero:* Es un acto de liberalidad que suple a la indemnización que pudiera recibir por un despido arbitrario o cualquier otra demanda interpuesta por el trabajador; incluso si el pago cubre lo solicitado por el rubro de beneficios sociales, ella lo cubrirá (cas. 3929-97/Piura del 18/06/99).

*ii) Segundo:* Se debe diferenciar entre el incentivo o gratificación extraordinaria otorgada por el empleador a favor del trabajador como consecuencia de la renuncia voluntaria del éste último, entonces este incentivo ofrecido en esta forma de conclusión de la relación laboral constituye un derecho del trabajador equivalente a la indemnización que pudiera recibir por un despido arbitrario al no existir acuerdo de voluntades.

El art. 60 del Decreto Legislativo 650 se refiere por lo contrario a la suma de dinero que en forma graciosa y con carácter de liberalidad otorga el empleador al trabajador en el cese o después de él sin obligación alguna de parte del trabajador, motivo por el cual se considera como un acto unilateral y voluntario del empleador que no requiere de una contraprestación del trabajador formándose una obligación futura de reciprocidad para compensar cualquier deuda que se genere y que no ha sido previsto al momento del cese (cas. 3128-97/Piura del 18/06/99).

De los supuestos antes mencionados debemos señalar que el segundo supuesto nos menciona claramente el carácter de suma de dinero que el empleador efectúa como acto de liberalidad (art. 60 del D.Leg. 650) de las que otorgan en



calidad de incentivo para renunciar al trabajo y dar por extinguido el vínculo laboral. Sin embargo cabe mencionar que en ninguno de los casos son compensables con los beneficios que deberá recibir el trabajador por sus beneficios sociales.

**5.3. Análisis de Casaciones en donde se plantearon la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.**

Se ha considerado tocar este tema al final de nuestro análisis, porque la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso no ha sido establecido expresamente por la Ley Procesal de Trabajo; por cuanto no se encuentra acorde con los fines de la casación laboral; sin embargo los abogados lo han aplicado durante todos los años que fueron materia de nuestro análisis y a la vez usados para sustentar sus recursos de casación indistintamente en todas las pretensiones.

Este punto es bastante controversial debido a que la Sala Suprema Constitucional y Social encargada de la evaluación de los escritos de casación laboral ha determinado un distingo fáctico; formándose cuatro grandes grupos:

- a) Primer Caso:** Aquellos que **de parte** plantearon la causal de Contravención de las Normas que Garantizan el Derecho de un Debido Proceso, las cuales fueron declaradas **improcedentes** por no ser una de las causales señaladas en la Ley Procesal de Trabajo;

**SENTENCIA EN CASACIÓN EXPEDIDA POR LA SALA DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE**

**JUSTICIA DE LA REPUBLICA.**

**Casación Nº 183-98 LIMA**

Lima, trece de abril del dos mil.-

**I. CONSIDERANDOS:**

**Primero.-** Que; el Recurso de Casación cumple con los requisitos formales para su admisibilidad, exigidos por el artículo cincuentiséis de la Ley Procesal de Trabajo;

**Segundo.-** Que, en cuanto a los requisitos de fondo, la recurrente invoca las causales de

- a) Evidente violación del artículo cuarto del Decreto Supremo cero cero tres guión ochenta guión TR, arguyendo que el juez ante el que se interpuso la demanda debió ser el del lugar donde se encuentra el centro de trabajo;
- b) Contradicción con otros pronunciamientos;
- c) ***Contravención a las normas del debido proceso***, alegando que la demandada no pudo defenderse desde el inicio de la acción y que lo hizo con dificultades, incumpléndose las normas previstas en los artículos I, II y VII del Código Procesal Civil;

**Tercero.-** Que, la causal descrita en el punto a), no puede prosperar porque denuncia la violación de una norma que regulaba el proceso laboral, referida a la competencia del Juzgado; lo que resulta irrelevante porque aparece de autos que se sometió al Juzgado conviniendo en la acción;

**Cuarto.-** Que, respecto a la causal anotada en el punto b) la contravención con otros pronunciamientos emitidos por otras Salas Laborales, los fallos que se acompañan no se refieren a casos objetivamente similares a la materia tratada en la impugnada, lo que hace inviable esta causal;

**Quinto.-** Que, la causal descrita en el punto c) tampoco es procedente, porque la recurrente ha gozado de la tutela jurisdiccional, actuando en el proceso y haciendo uso de su derecho, en un conflicto de intereses que el Juez ha resuelto con fundamentos de derecho, y dentro de este punto tampoco se advierte contravención al debido proceso, además la demandada tenía derecho a formular nulidades en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, conforme el tercer párrafo del artículo ciento setentidós del Código procesal Civil.

**Sexto.-** Que, en consecuencia no habiendo la emplazada cumplido con los requisitos de fondo previstos en el artículo cincuentisiete de la Ley veintiséis mil seiscientos treintiséis; declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesta a fojas doscientos noventa y uno por la Central de Cooperación Chancay – Huaral – Aucallama; en los seguidos por don Emilio Rada Velasco, sobre beneficios sociales; **CONDENARON** a la recurrente a la multa de tres Unidades de Referencia Procesal y al pago de las costas y costos del recurso;

## **II. ORDENARON:**

Su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”; y los devolvieron.

SS.

ORTIZ B.

VASQUEZ C

FERREYROS P.

LLERENA H.

OLIVARES S.

- b) Segundo Caso:** Aquellos en las cuales se sustentaba la Contravención de las Normas que Garantizan el Derecho de un Debido Proceso pero *planteado como causal de*

**violación de la ley**, ello cuando se encontraba en vigencia la ley 26636; en estos casos los recursos eran declarados **procedentes**; posteriormente luego del análisis de fondo son **declarados Fundados** y como consecuencia **Nulo la sentencia de vista**; ello siempre y cuando el recurrente planteaba y fundamentaba debidamente la causal de violación de la ley porque de no ser así eran declarados **improcedentes**.

**i) Caso procedente:**

**SENTENCIA EN CASACIÓN EXPEDIDA POR LA SALA DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE  
JUSTICIA DE LA REPUBLICA.**

**Casación Nº 1462-2000 LIMA**

Lima, veintinueve de noviembre del dos mil.-

La Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República; vista la causa número mil cuatrocientos sesenta y dos – dos mil; en Audiencia Pública llevada a la fecha, y producida la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia:

**I. MATERIA DEL RECURSO:**

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Banco Internacional del Perú a fojas cuatrocientos sesenta y ocho A, contra la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, obrante de fojas cuatrocientos sesenta y seis, su fecha cinco de mayo del dos mil, que revocando la apelada de fojas doscientos sesentinueve, su fecha doce de enero del mismo año, declara fundada la demanda.

**II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

Que, el recurrente invoca los literales b) y c) del artículo cincuenta y

seis de la acotada y acusa:

- a) La violación del artículo ciento veintidós, inciso cuarto del Código Procesal Civil;
- b) La Interpretación errónea del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres – noventa y siete– TR; y
- c) La inaplicación de los artículos cuarenta y cinco y cincuenta del Decreto Supremo número cero cero uno – noventa y seis – TR, de los artículos treinta y tres y treinta y cuatro del Decreto Ley veinticinco mil quinientos noventa y tres y del artículo treinta y siete del Decreto Supremo cero cero tres – noventa y siete– TR;

### III. CONSIDERANDOS:

**Primero.-** Que; ***bajo el pretexto de la violación del inciso cuarto del artículo ciento veintidós del Código Procesal Civil, lo que en el fondo se denuncia es la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.***

**Segundo.-** Que, si bien el texto modificado de la ley veintiséis mil seiscientos treinta y tres no recoge como causal casatoria la precedentemente aludida; sin embargo se trata de un Principio Constitucional consagrado en el inciso tercero del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución política del Estado, consecuentemente esta denuncia resulta **PROCEDENTE**;

**Tercero.-** Que, en efecto de la sentencia impugnada se advierte que esta no se pronuncia sobre todos los puntos del petitorio y aún más no expresa con claridad y precisión lo que se decide u ordena; infringiéndose de este modo lo dispuesto por el inciso tercero del artículo cuarenta y ocho de la ley procesal de Trabajo, concordante con el inciso cuarto del artículo ciento veintidós del Código Procesal Civil, habiéndose incurrido en causal insalvable de invalidez.

**Cuarto.-** Que, siendo esto así, no es ahora oportuno pronunciarse sobre

otras causales invocadas, las mismas que inciden sobre el fondo de la materia controvertida;

#### **IV. SENTENCIA:**

Por estas razones; declararon **FUNDADO** el recurso de casación interpuesta por el Banco Internacional del Perú – INTERBANK, a fojas cuatrocientos sesenta y ocho A; en consecuencia **NULA** la sentencia de vista de fojas cuatrocientos sesenta y seis, su fecha cinco de mayo del dos mil; **DISPUSIERON**, que la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima expida nuevo pronunciamiento con arreglo a Ley;

#### **VII. ORDENARON:**

La publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; en los seguidos por don Rodolfo Jesús Dávila Tovar, sobre nulidad de despido; y los devolvieron.

SS.

ORTIZ B.

VASQUEZ C.

FERREYROS P.

LLERENA H

OLIVARES S.

#### **ii) Caso improcedente:**

**SENTENCIA EN CASACIÓN EXPEDIDA POR LA SALA DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE  
JUSTICIA DE LA REPUBLICA.**

**Casación Nº 1483-2000 LIMA**

Lima, treinta de noviembre del dos mil.-

**I. CONSIDERANDOS:**

**Primero.-** Que; el Recurso de Casación reúne los requisitos formales previstos por el artículo cincuenta y siete del texto modificado de la Ley veintiséis mil seiscientos treintiséis, par su admisibilidad;

**Segundo.-** Que, pese a no invocar ninguno de los literales del artículo cincuenta y seis de la acotada, la recurrente acusa;

**a) *La violación del artículo ciento treinta y nueve, inciso tercero de la Constitución Política del Estado que establece como principio y derecho de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; y,***

**b) La inaplicación de los artículos mil doscientos veinte y mil doscientos cuarenta y cuatro del Código Civil, de los Decretos Legislativos seiscientos cincuenta, seiscientos sesenta y siete, ochocientos cuarenticinco y ochocientos noventidós y las Leyes dieciocho mil trescientos cincuenta, dieciocho mil trescientos ochenta y cuatro, veintiún mil setecientos ochenta y nueve y veinticinco mil novecientos veinte;**

**Tercero.-** Que, con respecto al punto a), la aludida Ley Procesal no recoge la causal de violación de normas de derecho material; y, ***aún más el justiciable no ha precisado en qué ha consistido la violación que***

**reclama**, razón por la cual este extremo del recurso no resulta viable.

**Cuarto.-** Que, en lo que concierne a la segunda denuncia, el justiciable no se ciñe a lo dispuesto en el literal c) del artículo cincuenta y ocho de la Ley Procesal de Trabajo, esto es, indicar porqué debieron aplicarse dichos dispositivos al caso de autos, además no explica cuál es el nexo de causalidad existente entre la denuncia y el fallo, ni cuál es el agravio que le acusa su inaplicación;

**Quinto.-** Por estas consideraciones y no habiéndose satisfecho las exigencias del artículo cincuenta y ocho de la Ley Procesal Laboral; declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesta a fojas trescientos veintiséis por don Guillermo Quiroga Belupe;

## **II. ORDENARON:**

La publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; en los seguidos con la Industria Textil Piura Sociedad Anónima, sobre reintegro de beneficios sociales; y los devolvieron.

SS.

ORTIZ B.

VASQUEZ C.

FERREYROS P.

LLERENA H.

OLIVARES S.



- c) **Tercer Caso:** Aquellos que **de parte** plantearon la causal de Contravención de las Normas que Garantizan el Derecho de un Debido Proceso y que fueron declarados **procedentes, pasando luego a ser evaluados de fondo** por la Sala teniendo como argumentación que estaba actuando en concordancia a su facultad dikológica y aplicando el principio del debido proceso para evaluar esta causal en esta vía casatoria; siendo en algunos casos declarados infundados o fundados según la Sala lo conviniera así, y finalmente;

**SENTENCIA EN CASACIÓN EXPEDIDA POR LA SALA DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE  
JUSTICIA DE LA REPUBLICA.**

**Casación Nº 547-2002 HUANCAMELICA**

Lima, veintiséis de abril del dos mil cuatro.-

La Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.- vistos en Audiencia Pública de la fecha, verificada la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia:

**I. MATERIA DEL RECURSO:**

Se trata del recurso de casación de fojas ciento treintiséis, interpuesta por la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa, contra la sentencia

de vista de fojas ciento diecinueve, su fecha doce de octubre del dos mil uno, expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Huancavelica, que revocando la de primera instancia de fojas sesenticuatro su fecha veintiocho de junio del dos mil uno, declara fundada la demanda en todos sus extremos.

## **II. CAUSALES DEL RECURSO:**

El recurso de casación se ha declarado procedente por las causales de:

- a) Interpretación errónea del artículo cincuentidós de la ley Orgánica de Municipalidades.
- b) Interpretación errónea del artículo del artículo cuarentiocho del Decreto Legislativo doscientos sesentiséis; y
- c) ***Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso previsto en el artículo ciento treinta y nueve inciso tercero de la Constitución Política del Estado;***

## **III. CONSIDERANDOS:**

**Primero.-** Que; la demandante es un ex trabajador que desempeña el cargo de chofer de la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa, que mediante demanda interpuesta ante el Juzgado Mixto de Angaraes, pretende el pago de beneficios sociales por el periodo del primero de febrero de mil novecientos noventiséis, acción que fue tramitada en la vía de proceso ordinario laboral, sentenciada por el Juez de Primera Instancia que falla declarándola improcedente, resolución judicial que fue revocada por la sentencia de vista que reformándola declara fundada la demanda en todos sus extremos.

**Segundo.-** Que, los servidores públicos, ejercen su derecho de acción, mediante la demanda contencioso administrativo laboral interpuesta ante una Sala Laboral o la que haga sus veces, cuya competencia ha sido determinada por el artículo cuatro numeral primero inciso c) de la Ley

Procesal de Trabajo, modificada por la ley veintisiete mil doscientos cuarentidós, aplicable al caso por razón de temporalidad, norma procesal de obligatorio cumplimiento.

**Tercero.-** Que, no obstante la claridad de la norma específica en materia contenciosa administrativa laboral, la acción se ha tramitado ante un Juzgado de primera instancia, órgano jurisdiccional que carece de competencia.

**Cuarto.-** Que, la competencia por razón de la materia es indelegable conforme lo establece el artículo siete del Código Procesal Civil; por lo que al haberse tramitado el proceso ante órgano judicial incompetente se ha incurrido en contravención a las normas que garantizan el derecho al debido proceso previsto en el artículo ciento treinta y nueve inciso tercero de la Constitución Política del Estado;

**Quinto.-** Que, habiéndose amparado el recurso de casación por contravención al debido proceso, resulta carente de objeto emitir pronunciamiento de fondo respecto al primer y segundo agravio del recurso de casación;

#### **IV. SENTENCIA:**

Por estos fundamentos; declararon **FUNDADO** el recurso de casación de fojas ciento veintiséis, interpuesto por la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa; en consecuencia **CASARON** la sentencia de vista de fojas ciento diecinueve, su fecha doce de octubre del dos mil uno, que declara improcedente la demanda, dejando a salvo el derecho de la accionante para que lo haga valer con arreglo a ley, en los seguidos por Carmelo Aguilar Nina, sobre pago de beneficios sociales;

#### **V. ORDENARON:**

La publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por sentar un precedente de observancia obligatoria en el modo y plazos establecidos por ley; y los devolvieron.-

SS.

MENDOZA RAMIREZ.

VILLACORTA RAMIREZ

DONGO ORTEGA.

ACEVEDO MENA

QUINTANILLA CHACON.

- d) **Cuarto Caso:** Aquellos casos en las cuales después de declarar **procedentes** los recursos, la Sala **de oficio** evalúa la causal de Contravención de las Normas que Garantizan el Derecho de un Debido Proceso, dejando de lado las planteadas en el recurso; **opinando por declarar Fundado el Recurso y Nulo e INSUBSISTENTE** la sentencia de vista y todo lo actuado con posterioridad al error encontrado. Se sustenta en el art. 176 in fine del Código Procesal Civil, entendida como aquella facultad de declarar la nulidad aun cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado pueda alterar sustancialmente los fines abstractos y concretos del proceso y la decisión que en él va a recaer (cas. 1241-2003/Chincha del 21/05/2004).

**SENTENCIA EN CASACIÓN EXPEDIDA POR LA SALA DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE  
JUSTICIA DE LA REPUBLICA.**

**Casación Nº 654-2003 CHINCHA**

Lima, once de mayo del dos mil cuatro.-

La Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.- vistos en Audiencia Pública de la fecha, verificada la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia:

#### **I. MATERIA DEL RECURSO:**

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Luis Benites Príncipe a fojas ciento ochentisiete, contra la sentencia de vista de fojas ciento ochenta, su fecha veintiséis de febrero del dos mil tres, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Chíncha de la Corte Superior de Justicia de Ica, confirmando la sentencia apelada de fojas ciento sesenta y cuatro, su fecha veintinueve de noviembre del dos mil dos, declara infundada demanda de nulidad de despido.

#### **II. CAUSALES DEL RECURSO:**

El recurrente al amparo del artículo cincuentiséis incisos c) y d de la Ley Procesal de Trabajo, denuncia:

- a)** La inaplicación de los artículos veintinueve incisos a) y c), sesenta y cuatro y sesentisiete del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo setecientos veintiocho – Decreto Supremo cero cero tres guión noventa y siete guión TR (Ley de Productividad y Competitividad Laboral), y los artículos treinta y treinta y uno de la Ley veinticinco mil quinientos noventa y tres - Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; y
- b)** Contradicción con otra resolución expedida por la sala Mixta Descentralizada de Chíncha.

#### **III. CONSIDERANDOS:**

**Primero.-** Que; el recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad

previstos en los artículos cincuenta y siete de la Ley Procesal de Trabajo, modificado por la Ley veintisiete mil veintiuno.

**Segundo.-** Que, en cuanto a los requisitos de fondo, el recurrente denuncia la inaplicación del artículos veintinueve incisos a) y c) del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo setecientos veintiocho; sien embargo, de la revisión de la sentencia de primera instancia y de la sentencia de vista, se advierte que la norma cuya inaplicación se denuncia ha servido de sustento de las normas, por lo que este extremo del recurso deviene en improcedente.

**Tercero.-** Que, respecto a la causal de inaplicación de los artículos sesenticuatro y sesentisiete del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo setecientos veintiocho el recurrente fundamenta que dada su fecha de ingreso (quince de mayo de mil novecientos noventa y uno) el contrato de trabajo (modal) de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y seis nació desnaturalizado ya que a la fecha había adquirido estabilidad laboral, pues por el tiempo transcurrido su contrato (de trabajo) era de plazo indeterminado, razón por la cual los contratos ofrecidos por la emplazada constituyen actos de simulación; y, en cuanto a la inaplicación de los artículos treinta y treinta y uno del Decreto Ley veinticinco mil quinientos noventa y tres, sostiene que gozaba de protección del fuero sindical, pues el despido se produjo dos días después de su afiliación sindical y que además en su condición de miembro del sindicato formuló denuncias ante la Autoridad de Trabajo de Pisco, lo que motivó una visita inspectiva el primero de febrero del dos mil dos, en la cuál se comprobó el incumplimiento de disposiciones legales motivando que la emplazada once horas después despidiera al recurrente y a otros trabajadores que formaban parte del sindicato; en consecuencia, la fundamentación expuesta en relación a estas normas cumple con las exigencias previstas en el artículo cincuentiocho inciso c) de la Ley Procesal de Trabajo, por lo que ambos extremos resultan procedentes.

**Cuarto.-** Que, respecto a la causal de contradicción, el recurrente se limita adjuntar una resolución expedida por la sala Mixta de Chincha, no cumpliendo el mandato legal de adjuntar copias de las resoluciones

contradictorias, contenida en el artículo cincuentisiete inciso f) de la Ley Procesal de Trabajo; asimismo, según sostiene el propio recurrente, la resolución aludida está referida a aun caso de nulidad de sentencia, esto es, no contiene pronunciamiento de fondo en consecuencia, esta causal también es improcedente.

**Quinto.-** Que, asimismo, esta Suprema Sala puede verificar, excepcionalmente, si las causas sometidas a su jurisdicción respetan reglas mínimas y esenciales del debido proceso, dado que dicha institución cautela derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, dando a la persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener tutela jurisdiccional de los derechos que reclama a través de un proceso legal, en la que haya tenido oportunidad razonable y suficiente de ejercer su derecho de defensa, produciendo prueba con dicho propósito y además obtenga una sentencia que responda a dichos presupuestos, pues de otro modo no se podría ejercer adecuadamente la función y postulado contenidas en el artículo cincuenticuatro de la ley Procesal de Trabajo.

**Sexto.-** Que, bajo este contexto, al verificar que en el presente proceso se ha transgredido el principio del debido proceso consagrado en el artículo ciento treintinueve inciso tercero de la Constitución Política del Estado, este Colegiado Supremo, excepcionalmente, incorpora **de oficio** la causal de contravención al debido proceso.

**Séptimo.-** Que, cabe precisar que como director del proceso es deber del juez enumerar los puntos controvertidos teniendo en consideración lo expuesto por las partes, y en especial los que serán materia de prueba conforme lo establece el artículo sesentisiete de la Ley Procesal de Trabajo, concordante asimismo, es obligación del A-quo agotar los medios probatorios necesarios que le produzcan certeza sobre los hechos materia de discusión, desentrañando la verdad de los hechos, prefiriendo la realidad sobre la apariencia, pues está obligado a fundamentar en forma razonable y congruentemente su decisiones, contando para ello además con la facultad de ordenar de oficio la actuación de medios probatorios que sean

necesarios para producirle certeza y convicción, conforme establece el artículo veintiocho de la ley Procesal de Trabajo.

**Octavo.-** Que, sin embargo el juzgado en la audiencia única cuya acta corre a fojas ciento veintidós, se ha limitado a fijar como punto controvertido: *“Determinar en el presente proceso, la existencia de nulidad de despido, peticionada por el actor”*, sin tener en consideración que por la naturaleza de la pretensión de la demanda (nulidad de despido interpuesta por la accionante en su calidad de afiliado al sindicato de obreros de la Fábrica Polisacos – Pisco) y atendiendo a las afirmaciones absolutamente contradictorias de las partes resulta de imperiosa necesidad de fijar como puntos controvertidos, además de la existencia de causales de nulidad de despido invocados por el demandante entre otros: determinar la fecha real del actor, establecer la naturaleza del objeto social de la empresa demandada hace factible la suscripción de contratos modales de naturaleza intermitente, determinar los periodos de duración de contratos firmados por las partes, establecer la fecha de inscripción del Sindicato de Obreros ante el Ministerio de Trabajo y además ordenar la actuación de las pruebas de oficio que considera convenientes.

**Noveno.-** Que, la nulidad absoluta se presenta siempre que un acto procesal (o actos procesales cuyo conjunto hacen el proceso) adolezca de una circunstancia fijada en las leyes procesales como necesaria para que el acto produzca sus efectos normales (Manuel Serra Domínguez, Nulidad procesal, Revista Peruana de Derecho Procesal, Tomo Segundo, página quinientos sesentitrés), en tal sentido, cabe advertir que frente a u vicio de tal consideración, cualquier órgano jurisdiccional por el solo hecho de serlo tiene lo que en doctrina se llama potestad nulificante del juzgador y que ha sido acogido en el artículo ciento sesentiséis in fine del Código procesal Civil, entendida como aquella facultad de declarar la nulidad aún cuando no haya sido solicitada , si considera que el acto viciado (incluso el proceso todo) puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso y la



decisión que en él va a recaer.

**Décimo.-** Que, en este sentido corresponde anular lo actuado desde fojas ciento veintidós inclusive, a efectos que el A-quo convoque a nueva audiencia única, oportunidad en que fijará los puntos controvertidos conforme a ley y a las consideraciones precedentes, motivo por el cual carece de objeto examinar los argumentos de fondo de las causales declaradas procedentes.

#### **IV. SENTENCIA:**

Por estas consideraciones; declararon **FUNDADO** el recurso de casación de fojas ciento ochentisiete, interpuesto por don Luis Benites Príncipe; en consecuencia **NULA** la sentencia de vista de fojas ciento ochenta, su fecha veintiséis de febrero del dos mil tres **INSUBSISTENTE** la apelada de fojas ciento sesenticuatro, su fecha veintinueve de noviembre del dos mil dos, y declararon, **NULO TODO LO ACTUADO** desde la fojas ciento veintidós, inclusive, y reponiendo el proceso al estado en que corresponde;

#### **V. ORDENARON:**

La publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por sentar un precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la Ley; y los devolvieron.-

SS.

VILLACORTA RAMIREZ

DONGO ORTEGA

ACEVEDO MENA

QUINTANILLA CHACON.

MENDOZA RAMIREZ.

Entonces, de lo explicado podemos deducir que la Sala Suprema Constitucional y Social, para el análisis de esta causal ha tenido los siguientes criterios:

**CUADRO 3**

FORMA DE PLANTEAMIENTO	FORMA DE PRONUNCIAMIENTO	RESOLUCION DE LA SALA SUPREMA
De parte	No analiza de fondo	Improcedente
Como violación de la ley	Analiza de fondo	Procedente
De parte	Analiza de fondo	Procedente
De oficio	Analiza de fondo	Procedente y Fundada

En esta parte señalaremos en base a nuestra muestra, los motivos por la cual la Sala Suprema ha considerado y aprobado la viabilidad de esta causal ya sea que fuere planteado de parte o de oficio (indistintamente); debemos señalar que los ítems que señalaremos a continuación ***tienen en común que su no observación afectarían a la totalidad del proceso, dificultando a la Sala para que pueda emitir un pronunciamiento motivado en forma clara y precisa.*** Entre los motivos que hemos podido encontrar tenemos:

a) **Pronunciamiento sobre la Pretensión:** Existe varios supuestos:

i) La Sala Superior en la sentencia impugnada se ha pronunciado sobre una pretensión que no fue planteada por el demandante. Ejemplo: denuncia nulidad de despido y la Sala Superior opina y sustenta se sentencia con

indemnización por despido arbitrario (cas. 1025-97/Huánuco del 25/06/99).

*ii)* No se pronuncia sobre todos los puntos que deben incluir, de conformidad la naturaleza de la pretensión. Por ejemplo en los casos de reintegro de beneficios sociales no determina el monto a ser liquidado ni tampoco se apoya en ninguna base de cálculo para determinarlo (cas. 921-2000/Callao del 02/11/2000).

- b) Deficiencias en la Audiencia Única:** Se ha determinado la existencia de la pretensión pero no ha tomado en consideración los puntos controvertidos que ameritaban ser materia de análisis en concordancia con la naturaleza de la pretensión. Ejemplo en caso de nulidad de despido no se ha evaluado la fecha real de despido del actor, su condición de afiliado en el sindicato, establecer el periodo de duración de su contrato firmado por las partes, establecer la fecha de suscripción y reinscripción del Sindicato ante el Ministerio de Trabajo y otros (cas.1238-2003/Chincha del 21/05/2004).
- c) Deficiencias en las Acciones Procesales:** Entre ellas podemos encontrar no haber notificado la sentencia de primera instancia a la parte emplazada (cas. 1560-2000/Chincha del 13/12/2000)
- d) No se ha resuelto tachas y/o excepciones:** Entre ellas podemos mencionar el caso de una tacha interpuesto en Audiencia Única y que fuera elevada en apelación sin efecto suspensivo y en calidad de diferido; ello es de vital importancia por cuanto podría incidir en el sentido final de la controversia (cas. 161-99/Lima del 10/05/2000).

e) **Deficiencias de la Sentencia de Vista:** Podemos determinar las siguientes:

**e.1) *No se pronuncia sobre todos los puntos controvertidos:*** Podemos mencionar cuando la sentencia de vista se pronuncia limitadamente sobre una pretensión que abarca varios puntos; por ejemplo: se pronuncia sobre reintegro de la compensación de tiempo de servicios cuando la pretensión es reintegro de beneficios sociales que abarca además de la primera las remuneraciones insolutas, reintegro de gratificaciones (fiestas patrias y navidad), reintegro por horas extras, reintegro de remuneraciones, asignación vacacional, FONAVI y pago de utilidades (cas. 385-2003/Chincha del 30/04/2003).

**e.2) *Se pronuncia sobre temas que no son parte del proceso:*** La Sala fundamenta su sentencia de vista sobre una excepción de cosa juzgada que no fue deducida por la demandada ni fue objeto de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia (cas. 337-98/Lima del 24/04/2000)

**e.3) *Carece de sustentación motivada*** (cas. 1462-2000/Lima del 28/11/2000)

**e.4) *Carece de claridad y precisión:*** Tenemos el caso en que en un caso de beneficios sociales se fija un monto líquido a pagar y luego lo remite a un cálculo de actualización manipulando lo preceptuado en el art. 48 numeral 3 de la Ley Procesal de Trabajo (cas. 1397-2000/Lambayeque del 04/12/2000).

## **6. ANÁLISIS LÓGICO JURÍDICO DE LAS RESOLUCIONES CASATORIAS.**

Como ya habíamos anticipado en el capítulo II de la presente tesis, este numeral tiene como finalidad analizar algunas resoluciones casatorias teniendo como referencia los tópicos detallados para este fin en la parte doctrinaria de la misma.

Haciendo un recuento de estos tópicos diremos que debemos considerar lo siguiente: el principio de congruencia, los elementos de la sentencia que será dividido de acuerdo a sus premisas y el razonamiento del juez donde se aplicarán los principios de verificabilidad y la de racionalidad.

Lo que pretendemos con este análisis no es establecer una opinión sobre la materia de las pretensiones vistas en las resoluciones; nuestra finalidad es verificar si el silogismo aplicado por los magistrados es la correcta; conexión entre las premisas que conforman la resolución casatoria: la premisa menor (hechos) donde se aplicará la premisa mayor (norma) concluyendo de ambos la consecuencia de derecho (fallo resolutorio de la Sala). Teniendo en consideración lo antes explicado, pasaremos a efectuar el análisis de nuestras resoluciones, las mismas que fueron escogidas especialmente para este estudio.

### **a) Primer Caso:**

Aquí tenemos dos resoluciones que tienen un fallo contradictorio, ambas fueron declaradas procedentes, mas después de efectuarse el análisis de fondo respectiva una es declarada fundada y otra infundada; sin embargo lo común entre ellas no solamente es que fueron interpuestas por el mismo recurrente con la misma pretensión – indemnización por despido arbitrario a los trabajadores que fueron despedidos por cese colectivo al ser declarado insolvente la empresa - sino que para plantear su recurso interpone los mismas causales sustentándolos

de idéntica forma; además de ello la Sala Transitoria Constitucional y Social para emitir su fallo en ambas resoluciones se basó en la interpretación de la mismas normas materiales sustentándola de distinta manera, los detalles lo analizaremos desdoblando las resoluciones por las premisas que lo conforman.

**i) Resolución declarada fundada:**

**SENTENCIA EN CASACIÓN EXPEDIDA POR LA SALA DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE  
JUSTICIA DE LA REPUBLICA.**

**Casación Nº 793-2000 LIMA**

Lima, veinticinco de octubre del dos mil.-

La Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República; vista la causa número setecientos noventitrés – dos mil; en Audiencia Pública llevada a la fecha, y producida la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia:

**I. MATERIA DEL RECURSO:**

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas doscientos ochentiocho por la empresa Bakelita y Anexos Sociedad Anónima – BASA – contra la sentencia de vista de fojas doscientos sesenticinco, su fecha veintisiete de diciembre del año próximo pasado, expedida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima que

revocando en un extremo y confirmando en otro la sentencia apelada de fojas doscientos veintinueve, fechada el veintitrés de setiembre del mismo año, declara fundada el extremo de indemnización por despido arbitrario, con lo demás que contiene.

## **II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

El recurrente invocando los literales a), b) y d) del artículo cincuentiséis de la Ley Procesal de Trabajo número veintiséis mil seiscientos treintiséis modificada por la ley número veintisiete mil veintiuno, denuncia como agravios:

- a)** La interpretación errónea de los literales c) y d) del artículo cincuentiséis del Decreto Supremo número cero cero tres –noventisiete – TR.
- b)** Interpretación errónea del artículo cuarenta y nueve del Decreto Supremo número cero cero tres –noventisiete – TR;
- c)** La interpretación errónea de la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número ochocientos cuarenta y cinco, argumentando que la sala de mérito al considerar que cuando dicha norma hace referencia al administrador, sólo se circunscribe a aquél que ha sido designado por la Junta de Acreedores de una empresa declarada insolvente, ha interpretado erróneamente la acotada norma; señalando que la interpretación correcta es que cuando dicha disposición hace referencia al administrador o liquidador de la empresa en estado de insolvencia, se llega a la conclusión de que se refiere, tanto el administrador existente antes de la Junta de Acreedores como al designado en ella:
- d)** La aplicación indebida del literal b) del artículo cuarentiséis del Decreto Supremo número cero cero tres–noventisiete – TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, señalando que este literal es de carácter general, el cual otorga la facultad de cesar a los trabajadores cuando la empresa se encuentra atravesando por problemas económicos sin llegar a la insolvencia; añadiendo que el Colegiado debió aplicar el literal b) de la norma y dispositivo acotado,

el cual se refiere a las empresas sujetas a la ley de Reestructuración patrimonial;

- e) La aplicación indebida del artículo cuarenta y ocho del Decreto Supremo cero cero tres–noventisiete – TR, expresando que la Sala de mérito al haber aplicado indebidamente el literal b) del artículo cuarentiséis del Decreto Supremo número cero cero tres – noventisiete –

TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aplica también indebidamente el artículo cuarenta y ocho del acotado dispositivo legal referido al exceso de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, cuyo contenido no podría ser aplicable al caso de una empresa insolvente o que de hacerlo resultaría perjudicial al trabajador;

- f) La aplicación indebida del numeral tercero del artículo veintiséis de la Constitución Política del Estado, referido al Principio de Interpretación más Favorable al Trabajador, señalando que la Sala, al considerar que existe duda sobre el sentido de la quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número ochocientos cuarenticinco y que debe respetarse el Principio de Interpretación Favorable al Trabajador, lo hace sin acotar los métodos de interpretación posible y hasta que la duda se haga insalvable, procediendo a aplicar dicho principio;
- g) La contradicción con otras resoluciones expedidas por las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares y referidas a la causal de interpretación errónea de la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número ochocientos cuarenta y cinco, argumentando que existe fallos expedidos por las Salas Laborales de la Corte Superior de Justicia de Lima, que han declarado infundada el despido arbitrario al entender que es desde la declaración de insolvencia, que la empresa se encuentra facultada para realizar el cese colectivo al amparo del



inciso d) del artículo cuarentiséis del Decreto Supremo número cero cero tres – noventa y siete – TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y que el administrador puede ser anterior a la Junta de Acreedores.

### **III. CONSIDERANDOS:**

**Primero.-** Que, en lo atinente a los agravios denunciados en los literales a) y b), la recurrente no ha cumplido con expresar los fundamentos de su impugnación, razón por la cual ambos extremos del recurso resultan IMPROCEDENTES.

**Segundo.-** Que, en lo que concierne al agravio contenido en el literal e), la empresa recurrente no ha cumplido con precisar qué norma es la que debió aplicarse al caso en autos, omisión que no le permite cumplir a cabalidad los requisitos de fondo para su procedencia; por tanto, dicho extremo del recurso también es IMPROCEDENTE.

**Tercero.-** Que en lo referido al agravio denunciado en el literal f), debe precisarse que la denuncia en sede de casación de una norma de carácter constitucional sólo resulta procedente en caso de incompatibilidad entre ésta y una legal ordinaria, que no es el caso de autos; en tal sentido, dicho extremo del recurso es IMPROCEDENTE.

**Cuarto.-** Que, en lo atinente al agravio denunciado en el literal g), la impugnante no ha cumplido con precisar cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y la recurrida, y en qué consiste la contradicción, omisión que no le permite cumplir a cabalidad con los requisitos de fondo contenidos en el artículo cincuentiocho de la Ley Procesal de Trabajo, por lo tanto el recurso por dicho extremo también es IMPROCEDENTE.

**Quinto.-** Que, finalmente en lo concerniente a los agravios contenidos en los

literales c) y d) se advierte que su fundamentación satisface las exigencias de fondo establecidas en el artículo cincuentiocho de la Ley Procesal de Trabajo aludida, razón por la cual el recurso de casación resulta PROCEDENTE por dichas causales, siendo menester analizar sus fundamentos.

**Sexto.-** Que, en Primera Instancia la demanda fue declarada infundada en el extremo de la indemnización por despido arbitrario, al considerar el Juzgado que la demandada al haber acreditado su estado de insolvencia y cumplido con remitir al actor la carta notarial por la que se comunica su cese, cumplió con los requisitos exigidos para la procedencia del cese colectivo solicitado.

**Séptimo.-** Que, la sentencia de Vista, revocando la apelada, declaró fundada dicha extremo indemnizatorio, considerando que no basta la declaración de insolvencia para que se proceda a realizar el cese colectivo, requiriéndose para ello el nombramiento de un Administrador o Liquidador designado para la Junta de Acreedores, la cual si tendría tales prerrogativas.

**Octavo.-** Que, la Quinta Disposición Transitoria del decreto legislativo número ochocientos cuarenticinco, Ley de Reestructuración Empresarial, establece que el Administrador o Liquidador de empresas en estado de insolvencia declarado por la Comisión podrá cesar a los trabajadores de la empresa correspondiente, para cuyo efecto cursará un aviso notarial con una anticipación de diez días naturales a la fecha prevista para el cese.

**Noveno.-** Que, dentro de dicho marco jurídico, es claro que el hecho habilitante para el cese colectivo está dado por la declaración del estado de insolvencia de la empresa, mediada que resulta coherente con los objetivos de la normativa concursal, esto es, la de tratar de salvar la empresa y proteger sus acreencias, entre ellas las laborales.

**Décimo.-** Que, la declaración de insolvencia de una persona revela su situación crítica dentro del mercado y su viabilidad depende de la adopción de las medidas urgentes, por cuanto la Quinta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo número ochocientos cuarenticinco hace referencia al administrador, es evidente que lo hace refiriéndose al vigente al momento de

la declaración y no al administrador nombrado por la Junta Acreedora, ya que la demora en el nombramiento de este último podría en peligro la propia subsistencia del negocio.

**Décimo Primero.-** Que, siendo ello así, cuando la Sala de mérito considera que es el administrador nombrado por la Junta de Acreedores el único facultado para poder solicitar el cese colectivo de trabajadores, lo hace interpretando erróneamente la Quinta Disposición Transitoria del citado Decreto Legislativo número ochocientos cuarenticinco; Ley de Reestructuración Empresarial.

**Décimo Segundo.-** Que, finalmente debe señalarse que ha quedado establecido que la emplazada fue declarada en estado de insolvencia, situación esta que importa un estado regulado por la Ley de Reestructuración Empresarial y que resulta ser una causa objetiva para la terminación colectiva de los contratos de trabajo que hace referencia el literal d) del artículo cuarentiséis del Decreto Legislativo número cero cero tres – noventa y siete – TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que, en tal sentido cuando la Sala Superior fundamenta su decisión en el literal b) de la norma antes citada, referida a los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos como causas objetivas, para el cese colectivo, lo hace en clara aplicación indebida de la acotada norma.

#### **IV. SENTENCIA:**

Por los fundamentos antes expuestos; Declararon **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos ochentiocho por la Empresa Bakelita y Anexos Sociedad Anónima – BASA – en consecuencia **CASARON** la sentencia de vista de fojas doscientos sesenta y cinco, su fecha veintisiete de diciembre del año próximo pasado y actuando en sede de instancia: **CONFIRMARON** la sentencia apelada en fojas doscientos veintinueve, su fecha veintitrés de septiembre del mismo año, que declara fundada en parte de demanda, con lo demás que contiene, sobre

indemnización por despido arbitrario y otros.

**V. ORDENARON:**

Se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por don Demecio Alvites Guerreros; sobre indemnización por despido arbitrario y otros; y los devolvieron.-

SS.

ORTIZ B.

VASQUEZ C.

FERREYROS P.

LLERENA H.

OLIVARES S.

Las premisas son:

- a) **Premisa menor:** Bakelita y Anexos Sociedad Anónima - BASA, es una empresa que fue declarada insolvente, motivo por el cual determina el cese colectivo de sus trabajadores cumpliendo con remitir las cartas notariales respectivas, cese efectuado por el Administrador no designado por la Junta de Acreedores.
- b) **Premisa mayor:** Los Magistrados para sustentar su resolución toman en consideración las siguientes normas: la quinta disposición transitoria del Decreto Legislativo 845, Ley de Reestructuración Patrimonial” y el artículo 46 del

Decreto Legislativo 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

i) *Artículo 46 del D.S. 003-97-TR*

“Son causas objetivas para la terminación colectiva de los contratos de trabajo:

- a) El caso fortuito y la fuerza mayor;
- b) Los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos;
- c) La disolución y liquidación de la empresa, y la quiebra;
- d) La reestructuración patrimonial sujeta al Decreto Legislativo N° 845”.

Esta norma es usada por el Colegiado para sustentar que estando la empresa en estado de insolvencia, entonces tenía causa objetiva para la terminación objetiva de los contratos de trabajo.

ii) *Quinta Disposición Complementaria del D. Leg. 845:*

“CESE COLECTIVO.- El Administrador o Liquidador de empresas en estado de insolvencia declarado por la Comisión podrá cesar a los trabajadores de la empresa correspondiente para cuyo efecto cursará un aviso notarial con una anticipación de diez (10) días naturales a la fecha prevista para el cese.”

Esta norma es interpretada por el Colegiado en el sentido de que habiéndose determinado el estado de insolvencia, el administrador que se encuentra en el cargo en aquel momento es quien podrá efectuar el cese colectivo y no necesariamente aquella que se nombra por

la Junta de Acreedores; además hace referencia de que el propósito del cese colectivo es una medida considerada urgente ya que de conformidad a la normativa concursal lo que se busca es tratar de salvar la empresa y proteger sus acreencias entre ellas las laborales.

- c) **Conclusión:** Habiendo analizado ambas premisas la Sala concluye que cuando una empresa es declarada insolvente tiene entre sus facultades cesar a sus trabajadores y quien puede efectuarlo es el administrador vigente en el cargo al momento de la declaración de insolvencia y no esperar a que la Junta de Acreedores nombre a un Administrador para efectuar tal acto.

Lo que se puede analizar del razonamiento del Colegiado es que a los hechos materia de análisis han planteado una norma que si es la correcta pero no se ha podido determinar de la resolución si el Acreedor que realizó el cese colectivo fue aquel designado por la Comisión que en términos de la Ley de Reestructuración Patrimonial debe ser entendida como la Comisión de Salida del Mercado, o la entidad que haga sus veces con sujeción a un convenio de delegación de funciones.

Respecto a la aplicación del principio de congruencia fue debidamente aplicada pues se ha efectuado el análisis en consideración al sentido y alcance de las peticiones planteadas por el recurrente en su recurso, el razonamiento jurídico de los magistrados han sido planteada de manera clara y precisa, mas podemos decir que no ha cubierto todas las directivas que se ha dado en el sistema del derecho.

## ii) Resolución declarada infundada:

**SENTENCIA EN CASACIÓN EXPEDIDA POR LA SALA DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE  
JUSTICIA DE LA REPUBLICA.**

**Casación Nº 1217-2000 LIMA**

Lima, diez de noviembre del dos mil.-

La Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República; vista la causa número mil doscientos diecisiete – dos mil; en Audiencia Pública llevada a la fecha, y producida la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia:

**MATERIA DEL RECURSO:**

Se trata del recurso de casación interpuesto por la empresa Bakelita y Anexos Sociedad Anónima a fojas trescientos cincuentinueve contra la sentencia de vista expedida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, obrante de fojas trescientos treintitrés, su fecha diecisiete de abril del dos mil, que revoca la apelada de fojas doscientos treintinueve, su fecha diecinueve de julio del próximo pasado; en la parte que declara fundada el extremo de vacaciones truncas, lo que declararon infundado y lo confirman en lo demás que contienen, la modifican en la suma del abono y ordenan a la empresa demandada pague al actor veinte mil quinientos ocho nuevos soles por indemnización por despido arbitrario y tres mil trescientos treinta y siete por Compensación por Tiempo de Servicios, más costas y costos;

**II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

El recurrente invoca los incisos a), b) y d) del artículo cincuentiséis del texto modificado de la Ley Procesal de Trabajo y denuncia:

- 1) Interpretación errónea del inciso d) del artículo cincuentiséis del Decreto Supremo número cero cero tres – noventa y siete – TR, Texto

Único Ordenado del Decreto Legislativo setecientos veintiocho.

- 2) La aplicación indebida de los incisos b) y c) del artículo cuarentiséis del Decreto Supremo número cero cero tres – noventa y siete – TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo setecientos veintiocho e inciso tercero del artículo 26 de la Constitución Política del Estado.
- 3) Interpretación errónea de la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número ochocientos cuarenticinco – Ley de Reestructuración Patrimonial.
- 4) La contradicción Jurisprudencial.

### III. CONSIDERANDOS:

**Primero.-** Que; en primer lugar y sin perjuicio de pronunciarse sobre cada una de las causales, en la fundamentación del recurso se advierte que éste cuestiona básicamente el voto singular de una de las Vocales de la Sala Superior de Lima; por lo que es menester señalar que los argumentos del recurso de casación deben dirigirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia y deviene insuficiente el recurso que impugna aspectos contenidos en un voto singular que no sustentan el fallo, pues no cabe casación cuando se invoca defecto en la motivación *ex abundantia* ya que por principio no trascienden el fallo, el que se seguirá manteniendo en atención a sus fundamentos jurídicos principales.

**Segundo.-** Que, siendo así, en cuanto a la denuncia contenida en el punto 1), aquella se refiere a cuestionar lo señalado en el voto singular de la Doctora Vásquez corriente a fojas trescientos treintiséis y no a lo señalado en la sentencia de vista, concluyendo que este extremo será analizado con la correcta interpretación de la Quinta



Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número ochocientos cuarenticinco; de lo expresado en el considerando primero podemos concluir que este extremo es improcedente, con añadido de que el recurrente no cumple con indicar cuál es la correcta interpretación que— a su criterio — resulta errónea y menos cuál es la correcta, incumpliendo la exigencia prevista en el literal b) del artículo 58 del texto modificado de la Ley Procesal de Trabajo;

**Tercero.-** Que, en relación a las denuncias contenidas en el punto 2), la justiciable cuestiona nuevamente la aplicación de las referidas normas que el voto singular a expresado; empero, como ya lo dijéramos no es materia del recurso de casación sino la impugnada, que no aplica los referidos dispositivos por lo que este extremo también resulta improcedente;

**Cuarto.-** Que, en lo concerniente al punto 3) la recurrente vuelve a refutar los argumentos del voto singular, no obstante ello, este Colegiado debe considerar necesario esclarecer la correcta interpretación de la norma en cuestión, por cuanto esta norma si sirvió de base para expedir la impugnada y consecuentemente se interpretó; por lo que este extremo deviene en PROCEDENTE, correspondiendo emitir pronunciamiento de fondo;

**Quinto.-** Que, con relación a la causal de contradicción con otras resoluciones expedidas por las Cortes Superiores; pronunciadas en casos objetivamente similares referidas a la causal de interpretación errónea de la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número ochocientos cuarenticinco; para cuyo efecto acompaña ocho resoluciones emitidas por la Primera, Segunda y Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; extremo que también reúne los requisitos formales que establece el artículo cincuenta y siete de la Ley Procesal de Trabajo por lo que debe ser declarado PROCEDENTE, correspondiendo emitir pronunciamiento de fondo;

**Sexto.-** Que, con respecto a la causal de interpretación errónea de la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número ochocientos cuarenticinco, Ley de Reestructuración Patrimonial, la empresa sostiene que la correcta interpretación de la norma no establece que el punto de partida para cesar a los trabajadores sea la Junta de Acreedores sino que es a partir de la declaración de insolvencia de la empresa; es decir que la causal se configura cuando queda consentida la resolución mediante la cual se coloca en estado de insolvencia a la empresa y quien puede decidir el inicio de este procedimiento es el administrador que tiene la facultad de cesar colectivamente es el que tiene la administración antes que la Junta de Acreedores decida por la reestructuración o liquidación, el administrador ratificado por la Junta de Acreedores y el designado en ella;

**Séptimo.-** Que, cuando el inciso d) del artículo cuarentiséis de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral – Decreto Supremo cero cero tres – noventa y siete – TR, establece como una de las causas objetivas para la terminación colectiva de los contratos de trabajo es la reestructuración patrimonial esta nos remite al Decreto Legislativo ochocientos cuarenticinco en su conjunto y no específicamente la Quinta Disposición Complementaria de la referida Ley; de esta se puede colegir que la reestructuración patrimonial de una empresa se debe ceñir de manera conjunta a todo el texto legal de la referida norma;

**Octavo.-** Que, en tal virtud, el decreto legislativo ochocientos cuarenticinco establece que es la Junta de Acreedores quien puede decidir por la reestructuración patrimonial de una empresa o por su defecto por su disolución y liquidación de ésta; debiendo en el primer caso acordar el régimen de administración temporal de aquella en proceso de reestructuración, pudiendo disponer la continuación de la misma administración o designar una distinta conforme al artículo cuarentitres y en el segundo, nombrar el liquidador de acuerdo al artículo sesenta del mismo

cuerpo legal;

**Noveno.-** Que, para la correcta interpretación de la norma denunciada se debe establecer que la declaración de estado de insolvencia un estado de incertidumbre ya que la Junta de Acreedores decidirá el destino de la empresa, liquidándola o manteniéndola en actividad , apareciendo desde este momento el administrador o liquidador nombrados por la referida Junta según fuera el caso; por lo que cuando la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número ochocientos cuarenticinco hace referencia al administrador, se deberá entender que este pasó por el nombramiento o ratificación de la Junta de Acreedores.

**Décimo.-** Que, de lo expuesto podemos concluir que la declaración de insolvencia de una empresa no es suficiente para proceder al cese colectivo de trabajadores, sino por el contrario se debe interpretar dentro del contexto de la norma, es decir que cuando dicho dispositivo se refiere al administrador o liquidador, cualquiera de estos corresponde a la designación efectuada por la Junta de Acreedores según se opte por la reestructuración de la empresa o la disolución y liquidación, al ser inherente a ellas el estado de insolvencia declarado previamente a la empresa;

**Undécimo.-** Que, la emplazada al incluir al actor en la relación de trabajadores efectos al cese colectivo, según expresa en el acta del trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho, sólo se encontraba en situación de insolvencia declarada por la Comisión de Salida del Mercado de INDECOPI, con resolución número cero cero tres –mil novecientos noventa y ocho/CSA – INDECOPI, la cual no constituye causal objetiva de cese de relación laboral, tal como se ha establecido la impugnada, por la que ésta ha interpretado correctamente la cita Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo ochocientos cuarenticinco; Ley de Reestructuración

Empresarial;

**Duodécimo.-** Que, en cuanto a la denuncia del punto 4), se puede advertir, que siete de las resoluciones que acompaña a sus recurso aplican la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo ochocientos cuarenticinco; mas no la interpretan ya que sólo señalan que se declaró insolvente a la empresa recurrente y que el cese de trabajadores se ha efectuado en cumplimiento de las disposiciones indicadas por lo que no corresponde la indemnización; únicamente el expediente número trescientos sesentitrés – noventinueve – ID.SS hace una interpretación de la norma en cuestión; sin embargo esta Sala puede perfectamente apartarse de sus argumentos, teniendo en cuenta lo señalado para sustentar la interpretación errónea de la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo ochocientos cuarenticinco;

#### **IV. SENTENCIA:**

Por los antes expuesto; declararon **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesta por la Empresa Bakelita y Anexos Sociedad Anónima (BASA) a fojas trescientos cincuenta y nueve; en consecuencia **NO CASARON** la sentencia de vista de fojas trescientos treintitrés, su fecha diecisiete de abril del dos mil; **CONDENARON** a la recurrente al pago de las costas y costos del recurso; así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal;

#### **VII. ORDENARON:**

La publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por Migdonio Luca Ignacio, sobre despido arbitrario y otro; y los devolvieron.-

SS.

ORTIZ B.

VASQUEZ C.

FERREYROS P.

LLERENA H.

OLIVARES S.

Las premisas son:

- a) **Premisa menor:** Bakelita y Anexos Sociedad Anónima - BASA, es una empresa que fue declarada insolvente, motivo por el cual determina el cese colectivo de sus trabajadores cumpliendo con remitir las cartas notariales respectivas, cese efectuado por el Administrador no designado por la Junta de Acreedores.
- b) **Premisa mayor:** Los Magistrados para sustentar su resolución toman en consideración las siguientes normas: la quinta disposición transitoria del Decreto Legislativo 845, Ley de Reestructuración Patrimonial” y el artículo 46 del Decreto Legislativo 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
  - i) *Artículo 46 del D.S. 003-97-TR:*  
“Son causas objetivas para la terminación colectiva de los contratos de trabajo:
    - a) El caso fortuito y la fuerza mayor;
    - b) Los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos;

- c) La disolución y liquidación de la empresa, y la quiebra;
- d) La reestructuración patrimonial sujeta al Decreto Legislativo N° 845”.

Esta norma es analizada por el Colegiado para determinar que si bien la reestructuración patrimonial es una causa objetiva para la terminación objetiva de los contratos de trabajo, el estado de insolvencia no se ajusta a este inciso por cuanto, cuando una empresa es declarado insolvente entonces se mantiene en un proceso de incertidumbre y será la Junta de Acreedores quien determinará en última instancia el destino de la empresa manteniéndola en actividad o liquidándola, por ende es ésta quien determinará si ingresa a formar parte del proceso de reestructuración patrimonial designando para tal caso un administrador o liquidarlo para lo cual designará un liquidador conforme lo establece el Decreto legislativo N° 845.

ii) *Quinta Disposición Complementaria del D. Leg. 845:*

“CESE COLECTIVO.- El Administrador o Liquidador de empresas en estado de insolvencia declarado por la Comisión podrá cesar a los trabajadores de la empresa correspondiente para cuyo efecto cursará un aviso notarial con una anticipación de diez (10) días naturales a la fecha prevista para el cese.”

Esta norma es interpretada por el Colegiado en el sentido de que habiéndose

determinado el estado de insolvencia y siendo evaluada por la Junta de Acreedores para ingresar a una etapa de reestructuración patrimonial, el administrador o liquidador según sea el caso designado por la Junta de Acreedores es el único que estará facultado para proceder al cese colectivo de los trabajadores.

- c) **Conclusión:** Habiendo analizado ambas premisas la Sala concluye que cuando una empresa es declarada insolvente y luego la Junta de Acreedores opta por la reestructuración de la misma designando un administrador entonces podrá encontrarse dentro de los márgenes de lo establecido en el artículo 46 inciso d) del Decreto Supremo 003-97-TR.; y por consiguiente este administrador nombrado por la Junta de Acreedores será el único autorizado para establecer el cese colectivo de los trabajadores de la empresa que se encuentra en una reestructuración patrimonial, el mismo que se encuentra nombrado en la quinta disposición complementaria del decreto legislativo N° 845.

Lo que se puede analizar del razonamiento del Colegiado es que han evaluado los hechos materia de análisis de conformidad no solamente de la quinta disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 845, sino con los artículos que tienen relación con este articulado en la misma Ley de Reestructuración Patrimonial; sin embargo, tampoco en esta resolución se puede determinar a ciencia cierta si el Administrador que ha efectuado el cese colectivo de los trabajadores de esta empresa ha sido designado por la Comisión de Salida del Mercado, o la entidad que haga sus veces con sujeción a un convenio de delegación de funciones; hecho que es vital para determinar fehacientemente si lo estipulado por la quinta disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 845 se ha cumplido o no.

Respecto a la aplicación del principio de congruencia fue debidamente aplicada pues se ha efectuado el análisis en consideración al sentido y alcance de las peticiones planteadas por el recurrente en su recurso, con lo referente al razonamiento jurídico de los magistrados ellos han tratado de evaluar todas las directivas que la Ley de Reestructuración Patrimonial le ha ofrecido sustentado su decisión de manera clara y precisa, aún cuando no se ha podido sustraer de la resolución si el administrador a la cual hace referencia la empresa es aquella designada por la Comisión de Salida del Mercado u otro designada por la propia empresa.

**b) Segundo Caso:**

La resolución analizada en este caso es una referida a la aplicación de un laudo arbitral donde se encuentra estipulado algunos beneficios que serán aplicables para aquellos trabajadores que se encuentran sujetos dentro de los márgenes de este laudo arbitral. Como ya se ha establecido en otra parte de esta tesis el Laudo Arbitral se encuentra en la categoría de norma convencional que regula acuerdos bilaterales y por tanto no puede ser materia de análisis en la vía casatoria; sin embargo existe una excepción que esta norma convencional este relacionada con normas de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo como la presente.





**SENTENCIA EN CASACIÓN EXPEDIDA POR LA SALA DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE  
JUSTICIA DE LA REPUBLICA.**

**Casación Nº 1873-97 PIURA**

Lima, dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve.-

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República; vistos en Audiencia Pública llevada a la fecha por los vocales: Beltrán Quiroga, Presidente; Almeida Peña, Seminario Valle, Zegarra Cevallos y Villacorta Ramírez, verificada la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia:

**I. MATERIA DEL RECURSO:**

Se trata del recurso de casación interpuesto por la Empresa Petróleos del Perú Sociedad Anónima mediante escrito de fojas ochentiséis contra la sentencia de fojas sesenta y ocho, se fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, expedida por la sala Mixta Transitoria de Sullana, que confirma la apelada de fojas treintiséis, su fecha catorce de abril de mil novecientos noventa y siete; en el extremo que declara Fundada en parte la demanda, la revocaron en cuanto al monto ordenado a pagar, sobre reintegro de Beneficios Sociales.

**II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

Que, el recurrente a sido declarado procedente, mediante resolución emitida por la sala Suprema con fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por la cual prevista en el inciso segundo del artículo cincuenticuatro de la Ley Procesal de Trabajo referida a la contradicción con otros pronunciamientos emitidos por otras Salas Laborales de la República.

**III. CONSIDERANDOS:**

**Primero.-** Que; el recurso de casación tiene como fines la correcta aplicación

e interpretación del derecho adjetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia.

**Segundo.-** Que, la cuestión a dilucidar en sí, corresponde a o no a la demandante los beneficios sociales que reclama y que se derivan de su pretensión de ser incluido en los efectos de la aplicación de Laudo Arbitral de fecha siete de octubre de mil novecientos noventidós conforme se desprende de fojas seis y siete.

**Tercero.-** Que, si bien, el Laudo Arbitral en cuestión rige durante el periodo de un año a partir del primero de enero de mil novecientos noventitrés de su tenor expreso se desprende que se estableció tanto en el punto sobre el aumento de sueldo y salarios como en el punto sobre beneficios complementarios, que para el primero, la empresa le otorgaría “a su personal de empleados y obreros permanentes, con vínculo laboral vigente en la fecha del laudo” y , para el segundo, que se otorgaría “a todos sus trabajadores obreros y empleados que tengan la condición de estables y que se encuentren en planilla a la fecha de emisión del laudo, siendo que con fecha ocho de octubre de mil novecientos noventitrés se aclaró que la frase “con vínculo vigente a la fecha del presente laudo” no constituye error material, topográfico ni de naturaleza similar, por lo que tal condición responde a la plena voluntad de quienes suscribieron el laudo.

**Cuarto.-** Que, el cese de la relación laboral del actor se produjo el veinticuatro de enero de mil novecientos noventitrés tal como se desprende de la demanda misma y de las boletas de la liquidación de beneficios sociales de fojas dos y tres la que, además, fue considerada por el demandante suscribiendo su conformidad.

**Quinto.-** Que, habiéndose resuelto el Laudo Arbitral con fecha posterior al

vínculo laboral, no se encuentra el demandante comprendido dentro de los alcances ni le corresponde los beneficios remunerativos del laudo en cuestión, pues esta contiene exclusión expresa de sus efectos para todos aquellos ex trabajadores sin vínculo laboral vigente a la fecha de su suscripción, no pudiendo interpretarse y menos aplicarse extensivamente contrariando la estipulación excluyente sancionada con plena voluntad y autonomía en el marco del procedimiento arbitral a la que acordaron someterse las partes de la negociación colectiva.

**Sexto.-** Que, siendo esto así, y desprendiéndose de las resoluciones que la demandada acompaña a su recurso, es de verse que la recurrida ha sido emitida en contradicción con otros pronunciamientos emitidos en casos objetivamente similares en las que se ha resuelto tenido en cuenta los considerando precedentes, toda vez que el Laudo Arbitral de mil novecientos noventitrés tiene fuerza vinculante sólo para las partes que lo suscribieron, siendo que los acuerdos adoptados en él tienen la misma naturaleza y surten idénticos efectos que las convenciones adoptadas en negociación directa, conforme lo establece los artículos cuarentidós y setenta de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, por lo que corresponde amparar el recurso al haberse configurado la causal invocada.

#### **IV. SENTENCIA:**

Declararon **FUNDADO** el recurso de casación de fojas ochentidós interpuesta por el Empresa Petróleos del Perú Sociedad Anónima,; en consecuencia **NULA** la sentencia de vista de fojas sesentiocho, su fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, que declara Fundada en parte la demanda, reformándola declararon **INFUNDADA** la citada demanda; en los seguidos con don Wilfredo Luna Ordinola sobre Reintegro de

beneficios Sociales;

**VII. ORDENARON:**

Que el texto de la presente resolución se publique en el Diario Oficial "El Peruano"; y los devolvieron.

SS.

BELTRAN Q.

ALMEIDA P.

SEMINARIO V.

ZEGARRA Z.

VILLACORTA R.

Las premisas son:

- a) Premisa menor:** La empresa Petróleos del Perú el siete de octubre de 1992, suscribe con sus trabajadores un Laudo Arbitral, en ella brinda una serie de beneficios salariales y otros complementarios, este Laudo Arbitral rige por el periodo de un año a partir del primero de enero de 1993; para que los trabajadores puedan gozar de estos beneficios deberán contar con la calidad de permanentes y/o encontrarse en calidad de estables y reconocidos en planillas. El recurrente es un ex trabajador de esta empresa que cesa el 24 de enero de 1993 y solicita que se le considere dentro de los alcances de este laudo arbitral,

aunque no ha suscrito el presente laudo porque a su fecha ya había cesado.

- b) Premisa mayor:** Los Magistrados para fundamentar su resolución hacen alusión a los artículos 42 y 70 de la Ley de Relaciones Colectivas.

**i) *Art. 42 del Decreto Ley 25593 – Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo:***

“Artículo 42.- La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza”.

Esta norma es analizada por el Colegiado para establecer que las únicas partes que tienen relación vinculante producto de un laudo arbitral son aquellas que la adoptaron, en este caso aquellas que la suscribieron.

**ii) *Art. 70 del Decreto Ley 25593 – Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo:***

“Artículo 70.- Los acuerdos adoptados en conciliación o mediación, los laudos arbitrales y las resoluciones de la Autoridad de Trabajo tienen la misma naturaleza y surten idénticos efectos que las convenciones adoptadas en negociación directa”.

Esta norma es interpretada por el Colegiado en el sentido de que los acuerdos establecidos a través de un Laudo Arbitral son equivalentes a aquella que es producto de una negociación directa.

- c) **Conclusión:** Habiendo analizado ambas premisas la Sala concluye que conforme se ha podido deducir de los hechos al momento de la suscripción el recurrente ya había cesado por lo tanto de conformidad a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo no puede gozar de los beneficios establecidos en este Laudo Arbitral otorga y que el recurrente solicitaba.

Lo que se puede analizar del razonamiento del Colegiado es que ellos han tenido como referencia de inicio de aplicación del Laudo Arbitral, la fecha de suscripción de la misma y el recurrente al no haberla suscrito por cuanto a la fecha ya había cesado no puede gozar de los beneficios que otorga este laudo por cuanto ya no forma parte de una de las partes de este acuerdo (trabajador).

Respecto a la aplicación del principio de congruencia fue debidamente aplicada pues el análisis del recurso se realizó bajo el sentido y alcance de las peticiones planteadas por el recurrente, sin realizar ninguna interpretación ni aplicación extensiva; con lo referente al razonamiento jurídico de los magistrados ellos han tratado de evaluar todas las directivas que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo le ofrece, y solamente bajo los márgenes de esta norma, por cuanto al tratarse de una norma convencional el análisis de su aplicación no es materia de pronunciamiento en vía casatoria, ello en concordancia a lo establecido por el Supremo Tribunal en reiteradas oportunidades.

**c) Tercer Caso:**

En este caso nos encontramos frente a la figura de la fusión de dos empresas para crear una nueva, para lo cual no solamente unen capitales sino también deben incorporar a esta nueva empresa al personal que laboraba con ellos; la nueva empresa fusionada determina una reorganización interna de su personal producto del cual deberá designar nuevos niveles de categorización de los mismos, hecho que los trabajadores consideran como actos de hostilidad.

**SENTENCIA EN CASACIÓN EXPEDIDA POR LA SALA DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE  
JUSTICIA DE LA REPUBLICA.**

**Casación Nº 1896-98 LIMA**

Lima, dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve.-

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República; vistos en Audiencia Pública llevada a la fecha por los señores Vocales: Buendía Gutiérrez, Beltrán Quiroga, Almeida Peña, Seminario Valle y Zegarra Cevallos, verificada la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia:

**I. MATERIA DEL RECURSO:**

Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Lidia del Carmen Asenjo Quiñónez y otros mediante escrito de fojas quinientos

cuarenticuatro contra la sentencia de vista fojas quinientos treintiocho, se fecha treinta de junio de mil novecientos noventiocho, expedida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; que confirmando la apelada de fojas quinientos, su fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete; declara Infundada la demanda de fojas noventiocho, en los seguidos con Telefónica del Perú Sociedad Anónima, sobre Cese de Hostilidad.

## **II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

Los demandantes recurrentes fundamentan su recurso en las causales previstas en los numerales primero y segundo del artículo cincuenticuatro de la Ley número veintiséis mil seiscientos treintiséis denunciando:

- a) Aplicación e interpretación errónea del artículo cuarentidós del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, Decreto Supremo número cero cinco – noventa y cinco – TR.
- b) Incorrecta aplicación del literal b) del artículo sesentitrés del Decreto Supremo número cero cinco -noventa y cinco – TR.
- c) Contradicción jurisprudencial con pronunciamientos emitidos por la misma Sala y otras Salas Laborales de la Corte Superior de Lima;

## **III. CONSIDERANDOS:**

**Primero.-** Que; en cuanto a la primera denuncia, debe señalarse que las causales citadas contiene conceptos diferentes e implicantes entre sí, por lo que la invocación conjunta de ellas respecto a una misma norma en la forma efectuada por los recurrentes, contraviene la fundamentación clara y precisa exigida por Ley, por lo que deviene en improcedente.

**Segundo.-** Que, tampoco resulta amparable la segunda causal por cuanto no existe relación lógica entre lo resuelto por la recurrida, toda vez que esta



se ha pronunciado sobre esta norma que es la que sirve de sustento a la demanda, al tipificar el acto de hostilidad que se denuncia, de modo que los demandantes no pueden afirmar congruentemente que su aplicación es incorrecta, sin poner en riesgo su pretensión.

**Tercero.-** Que respecto a la última denuncia, los actores a fin de demostrar sus argumentos, acompañan copias de las resoluciones en las cuales las Salas Laborales se pronuncian en un sentido distinto sobre casos objetivamente similares, por lo que habiendo cumplido con los requisitos previstos en el artículo cincuentisiete de la Ley Procesal de Trabajo, se procede al pronunciamiento de fondo.

**Cuarto.-** Que, el literal b) del artículo sesentitrés del Decreto Supremo cero cinco – noventicinco – TR, contempla como actos de hostilidad dos supuestos distintos e independientes, como son la disminución inmotivada de la remuneración por un lado, o el de la categoría por el otro, advirtiéndose del texto de la demanda y como se reafirma en el recurso casatorio, que aquélla se sustenta en la última d las citadas.

**Quinto.-** Que, se encuentra acreditado que la causa por la cual la emplazada efectuó una modificación en las categorías respondió a la necesidad de reorganizar la estructura interna del personal por la fusión entre las empresas Compañía Peruana de Teléfonos Sociedad Anónima y Entel Perú Sociedad Anónima, sin que el trabajador sufra menoscabo alguno en sus intereses.

**Sexto.-** Que, en este sentido, debe señalarse que la estructura organizativa de una empresa responde a las actividades, objetivos, funciones, número de trabajadores y otros factores, estableciéndose en virtud de ellos determinadas categorías con las cuáles si bien se encuentra relacionada la estructura remunerativa, sin embargo la remuneración efectiva percibida con la que aparece en la nueva estructura para el cargo reasignado, sino en la carencia de una motivación de la disminución de la categoría causándole

perjuicio al trabajador.

**Séptimo.-** Que, en consecuencia, habiendo quedado determinada la causa justificada de la modificación de las categorías conforme a lo expuesto, la resolución que viene en grado no ha incurrido en causal de casación, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve de la Ley número veintiséis mil seiscientos treintiséis modificada por la Ley número veintisiete mil veintiuno;

#### **IV. SENTENCIA:**

Declararon **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por doña Lidia del carmen Asenjo Quiñónez y otros a fojas quinientos treintiocho, su fecha treinta de junio de mil novecientos noventiocho,

#### **V. ORDENARON:**

La publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; y los seguidos con Telefónica del Perú Sociedad Anónima, sobre Cese de Hostilidad, y los devolvieron.

SS.

BUENDÍA G.

BELTRAN Q.

ALMEIDA P.

SEMINARIO V.

ZEGARRA Z.

Las premisas son:

- a) **Premisa menor:** La empresa Telefónica del Perú Sociedad Anónima efectúa una reorganización en la estructura interna de su personal, ello como consecuencia

de la Fusión de la Compañía Peruana de Teléfonos Sociedad Anónima y ENTEL Perú Sociedad Anónima, que son aquellas que se han subsumido para formar esta nueva.

**b) Premisa mayor:** Los Magistrados para fundamentar su resolución hacen alusión a los artículos 63 inc. b) del Decreto Supremo 005-95-TR.

**i) Art. 63 inc. b) del Decreto Supremo 005-95-TR:**

“Artículo 63.- Son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes:

b) La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría (...).”

Esta norma es analizada por el Colegiado para establecer que la reducción de categorización no será considerada como acto de hostilidad cuando ella responda a una causa justificada.

**c) Conclusión:** Habiendo analizado ambas premisas la Sala concluye que en este caso la empresa ha efectuado un cambio en la categorización debido a un estado de necesidad por cuanto era primordial reorganizar la estructura interna del personal por la fusión de las empresas Compañía de Teléfonos S.A. y la Empresa ENTEL Perú S.A. y con ello no se busca dañar a los trabajadores sino establecer un nuevo orden organizativo donde pueda incorporarse todos los trabajadores de las empresas fusionadas, por tanto la categorización realizada por la empresa es motivada.

Lo que se puede analizar del razonamiento del Colegiado es que se ha tomado como cierta el estado de necesidad planteada por la empresa y no se ha discutido si esta reorganización responde o no a las nuevas actividades, funciones y demás factores que la misma resolución hace alusión; es así

que ante lo ya deducido de los hechos se ha determinado coherentemente que la norma aplicada a esta pretensión no se ajusta a forma como fue planteada por los recurrentes.

Respecto al principio de congruencia, ésta fue debidamente aplicada pues el análisis del recurso se realizó bajo el sentido y alcance de las peticiones planteadas por los recurrentes, tal es así que en la pretensión del recurso lo que se solicita es el análisis de los actos de hostilidad por reducción de categoría y no en lo referente a la reducción de remuneración que en este caso si se viene dando; con lo referente al razonamiento jurídico de los magistrados ellos han evaluado todas las directivas que la norma material le otorga para el análisis de este tipo casos, aplicando los principios de verificabilidad y racionalidad para sustentar su razonamiento jurídico.

## **CAPITULO IV.**

### **PROPUESTAS PARA UNA REFORMA DE LA CASACION LABORAL EN EL PERU.**

#### **1.- Introduccion al tema .**

**Antes de abordar sobre las propuestas para una adecuada reforma de la casación laboral en el Perú, debemos considerar un diagnostico basico de cuales son los aspectos y causas fundamentales de la crisis de la institución, si antes en el capitulo III se abordó el aspecto practico del recurso en el lapso de seis años, en este capitulo le complementaremos con los aspectos teoricos, cuestionando la forma y el fondo de su regulación en la doctrina de la casación. Por cuanto en once años, de aplicación de este recurso extraordinario, por la Ley 26636, modificado por la ley 27021, no ha llegado a cumplir los fines para la cual fue implantado en el país. No ha respondido esta institución a las expectativas que tenian los operadores jurídicos como son los abogados, magistrados, litigantes, en la actualidad siguen los problemas, resultando inoperante esta institución tal como se esta aplicando en la actualidad. En consecuencia luego del diagnostico, planteamos propuestas teoricas fundamentales para el mejoramiento de esta institución procesal.**

#### **2.- Diagnostico actual de la casacion laboral .**

##### **2.1 - principales problemas de la casacion laboral.**

###### **2.1.1 Desfase de la Casación Ortodoxa**

Conforme hemos señalado, sabemos que la casación tiene su origen en Francia en el S. XVIII, en la cual un órgano político controlaba la labor de los jueces en la aplicación de la ley por cuanto respondía en esencia a la teoría predominante en esa época, la Teoría del Estado de Derecho, en la cual “el juez era la boca de la ley”, no se permitía que el juez pueda interpretar o aplicar el derecho fuera del esquema o parámetros de la ley.

Actualmente la teoría predominante es el Estado Constitucional, los hechos jurídicos ya no se interpretan o se limitan solo en la ley, sino se va más allá en base a la Constitución.

Entonces, en el Perú, dejar que nuestra Corte Suprema controle a los jueces para que apliquen debidamente la ley, es en sí un control insuficiente; porque la institución procesal entendida como tal, está desfasada en el tiempo, siendo necesaria su reformulación a fin que sea un instrumento procesal válido.

Su conceptualización en cuanto a cómo debe controlarse la aplicación de la ley no resulta suficiente, ya que además se propone como es que debe controlarse la aplicación de la ley y la Constitución; lo que nos hace repensar respecto a un tema que siempre se ha discutido en casación, “las cuestiones jurídicas y cuestiones de hecho”, más aún si recordamos lo que señalan algunos juristas, que la Casación es *un recurso extraordinario donde **no se evalúa los hechos**, versando su estudio sobre el derecho lesionado, mas no respecto a los hechos alegados en la demanda, ni las pruebas aportadas, por que se supone que fueron revisadas en las instancias precedentes.*

La *quastio iuris* (cuestión de derecho) no es posible desligarla del *quastio factis* (cuestión de hecho), es decir, lo jurídico no puede desligarse de los hechos, por cuanto los hechos están relacionados con lo jurídico.

Bajo la premisa expuesta en el párrafo precedente cabe anotar que, la norma jurídica tiene tres elementos que conforman su estructura interna:

- a) **El Supuesto de Hecho (S)**, que es aquella hipótesis, de ocurrir, desencadenando la consecuencia.
- b) **La Consecuencia (C)**, que es el efecto atribuido por el derecho a la verificación del supuesto en la realidad.
- c) **El Nexo Jurídico ( )** —~~que~~ que es el elemento lógico-vinculante entre el supuesto y la consecuencia.

Coligiéndose entonces que el supuesto de hecho es un elemento intrínseco de la estructura de la norma jurídica.

Ahora, cuando en la casación se afirma que solamente se deben ver aspectos jurídicos, esto resulta ilógico por cuanto, implícitamente al ver el aspecto jurídico se

está viendo los hechos en el supuesto de hecho, más aún si la aplicación de la norma jurídica son sobre estos mismos.

Por ello no debería ser un recurso que versa solo sobre aspectos jurídicos, si no también sobre aspectos fácticos, cumpliendo así con los fines de la casación, como es el control de la logicidad de la motivación de las resoluciones judiciales (fundamentos de hecho y de derecho), corrigiendo los errores y procurando un juicio justo, es decir luego de revisar los hechos, exponer el derecho, cumpliendo de este modo con una de las garantías de la administración de justicia, y la observancia del debido proceso.

**Finalmente podemos señalar que la casación ortodoxa no ha respondido a las expectativas que tenían los justiciables, como es la solución oportuna de los conflictos jurídicos. Tan solo se ha dedicado a solucionar dichos conflictos como interés privado de las partes, olvidándose del interés público que tiene este recurso.**

#### **2.1.2 En vez de definir y ubicarse en las funciones de la Corte Suprema, se queda solo en los fines retóricos.**

La Corte Suprema en materia de Casación tanto civil y laboral solo se ha dedicado a su tarea de cumplir idealmente los fines de la casación, esto es, de una manera desordenada sin haber realizado una evaluación profunda sobre la naturaleza de la institución en si, cómo se ha estado desarrollando desde su origen y el sentido actual que ha adquirido.

Se ha olvidado que su principal tarea es establecer las funciones que este órgano supremo debe tener, más aún cuando este fin nomofiláctico se ha insertado en la norma procesal laboral a través de la aplicación de las causales de los recursos de casación interpuestos por los litigantes en conceptos que este órgano supremo ni siquiera se ha puesto de acuerdo.

Por tanto, debe buscar concentrar las funciones de uniformización jurisprudencial, cual es la función casatoria, para lo cual se debe tomar en cuenta que una corte de Casación constituye un órgano judicial supremo en un Estado, funciona

con la finalidad de controlar que los jueces decidan las controversias según ley, y que sus decisiones sean mantenida en todo el Estado con la Uniformidad de la interpretación jurisprudencial.

Respecto a la mejora de la Corte Suprema, se viene estudiando un proyecto para cambiar la imagen que tiene frente a la sociedad, no sólo busca viabilizar la creación constitucional de las Cortes Supremas Regionales, mediante su inclusión expresa dentro de la estructura jurisdiccional del Poder Judicial, a través de la modificación del Artículo 143º de la Constitución Política del Perú, sino, fundamentalmente, a través de la modificación del Artículo 141º de la Constitución Política, manteniendo para sí las demás funciones jurisdiccionales que de modo expreso la propia Constitución Política le asigna, y dejando para las nuevas Cortes Supremas Regionales las otras funciones que hasta hoy viene desempeñando.

### **2.1.3 La Corte Suprema en vez de cumplir un rol en la cual se ventilen asuntos de fondo, solamente ha cumplido un rol en asuntos muy secundarios.**

A los 14 años de aplicación de la Casación Civil y 11 años de la Casación Laboral en el Perú, la Corte Suprema no ha respondido a las expectativas de los operadores jurídicos sean abogados, magistrados, litigantes como de la propia colectividad, que tenían de esta institución procesal, que significaba la solución adecuada a la alta carga procesal que tenía la Corte Suprema de la República hasta antes del 28 de Julio de 1993.

Este órgano supremo, como tercera instancia resolvía recursos de nulidad tanto en materia civil, penal y laboral y una forma de limitar el alto porcentaje de carga procesal fue la implantación del recurso de casación, sistema por el cual solo se vería las cuestiones jurídicas y ya no las cuestiones fácticas –cuestiones que sí se asumían en los recursos de nulidad-.

Sin embargo durante todos estos años de aplicación de la casación laboral en el Perú no ha bajado la carga procesal, tampoco se ha mejorado la administración de justicia, así como establecido una jurisprudencia sólida. No se ha cumplido el rol nomofiláctico, ello porque no se ha ordenado adecuadamente el uso de esta institución procesal.



Según las estadísticas, el 80% de los recursos de casaciones civiles y laborales han sido declarados improcedentes, es decir la Corte Suprema solo se ha quedado en la tarea de verificar en la mayoría de los casos, los aspectos de forma y no de fondo, ultimo punto que resulta tener mas importancia.

Este se ve reflejado en un reciente e importante estudio, sobre la actual función casatoria que desempeña la Corte Suprema que señala que: *“no ha cubierto las expectativas que generó su entrada en vigencia, toda vez que la carga procesal no ha disminuido respecto del sistema anterior y la predictibilidad de las decisiones de los órganos jurisdiccionales no es una de sus características”*. Asimismo, agrega que *“en el tema de la predictibilidad tampoco se ha avanzado mucho, así hasta la fecha sólo hemos podido ubicar una jurisprudencia vinculante y la falta de unidad de criterios aún se mantiene vigente, lo que ha generado que los usuarios del sistema de administración de justicia no tengan la seguridad de cómo se van a resolver sus casos, lo cual genera la desconfianza de los diversos sectores de nuestra sociedad frente al Poder Judicial”*<sup>66</sup>

#### **2.1.4 La falta de acceso a la Tutela Jurisdiccional efectiva al limitarse la interposición del recurso de Casación Laboral en pretensión de naturaleza económica sólo si esta supera la 100 URP.**

El Art. 55 de la Ley de Casación Laboral dispone que, *este recurso procede únicamente si la pretensión es de naturaleza económica y está expresada en dinero, debiendo superar las 100 Unidades de Referencia Procesal, donde si lo interpone el demandante (trabajador) será de acuerdo a lo establecido por el Art. 6 de la Ley Procesal de Trabajo*, es decir el resultado de la suma de todos los extremos que contenga la demanda de acuerdo a como ha sido liquidado por él, sin contar los intereses legales, ni costas ni costos del proceso y si lo interpone el demandado (empleador), será de acuerdo a lo establecido por la Sentencia, que también deberá superar las 100 URP.

---

<sup>66</sup> GALLARDO NEYRA, María del Carmen y FERNÁNDEZ PAREDES, Jorge “Estudio sobre el recurso de casación en el proceso civil a 11 años de su entrada en vigencia”, en [www.pj.gob.pe](http://www.pj.gob.pe).

El legislador a fin de limitar la interposición del recurso de casación laboral en alto porcentaje ante la Corte Suprema de la República, implantó una forma de limitarla, como es la cuantía, estableciendo que solo procede en montos que superen las 100 URP (**S/. 37,000**); como es de conocimiento público la mayoría de las casaciones laborales que son interpuestas en el Perú son realizadas por los trabajadores y no hay razón justificable que discrimine la interposición de este recursos por el aspecto económico, por ejemplo para un empleador o empresario el monto de diez mil nuevos soles, quizás no le signifique mucho, sin embargo para un trabajador le puede significar su vida, y el no permitirle que interponga este recurso por razones económicas, es una forma de vulnerar los derechos fundamentales de una persona, consagrados en nuestra Constitución Política del Estado, en su art. 2º inc. 2, donde se proclama: que nadie puede ser discriminado ya que todos somos iguales ante la ley.

#### **2.1.5 Falta de Uniformización Jurisprudencial.**

A diez años de vigencia de la Casación laboral en el Perú, a la fecha no existe una uniformización jurisprudencial a través de la Casación en la cual se hayan expedido por plenos casatorios conforme lo establece el Art. 400º del Código Procesal Civil; esta situación ha creado un desconcierto, por cuanto la misma Corte Suprema no esta cumpliendo con los fines del recurso.

Es decir, este órgano jurisdiccional, debe ser el primero que debe poner orden para la buena marcha de esta institución procesal, sin embargo es el primero en crear desorden, al permitir que las Salas de Derecho Constitucional y Social expidan pronunciamientos sobre un mismo tema, resultando ser totalmente contradictorios y este desorden es el que genera un efecto multiplicador en los demás órganos jurisdiccionales, además de los abogados, litigantes y la colectividad en general.

Por tanto, la Corte Suprema de la República debe ser protagonista y tener la meta, el rol de SER EL ENTE DE INTERPRETACION Y DE LA UNIFORMIZACION DE LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA LABORAL, temas, como por ejemplo de la prescripción de los derechos laborales, entre otros, urge de su pronunciamiento uniforme.

Que interesante, por ejemplo es el rol que esta cumpliendo actualmente el Tribunal Constitucional, como ente máximo de control de la Constitución, que a través de sus sentencias ha establecido en algunos casos, precedentes vinculantes. Necesitamos de ese mismo protagonismo de la Corte Suprema, en el tema de la casación laboral.

Por otro lado, el interés de los Magistrados por consultar la jurisprudencia corresponde a una razonable inquietud y un lógico interés por conocer los criterios jurisprudenciales dominantes, a fin de poder orientar sus resoluciones en tal sentido o para poder justificar y motivar las razones de la discrepancia en otro caso.

### **¿Cuáles son las ventajas de la uniformización jurisprudencial?**

- ❑ Se evitarán las discrepancias entre resoluciones dictadas, en asuntos semejantes, en distintas Cortes o, como puede ocurrir en ocasiones, en la misma Corte Superior.
- ❑ El acceso generalizado de los Magistrados, constituirá una gran fuente de actualización y perfeccionamiento que permitirá avanzar en la progresiva uniformización de criterios judiciales e incrementará la predictibilidad del sistema, ayudando a conseguir avances en la reducción de litigios y del tiempo para obtener una respuesta definitiva a la pretensión.
- ❑ Mejorar el control de las resoluciones judiciales y asegurar la uniformidad en la respuesta judicial definitiva a los conflictos.
- ❑ Se evitarían la interposición de muchas demandas laborales por cuanto ya habrían precedentes vinculantes resueltos sobre casos similares, disminuyendo la sobre carga procesal en los diversos jurisdiccionales del país.

Por ello, la función uniformadora se encuentra orientada a conformar una unidad jurídica, garantizando el principio de igualdad ante la ley; es decir, que se tienda a la aplicación e interpretación de la norma jurídica común en todo el territorio nacional, ya que siendo las leyes abstractas y generales, es factible obtener una interpretación unificada que tenga efectos vinculantes para los órganos jurisdiccionales de mejor jerarquía.

Por ello, finalmente, sí consideramos una de las causales para interponer el recurso de Casación, como es **la contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a las otras causales**, observamos que está en plena concordancia con la finalidad política de uniformar la jurisprudencia, es decir, que no exista contradicción entre los diversos criterios de aplicación e interpretación de la ley.

Si recurrimos al concepto de la Jurisprudencia en sentido formal, veremos que se trata de **criterios constantes y uniformes de la aplicación del derecho**, expresado en las resoluciones de los organismos judiciales, o en sentido material, siendo el conjunto de resoluciones que son dictadas por dichos organismos, que expresan asimismo el modo uniforme de como se viene aplicando el derecho.<sup>67</sup>

#### **2.1.6 Alto porcentaje de recursos de casación declarados improcedentes.**

En la investigación que estamos realizando actualmente sobre el tema de la casación laboral, hemos podido comprobar el alto porcentaje de casaciones laborales declarados improcedentes, consideramos que ello se da en principio, por la falta de una adecuada técnica legislativa de regulación de la casación laboral en la Ley Procesal del Trabajo, que afecta tanto a los abogados como a los magistrados.

La idea que tienen muchos abogados de utilizar la casación es mas por un afán dilatorio, interponiendo el recurso indebidamente, por ejemplo pensando que es una TERCERA INSTANCIA, lo que trae consigo el retraso en el avance de la carga laboral en esta instancia.

Por otra parte la falta de una debida conceptualización uniforme de las causales para interponer la casación a las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, genera también un desconcierto y caos en el manejo de la institución, tanto para los abogados, magistrados y litigantes.

Si nos remitimos al porcentaje de casaciones laborales resueltos por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, declarados improcedentes entre

---

<sup>67</sup> Carrión Lugo, Jorge, "El recurso de Casación en el Perú", Vol I, Editorial Jurídica Grijley, Lima 2003, Págs. 77 y 78

los años 1997 al 2004<sup>68</sup> según refiere García Granara, de un universo total de 9068 casaciones interpuestas entre estos años, se tiene que 6043 fueron declarados improcedentes, que hace un total del 66% lo que refleja que la casación laboral no se viene utilizando correctamente, sea por error o una dilación del proceso, como si tratara de una “tercera instancia” que en ningún caso es la finalidad del recurso. Agrega el precitado autor que, si a ese porcentaje se le suma el porcentaje de recursos declarados infundados, que es el 16.8%, se obtendrá un total del 82.8% de recursos que no han tenido los resultados positivos.

La elevada carga procesal constituye un serio problema en la Corte Suprema, en este punto debemos señalar que si bien es cierto que un gran número de recursos de casación son declarados improcedentes, esta etapa implica necesariamente una labor intelectual y el estudio de cada uno de los expedientes.

#### **.2.1.7. La improcedencia contra autos.**

Actualmente conforme al Art. 55° de la Ley Procesal de Trabajo, el recurso de casación es solo contra sentencias expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores de Justicia que resuelve el conflicto planteado por las partes, por ende dicho dispositivo legal ya no contempla la posibilidad de interponer el recurso de Casación contra autos en revisión, que pongan fin al proceso u ordenen el pago de sumas mayores a 50 URP o se trate de obligaciones de hacer y no hacer (autos con efectos similares a una sentencia), por ello es improcedente el recurso de casación contra autos que dan fin a la instancia, esta situación ha generado indefensión en los litigantes, sean estos trabajadores o empleadores, consideramos que se debe reincorporar la procedencia del recurso de casación en caso de autos que ponen fin al proceso que en revisión son expedidos por las Salas Superiores, tal cual la regulaba la Ley Procesal de Trabajo en su texto originario.

**La concesión de este recurso es solo con efecto suspensivo.**

---

<sup>68</sup> GARCIA GRANARA FERNANDO, Puntos álgidos en el proceso laboral. Algunas consideraciones para una reforma procesal laboral, en Aportes para la reforma del proceso laboral peruano. Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lima, agosto 2005. pag.383.

Una de las características de este recurso es que se concede con efecto suspensivo, donde una vez admitido el recurso se suspende la eficacia de la resolución impugnada hasta que el órgano de Casación se pronuncie sobre el mismo.

Es preocupante como tanto los trabajadores o empleadores que habiendo ganado en dos instancias sus pretensiones laborales, esta no pueda ser ejecutada, por cuanto nuestra legislación procesal laboral establece que la concesión del recurso de Casación es con efecto suspensivo, es decir se deja sin competencia a la Sala Laboral o Mixta, Juzgado de Trabajo o Mixto a ejecutar la sentencia, teniendo que esperar en promedio entre uno o dos años, tiempo que resuelve la Sala de Derecho Constitucional y Social los recursos de Casación que tiene conocimiento, pudiendo acotar al respecto que existe la tendencia de la legislación comparada de no darle este efecto al recurso, más aún cuando este órgano supremo solo se encarga de revisar las cuestiones jurídicas y no las cuestiones de hecho.

#### **2.1.9 La regulación de errores *in iudicando*, *in procedendo* es inadecuada.**

La concepción tradicional que se tiene en la doctrina peruana sobre el error en el derecho en materia de Casación Laboral como es el error *in iudicando* y el error *in procedendo*, particularmente considero que es inadecuado, ya que se halla desfasado en el tiempo, por cuanto el error *in iudicando* o error en el juicio es decir en el juicio mental del magistrado, y el error *in procedendo* entendida como error en la aplicación de las normas procesales en el proceso laboral, ya sea por que el juzgador ignora o se niega a reconocer la existencia de una norma, no aplicando al caso concreto; resultando ser impertinentes por cuanto el derecho objetivo es una sola, más aún sean estas, normas sustantivas o procesales, por cuanto el magistrado de una de las Salas Superiores en el país, hace un análisis e interpreta una norma jurídica, sea sustantiva o procesal, y en ambos casos realiza un análisis mental, los llamados juicios de valor.

### **3. PROPUESTAS TEORICAS PARA UNA ADECUADA REFORMA DE LA CASACION LABORAL EN EL PERU.**

#### **3.1 LA BASE CONSTITUCIONAL DE LA CASACIÓN LABORAL**

En el mundo jurídico europeo, se está produciendo una gran transformación real del Derecho y sobre la función que este debe seguir.

El cambio fundamental gira alrededor del funcionamiento a lo que tradicionalmente se ha denominado Estado de Derecho. Esta es una noción que ha causado arraigo prolongándose hasta nuestros días exitosamente, por que implica el sometimiento del Estado al Derecho.

Sin embargo, esta noción es amplia, se puede dar -y de hecho así ha ocurrido- diversos contenidos. La realidad, esta circunscrita por intereses, se ha encargado de otorgar los más diversos contenidos, por que traduce finalmente la relación entre el Poder y el Derecho <sup>69</sup>

En la búsqueda de nuevas opciones, propuestas frente al Estado de Derecho ha surgido el Estado Constitucional, una teoría, en donde no se cuestiona al positivismo decimonónico, sino también al principio de realidad.

La evolución del Derecho constitucional en las últimas dos décadas del siglo XX, comienza a otorgar una nueva visión jurídica al tema de la justicia, y aparecen los derechos fundamentales, es decir, los no escritos pero si reconocidos por los ordenamientos jurídicos; entendidos estos, ya no solo como la prevalencia del principio de la legalidad pura.

Morales Godo<sup>70</sup> considera que un Estado Constitucional cobra preponderancia en la actuación de un juez, en la cual la norma es una propuesta del legislador, cuyos contenidos tienen que ser acabados por el juzgador cuando la aplican a un caso completo, siendo el juez el actor principal del Derecho, resultando entonces siendo más trascendente la función jurisdiccional que la función legislativa.

---

<sup>69</sup> MORALES GODO, Juan. La Función Jurisdiccional en el Derecho Contemporáneo, en función jurisdiccional, Maestría en Derecho con Mención en Política Jurisdiccional, Modalidad Virtual, Material de Estudio - PUCP. Lima 2006, Pág. 65

<sup>70</sup> MORALES GODO, Juan, Ob. cit. Pág. 67-68.

En un Estado Constitucional la interpretación es fundamental, los métodos de interpretación, en general, son útiles para encontrar los argumentos y para encontrar una decisión. Todos los métodos son buenos; si nos brindan los argumentos para justificar una decisión razonable, socialmente aceptable y justa. La relación *norma-caso* es fundamental, la interpretación debe relacionar estos dos aspectos, la ley y el caso concreto. La ley y la realidad.

La Casación Laboral en consecuencia debe responder a un Estado Constitucional, lo que implica que el razonamiento sea prevalentemente constitucional, por lo que el intérprete constitucional debe ser convincente con su decisión; eliminándose con ello el criterio discrecional, que se movía en un plano meramente subjetivo por estar estrecha a la opinión que se formaba el intérprete; más no respondía a una práctica de razonamiento en base a principios supremos, y así ser considerada la Casación como verdadero recurso.

En lo referido como Corte de Casación, la Corte Suprema de la República no solo debe cumplir el control nomofiláctico de la ley, sino también ampliarlo al control de la Constitución, es decir no solo debe ser un mero aplicador de la ley, sino que esta ley no se contradiga con la Constitución, significando que magistrados supremos no solo se van a circunscribir dentro de los márgenes de la ley sino dentro de los márgenes de la Constitución, que es la ley de leyes.

### **3.2 LAS FUNCIONES DE LA CORTE SUPREMA**

Es necesario tener claro las funciones propias de la Corte Suprema de la República, para ello consideraremos las siguientes:

#### **3. El rol de control jurídico de la Ley y la Constitución.**

La Corte Suprema de la República tiene como una de sus funciones principales controlar jurídicamente a los demás órganos jurisdiccionales al expedir las resoluciones judiciales donde estas hayan aplicado adecuadamente la Ley y la Constitución; este control se realiza a través de la Casación.



La Casación también cumple un rol muy importante en materia jurisdiccional, ya que de su adecuada aplicación se controlará de mejor manera el uso del marco normativo, garantizando efectividad en cuanto a los resultados que de esta deriven.

#### **4. La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso**

A través de la casación laboral, la Corte Suprema de la República, debe observar si en los procesos laborales se han cumplido la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso; esta función principal tiene fundamento en la Constitución Política del Perú en su Art. 139 inc. 3.

La tutela jurisdiccional nos permite acceder a cualquier órgano jurisdiccional para el ejercicio y la debida protección de nuestros derechos e intereses que como miembros de una sociedad tenemos, con sujeción a ser atendidos en un proceso que este rodeado de todas las garantías procesales y constitucionales, es decir, garantías mínimas para hacer efectivo el amparo legal.

Así mismo si hablamos del debido proceso, nos referimos justamente a las garantías que se hallan en un proceso, ya sea alegando o impugnando; pues como dice Monroy Gálvez, entre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a un debido proceso existe una misma relación que se presenta entre la anatomía y la fisiología cuando se estudia un órgano vivo, es decir, la diferencia solo reside en la visión estática y dinámica de cada disciplina, respectivamente<sup>71</sup>

Por ello la Corte Suprema en las casaciones laborales interpuestas deben velar por la tutela jurisdiccional efectiva y que los procesos laborales hayan sido garantizados dentro del debido proceso, esto permite también la intervención de oficio por parte de la Corte Suprema a fin de cautelarlas.

#### **3.- La Predictibilidad en la Corte Suprema.**

**La reforma del Poder Judicial o del sistema de administración de justicia constituye uno de los eternos y siempre inconclusos temas de la agenda nacional desde inicios de la República. Ha sido objeto de infinidad de pronunciamientos de intelectuales y juristas de nota; ha enriquecido los**

---

<sup>71</sup> MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Editorial Temis. S.A. Santa Cruz, Bogotá. 1996. Pág. 248 y 249

**discursos o incitado la demagogia de políticos y de los gobernantes de turno; es un lugar común en los denominados y siempre desatendidos “planes de gobierno” de diversos partidos políticos durante las campañas electorales; y, especialmente, ha brindado el pretexto para comprometer o debilitar la independencia de uno de los tres poderes del Estado.<sup>72</sup>**

**La administración de justicia en nuestro país ha ido desarrollándose sin tener un rumbo, un norte hacia donde apuntar, esto ha generado una alta carga procesal, inseguridad jurídica, por la falta de uniformización de la jurisprudencia, por cuanto los jueces se pronuncian sobre casos similares de diferentes formas; esto genera la falta de credibilidad de la ciudadanía hacia el Poder Judicial, hecho que ya es hora de superar.**

**Una de la formas de superar la inseguridad jurídica en la administración de justicia es por la predictibilidad.**

**En la administración de justicia peruana, los litigantes se encuentran en una incertidumbre, no hay la probabilidad ni certeza de cómo será la resultados del proceso por cuanto hay tantos criterios en casos similares, que le suyo podría ser otro.<sup>73</sup>**

En muchos países en vías de desarrollo actualmente se tiene un ámbito de inseguridad jurídica (entendida como la falta de predictibilidad, consistencia, y coherencia en la aplicación, interpretación y ejecución de normas establecidas) lo que a su vez ocasiona altos costos implícitos y explícitos de transacción para la interacción humana en general y para la expansión de los mercados de bienes y servicios en particular. Este escenario afecta negativamente las inversiones, a la generación de empleo, y a la distribución del ingreso.<sup>74</sup>

Urge entonces plantearnos la predictibilidad, que en si es una palabra que proviene de predecible, es decir que se puede predecir, predicho, anticipado, anunciado. La

---

<sup>72</sup> **LUIS DIEZ CANSECO Y ENRIQUE PASQUEL, STARE DECISIS, INTERCAMBIOS COMERCIALES Y PREDICTIBILIDAD UNA PROPUESTA PARA ENFRENTAR LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL. [www.upc.edu.pe](http://www.upc.edu.pe).**

<sup>73</sup> Sobre este tema ha expresado Javier de Belaunde L.de R. “Uno de los problemas más graves de la justicia peruana es que es impredecible. No sólo es una justicia lenta, sino que por múltiples factores (razonamiento exageradamente formalista, desvinculación del contexto económico y social, corrupción, etc.) es muy difícil predecir el resultado de un conflicto de intereses llevado al sistema de justicia. La jurisprudencia es de baja calidad. Muchas veces no hay motivación adecuada y en múltiples oportunidades resulta difícil encontrar en ella criterios orientadores. Un aspecto fundamental resulta trabajar por mejorar la calidad de la jurisprudencia. No sólo es un problema de capacitación permanente de los jueces, sino también de resolver elementales problemas administrativos. Por ejemplo que la Corte Suprema tenga un archivo de los casos que ha resuelto a los cuales los mismos jueces supremos puedan recurrir. En el Perú la jurisprudencia no establece precedentes de obligatorio cumplimiento. Ello permite que resulte frecuente que ante un mismo problema jurídico se den soluciones diferentes. Consideramos que este es uno de los factores más graves para la falta de confianza en la justicia” En Algunas Propuestas para la reforma del Sistema Judicial Peruano. Cuaderno de Formación N° 2-2005. Instituto de Estudios Social Cristianos- Fundación Honrad Adenauer Stifting. Lima, 2005, pag.11.

<sup>74</sup> **World Development Report (1997, 1998, 1999, y 2000). Washington DC: The World Bank**

predictibilidad, en el mundo jurídico, específicamente en la administración de justicia, esta relacionado con el tema de precedente y de la seguridad jurídica. En cuanto al precedente que son sentencias dictadas con carácter previo a un caso y que sirven para argumentar para un caso similar posterior, sea dentro de las etapas del proceso o en la redacción de la nueva sentencia del caso posterior.

De tal modo que con la existencia de precedentes, los litigantes desde el inicio de un proceso, sabrán con certeza de cual será el resultado final de su caso. Y con el tema de seguridad jurídica, en cuanto en la medida que exista una uniformización de la jurisprudencia, ya no habrá tantas incertidumbres en las resultados del proceso; creará una confianza en la ciudadanía en general. La seguridad jurídica influye en el crecimiento económico de un país.

En consecuencia por la predictibilidad, las partes en un proceso laboral, se permite tener cierta certeza sobre el resultado final del proceso y le permite optar por iniciar o no un determinado proceso laboral, esta capacidad de predicción del demandante en el proceso laboral de intuir el resultado de su pretensión se da por la jurisprudencia laboral, por los precedentes que establece la Corte Suprema de la República. Por ello en el tema de la predictibilidad, juega papel importante la Corte Suprema de la República. Por ello es necesario aspirar a contar con una Corte Suprema definida por su rol central en el desarrollo de la jurisprudencia y de los grandes principios que otorguen predictibilidad y dinamismo al sistema legal como conjunto. Una Corte Suprema de estas características contribuirá a incrementar los estándares de seguridad jurídica y a disminuir de esta manera la judicialización de los conflictos.<sup>75</sup> Un Poder Judicial predecible y eficiente garantiza la estabilidad en las reglas de juego constitucionales, defiende al inversionista de las eventuales arbitrariedades del gobierno, y actúa protagónicamente por el efectivo cumplimiento de los contratos.<sup>76</sup>

En consecuencia hay una tarea pendiente en el Perú, la cual asume la Corte Suprema de la República, de ser el propulsor, el guía de convertir el Poder Judicial peruano, en el protagonista de la predictibilidad, y de la seguridad jurídica.

En el Perú, en la Ley de Procedimiento Administrativo N° 27444, se ha recogido el principio de predictibilidad, en el artículo IV, Principios del Procedimiento Administrativo, en el inciso 1. apartado 15. **Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.**

---

<sup>75</sup> PROYECTO DE DECLARACIÓN POR LA JUSTICIA QUE PROPONE LA COMISION ESPECIAL DE ESTUDIO DEL PLAN NACIONAL DE REFORMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PARA SER SUSCRITA POR LA COMUNIDAD POLITICA Y JURIDICA DEL PAIS DECLARACION POR LA JUSTICIA. Lima, 2005. pag. 1-2.

<sup>4</sup> EXPOSICION DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, DOCTOR HUGO SIVINA HURTADO, EN EL ALMUERZO MENSUAL DE LA "CAMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA" (AM - CHAM PERU) Lima. 30 de setiembre del 2003.

<sup>76</sup> EXPOSICION DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, DOCTOR HUGO SIVINA HURTADO, EN EL ALMUERZO MENSUAL DE LA "CAMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA" (AM - CHAM PERU) Lima

Mario Alva Matteucci<sup>77</sup> expresa sobre la predictibilidad, que este principio se origina en el sistema del derecho Anglosajón (Common Law) y se le conoce dentro de la doctrina del Derecho Administrativo Continental como el Principio de Seguridad Jurídica, también se le conoce como el Principio de Certeza, estas coincidencias también saltan a la vista por la simple comparación de las equivalencias idiomáticas de las palabras “certeza” y “seguridad jurídica”.

**LUIS DIEZ CANSECO Y ENRIQUE PASQUEL,<sup>78</sup> refiriéndose al tema de predictibilidad, y el precedente expresan que,** ello se logra haciendo predecible el proceso decisorio y se pone en marcha mediante el mecanismo de los precedentes de observancia obligatoria. Esto es lo que se conoce en el derecho anglosajón como el principio del *stare decisis et non quia movere*. Agregan refiriéndose al Perú, que en un país con escasos recursos y claras limitaciones presupuestales, resulta indispensable identificar un área del derecho o de la actividad judicial en la que se pongan en aplicación.

**Uno de los trabajos importantes realizados en el Perú, sobre el tema de predictibilidad y jurisprudencia fue realizado el año 2004, por el PLAN NACIONAL PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA ADMINSTRACION DE JUSTICIA. CERIAJUS.<sup>79</sup> “- Uno de los aspectos centrales del Plan de la CERIAJUS es la redefinición de la activación de la Corte Suprema, a fin de que asuma en el país el liderazgo a traves de la construcción de un Sistema Judicial que brinde predictibilidad y una jurisprudencia de calidad. Con ello se contribuira a apuntalar la seguridad jurídica necesaria en un Estado de Derecho y se generará en nuestro medio importantes efectos positivos en el sistema de justicia.**

### **3.1. OBJETIVOS DE LA PREDICTIBILIDAD.**

**Considero que con la predictibilidad judicial en materia laboral y en otras áreas del derecho, el sistema de justicia peruano conseguirá los siguientes objetivos:**

#### **A).- SEGURIDAD JURIDICA**

Los precedentes laborales obligatorios, generarán una estabilidad en el sistema jurídico peruano, a los abogados, magistrados, litigantes, a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, organismos internacionales, a la sociedad civil, al ciudadano común, quienes tendrán mayor confianza en la administración de justicia peruana.

#### **B).- UNA FORMA DE ELIMINAR LA CORRUPCION.**

Mediante la predictibilidad, judicial, es mayor el control que se puede hacer de la facultad discrecional del juez, que la regla es el cumplimiento y aplicación de los

---

<sup>77</sup> Mario Alva Matteucci, EL PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD Y EL DERECHO TRIBUTARIO. **Análisis de la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Jurisprudencia de Observancia Obligatoria.** [www.teleley.com/articulos](http://www.teleley.com/articulos).

<sup>78</sup> LUIS DIEZ CANSECO Y ENRIQUE PASQUEL, STARE DECISIS, INTERCAMBIOS COMERCIALES Y PREDICTIBILIDAD: UNA PROPUESTA PARA ENFRENTAR LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL [www.upc.edu.pe/bolson](http://www.upc.edu.pe/bolson).

<sup>79</sup> CERIAJUS

precedentes judiciales, y en el caso que se aparte se deberá hacerse con la sólida fundamentación jurídica. Ya no serán posibles conseguir decisiones judiciales según el criterio del “justiciable”, egoístamente, sin respetar los precedentes.

Un sistema de precedentes de observancia obligatoria reduce el ámbito de discrecionalidad del juez, los particulares encontrarán menores oportunidades de corromper a los funcionarios judiciales.<sup>80</sup>

C).- DESCARGA PROCESAL.

La predictibilidad judicial, generará mayor claridad respecto a las pretensiones laborales, los litigantes conocerán anticipadamente las líneas jurisprudenciales, de la Corte Suprema, en consecuencia tendrá más elementos de juicio para decidir si interpone o no una demanda laboral, ello derivará en la disminución de la carga procesal en materia laboral tanto de juzgados y salas laborales o mixtas en el país.

D).- CELERIDAD EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

No solo se crea una descarga procesal en materia laboral con la predictibilidad sino también mayor celeridad en los juzgados y salas laborales, ya no más incertidumbre sobre las pretensiones laborales, la celeridad en los procesos laborales se dará en todos los órganos jurisdiccionales en materia laboral.

E).- DERECHO DE IGUALDAD.

Ante pretensiones iguales los pronunciamientos deben ser iguales, ya no más desigualdad entre las personas cuando las pretensiones son iguales o similares. debiéndose tener presente el artículo 2º inciso 2) de la Constitución Política del Perú.

F).- CONFIANZA Y CREDIBILIDAD EN EL PODER JUDICIAL.

Los precedentes vinculantes laborales, además de generar descarga procesal, así como celeridad en los procesos laborales, creará mayor confianza en los justiciables, credibilidad por parte de la población en la administración de justicia, y mejorará la imagen del juez en el Perú.

**4.- ESTABLECER PRECEDENTES VINCULANTES EN MATERIA LABORAL .**

**Últimamente** en el país se está creando por los jueces y autoridades administrativas precedentes jurisprudenciales de observancia obligatoria. Todo empezó por el Tribunal Constitucional que lo hace cotidianamente, el Tribunal Registral de la SUNARP, INDECOPI, emiten cada cierto tiempo precedentes de observancia obligatoria, la Corte Suprema, en materia penal también ha expedido precedentes vinculantes.

Entre los antecedentes de los precedentes vinculantes en el Perú, tenemos en principio:

---

<sup>80</sup> **INFORME FINAL DEL GRUPO DE TRABAJO TEMÁTICO SOBRE PREDICTIBILIDAD Y JURISPRUDENCIA**  
CERIAJUS, Año 2004, pag. 5-6.

a).- La Ley 23506, Ley de hábeas Corpus y Amparo.

Que en su artículo 9º, establecía que las resoluciones judiciales emitidas en los procesos de amparo y hábeas corpus constituían jurisprudencia obligatoria cuando de ellas pudiesen desprenderse, **principios de alcance general**, sin embargo los jueces podían apartarse del criterio en la medida que sustenten las razones de hecho y derecho que así lo justifiquen.

b).- El texto Unico Ordenado de la La ley Organica del Poder Judicial (LOPJ). D.S.017-93-JUS.

El artículo 22º, precisa que las Salas Especializadas de la Corte Suprema, publiquen en el diario Oficial El Peruano, las ejecutorías que fijan **principios jurisprudenciales** que han ser de obligatorio cumplimiento, en todas la instancias judiciales., las mismas que los jueces de diversas instancias deben invocarlas, permite excepcionalmente que un juez pueda apartarse de los principios jurisprudencial, pero obligatoriamente deben fundamentarla, a la vez indica que la Corte Suprema pueda apartarse de sus propios principios, debiendo también fundamentarla su decisión, generando un nuevo precedente.

**El artículo 80ºinciso 4) en las atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema establece** la sistematización y difusión de la jurisprudencia de las Salas Especializadas de la Corte Suprema la publicación trimestral de la ejecutorías que fijen principios jurisprudenciales que de han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales.

**Por su parte** el artículo 116º, permite los plenos jurisdccionales, nacionales, regionales o distritales, a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, en si a la fecha se han dado plenos nacionales en materia penal, civil, familia, y laboral. También últimamente se estan dando por macroregiones y distritales, sin embargo estos acuerdos no tienen efecto vinculante.

c).- El Código Procesal Civil.

En su artículo 400º, establece la doctrina jurisprudencial, que a traves de sala plena, en dicisiones que se tome en mayoría absoluta constituye pleno jurisdiccional y vincula a los órganos jurisdccionales del Estado, hasta que sea modificado por otro pleno casatorio.

d).- El Código Procedimientos Penales

El año 2004, mediante decreto legislativo 959, se incorporo al Código de Procedimientos Penales, en la jurisprudencia penal peruana el precedente obligatorio, y fue por el artículo 301º-A, la misma que contempla los dos tipos de sentencias vinculantes, a) Sentencia normativa, b) Sentencia plenaria, la primera es vinculante expedida por las Salas Penales Supremas, se permite que la sala penal pueda apartarse del precedente, para ello debe expresar los fundamentos de hecho y derecho y las razones por las cuales se aparta, debiendo publicarse en el diario oficial y la pagina web del Poder Judicial, por su parte la segunda por plenos penales supremos, adoptadas por mayoría absoluta, en caso que haya discrepancia por decisiones emitidas por dos salas penales supremas sobre un tema en materia penal, en si esta segunda modalidad es para la uniformización de la jurisprudencia.

e).- Ley Proceso Contencioso Administrativo.

El artículo 34º de la Ley 27584, precisa que las decisiones adoptadas en casación por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, constituirán doctrina jurisprudencial en materia contencioso administrativa.

f).- El Código Procesal Constitucional.

La ley 28237, el artículo VII, refiere que las sentencias del Tribunal Constitucional que adquiere **la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo**. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.

Antes de ingresar al tema de los precedentes vinculantes es necesario fijar algunos conceptos básicos, vinculados al precedente vinculante<sup>81</sup>:

. **Jurisprudencia.** Es el criterio constante y uniforme de aplicar el derecho, mostrado en las sentencias del Tribunal Supremo.

- **Doctrina jurisprudencial.** Son las resoluciones judiciales referenciales que carecen de obligatoriedad, por lo que no son fuente del derecho. No son vinculantes para los tribunales superiores e inferiores, los que pueden apartarse del precedente cuando lo estimen conveniente.

- **Sentencias normativas.** Son resoluciones judiciales vinculantes para los tribunales superiores e inferiores, debiendo observar el precedente cuando tengan que resolver casos idénticos o esencialmente similares. En esa medida, los principios de alcance general contenidos en las sentencias normativas, constituyen pautas de aplicación e interpretación de las disposiciones pertinentes que deben ser observados al momento de resolver en el futuro. Este es el principio del “Stare Decisis et Non Quieta Movere” del Derecho Anglosajón - “estése a lo decidido y que impere la quietud”.

El principio del Stare Decisis -los Precedentes de Observancia Obligatoria o Sentencias Normativas- ha sido recogido por nuestro legislador en el Artículo 400º del Código Procesal Civil.

**En si en el Perú es necesario que se dean los precedentes judiciales que en si son** sentencias dictadas con carácter previo a un caso y que sirven para argumentar para un caso similar posterior, sea dentro de las etapas del proceso o en la redacción de la nueva sentencia del caso posterior. Cuando un Tribunal ha dictado un precedente es aplicable a todas la futuras situaciones semejantes. En la judicatura colombiana <sup>82</sup>se indica que el término “precedente”, como a aquellas decisiones judiciales de las altas cortes que si han sido tomadas en un determinado sentido deben seguir aplicándose en ese mismo sentido, pues se ha ido formando una línea jurisprudencial de la cual sólo es aceptable la decisión de apartarse si se justifica de manera suficiente y adecuada.

La doctrina del precedente judicial (precedent) es uno de los pilares básicos del derecho inglés, conocido como "Derecho jurisprudencial o Derecho de los casos" (case law); una gran parte de él se refiere a la interpretación del derecho de las leyes del Parlamento, mientras que otra está dedicada a la creación del derecho

<sup>81</sup> CERIAJUS. Predictibilidad y Jurisprudencia.

<sup>82</sup> la sentencia T-123 de 1.995, de marzo 21, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, en donde se expresa la necesidad de que casos iguales recibieran un tratamiento igual por parte de los jueces, asegurando, a la vez la unidad argumentativa y doctrinal. El Precedente Judicial en Colombia. **Dirección Nacional de Defensoría Pública Unidad de Capacitación.** [www.pfyaj.com/chechchi](http://www.pfyaj.com/chechchi).

propriadamente dicho. Debido a la existencia del "case law", todos los tribunales ingleses están obligados a seguir y aplicar lo que decidieron y aplicaron en casos similares tribunales jerárquicamente superiores. Y la correcta aplicación del precedente es fundamental, ya que muchos de los recursos de apelación (appeals) se fundamentan en el precedente incorrecto en que se basó el juez para dictar el fallo (appeals by way of case stated).

La fuente principal de la producción del Derecho Inglés es el CASE-LAW, que es el conjunto de principios, reglas, criterios y parámetros de juicio que se han ido creando, por vía inductiva, a partir de los precedentes, es decir, de las decisiones de casos anteriormente resueltos.

Los jueces anglosajones recurren al "declaratory precedent" o ex novo al "original precedent". La posición de los Tribunales es clave en el peso conferido al precedente le asigne vinculatoriedad a la "ratio decidendi", es decir a la parte de la sentencia que contiene una sucinta exposición del hecho, de la decisión y del motivo por el que el juez ha decidido en tal sentido, pudiendo multiplicarse los precedentes si la decisión se funda en una pluralidad de razones; sean decisiones de Tribunales unipersonales o colegiados; decisiones de mayoría y disidencias. Por su parte el "obiter dicta" es una observación incidental del juez, que puede ser importante, pero no es precedente.

Las sentencias de los tribunales ingleses son muy distintas de las que se dictan en los países de tradición romanista. Por lo que hace a las decisiones de los ingleses, por el contrario a pesar de que, por motivos evidentes, la parte dispositiva o fallo es única, sin embargo, cada miembro del tribunal, tanto si está de acuerdo con ella como si no lo está, puede hacer constar en el texto de la sentencia su opinión. Por ello, a menudo acontece que en las resoluciones de los tribunales hay opiniones distintas, ya sea que ellas concuerden con el fallo pero por razones diferentes de hecho o de Derecho, ya sea que se deban a un desacuerdo tan radical que abarca hasta el mismo fallo.

**En principio, constituyen precedentes vinculantes sólo las opiniones que están de acuerdo con el fallo aunque se funden en razones diferentes, a no ser que haya contradicción entre ellas podrá tomarse como paradigma para las controversias posteriores. Es una regla general que los tribunales superiores puedan reformar las decisiones de los tribunales inferiores (es el llamado overruling).**

Por su parte en los Estados Unidos la doctrina del precedente es completado con la regla del stare decisis que asume rasgos peculiares en especial para los Tribunales superiores de la Unión y de los Estados que no están vinculados por sus propias decisiones, aunque sus decisiones son vinculantes en los órdenes jurisdiccionales federal y estatal.

En la clásica tradición del Common Law norteamericana, tres son los presupuestos básicos que tiene en cuenta la Suprema Corte para dictar un precedente con efectos vinculantes sobre toda la judicatura a que por excelencia se dirige el mensaje de precedente jurisdiccional; a saber:

- A). En primer lugar, la Corte dicta un precedente con efectos vinculantes cuando evidencie que en los niveles inferiores de la judicatura se dan distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura jurídica o frente a un caso determinado.



- B) La segunda razón que amerita el dictado de un precedente está referida a la necesidad de llenar un vacío legislativo o una laguna de las leyes. Se trata de hacer frente al caso construyendo una respuesta a partir de la interpretación constitucional.
- C) Finalmente, la tercera razón es la necesidad de desarrollar la jurisprudencia sentando un nuevo precedente que anula uno anterior (la conocida práctica del *overruling*).<sup>83</sup>

Conviene precisar que comúnmente suele hacerse referencia al precedente en el ámbito judicial, lo cual tiene mucho sentido, pues es en donde se ha desarrollado y afirmado. Sin embargo (sic) el precedente constitucional que, sin duda, tiene una importancia y características muy particulares. Hay más de un siglo de diferencia entre la aparición del precedente judicial y de los tribunales constitucionales, en cuya actividad se inserta la considerable importancia que ha adquirido recientemente el precedente constitucional. Siendo así, de ahora en más el recorrido histórico se va a dar por el precedente judicial aún cuando tengamos claro que el tema es el precedente constitucional, debido a su todavía incipiente desarrollo.<sup>84</sup>

Cuando hablamos de precedente, en si se alude a la regla jurídica (norma) que, vía interpretación o integración del ordenamiento dispositivo, CREA EL JUEZ para resolver el caso planteado, y que debe o puede servir para resolver un caso futuro sustancialmente análogo. Deberá servir para resolver el futuro caso análogo si se trata de un precedente vinculante, y sólo podrá servir para ello si se trata de un precedente persuasivo<sup>85</sup>.

**En si el fundamento del precedente vinculante judicial, es el principio de igualdad, a ellos nos referimos en el sentido que tienen los litigantes a obtener resoluciones idénticas ante situaciones jurídicas similares.**

**Constituye un precedente a los fines de la interpretación jurídica toda decisión anterior que tenga alguna relevancia, para el juez que debe resolver el caso. Se trata , en si según pueda advertirse, de una noción amplia que excluye eventuales restricciones como los que podrían derivarse de atribuir el valor precedente sólo a las decisiones emanadas de los tribunales supremos respectivas o que expresen criterios reiterados en otras decisiones.**<sup>86</sup>

Dependiendo de su grado de trascendencia en un conflicto los precedentes pueden ser obligatorios y persuasivos. Los **obligatorios** deben observarse por el tribunal que los dictó, y los **persuasivos** no siempre deben tener observancia forzosa. La corte suprema y los tribunales estatales de máxima jerarquía pueden anular sus propios precedentes. A la vez los precedentes pueden tener origen en tribunales nacionales

<sup>83</sup> Tribunal Constitucional Peruano. Exp. N° 3741-2004-AA/TC.

<sup>84</sup> Monroy Galvez, Juan, En Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional.

<sup>85</sup> Rodríguez Santander Roger, El Precedente Constitucional en el Perú: Entre el Poder de la Historia y la razón de los derechos. En Estudios al precedente constitucional. Palestra del Tribunal Constitucional. Revista mensual de Jurisprudencia. Palestra Editores. S.A.C. Lima, Febrero del 2007. pag. 55- 56..

<sup>86</sup> Sobero. Eduardo. Sobre el cambio de los Precedentes, Isonomia N° 21. Octubre 2004. pag.220.

como internacionales, también hay los autoprecedentes, en la cual el mismo Tribunal que dicto el precedente es el mismo que tiene que resolver el caso, es una deliberación consigo mismo.

El Tribunal Constitucional Peruano últimamente ha asumido un rol de establecer precedente vinculantes, la misma que conduce hacia una predictibilidad en materia constitucional.

Rubio Correa,<sup>87</sup> precisa que una iniciativa jurisprudencial de este tipo tiene que desarrollar necesariamente discusión y contienda respecto de conceptos y de soluciones

La jurisprudencia en general debe otorgar certeza pero también adecuación a una realidad cambiante. Una de las razones para establecer el principio de "precedente vinculante" es la necesidad de establecer una cierta certeza y uniformidad jurisprudencial.<sup>88</sup>

Es necesario e importante aclarar que la obligación de observar los precedentes no puede ser absoluta. En efecto, se puede "distinguir" el precedente por considerarlo inaplicable a los hechos concretos. Si no fuera así, se generaría una inaceptable fosilización del Derecho. Del mismo modo cabe indicar que, aunque semejantes los hechos, los tiempos pueden cambiar y resultar injustas las soluciones, y porque la ley debe interpretarse no de acuerdo a la voluntad del legislador sino a la voluntad de la ley, en armonía con sus propios fines; pero la voluntad de la ley no puede ser algo inmóvil sino dinámica, susceptible de adaptación a la permanente evolución.

En este sentido se verifica la necesidad de optar entre la inamovilidad del derecho expresado en precedentes cuyo contenido no puede variar, en contraposición con la arbitrariedad y falta de predictibilidad que es una de las características que ha erosionado significativamente la credibilidad y prestigio del Poder Judicial Peruano. Esta problemática ha quedado resuelta en el derecho anglosajón sobre la base de la posibilidad de **distinguir los hechos y, por lo tanto, declarar que el precedente no se aplica**. En ese contexto la Corte Suprema puede, incluso, **modificar el precedente**.<sup>89</sup> **Por ello es importante que los jueces estén capacitados en la técnica de los precedentes, distinguir los hechos, en los casos concretos, y habrá momentos en que por circunstancias muy especiales que tendrá que apartarse de un precedente sea a nivel de la propia Corte Suprema o a nivel de las Salas Laborales o juzgados laborales, por cuanto se hace distinta los hechos al precedente, es decir estará en juego la creatividad del juez a través de la jurisprudencia.**

---

<sup>87</sup> Rubio Correa, Marcial, JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTE VINCULANTE EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. [www.gaceta.tc.gob.pe](http://www.gaceta.tc.gob.pe).

<sup>88</sup> Chipoco, Carlos.

<sup>89</sup> INFORME FINAL DEL GRUPO DE TRABAJO TEMÁTICO SOBRE PREDICTIBILIDAD Y JURISPRUDENCIA, CERIAJUS, pag. 7.

En los países en donde el llamado precedente vinculante o la doctrina del *stare decisis* tiene una importancia significativa,<sup>90</sup> es decir, vincula al juez inferior, en ningún caso tal influencia significa que lo aturde al punto de que éste no puede ya discernir sobre la aplicación o no de un precedente. Es decir, en el *common law* es perfectamente válido que un juez se aparte del precedente que le ha sido invocado si, por ejemplo, considera que de emplearlo puede provocar un desastre<sup>91</sup>.

Monroy Galvez<sup>92</sup> sobre el tema considera que lo que existe en el mundo es el precedente relativamente vinculante, en tanto el juez puede apartarse de un precedente si lo considera incorrecto para el derecho o para la razón, inclusive hay instituciones procesales que le permiten sustentar tal separación e indica que estas son dos: El *distinguishing* es una técnica que permite al órgano jurisdiccional de grado inferior reducir la vinculación al precedente judicial invocado, e inclusive eliminar cualquier afectación de éste al caso por resolver, acreditando que hay hechos distintos en la configuración de la *ratio decidendi* respecto de los hechos del caso a ser resuelto.

Y la segunda es la regla jurídica *Cesante ratione, cessat ipsa lex* suele ser empleada también por el órgano inferior para apartarse del precedente judicial, afirmando que las circunstancias extra jurídicas que rodean al caso (sociales, políticas o económicas) han variado sustancialmente, por lo que la identidad indispensable para la aplicación del precedente ha desaparecido.

**Esta posibilidad de apartarse el juez de un precedente, nos generará la pregunta de si un precedente judicial es ¿fuente de derecho o no?. En si es un tema polemico, hay voces que la niegan y otras que dicen que si. Expliquemos previamente.**

**Cuando hablamos de fuente de derecho, a decir del maestro Norberto Bobbio<sup>93</sup> “ aquellos hechos o aquellos actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas jurídicas”.**

Monroy Galvez,<sup>94</sup> expresa que “ En los países de la familia del *common law* éste es tan importante que se le reconoce como el instrumento idóneo para permitir que los jueces provean de uniformidad a la jurisprudencia y, sobre todo, para producir reglas de derecho que, posteriormente, suelen ser traducidas al lenguaje normativo por el Congreso y, aunque eso no ocurriera, suelen ser reconocidas como normas jurídicas por

---

<sup>90</sup> Monroy Galvez, Juan. Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional. Separata. Lima, 2007. pag. 9.

<sup>91</sup> Monroy. Ob. Cit. Menciona en Inglaterra, la Corte de Apelaciones en el caso *Broome v. Cassell* (1971) no siguió el precedente establecido por la Casa de los Lores en *Rookes v. Bernard* (1964) afirmando lo siguiente: “Creemos que las dificultades presentadas por *Rookes v. Barnard* son tan grandes que los jueces tendrían que dirigirse al jurado según el derecho como fue entendido antes de *Rookes v. Barnard*. Cualquier intento de seguir obligatoriamente *Rookes v. Barnard* lleva obligatoriamente a confusión”. Como se aprecia, el apartamiento de un precedente en países donde funciona la doctrina del *stare decisis* es posible si se fundamenta. Sólo en el Perú –si no hacemos algo pronto con la sentencia en comentario– un precedente va a ser tanto o más importante que una ley del Congreso (sobre cuyo incumplimiento una persona puede ser demandada o procesada, según el caso, salvo que la pretensión o acción penal haya prescrito), en tanto el tiempo no reduce su efecto predador, por lo menos según la curiosa teoría del TC.

<sup>92</sup> Monroy, ob. Cit. Pag. 15.

<sup>93</sup> Bobbio, Norberto, Teoría general del derecho. Temis, Bogotá, Colombia, 1987, pag. 158.

<sup>94</sup> Monroy Galvez, ob. Cit. Pag. 16.

los jueces, abogados y, en suma, por el tejido social. En otras palabras, en dichos sistemas el precedente se comporta como una fuente de derecho. Pero esto ocurre, fundamentalmente, porque siendo un derecho creado en los estrados judiciales, sus jueces personifican la razón fundamental del prestigio de sus decisiones”.

El tema ha generado polemica en la actualidad, en el ambiente jurídico peruano, motivado por los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional Peruano, es así por ejemplo en la sentencia **La sentencia No. 006-2006-PC/TC**:

**“36. Así, respecto a la sentencia 009-2001-AI/TC, es de provecho resaltar que si la Constitución reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano de control de la Constitución y de la constitucionalidad de las leyes (artículo 201) y le ha reservado la posición de ser, en algunos procesos constitucionales, instancia final de fallo y, en otros, instancia única (artículo 202), entonces sus sentencias no pueden ser desconocidas por los demás poderes u órganos constitucionales del Estado e, incluso, por los particulares.”**

**“40. Esto quiere decir que el carácter vinculante de las sentencias del TC genera consecuencias que van más allá de los efectos de la cosa juzgada formal, toda vez que su observancia es no sólo para las partes, sino también para los poderes y órganos constitucionales y para los casos similares, debido a lo dispuesto en el fallo de la sentencia y también a sus fundamentos y consideraciones –*ratio decidendi*–. Ya en sentencia anterior el Tribunal ha señalado que:...”**

**“43. Como consecuencia lógica de ello, los tribunales y jueces ordinarios no pueden contradecir ni desvincularse de las sentencias del Tribunal Constitucional, bajo riesgo de vulnerar no sólo los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, sino también el principio de unidad, inherente a todo ordenamiento jurídico. Aún más, si así fuera se habría producido un efecto funesto: la subversión del ordenamiento constitucional en su totalidad, por la introducción de elementos de anarquía en las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.”**

**En concreto se aprecia, el carácter absoluto e inmutable del precedente vinculante constitucional, y permite hasta la obligatoriedad de su cumplimiento hasta a terceros ajenos a un proceso constitucional particular, como son los poderes del Estado u órganos constitucionales. Monroy Galvez<sup>95</sup> sobre la posición asumida por el Tribunal Constitucional, expresa, “ El precedente vinculante u obligatorio en los términos de un mandato inexorable que debe ser seguido ‘sin dudas ni murmuraciones’ o que puede dar lugar a la anulación de las decisiones que no lo reconocieron, no existe en ningún lugar del mundo”.**

Por su parte Roger Rodríguez Santander <sup>96</sup>, al abordar el tema de la precedencia vinculante constitucional, refiriéndose al Tribunal Constitucional expresa , “ Las leyes no vinculan al TC a menos que éste juzgue que son compatibles con la Constitución del

---

<sup>95</sup> Monroy Galvez, ob. Cit. Pag. 14.

<sup>96</sup> Rodríguez Santander Roger, El Precedente Constitucional en El Perú, En Estudios al Precedente constitucional. Palestra del Tribunal Constitucional. Palestra. Edgar Carpio Marcos, Pedro P. Grandez Castro ( Coordinadores) Lima, febrero 2007. Pag. 58.

Estado, resulta que en el sistema de fuentes del Derecho, el precedente constitucional vinculante se ubica por encima de la ley, pues en caso de conflicto, ésta resultará inválida por ser incompatible con una disposición constitucional, conforme al sentido que su supremo intérprete le ha atribuido. ”

La Jurisprudencia no es fuente del Derecho, aunque se aproxime a ellas (DÍEZ PICAZO y GULLÓN). Esta función de complemento excluye la idea de ser una fuente formal, es más bien una fuente material, aunque la doctrina comparada en algunos casos (NARTY y RAYNAUD en Francia) pueda incluirla dentro del sistema de fuentes. Desde luego, en Italia ROTONDI le niega tal carácter y la admite sin gran convicción DU PASQUIER en Bélgica.

Nosotros nos preguntamos ¿ que pasaría, si el Tribunal Constitucional, deja sin efecto su precedente vinculante anterior y propone otro?. Hecho que razonablemente y cotidianamente sucede, por ello comparto con el profesor Monroy, no por el hecho de darse precedentes vinculantes constitucionales, sea esta absoluta para que los jueces de todas las instancias, en el Perú, lo acatemos sin murmuraciones, sin que se pueda tener presente en las decisiones judiciales, la potestad del juez de resolver en casos excepcionales, atendiendo a lo dispuesto en la ley y las otras fuentes del derecho como son la costumbre, jurisprudencia, como también su criterio de razonabilidad, experiencia y concepción del mundo para resolver el caso concreto, en el caso mio por ejemplo al ser magistrado en Apurímac, al radicar aquí me ha hecho comprender y entender la concepción que tiene el hombre andino, que es muy distinto al poblador de la Costa. Hay criterios generales pero también especiales, que es necesario que el juez en ello aporte.

La expedición de los precedentes vinculantes en materia laboral, en el Perú se tiene que dar a través de los plenos casatorios, por parte de los vocales supremos integrantes de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, y no en Sala Plena conforme lo dispone el artículo 400º del Código Procesal Civil, la misma que supone la reunión de todos los vocales supremos de todas las especialidades, ello impide que sean los plenos casatorios por especialidades, caso contrario ocurre en materia penal en la cual según el artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales, que regula los precedentes obligatorios, la misma que dispone que esta se obtiene por plenos de los vocales supremos de lo penal de la Corte Suprema, a través de las sentencias plenarias.

En consecuencia es necesario la **modificación** del artículo 400º del Código Procesal Civil, para los precedentes vinculantes en materia civil y la incorporación de un artículo sobre los precedentes obligatorios en materia laboral y de la seguridad social en la Ley Procesal del Trabajo, sin que dependa del Código Procesal Civil. Considero necesario que se dea la precedencia vinculante tanto horizontal como la vertical, es decir será horizontal cuando la propia Corte Suprema respete sus propios precedentes vinculantes obligatorios, y precedente vinculante vertical, cuando, los órganos jurisdiccionales inferiores respeten los precedentes vinculantes obligatorios, expedida por la Corte Suprema. Sin embargo los jueces tanto supremos como de instancia pueden apartarse de un precedente vinculante obligatorio cuando los casos no sean idénticos o similares pero con la debida fundamentación

jurídica, bajo responsabilidad. Por cuanto no se puede dejar de lado el papel creativo del juez a la luz de nuevas situaciones y nuevos hechos que permitan reinterpretar el alcance y sentido de los derechos laborales.

Michele Taruffo,<sup>97</sup> jurista italiano, refiriéndose sobre el valor del precedente en la casación indica “ La autoridad del precedente de casación depende de varios factores, **que van desde el prestigio intrínseco de la decisión, hasta la fama de los jueces que elaboran la motivación, la tempestividad de la intervención de la corte sobre cuestiones controvertidas, etc.”** Considero que es necesario que los precedentes obligatorios en materia laboral sean expedidos con la responsabilidad adecuada, a fin de elaborar una jurisprudencia vinculante laboral, coherente, ordenada, razonada. Las mismas que deben ser publicadas en la página web del Poder Judicial y en el diario oficial “El Peruano”. Además ello debe estar complementado con la capacitación de los jueces en la técnica del precedente vinculante. Así como se imparta en las facultades del derecho del país, un curso a nivel de pre-grado y postgrado de la predictibilidad y la jurisprudencia.

P

R

E

C

E

D

E

N

T

E

PRECEDENTE VINCULANTE HORIZONTAL \_\_\_\_\_

VERTICAL

---

<sup>97</sup> Taruffo Michele, El vértice Ambiguo, Ensayos sobre la Casación Civil, traducción de Juan J. Monroy Palacios y Juan F. Monroy Gálvez. Palestra Editores, Lima 2005, pag. 146.

#### **4.1.- LA UNIFORMIZACION DE LA JURISPRUDENCIA A TRAVES DE LOS PRECEDENTES VINCULANTES.**

.Una de las funciones fundamentales que tiene la Corte Suprema de la República como órgano máximo de la función jurisdiccional en el Perú como en otros países, es la uniformización de la jurisprudencia; en nuestro caso en materia laboral y seguridad social, las mismas que se expedirán en los plenos casatorios, en reuniones de los magistrados integrantes de la Sala Constitucional y de Derecho social, permanente y transitorio.

**Estos plenos casatorios serán de cumplimiento obligatorio de los órganos jurisdiccionales inferiores, por cuanto son precedentes vinculantes. Ello generará la uniformización de la jurisprudencia laboral y de la seguridad social, así tenemos:**

- º Generaría una disminución de la carga procesal en materia de casación laboral a nivel de la Corte Suprema, así como de los juzgados laborales y Salas Laborales o Mixtas del país..
- No existiría contradicción jurisprudencial entre las Salas de Derecho Constitucional y Social
- Al existir los precedentes vinculantes en materia de casación laboral, las casaciones interpuestas por las partes contrarias a los precedentes vinculantes serán declaradas improcedentes, no recurriendo necesariamente a otras justificaciones para evitar la proliferación de la interposición de este recurso, vulnerando derechos fundamentales de las personas, sino haciendo conocer anteladamente una respuesta hipotética frente a la interposición de su recurso, frente a su pretensión.
- º La sistematización de la jurisprudencia laboral y de la seguridad social peruana, generando la confianza de la sociedad civil, para ello debería promoverse la difusión de la jurisprudencia laboral no solamente a través del diario Oficial “el Peruano”, sino también por medio de otras vías de comunicación, como los portales de internet, las páginas virtuales de los colegios de abogados y demás entidades públicas y privadas dedicadas al campo jurídico, solo de esta forma se podrá contraponer esta imagen de trato desigual entre trabajadores y empleadores.

### 3.3 . UNA NUEVA FORMA DE REGULACIÓN DE LAS CAUSALES DE LA CASACIÓN LABORAL PERUANA.

La doctrina procesal a regulado las causales para interponer el recurso de casación de dos formas, *numerus apertus* y *numerus clausus*. En la primera se considera un número indeterminado de causales posibles para interponer el recurso, por su parte en la segunda forma la legislación señala un número determinado de causales expresas.

Esta segunda forma es la que sigue nuestra legislación procesal laboral y civil, por ello las causales que no están debidamente sustentadas en la ley hace que el recurso de la casación sea declarado improcedente.

Considero que es necesario replantear el tema de las causales en la casación peruana. Ambas formas tienen sus aspectos negativos, por ejemplo en la *numerus apertus*, los justiciables pueden interponer por cualquier motivo un recurso de casación laboral, y más aun cuando los litigantes tienen la idea de “una tercer instancia” generaría en la realidad peruana más sobrecarga procesal. En cambio en la segunda forma también limita la tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto no siempre las únicas causales son las reguladas en la ley procesal del trabajo.

Por ello sugiero que seria un modelo mixto, flexibilizador entre ambas formas, en la que haya una sola causal expresa, la misma que contemple a todos los supuestos de vulneración del derecho sustancial así como el debido proceso. Así proponemos:

**CAUSAL PARA INTERPONER EL RECURSO DE CASACION LABORAL: “La vulneración del derecho sustantivo en materia laboral y de la seguridad social, así como la infracción del debido proceso.”**

Las mismas que estarían plasmadas la vulneración tanto en AUTOS QUE DAN FIN A LA INSTANCIA Y SENTENCIAS DE VISTA. Por su parte el debido proceso es cautelado durante todo el proceso laboral.



3.3.1.

**3.4. DEBE SER CONCEDIDO SIN EFECTO SUSPENSIVO GENERALMENTE Y EXCEPCIONALMENTE CON EFECTO SUSPENSIVO.**

Cuando un litigante, tenga dos sentencias favorables, ganadas en dos instancias, no hay razón que interpuesta el recurso de casación laboral por la parte perdedora, sea concedida el recurso sin efecto suspensivo, perjudicándose, económicamente y en tiempo la parte que tiene sentencia favorable, y no pudiendo ejecutar su sentencia, me pregunto entonces ¿De que le sirve haber ganado su pretensión en dos instancias?. Por ello, en ese caso considero que se le debe conceder a la parte que interpone el recurso SIN EFECTO SUSPENSIVO, pudiendo la parte vencedora, si el caso lo amerita, ofrecer una garantía sea de tipo personal o real, en caso de que sea favorable el resultado de la interposición de la casación para la parte que la interpuso. La excepcionalidad de la concesión del recurso de casación laboral CON EFECTO SUSPENSIVO, será cuando haya dos sentencias, en que en las instancias correspondientes se tenga una desfavorable y otra favorable, sea de la parte actora o demandada; en ello si es explicable que se conceda el recurso CON EFECTO SUSPENSIVO.

**3.5. NO DEBE EXISTIR LA LIMITACION DE LA CUANTIA PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE CASACION LABORAL.**

No es razonable ni lógico que se discrimine legalmente y se legitime la injusticia frente pretensiones laborales que no superen las 100 UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL. Es tan importante una pretensión laboral para un trabajador que reclama beneficios económicos de S/. 10,000.00 como otro que reclama por S/. 100,000.00. para ambos su razón de su proceso de beneficios sociales, tiene carácter de necesidad personal.

**3.6. DEBE PROCEDER ADEMAS CONTRA AUTOS QUE DAN FIN A LA INSTANCIA.**

Es necesario que en una nueva reforma procesal laboral se permita la interposición del recurso de casación laboral, contra autos expedidas por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores del país, autos que dan fin a la instancia,

por ejemplo, actualmente un tema preocupante, son los autos expedidos por las Cortes Superiores, en materia de prescripción laboral la cual tienen criterios diferentes, como también algunas Salas Superiores se pronuncian sobre la vigencia de la Constitución Política de 1979 y otras no. ES NECESARIO QUE ESTOS ASUNTOS TAMBIEN DE MUCHA TRASCENDENCIA CONTENIDOS EN AUTOS SEAN DE CONOCIMIENTO EN CASACION POR PARTE DE LA CORTE SUPREMA.

### **3.7. AMPLIAR LA BASE DE PROTECCION DE LOS JUSTICIABLES:**

**3.7.1. TRABAJADORAS DEL HOGAR:** Es el sector que durante mucho tiempo estuvo olvidado, en su debida protección de sus derechos laborales sean individuales y colectivos, y ahora en materia procesal se le margina al no ser considerado para interponer un recurso de casación laboral , por cuanto sus pretensiones independiente del monto, son de competencia del juzgado de paz letrado.

### **3.8. AMPLIAR SOBRE LA CAUSAL DE LA VALORACION PROBATORIA**

#### **1. APLICACIÓN DE LOS PLENOS CASATORIOS:**

- SENTENCIAS NORMATIVAS
- PREDICTIBILIDAD: CONLLEVA AL STARE DECISIS: CERTIROARI (AMBITO LEGAL)
- SEGURIDAD JURIDICA
- CERTEZA
- DOCTRINA LEGAL
- FORMACIÓN EN CRITERIOS DE JUSTICIA:
  - CONOCIMIENTO- CAPACITACIÓN (UNIVERSIDAD, AMAG, MP/PJ)
  - CONCIENCIA - ETICA

## CAPITULO V

### COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO OPERACIONAL

#### 1. Hipótesis General.

Nuestra hipótesis general se ha confirmado, por cuanto los operadores jurídicos del recurso de casación: abogados, litigantes y magistrados no han aplicado adecuadamente esta institución procesal, por cuanto los dos primeros han interpuesto masivamente los recursos de casación laboral, en muchos casos indebidamente, generando alta carga procesal y por otra parte la Sala de Derecho Constitucional y Social, si bien han llegado a resolver los recursos, sin embargo no llegaron a uniformizar la jurisprudencia laboral, todo ello contribuye a la crisis de la institución, al no haber priorizado los fines de la casación.

#### 7.2. Hipótesis específicas.

##### PRIMERA:

Se confirma nuestra hipótesis en el sentido de que los litigantes y abogados, han considerado erróneamente en los años de aplicación de la casación laboral peruana como una “tercera instancia”, en el proceso laboral, más como un recurso dilatorio, y

no como un medio impugnatorio que responde a fines específicos previstos en la Ley Procesal del Trabajo.

**SEGUNDO:**

Se confirma nuestra hipótesis en el sentido de que la Corte Suprema, específicamente la Sala de Derecho Constitucional y Social, no llegó a uniformizar en los años de aplicación de la casación laboral, la jurisprudencia laboral, por cuanto no llegó a realizar ningún pleno casatorio en materia laboral.

**TERCERO:**

Se confirma nuestra hipótesis en el sentido que la segunda finalidad del recurso de casación, es la unificación de la jurisprudencia laboral nacional; la misma que para poderse dar se tiene que expedir los plenos Casatorios en materia laboral, pero no por la sala plena de la Corte Suprema, si no por las salas especializadas, en el caso laboral por los vocales supremos de ambas salas de Derecho Constitucional y Social, y darse los precedentes vinculantes, de carácter obligatorio, generándose la predictibilidad judicial, la misma que contribuirá a la seguridad y credibilidad y confianza de los órganos jurisdiccionales laborales en el país.

### **CONCLUSIONES.**

1. Se ha podido determinar que durante los años de vigencia de la Ley Procesal de Trabajo, los abogados, magistrados no han visualizado, en su total magnitud, la figura de la casación y menos aún establecer que la casación laboral tiene sus propias características que lo diferencian de la casación civil; por lo tanto, han generado una desnaturalización de este medio impugnativo.
2. Se ha podido determinar, que durante los años de vigencia de la Ley Procesal de Trabajo no se ha cumplido la primera finalidad del recurso de casación que es la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social, debido al inadecuado uso de este recurso por parte de los abogados litigantes y la poca diligencia de los magistrados de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República; originando como consecuencia el alto porcentajes de resoluciones declarados improcedentes.
3. Se ha podido determinar, que durante los años de vigencia de la Ley Procesal de Trabajo no se ha cumplido la segunda finalidad del recurso de casación que es la unificación de la jurisprudencia laboral nacional, ello porque los magistrados de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República no han uniformizado sus criterios de evaluación de los recursos.

4. Se ha podido determinar, que es indispensable la regulación de fines y causales de tipo procesal en la casación laboral porque las causales previstas en la Ley Procesal de Trabajo no satisfacen la problemática jurídica en materia laboral existente en nuestro país.

### **PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES.**

2. Se deberá efectuar modificaciones a la Ley Procesal de Trabajo en cuanto a los fines del recurso de casación y a las causales establecidas para su interposición.
3. Que, dentro de las finalidades del recurso de casación laboral, deben incluirse aquellas referidas al ámbito procesal.
4. Se debería considerar a nivel legislativo la posibilidad de incluir dentro los fines de la casación aquella referida a la función dikelógica del recurso de casación.
5. Las causales para interponer recursos de casación debe ampliarse al ámbito procesal, específicamente la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.
6. El Poder Judicial juntamente con los Colegios de Abogados de todo el país deberían efectuar anualmente un estudio y evaluación conjunto respecto al cumplimiento de los fines del recurso de casación laboral.

## **PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY DE LA CASACION LABORAL**

### **Artículo 1º.- FINES DE LA CASACION.**

El recurso de casación tiene como fines esenciales:

- 1.- La correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social.
- 2.- La Unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República.

### **Artículo 2º.- COMPETENCIA.**

El recurso de casación laboral, es de competencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República.

### **Artículo 3º.- PROCEDENCIA.**

Sólo procede el recurso de casación contra:

- 1.- Las sentencias expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas.
- 2.- Los autos resueltos en segunda instancia que ponen fin al proceso.

### **Artículo 4º.- CAUSALES.**

Son causales para interponer el recurso de casación:

- 1.- La aplicación indebida, de una norma de derecho material y del precedente vinculante obligatorio.
- 2.- La interpretación errónea de una norma de derecho material y del precedente vinculante obligatorio.
- 3.- La inaplicación de una norma de derecho material y del precedente vinculante obligatorio.
- 4.- La aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de los preceptos jurídicos referidos a la valoración de la prueba.
- 5.- La violación del debido proceso.

### **Artículo 5º.- LEGITIMACION.**

El recurso de casación sólo podrá interponerse por la parte que haya recibido el agravio en la sentencia o auto. No podrá interponer el recurso quien no apeló la

sentencia de primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución de la Sala Superior haya sido totalmente confirmatoria de aquella.

#### **Artículo 6º.- REQUISITOS DE FORMA.-**

El recurso de casación se interpone ante el órgano jurisdiccional que expidió la resolución impugnada:

1.- Dentro del plazo de quince días de notificada.

2.- Acompañando el pago de la tasa judicial respectiva, por la parte obligada.

La Sala Superior o Mixta en el plazo de tres días verificará el cumplimiento de estos requisitos para la admisión y trámite del recurso, debiendo señalar los requisitos omitidos en caso la rechace.

#### **Artículo 7º.- REQUISITOS DE FONDO.-**

El recurso debe estar fundamentado con claridad señalando con precisión las causales expresadas en el artículo 4º en que se sustenta y, según el caso indicar:

1. Qué norma material o precedente vinculante obligatorio, ha sido indebidamente aplicado, y cuál es la que debió aplicarse.

2. Cuál es la correcta interpretación de la norma material o precedente vinculante obligatorio.

3. Cuál es la norma material o precedente vinculante obligatorio inaplicada y porqué debió aplicarse .

4.- Cuál es el precepto jurídico referido a la valoración de la prueba, aplicado indebidamente, interpretado erróneamente o de falta de aplicación.

5.- En qué consiste la violación del debido proceso y de qué manera lo afectado.

La Sala Casatoria califica estos requisitos y si el recurso no cumpliera con alguno de los requisitos de fondo indicados, lo declara improcedente.

#### **Artículo 8º.- PRONUNCIAMIENTO.**

Una vez declarado procedente el recurso por la sala casatoria, se fijará día y hora para la vista de la causa. Los abogados de las partes pueden informar si lo solicitan dentro de los cinco (5) días de notificada a la vista de la causa.

La Sala la declarará fundada o infundada. Si la sala declara fundado el recurso se pronunciará sobre las causales invocadas sin devolver el proceso a la instancia inferior.

Si la casación se fundara en la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos de la valoración de la prueba, la Sala Casatoria, pronunciará sentencia en el fondo sobre la base de la valoración que entendiere corresponder.

Si se declara fundada la casación por causal de violación del debido proceso se ordena la devolución de los actuados a la instancia que corresponda para la subsanación respectiva.

#### **Artículo 9º.- PRECEDENTE VINCULANTE.**

Las sentencias casadas que adquieran la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, debiendo ésta precisar el extremo de su efecto normativo. Cuando la Sala resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones de su decisión.



**Si se advierte que otra Sala de Derecho Constitucional, sostuvieran criterios discrepantes** sobre la interpretación o la aplicación de una norma de derecho material o precedente vinculante, y a fin de uniformizar la jurisprudencia, a instancia de cualquiera de las Salas, se convocará inmediatamente a un pleno de los vocales de las Salas Supremas mencionadas para dictar una sentencia plenaria, la que se adoptará por mayoría absoluta. Tanto las sentencias normativas y plenarias, se deben publicar en la pagina Web del Poder Judicial, así como en el diario Oficial, “El Peruano”.

**Artículo 10º.- COSTAS.**

Si el recurso de casación fuese declarado improcedente o infundado, quien lo interpuso asumirá la condena de costas y costos originados en la tramitación del recurso.

## BIBLIOGRAFÍA.

1. ALMEIDA PEÑA, Feliciano, **“El Recurso de Casación en el Proceso Laboral. Comentarios, Legislación y Jurisprudencia”**, Editorial MARSOL, Lima- Perú, 1999.
2. ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, María Emilia, **“Derecho de Trabajo”**, Editorial Civitas, Madrid – España, 1999.
3. ALSUNA, Hugo, **“Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”**, Editorial Ediar, Buenos Aires – Argentina, 1961.
4. ARBONES, Mariano, **“Reflexiones en torno a la cosa juzgada y su impugnabilidad”**, Cuaderno N° 1, Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNG, Editorial Advocatus, Córdoba - Argentina, 1996.
5. ARÉVALO VELA, Javier, **“Comentarios a la Ley Procesal de Trabajo. Legislación y Jurisprudencia”**, Editorial Cultural Cuzco, Lima – Perú, 1997.
6. ARIANO, Eugenia, **“Error Causal y Casación”**, publicado en la Revista Diálogo con la Jurisprudencia, N° 38, Noviembre 2001.
7. CALAMANDREI, Piero, **“La Casación Civil”**, Tomo I, Volumen I, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires – Argentina, 1961.
8. CAPPELLETI, Mauro, **“El formidable problema del control judicial y la contribución del análisis comparado”**, en Revista de Estudios Políticos, Madrid – España, Editorial Nueva Época, N° 13, Enero - Febrero 1980.
9. CARNELUTTI, Francisco, **“Instituciones del Proceso Civil”**, Editorial Bosh, 1959-1960.

10. CARRION LUGO, Jorge, “**La casación en el ordenamiento procesal civil peruano**”, I Congreso Nacional del Derecho Procesal organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Agosto 1996.
11. CARRION LUGO, Jorge, “**El recurso de Casación en el Perú, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia**”, Editorial Grijley, Lima, Primera Edición, 1997.
12. CARRION LUGO, Jorge, “**El Recurso de Casación en el Perú**”, Editorial Grijley E.I.R.L., Lima – Perú, 2003.
13. CRUZ VILLALÓN, Jesús, “**La unificación de la doctrina legal en la Ley de bases de procedimiento laboral**”, Madrid – España, 1999.
14. DE LA PLAZA, Manuel, “**La casación Civil**”, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid – España, 1944.
15. DE LA PLAZA, Manuel, “**Derecho Procesal Civil Español**” en Revista de Derecho Privado, Tomo I, Madrid – España, 1945.
16. DE LA RUA, Fernando, “**El Recurso de Casación**”, Víctor P de Zavala Editor, Buenos Aires – Argentina, 1968.
17. ESTIVAL, Alonso, “**Derecho Procesal de Trabajo: Visión práctica y formularios**”, Editorial Bosh, Barcelona España, 1999.
18. FEBREGA P., Jorge, “**Casación Civil**”, Editora Jurídica Panameña, 1985.
19. FERRER, Sergio, “**Casación por Arbitrariedad de Sentencia**”, La Ley Córdoba, Año XII, Nº 2, Febrero 1995.
20. GAMARRA VILCHEZ, Leopoldo, “**El Nuevo Procesal Laboral**” en VI Congreso Peruano de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, Tomo I, UNMSM, 1996.

21. GHIRARDI, Olsen, **“El Razonamiento Judicial”**, editado por la Academia de la Magistratura, Lima - Perú, 1997.
22. GOMEZ VALDEZ, Francisco, **“La Ley Procesal del Trabajo. Análisis Secuencial, doctrinario, jurisprudencial y comparado”**, Editorial San Marcos, Lima – Perú, 1998.
23. GUASCH FERNANDEZ, Sergi, **“El Hecho y el Derecho en la Casación Civil”**, Editorial Bosh, Barcelona – España, 1998.
24. HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, **“Medios Impugnatorios en el Proceso Civil: Doctrina y Jurisprudencia”**, Segunda Edición, Gaceta Jurídica S.A., Lima – Perú, Julio 2002.
25. HITTERS, Juan Carlos, **“Técnica de los Recursos Extraordinarios y la Casación”**, Librería Editorial Platense S.R.L., La Plata – Argentina, 1984.
26. HITTERS, Juan Carlos, **“La Casación Nacional. Su estado actual”**, Volumen II, Editora Juris, Argentina, 1979.
27. HITTERS, Juan Carlos, **“Fines de la Casación”**, publicado en la obra en honor al Dr. Augusto Mario Morello – Librería Editora Platense, Buenos Aires, 1982.
28. HITTERS, Juan Carlos, **“La Casación Civil en el Perú”**, en Revista Peruana de Derecho Procesal, Lima – Perú, Marzo 1998.
29. IVORRA MIRA, María Jesús, **“El Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina”**, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia – España, 1997.
30. MARCHESE QUINTANA, Bruno, **“La Casación Civil”** artículo publicado en la Revista Peruana de Derecho Civil, Lima – Perú, Septiembre 1997.

31. MONROY GALVEZ, Juan, **“Apuntes para un Estudio sobre el Recurso de Casación en el Proceso Civil Peruano”** en Revista Peruana de Derecho Procesal, Lima – Perú, Septiembre 1997.
32. MONTERO AROCA, Juan, **“Introducción al Proceso Laboral”**, Cuarta Edición, Editorial Bosch, Barcelona – España, 1997.
33. MONTOYA MELGAR, Alfredo, **“Introducción al Proceso Laboral”**, Editorial Tecnos S.A., Madrid – España, 1996.
34. NEVES MUJICA, Javier, **“La uniformización jurisprudencial en el ámbito laboral”** en Asesoría Laboral N° 36, Lima – Perú, 1993.
35. NEVES MUJICA, Javier, **“Jurisprudencia en Materia Laboral. Normatividad y Jurisprudencia”**, Consejo de Coordinación Judicial (CCJ), Lima – Perú, 2000.
36. PAREDES INFANZON, Jelio, **“La Nueva Ley Procesal del Trabajo”**, Editorial San Marcos, Primera Edición, Lima, Julio 1997.
37. PERRACHIONI, Mario C., **“El Recurso de Casación en el Derecho Laboral Oral de Instancia Única”**, Editorial Advocatus, Córdoba – Argentina, 1995.
38. PLA RODRÍGUEZ, Américo, **“Intervención en el Taller de análisis del Proyecto de Ley Procesal de Trabajo”** en la Ley Procesal de Trabajo: Antecedentes y Comentarios, Lima – Perú, 1996.
39. RAMÍREZ JIMENEZ, Nelson, **“¿Casación o recurso de nulidad?”** en Revista Ius Et Veritas N° 7, Lima – Perú, 1993.
40. RAMÍREZ JIMENEZ, Nelson, **“El Recurso de Casación: necesidad de una modificación legislativa”**, ponencia presentada al I Congreso

Nacional de Derecho Procesal organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Agosto 1996.

41. ROMERO MONTES, Francisco Javier, **“Derecho Procesal de Trabajo: Doctrina, Análisis y Comentarios de la Ley Procesal Trabajo Nº 26636”**, Editorial E.I.R.L., Lima – Perú, 1997.
42. RUBIO CORREA, Marcial, **“El Sistema Jurídico”**, Octava Edición, Fondo Editorial, Agosto 1999.
43. SENTIS MELENDO, Santiago y AYERRA REDIN, Marino, **“La Casación Civil”**, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires – Argentina, 1945.
44. SILVA VALLEJO, José Antonio, **“El Recurso de Casación: Análisis y Contenido”**, Edición FECAT, Lima – Perú, 1996.
45. VESCOVI, Enrique, **“Los Recursos Judiciales y demás Medios Impugnatorios en Iberoamerica”**, Editorial Desalma, Buenos Aires – Argentina, 1988.
46. VESCOVI, Enrique, **“El Recurso de Casación”**, Segunda Edición, Editorial IDEA, Montevideo - Uruguay, 1996.
47. VINATEA RECOBA, Luis, **“Las Bases de la Reforma del Proceso Laboral”** en el VI Congreso Peruano de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, Lima – Perú, 1996.

## ANEXOS

### FICHA DE ANÁLISIS DE CASACIONES

#### I. DATOS GENERALES:

1.1. CLASE: Improcedente

1.2. NUMERACIÓN: 65

1.3. N° DE CASACIÓN: 1380-98 / LA LIBERTAD

1.4. FECHA DE EMISIÓN: 17/09/99

1.5. INTERPUESTO POR (Dte / Ddo): Manuel Alaya Julca.

1.6. PRETENSIÓN: Pago de Beneficios Sociales

1.7. SENTENCIA DE VISTA: Del 18/03/98 en los seguidos con Empresa Agropecuaria Chiclín y Anexos S.A.

#### 1.8. CAUSALES:

- a) Incorrecta aplicación del artículo 1257º del Código Civil.
- b) Contradicción jurisprudencial.

#### II. FUNDAMENTOS DE LAS PARTES:

2.1. **Dte:** El superior colegiado ha aplicado al capital adeudado por la demandada los pagos a cuenta que efectuará a favor del actor con posterioridad a su cese, y no a los intereses de la deuda, por estimar que el trabajador acreedor ha otorgado su conformidad a una aplicación diferente, aplicando incorrectamente el artículo 1257º del Código Civil que establece que los pagos deben efectuarse primero a los intereses, luego a los gastos y finalmente al capital; y que, en todo caso, el asentimiento del acreedor debe ser expreso y constar en documento idóneo.

#### III. ANÁLISIS DE FONDO DE LA RESOLUCIÓN:

##### 3.1. Análisis y pronunciamiento por cada causal:

- a) Incorrecta aplicación: Es de advertir que la controversia no se trata de la aplicación incorrecta del citado artículo, puesto que el recurrente admite, y así se tiene de la lectura del artículo, que el orden de la aplicación del pago puede variar si es que el deudor

ha asentido dicha variación; luego, el asunto se reduce a verificar si existe el asentimiento como afirma el Superior Colegiado; sin embargo, ello implica la revaloración de los medios probatorios, lo cual es una actividad ajena a este novísimo medio impugnatorio dada la finalidad atribuida por el artículo 54º de la Ley Procesal del Trabajo, tanto más si el propio recurrente no niega que haya sentido, como resultaría lógico en caso de que, verdaderamente, no existiera el asentimiento, sino que simplemente se limita a indicar que ello debe constar expresamente en un documento.

- b) Contradicción Jurisprudencial: El recurrente se ha limitado a denunciar la contradicción con otros pronunciamientos sin adjuntar, empero la fuente de contradicción jurisprudencial ni fundamentar expresamente los motivos de la disconformidad, como lo exige el artículo 56º del referido ordenamiento procesal, no pudiéndose en consecuencia, calificar positivamente el recurso.

### **3.2. NORMATIVIDAD UTILIZADA (Tiene que ser anexada y señalar si es una copia de la ley o de la resolución)**

- a) Artículo 54º de la Ley Procesal del Trabajo (Ley 26636): El recurso de casación en materia laboral tiene por fines esenciales obtener la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y unificar la jurisprudencia nacional. Por tanto, tiene por objeto anular las resoluciones de las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores únicamente por las causales siguientes:  
Por evidente violación, interpretación errónea o incorrecta aplicación de la ley.  
Por estar en contradicción con otros pronunciamientos emitidos por la misma Sala, por otra Sala Laboral o Mixta de la República o por la Corte Suprema de Justicia, en casos objetivamente similares.
- b) Artículo 56º de la Ley Procesal del Trabajo (Ley 26636): Requisitos formales; el recurso se interpone dentro del plazo de diez (10) días de notificada la resolución que se impugna, ante la Sala que la expidió, señalando, con claridad y precisión, la fuente



de contradicción jurisprudencial, acompañando el documento que acredite su existencia y fundamentando expresamente los motivos de la disconformidad. Si la Sala admite el recurso, el expediente es elevado a la Corte Suprema.

- c) Artículo 1257º del Código Civil: “Quien deba capital, gastos e intereses, no puede, sin el asentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni a éstos antes que a los intereses”.

#### **IV. PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA:**

Declaran IMPROCEDENTE el recurso.

#### **V. ANÁLISIS PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN:**

**5.1. Respecto a la causal invocada y la causal casada:** La opinión de las causales invocadas es:

- a) Incorrecta aplicación: La petición versa no sobre la aplicación incorrecta de la norma sino sobre si hubo o no consentimiento para cambiar el orden de aplicación del pago, materia que no corresponde a este recurso.
- b) Contradicción Jurisprudencial: El recurrente no fundamenta el porque de su disconformidad con la sentencia, ni tampoco acompaña a su recurso copias de las resoluciones que sustenten la contradicción, no teniendo la Sala forma de comprobar lo que refiere la recurrente.

**5.2. Respecto al Fondo según la Base Legal:** El Juzgador ha fundamentado su decisión basándose en los requisitos de forma señalados por ley, determinando que no se ha cumplido con estos.

**5.3. Opinión Personal respecto a la Resolución:** Por lo expuesto por la Sala en base a las normas aplicables al caso en análisis comparto la opinión de los magistrados en su declaración de considerar IMPROCEDENTE el recurso.

## **FICHA DE ANÁLISIS DE CASACIONES**

### **I. DATOS GENERALES:**

**CLASE:** Infundada.

**NUMERACIÓN:** 09

**N° DE CASACIÓN:** 844-97

**FECHA DE EMISIÓN:** 14/07/99

**INTERPUESTO POR (Dte / Ddo):** Rafael Schang Fernández

**PRETENSIÓN:** Reintegro de Beneficios Sociales.

**SENTENCIA DE VISTA:** Del 29/11/96, expedida por la 3ra Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que CONFIRMA la apelada.

**SENTENCIA DE 1ra INSTANCIA:** Del 05/03/96, declara INFUNDADA la demanda en los seguidos con ELECTROLIMA S.S.

#### **CAUSALES:**

- a) Inaplicación del art. 138 de la Constitución Política del Perú que establece la obligación del juzgador de preferir la norma constitucional sobre la norma legal incompatible, lo que no a ocurrido en el caso de autos, pues se ha admitido la validez del D.S. 057-90-TR, pese a su incompatibilidad con los arts. 54 y 57 de la Constitución de 1979 que otorgaba fuerza de ley a los Convenios Colectivos y las cuales prevalecían sobre los Decretos Supremos.
- b) Contradicción Jurisprudencial.

### **II. FUNDAMENTOS DE LAS PARTES:**

**Dte:** Requiere que se efectúe el reintegro de los beneficios sociales que no recibiera por el monto establecido por el Convenio Colectivo de 1968, desde los meses de octubre de 1990 hasta la fecha de se retiro agosto de 1991.

### **III. ANÁLISIS DE FONDO DE LA RESOLUCIÓN:**

#### **Análisis y pronunciamiento por cada causal:**

a) Inaplicación: Deviene en PROCEDENTE por cumplir con los requisitos de fondo. La Sala menciona que para efectos de comprender la naturaleza de los acontecimientos que motivaron la expedición del D.S. 057-90-TR, debe precisarse que si bien la Carta Magna de 1979 tutelaba diversos derechos laborales, también

en los arts. 110 y 132 de la Constitución Política de 1979 y el art. 1355 del Código Civil establecen la facultad que tiene el Estado de intervenir en la vida económica de la nación en razón a intereses correspondientes a la sociedad, por encima de la voluntad de los particulares.

Con estas facultades se dictan medidas; entre ellas se encontraba la facultad de efectuar reajustes económicos de remuneraciones dispuestas por el D.S. 057-90-TR, dictándose paralelamente los D.S.121-90-PCM y 178-90-PCM que señala que la única forma de otorgar incrementos remunerativos a los trabajadores de las empresas del Estado, fuera de los concedidos por el D.S.107-90-PCM era mediante convenios celebrados con aprobación de CONADE, no dando lugar a la rehabilitación de los convenios anteriores. Esta prohibición continuó para el año 1991 establecido por el inc. d) del art. 70 de la Ley 25303

Posteriormente se dictaron los Decretos leyes 25541 y 25876 con el fin de precisar y reiterar la vigencia de la Disposición Final del Decreto Legislativo 757, la misma que instituyó definitivamente la prohibición de incrementar las remuneraciones que impusieran temporalmente la normas antes citadas, primero en el periodo del 20/08/90 al 31/12/90 y después durante el ejercicio presupuestal de 1991. Luego de esta exposición y análisis de esta causal la declararon INFUNDADO.

b) Contradicción Jurisprudencial: ES PROCEDENTE y la sala se pronuncia sobre el fondo, menciona que ante la función de uniformizar los pronunciamientos de las Cortes Superiores se están dictando resoluciones en este sentido.

**NORMATIVIDAD UTILIZADA (Tiene que ser anexada y señalar si es una copia de la ley o de la resolución)**

a) Arts. 54, 57, 110, 132, 138, 211 inc. b) de la Constitución Política de 1979

- Art. 54 (**analizado y usado por el abogado, sustraído de la ley**): “Las convenciones colectivas de trabajo entre trabajadores y empleadores *tienen fuerza de ley para las partes*. El Estado garantiza el derecho a la negociación colectiva. La ley señala los procedimientos para la solución pacífica de los conflictos laborales. La intervención del Estado solo procede y es definitiva a falta de acuerdo entre las partes”.
- Art. 57 (**analizado y usado por el abogado, sustraído de la ley**): “Los derechos reconocidos a los trabajadores son irrenunciables. Su ejercicio está garantizado por la Constitución. Todo pacto en contrario es nulo. *En la interpretación o duda sobre el alcance y contenido de cualquier*

*disposición en materia de trabajo, se está a lo que es más favorable al trabajador”.*

- Art. 110 (**analizado y usado por el juzgador, sustraído de la ley**): “El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana. El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés de los consumidores”
  - Art. 132 (**analizado y usado por el juzgador, sustraído de la ley**): “*En situaciones de crisis grave o de emergencia el Estado puede intervenir la actividad económica con medidas transitorias de carácter extraordinario*”
  - Art. 138(**analizado y usado por el abogado, sustraído de la ley**): La administración económica y financiera del Gobierno Central se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. Las instituciones y personas de derecho público así como los gobiernos locales y regionales se rigen por los respectivos presupuestos que ellos aprueban. La ley determina la preparación, aprobación, consolidación, publicación, ejecución y rendición de cuentas de los Presupuestos del Sector Público así como la responsabilidad de quienes intervienen en su administración”.
  - Art. 211 inc. 20) (**analizado y usado por el comentario, sustraído de la ley**): Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República:
    - Inc. 20.- Administrar la hacienda pública; negociar los empréstitos; y dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso.
- b) Art. 1355 Código Civil (**usado por el juzgador, sustraído de la ley**): “La ley por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de os contratos”.
- c) D.S. 057-90-TR (**sustraído de la ley**) Empresas comprendidas en la Ley 24948, Ley de Actividad Empresarial del Estado, así como entidades del Estado cuyos trabajadores se encuentran sujetos al régimen laboral de actividad privada, no podrán otorgar hasta el 31.Dic.90, incrementos de

remuneraciones, cualquiera sea la denominación, sistema, modalidad o periodicidad

- d) Art. 3 del D.S. 121-90-PCM **(sustraído de la ley)**: “En las convenciones colectivas en vigencia, celebradas con sujeción a los Decretos Supremos N°s. 025-88-TR y 005-90-TR, los incrementos adicionales de remuneraciones se aplicarán de acuerdo a sus propios términos, siempre y cuando no excedan el tope que establezcan CONADE y CONAFI, según corresponda”.
- e) Art. 1 del D.S. 178-90-PCM **(sustraído de la ley)**: “En las convenciones colectivas de las empresas comprendidas dentro de los alcances de la Ley N° 24948, así como las entidades del Estado cuyos trabajadores se encuentran sujetos al régimen de la actividad privada, cuya vigencia se inicie entre el 01 de enero de 1991 y el 30 de junio de 1991; los Directorios, representantes, gerentes de las empresas o entidades, pactarán los incrementos de remuneraciones, condiciones de trabajo y pagos colaterales, sin exceder en su conjunto del tope que establezcan, en su caso, la Corporación Nacional de Desarrollo - CONADE y la Corporación Nacional Financiera – CONAFI”.
- f) D.S. 107-90-PCM **(sustraído de la ley)** Establece que desde la fecha 1 de Agosto del presente año, las empresas y entidades a que se refiere el Decreto Supremo N° 057-90-TR, otorgarán a sus trabajadores sujetos o no a negociación colectiva un incremento de remuneraciones que será igual al 100 por ciento de la remuneración ordinaria
- g) Arts. 20 y 21 de la Ley 25334 **(usados por el juzgador, sustraído de la ley)**
- Art. 20: “Las empresas comprendidas en la Ley N° 24948, y demás organismos y entidades del Estado cuyos trabajadores se encuentren sujetos al régimen laboral de la actividad privada, no podrán otorgar incrementos de remuneraciones y condiciones de trabajo, cualquiera sea la denominación, sistema, modalidad o periodicidad que adopten, salvo lo dispuesto en el artículo 21 de la presente Ley, y bajo responsabilidad personal de los miembros del Directorio, Gerencia General y en su caso Titular del Pliego”
  - Art. 21: “Las entidades del Estado a que se refiere el Artículo anterior sólo podrán proponer y acordar como fórmulas de solución en las negociaciones colectivas aquellas aprobadas con sujeción a las normas dictadas por el Ministerio de Economía y Finanzas aplicadas por CONADE y CONAFI. A

falta de acuerdo entre las partes en estas negociaciones, el Ministerio de Trabajo resolverá previa opinión del Ministerio de Economía y Finanzas”.

- h) Art. 1 del D.Ley 25541 **(usado por el juzgador, sustraído de la ley)**: “Precísase y aclárase que las disposiciones legales, pactos o convenios colectivos, costumbre, transacciones o pronunciamientos judiciales o administrativos que establecen sistemas de reajuste automático de remuneraciones de aplicación colectiva en función a la variación de precios, al valor de moneda extranjera, remuneración base o cualquier otra de similar naturaleza, sea cual fuere su denominación, expresión, mecanismo, procedimiento y/o metodología, concluyeron definitivamente en su aplicación el 13 de diciembre de 1991, fecha en que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Actividad Privada”
- i) Art. 1 del D.Ley 25876 **(usado por el juzgador, sustraído de la ley)**: “Precísase y aclárese que las disposiciones legales pactos o convenios colectivos, costumbre, transacciones o pronunciamientos judiciales o administrativos que establecen sistemas de reajuste automático de remuneraciones de aplicación colectiva en función a la variación de precios, al valor de moneda extranjera, remuneración base o cualquier otra de similar naturaleza, sea cual fuera su denominación, expresión, mecanismo, procedimiento y/o metodología, concluyeron definitivamente en su aplicación y ejecución el 13 de diciembre de 1991, fecha en que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la actividad privada.”
- j) Primera Disposición Final del D. Legislativo 757 **(usado para el juzgador, sustraído de la ley)**: Deróguese las siguientes disposiciones legales:
- a) El artículo V del título preliminar, los artículos 8, 17, 18, 56, 57, 58, 89, 107, y 115 y los capítulos XXI y XXII del Decreto Legislativo N° 613;
  - b) La Ley N° 25200, el artículo 19 de la Ley N° 25185 y el Decreto Supremo N° 014-89-PE;
  - c) El inciso 1) del artículo 1599 y el inciso 2) del artículo 1913 del Código Civil;
  - d) Los Decretos Supremos N° 020-90-TR, 021-90-TR y el inciso c) del artículo 1 del Decreto Supremo N° 034-90-TR;
  - e) Los Decretos Supremos N° 399-86-EF, 400-86-EF, 226-90-EF, 254-90-EF y demás disposiciones complementarias, modificatorias y reglamentarias; y,

*f) Toda otra norma legal que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.*

Segunda Disposición Complementaria inc. b) del D. Legislativo 757 (usado

**para el comentario, sustraído de la ley):** "Los incrementos en precios y tarifas o las mejoras remunerativas se sujetarán a las siguientes reglas:

*b) Los pactos o convenios colectivos de trabajo no podrán contener sistemas de reajuste automático de remuneraciones fijados en función a índices de variación de precios, o ser pactados o referidos a moneda extranjera.*

k) Arts. 70 inc d) , 110, 127 de la ley 25303 (sustraído de la ley):

- Art. 70 inc. d) **(usado por el juzgador):** "En la ejecución del gasto en remuneraciones queda prohibido realizar las siguientes acciones:

d) Incrementar remuneraciones cualesquiera sea la denominación, sistema, modalidad o periodicidad excepto las remuneraciones personal, familiar y ascensos a plazas presupuestadas, así como las derivadas de pactos colectivos, previstos en el presupuesto correspondiente"

- Art. 110 **(usado para el comentario):**"Las Directivas y Resoluciones que emiten CONADE y CONAFI son de cumplimiento obligatorio por las Empresas del Estado, bajo su competencia. Su infracción conlleva responsabilidad de los directores y funcionarios encargados de su cumplimiento.

Las Resoluciones que emiten los Consejos Regionales y Concejos Municipales sobre las empresas del Estado bajo el ámbito de su competencia, son de cumplimiento obligatorio. Su infracción conlleva responsabilidad de los directores y funcionarios encargados de su cumplimiento

- Art. 127 **(usado para el comentario):** "CONADE y CONAFI efectuarán una clasificación de las empresas no financieras y financieras, en función de su objeto, sector al que pertenecen y de la evaluación del cumplimiento de sus objetivos.

Dicha clasificación será utilizada, entre otros fines, para fijar los topes de remuneraciones del personal no sujeto a negociación colectiva, así como los lineamientos para las empresas, respecto a los trabajadores sujetos a negociación colectiva.

Los niveles e incrementos en las remuneraciones se otorgarán en función de la productividad, capacidad de pago, del mercado y de la política salarial del país, bajo responsabilidad.”

#### **IV. PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA:**

Declararon INFUNDADO el recurso.

#### **V. ANÁLISIS PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN:**

**Respecto a la causal invocada y la causal casada:** La opinión de las causales invocadas son:

- a) Inaplicación del art. 138 de la Constitución Política de 1979: El juzgador efectúa una Interpretación histórica de la dación del D.S. 057-90-TR, la cual lo relaciona con los arts. 110 y 132 de la Constitución Política de 1979 y el art. 1358 del Código Civil para fundamentar su resolución, con la argumentación que efectúa trata de explicar que no existió ninguna vulneración contra la Constitución y su control difuso, mas en este caso el magistrado debió tener en consideración que para que el Estado interviniera en la situación económica se necesitaba de conformidad con la Constitución de 1979 algunas formalidades, en el caso en particular, teniendo los Convenios Colectivos fuerza de ley por imperio del art 54 de la Constitución Política de 1979, la suspensión o extinción de alguna de las cláusulas de ellas debe hacerse a través de alguna norma de la misma jerarquía; lo que no ocurrió con la dación de decretos supremos y aunque fueron dictados según se menciona en los decretos supremos observados con carácter extraordinario como lo señala el art. 211 inc. 20 de la Constitución de 1979, esta es inoperante ante la calidad laboral y alimentaría de los derechos que pretendía enervar.

Sin embargo esta inoperancia es subsanada a partir de enero de 1991, que se dictan leyes para regir lo ya establecido por los decretos supremos entre ellas la ley 25303 en los arts. 110 y 127 ratifican lo ya mencionado en los decretos supremos y que fueron tomados en consideración para este comentario. Las cuales si cumplen con los requisitos de ley para extinguir lo establecidos por los Convenios y laudos Arbitrales; por ende son aplicables en los casos que se encuentren dentro de su ámbito temporal.

Contradicción Jurisprudencial: Referente a este causal está ligado a la primera causal, así que no necesita mayor comentario